Christoph Rosenmüller
Stephan Ruderer (eds.)

“Dádivas, dones y dineros”
Aportes a una nueva historia de la corrupción en América Latina desde el imperio español a la modernidad

B I B L I O T H E C A I B E R O - A M E R I C A N A

Publicaciones del Instituto Ibero-Americano
Fundación Patrimonio Cultural Prusiano
Vol. 164

Consejo editorial de la colección

Peter Birle (Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin)
Sandra Carreras (Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin)
Ulrike Mühlschlegel (Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin)
Héctor Pérez Brignoli (Universidad de Costa Rica, San José)
Janett Reinstädler (Universität des Saarlandes, Saarbrücken)
Friedhelm Schmidt-Welle (Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin)
Liliana Weinberg (Universidad Nacional Autónoma de México)
Nikolaus Werz (Universität Rostock)

Christoph Rosenmüller
Stephan Ruderer (eds.)

“Dádivas, dones y dineros”

Aportes a una nueva historia de la corrupción en América Latina desde el imperio español a la modernidad

Iberoamericana • Vervuert

2016

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Reservados todos los derechos

© Iberoamericana 2016
c/ Amor de Dios, 1
E-28014 Madrid

© Vervuert 2016
Elisabethenstr. 3-9
D-60594 Frankfurt am Main

info@ibero-americana.net
www.iberoamericana-vervuert.es

ISSN 0067-8015
ISBN 978-84-8489-973-0 (Iberoamericana)
ISBN 978-3-95487-505-4 (Vervuert)
Depósito legal: M-14487-2016

Diseño de la cubierta: Carlos Zamora
Ilustración de la cubierta: © *Don Quijote*, 24.1.1892, p.2/3,
Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani"
(CONICET-UBA). Fondos y colecciones digitales,
Proyecto Patrimonio Histórico.

Composición: Patricia Schulze

Este libro está impreso íntegramente en papel ecológico blanqueado sin cloro.

Impreso en España

Índice

Introducción. La nueva historia de la corrupción en América Latina 7
Stephan Ruderer/Christoph Rosenmüller

¿Prácticas corruptas o relaciones de patronazgo? 27
L. Miguel Costa

De lo innato a lo performativo: dos conceptos rivales
de la corrupción, siglos XVII y XVIII 61
Christoph Rosenmüller

Un interinato contra las prácticas corruptas en Acapulco.
El castellano Teodoro de Croix al arribo del galeón
San Carlos de Borromeo (1766) 87
Guadalupe Pinzón Ríos

Un epílogo: "corrupción" en el virreinato novohispano 113
Horst Pietschmann

Guerra a los abogados. La defensa libre y los debates sobre el
monopolio de los abogados y la corrupción de la justicia peruana,
1841-1862 127
Pablo Whipple

Corrupción y violencia. Una relación ambivalente en Argentina
y Uruguay en el siglo XIX 147
Stephan Ruderer

"El triunfo moral del pueblo". Denuncias de corrupción y movilización
política en Buenos Aires, a fines del siglo XIX 169
Inés Rojkind

La corrupción en los gobiernos locales del México porfiriano.
El caso de un gobernante honrado 189
Andrés Reyes Rodríguez

Poder político y corrupción en la Revolución Mexicana: el caso del general Álvaro Obregón 213
Jürgen Buchenau

El Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa 1946: caso Román Cárdenas. Los excesos de una revolución 233
José Alberto Olivar

Autoras y autores 247

Introducción. La nueva historia de la corrupción en América Latina

Stephan Ruderer/Christoph Rosenmüller

La corrupción es una parte fundamental de la política en América Latina. Esto, por lo menos, es la impresión que se lleva un observador interesado, que sigue las noticias sobre el continente en los primeros meses del 2015. En Argentina, en el "caso Nisman", se mezclaron las acusaciones cruzadas de violencia y corrupción entre gobierno y la prensa opositora. La misteriosa muerte del fiscal especial de la causa del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) Alberto Nisman, cuando preparaba una acusación que involucraba al gobierno en el encubrimiento de la causa, reveló el estado frágil de la democracia argentina y echó leña al fuego de las sospechas de corrupción contra la élite política del país. En Brasil, la justicia investiga a numerosos senadores y parlamentarios por su posible participación en el "escándalo Petrobas". La compra de varios políticos con los dólares de la empresa petrolera creó una situación complicada para el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y su presidenta que, por cierto, fue gerente de Petrobras antes de dedicarse a la política. El escándalo reflotó las protestas masivas contra el gobierno. En México desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normal de Ayoztinapa. Varios meses de protestas violentas contra el gobierno dejaron a descubierto los lazos corruptos entre políticos, oficiales de la policía y el narcotráfico. Además, surgieron acusaciones que un importante constructor del gobierno financió de forma irregular la lujosa casa privada de la esposa del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. En Venezuela, la oposición cotidianamente acusa al gobierno chavista de corrupción para desacreditarlo. Incluso en Chile, un país que en las últimas décadas se mantuvo al margen de grandes escándalos de este tipo, varios casos de corrupción sacudieron la sociedad, implicando tanto a altos funcionarios de los partidos de oposición (en el caso Penta) como al

hijo de la presidenta Michelle Bachelet, que vio fuertemente mermada su imagen pública por este caso de "corrupción familiar".[1]

La corrupción parece ser un fenómeno enraizado en América Latina. En los debates públicos, las acusaciones de corrupción se han transformado en un arma discursiva cada vez más recurrente y poderosa que permite atacar al oponente político en el campo de la moral, donde el público interesado, la sociedad en general y los electores se muestran cada vez menos tolerantes. En la opinión pública, la corrupción es cada vez más un mal que ya no debería existir y ser tachado de corrupto equivale a un (pre-) juicio público que daña la reputación. La corrupción, no solamente en las prácticas corruptas sino también en el discurso público, juega un rol preponderante en la política.

Sin embargo, en los juicios generales sobre América Latina, el fenómeno de la corrupción es visto solamente por el lado de las prácticas, ya que se constatan los escándalos y se pinta la corrupción política como "uno de los [...] peores y duraderos problemas"[2] del continente. Estos juicios, muchas veces no toman en cuenta el uso político que implica la acusación de corrupción ni se basan en un análisis histórico profundo y a largo plazo. Generalmente, se considera a América Latina como un continente corrupto, sin reconocer las diferencias regionales y las particularidades históricas de cada país. Incluso en el discurso académico, en algunos casos, se han resaltado las "disposiciones sociales" (Huppertz 2004: 15) hacia la corrupción de los latinoamericanos sin documentar estos juicios empíricamente. La corrupción aparece como uno de los factores responsables del subdesarrollo económico y de los problemas en el proceso de formación del estado en los distintos países del continente (Nef 2001; Fajardo 2002; MacLachlan 2006; Waldmann 2010).

1 *The Economist*, 14.3.2015, y el artículo de Jorge G. Castañeda, "Latin America's anti-corruption crusade", en *The Tico Times*, 29.7.2015 (http://www.ticotimes.net/2015/07/28/latin-americas-anti-corruption-crusade).

2 "one of the[...] worst and most enduring problems", *The Economist*, 14.3.2015. El artículo también reconoce las reformas que han hecho las democracias latinoamericanas para combatir la corrupción.

Estado de la cuestión

En este contexto, la interpretación histórica de la corrupción en América Latina, sobre todo para la época imperial o colonial, es decir a partir de 1492 hasta la independencia, ha sido muy controvertida. Desde los años cincuenta del siglo xx, los historiadores empezaron a entender que lo que hoy llamamos corrupción muchas veces no era juzgado de la misma forma. De esta manera, los autores empezaron a dejar atrás valoraciones moralizantes que atribuían la desarticulación del imperio español a los abusos generalizados (Parry 1953: 51-54, 60-63; Andrien 1982). En este sentido, el historiador holandés Jakob van Klaveren expuso dos ideas centrales: Los grupos involucrados en el comercio entre España y América regularmente ignoraban las leyes reales. Sin embargo, cuando grupos, como los mercaderes o los burócratas, se sentían perjudicados, acusaban a otros de corrupción, pero como arma política y menos por deplorar el incumplimiento de las leyes. De esta manera, van Klaveren postuló la comunicación sobre corrupción como una expresión de grupos sociales en pugna (van Klaveren 2002: 83-94; 1957: 292-294, 306-321; 1958: 433-468, 469-504). Con ello, echó el fundamento para los estudios que surgieron en los años sesenta tardíos. Los historiadores explicaron, con distintos matices, la divergencia entre las leyes reales y las prácticas de justicia y gobierno como una flexibilidad o una negociación entre la Corona y las élites americanas. Según estos autores la corrupción era una cuestión de exceso y de perspectiva (Phelan 1967: 149-153, 297-299, 326; Schwartz 1973: 181, 363; MacLachlan 1988: 37; Andrien 1994: 270-271; Pietschmann 1997: 46-54; Pietschmann 2013; Moutoukias 1997: 19-26, 46-51; Bertrand 2011: 57-62). La mayoría de los historiadores enfatizan la discrepancia entre las leyes de Indias y Castilla y la actuación de la justicia y el gobierno premoderno. De acuerdo con Plumpe, aquella discrepancia paulatinamente desapareció a partir del tardío siglo xviii, cuando se extendió más ampliamente la vigencia de las leyes reales, ya que "la corrupción y la modernidad se fundan de manera co-evolutiva, porque sólo en la modernidad se montan reglas comprehensivas del derecho, que posibilitan en cierta manera la corrupción" (Plumpe 2009: 29). Por su parte, George Waquet impulsó una contra-corriente de la historiografía europea cuando insistió en que sí había discursos del antiguo régimen que condenaban la conducta inmoral en los oficios y la designaban como corrupción (Waquet 1991: 12; Andújar Castillo 2004: 7, 18-23, 26; Suter 2010: 187-214; Rosenmüller 2016a,

2016b). Esta discusión sobre la existencia y la función del fenómeno ha generado también amplios estudios sobre el clientelismo, la compra de cargos judiciales o el abuso de poder (Andrien 1985; Pietschmann 1997; Rosenmüller 2008). También se ha convertido en tema de estudio la posible influencia de una corrupción sistemática como motivación para los movimientos de independencia (Saguier 1989 y 1992; McFarlane 1996).

Mientras tanto, para el siglo XIX después de la independencia y la primera mitad del siglo XX, existen pocos estudios académicos que sitúen el fenómeno de la corrupción en el centro de su análisis.[3] Esta falta de análisis se explica también por algunas ideas de la historiografía tradicional, que veía en la corrupción (sobre todo en el siglo XIX) una característica "normal" e inherente de la política en América Latina, pues su punto de partida evitaba tomar en serio los procesos democráticos en las naciones nacientes. La "nueva historia política" ya ha demostrado, en los últimos años, que este juicio historiográfico se volvió obsoleto y que es posible analizar los intentos democráticos, a pesar de la corrupción existente, ya que estos procesos jugaron un rol mucho más inclusivo para la representación ciudadana que lo que la historiografía tradicional asumió.[4]

Por otra parte, los historiadores se abstuvieron de analizar la corrupción por las connotaciones morales que conllevaban las meras acusaciones y para evitar el traslado de los juicios éticos actuales a fenómenos de otra época. Esto se vio reforzado por el hecho de que el debate académico sobre la corrupción estuvo, por muchos años, dominado por las ciencias políticas y económicas por lo que se concentraba en los escándalos de los gobiernos recientes (Oxhorn/Ducatenzeiler 1998; Tulchin/Espach 2000; Blake/Morris 2009), o se incluía la corrupción en un balance económico donde se calculaban las ventajas y desventajas de los actos corruptos (Della Porta/Rose-Ackermann 2002). De esta manera, la dimensión del fenómeno como expresión de la cultura política no se tomó en cuenta. Estos enfoques se ven reflejados todavía en el estudio histórico de Alfonso Quiroz sobre los ciclos de corrupción en Perú. Si bien analiza la corrupción desde la

3 Más allá del estudio de Bernecker 1989 sobre el contrabando, existen solamente algunos artículos como el de Irurozqui 1999 o de Yarrington 2003 y los trabajos actuales de Ruderer 2014, 2015a y b. En este contexto, es de interés que los análisis históricos de la corrupción en México en el libro de Lomnitz 2000 versan sobre la época imperial y el siglo XX, pero prácticamente no tratan el siglo XIX.

4 Trabajos "emblemáticos" de esta "nueva historia política" son, entre otros, Sabato 1998 y 1999, Ternavasio 2002, Palacio 2007.

época imperial hasta la actualidad, e incluye las dimensiones políticas de los debates sobre corrupción en algunos capítulos, se concentra en evaluar los efectos económicos del fenómeno (Quiroz 2008 y 2013). El trabajo de Quiroz tiene el mérito de demostrar que el argumento de la historiografía tradicional acerca de la imposibilidad de estudiar la corrupción por ser una actividad clandestina no documentable, no tiene validez. Quiroz encontró material abundante en las fuentes jurídicas, en los diarios, en los debates parlamentarios y de prensa, y asimismo en los escritos de críticos contemporáneos de la corrupción.

Marco teórico: la nueva historia de la corrupción

Para el historiador es posible estudiar la corrupción y este ejercicio puede resultar muy fructífero. Centrar el foco del análisis no solamente en las prácticas corruptas sino también en el discurso sobre la corrupción puede ofrecer huellas acerca de los procesos del derrumbe de los imperios y la formación de naciones modernas, del significado de los sistemas de valores y normas que rigieron las sociedades y del uso político de la acusación pública de corrupción. Para emprender esta tarea, se recurre a un nuevo debate en la historiografía de la corrupción que se ha generado en los últimos años, y que permite un acercamiento a fenómenos históricos. Este nuevo avance transnacional, que debe mucho a los trabajos del historiador Jens-Ivo Engels (Engels 2006 y 2014a), hasta ahora no ha tomado en cuenta casos históricos de América Latina.[5] Sin embargo, su discusión ha generado ideas y tesis relevantes que son aplicables al contexto latinoamericano, por lo que surgió la tarea de relacionar este debate con la historia de América Latina.

El fundamento de esta "nueva historia de la corrupción" radica en los problemas de definición que contiene el fenómeno. Ni en una discusión cotidiana ni en el debate académico es fácil decir qué es exactamente la

5 El debate se manifiesta en los siguientes libros: Engels/Fahrmeir/Nützenadel 2009, Grüne/Slanička 2010, Asch/Emich/Engels 2011, Engels/Monier/Petiteau 2011, Engels 2014a, Monier/Dard/Engels 2014, Dard et al. 2014, Engels et al. 2015. Tampoco en las obras principales de otras disciplinas hay artículos sobre América Latina, ver, entre otros, Bluhm/Fischer 2002, von Alemann 2005, Karsten/Thiessen 2006. El libro principal de la historiografía estadounidense Heidenheimer/Johnston 2002, contiene capítulos enteros acerca de la corrupción en África y Asia, pero solamente un estudio (de la ciencia política) sobre América Latina: Whitehead 2002.

corrupción. Por esta razón, en muchos estudios científicos se recurre a una definición base que entiende la corrupción como un abuso de un puesto público para el beneficio privado (Johnston 1996; Engels 2006). Ya en esta definición, el significado de términos como abuso o la diferencia entre público y privado se vuelve complejo, porque sus sentidos dependen igualmente del contexto histórico. Esta dependencia del marco histórico vuelve relevante las definiciones para los trabajos de los historiadores, ya que de esta manera queda claro que en la historia de la corrupción hay que partir de un concepto anti-esencialista. Esto significa que una acusación de corrupción debe analizarse dentro del contexto histórico respectivo, lo que evita trasladar los propios juicios éticos a la situación histórica (Grüne 2010; Suter 2010).

Para dejar atrás un concepto esencialista, James Scott ya mencionó tres características esenciales de la corrupción política que abren el campo para el trabajo del historiador. Scott entiende la corrupción política como abuso de un puesto público, hace al mismo tiempo hincapié en la existencia de normas y leyes fijadas que determinan el abuso, y en el necesario debate público acerca del acto corrupto sin el cual la corrupción pasa desapercibida (Scott 1972: 36-55). En las últimas décadas, la "nueva historia de la corrupción" adaptó algunas de las propuestas de Scott para acercarse a un análisis crítico de la corrupción política. Se considera fundamental la idea del debate público, ya que la comunicación sobre aquellos abusos entrega la clave para entender el fenómeno como un "delito de percepción" (von Alemann 2005: 14), cuyo significado hay que analizarlo dentro del discurso coetáneo respectivo. Al mismo tiempo, esta idea del debate público, constituye el punto central en la discusión sobre corrupción entre historiadores de épocas imperiales y épocas modernas, ya que, sobre todo para la época imperial, se vuelve problemática la idea de lo público y, sobre todo, la posibilidad de determinar qué es la opinión pública.[6] Es un reto que sigue en discusión, por lo que los editores de este volumen decidimos conscientemente incluir estudios sobre las épocas imperiales y modernas para poder tener una primera idea sobre las posibles transformaciones y continuidades en el discurso sobre la corrupción antes y después del proceso de la independencia.

Bajo este nuevo enfoque, las discusiones acerca de la corrupción pueden leerse como una imagen de los procesos de autorreflexión de las so-

6 Para este debate ver entre otros: Engels 2010 y Suter 2010.

ciedades, en las que se debaten los valores y normas principales vigentes y también se ponen a prueba los distintos entendimientos y funcionamientos de la política (Engels/Fahrmeir/Nützenadel 2009: 13; Grüne 2010: 32). La acusación de corrupción reporta legitimación política al acusador y se la resta al acusado, por lo que se transforma en un instrumento discursivo eficaz. En la época imperial los actores quienes escandalizaron determinados actos como corruptos podían pertenecer a grupos sociales establecidos como la aristocracia, o nuevos como partes de la burguesía pujante. Tenían en común la demanda de retornar a la actuación recta según el viejo orden. Esto era el caso, por ejemplo, cuando los clases populares de la ciudad de Colonia (Köln) temporalmente derrumbaron el cabildo municipal exigiendo el restablecimiento del buen gobierno (Bellingradt 2012: 556), o cuando las élites tradicionales en el imperio español exigían el regreso a prácticas del orden establecido, como demuestra Christoph Rosenmüller en su capítulo. Este discurso empezó a cambiar en el siglo XVIII, cuando los intentos de reformar y modernizar la sociedad captaron mayor credibilidad en la esfera pública. Autores ingleses y franceses señalaban a la monarquía y el absolutismo como fuente de la corrupción (Plumpe 2009: 32-40). Otra vez eran actores políticos nuevos quienes pujaron para hacerse un espacio entre la élite política o para ganarse el acceso al poder.

Las acusaciones de corrupción siempre incluían su contraparte, el ideal de la perfección (Plumpe 2009: 30). Por esta razón, tal acusación remite a una desviación culposa del ideal político de una sociedad, lo que significa que a través de los escándalos de corrupción, el historiador encuentra pistas acerca del ideal político imaginado. Estas imágenes ideales cambiaban con el tiempo, lo que vuelve dinámico el estudio de la noción de corrupción a través de los siglos, como se intenta demostrar con los distintos trabajos en este libro.

La vista dinámica muestra que con la época moderna –aproximadamente a partir de 1808– el ideal político casi siempre refería a un estado de derecho democrático, y la acusación de corrupción tenía el potencial de deslegitimar a los gobernantes o incluso el sistema gubernativo en su totalidad (Grüne 2010: 29). No obstante lo cual, ya en el imperio del siglo XVIII, estos intentos se pueden diferenciar, según una propuesta de la "nueva historia de la corrupción", entre una crítica táctica y una crítica estratégica de la corrupción. Mientras el reproche táctico buscaba disputar el poder al círculo de gobernantes en turno, la crítica estratégica iba dirigida hacia un cambio institucional más profundo que conllevaba la transformación del

sistema político en sí (Asch/Emich/Engels 2011: 22). Esta idea se puede aplicar de manera fructífera para el análisis de los escándalos de corrupción en Iberoamérica.

De la misma manera, el análisis de la enunciación de la corrupción permite seguir las transformaciones en los sistemas de valores de una sociedad durante el tiempo. Por un lado, en la historiografía surgió la idea de que los debates de corrupción hacen visible cambios desde una sociedad imperial, donde normas de origen múltiple y muy divergente competían entre ellas, hacia una burocratización moderna que se orienta por normas formales, fijas y universalmente válidas. En la época imperial, un juez o un administrador público tenía la posibilidad y, a veces, el deber de adaptar su actitud a reglas formales que priorizaban el bien común o a las exigencias de las redes clientelares informales, que favorecían a la familia o los amigos personales reflejando la "competencia de normas" o el "pluralismo judicial" (Thiessen 2009 y 2010; Kerkhoff/Kroeze/Wagenaar 2013; Hespanha 2006: 23). El juez elegía las normas adecuadas de este pluralismo para resolver cada caso. Eran discutibles las fronteras entre los regalos adecuados de los parientes, amigos, y dependientes, y el dinero o el favor indebido dado a un juez con la intención de conseguir una sentencia beneficiosa (véase Génaux 2004: 17; Feros 2000: 181). Específicamente, dicha retribución en un pacto con un juez para cambiar una sentencia era corrupción según muchos comentaristas, que usaban este término. Sin embargo, el pluralismo judicial también permitió a los jueces acusados de corrupción argüir que jamás habían aceptado otra cosa más que un regalo lícito, lo que les permitía alegar su inocencia.

Durante el siglo XVIII, la ambigüedad entre lo lícito e ilícito en la justicia cambió paulatinamente. Mientras más legitimidad tenían las leyes reales, más difícil era recurrir al pluralismo judicial como defensa (Plumpe 2009: 32). Esta posibilidad se limitó aún más en la época moderna la que exigía del "ciudadano ideal" una diferenciación clara entre el servicio público para el bien común y los intereses personales (Osterhammel 2009: 869; Plumpe 2009: 39). Por otro lado, trabajos actuales mencionan el hecho de que la comunicación sobre la corrupción constituyó un factor importante en la construcción discursiva de la modernidad. A partir del siglo XIX, lo "corrupto" sirvió también para tildar todo lo que se consideró premoderno, bárbaro y no civilizado; desde esta óptica, una sociedad moderna significaba ser una sociedad sin corrupción (Engels 2014a). Así pues, existe la posibilidad de analizar el impacto que tuvo el proceso de moder-

nización para las prácticas corruptas, que, en las sociedades modernas, se transformaron desde formas personales y sistémicas de redes clientelares hacia formas de corrupción institucional, en las cuales se favorecieron más las relaciones ideológicas y políticas por encima de los lazos personales (Monier 2014; Engels 2014b).

Al mismo tiempo, la importancia de considerar la comunicación sobre la corrupción, hace posible comparar fenómenos como el soborno a un juez, el fraude electoral y el enriquecimiento ilícito de un político. En los tres casos, los contemporáneos discutían estos hechos bajo el rótulo de la "corrupción". Así, mientras que en algunas sociedades y épocas, como la Argentina decimonónica, el fraude electoral era considerado un argumento muy poderoso para establecer una acusación de corrupción, en otras épocas y sociedades, el enriquecimiento ilícito constituyó el mal mayor que sirvió para deslegitimar a los gobernantes (Ruderer 2015a).

En suma, el análisis de la comunicación sobre corrupción posibilita encontrar pistas acerca de los valores y normas actuales de una sociedad. La corrupción es, en las palabras de la "nueva historia de la corrupción", una "figura fundamental de la comunicación política" (Grüne 2010: 31) que remite a la legitimidad de sistemas políticos y de valores, por lo que el análisis de los debates de la corrupción va más allá de una historia de escándalos y permite formular explicaciones para entender la constitución y el funcionamiento de las sociedades políticas en general. La acusación de corrupción permite a actores políticos posicionarse ante un público cada vez más exigente frente a cuestiones morales, en tanto que los gobernantes echan mano de la acusación de corrupción de administraciones anteriores, para legitimar su acceso al poder frente a la supuesta corrupción de los otros. En la época moderna se vuelve más difícil la defensa pública contra una acusación de corrupción.[7] De esta manera, en muchos casos, no es un requisito imperioso tener un fundamento empírico o pruebas concretas de la práctica corrupta para lanzar un ataque político. Sin embargo, cómo lo expone José Alberto Olivar en su capítulo, una acusación de corrupción sin pruebas puede volverse contra los acusadores. Por esta razón, en cualquier

7 Engels 2014a. Esto no quiere decir, que en la época moderna no era posible defenderse jurídicamente contra la acusación de corrupción (de hecho, esto era, muchas veces, más factible que en la época imperial), sino que remite al hecho de que los escándalos públicos desarrollaron un impacto tal, que muchas veces, el acusado salía con la reputación dañada a pesar de obtener una sentencia favorable (que normalmente llegaba mucho después del escándalo y ya no era recogida de la misma manera por los medios).

estudio histórico, es importante tener en cuenta el uso político que conlleva la acusación de corrupción.

Los historiadores tienen que hacer una diferencia clara entre lo que hoy día se consideraría como hechos corruptos y los debates y la enunciación del asunto.[8] Los hechos corruptos hay que considerarlos como parte de la realidad global, que existen en todas las épocas y regiones y en prácticamente todas las negociaciones políticas (Reinhard 2011), por lo cual, el juicio ético depende también de la "dosis" de corrupción que implican. A los debates sobre corrupción hay que estudiarlos dentro de su contexto histórico y político sin caer en la trampa de juicios morales prefabricados ni de jerarquías de países o épocas más o menos corruptos.

Con esta idea de analizar los debates públicos y el uso político de la corrupción, la "nueva historia de la corrupción" puede ser considerada como parte de la "nueva historia política" que dirige el enfoque hacia esferas públicas de participación política y los valores simbólicos de la comunicación que estos conjuntos producen (Stollberg-Rilinger 2005; Frevert/Haupt 2005).

Las contribuciones de este libro

En el simposio de la conferencia AHILA en Berlín realizada en 2014, nos propusimos contribuir a esta nueva historia de la corrupción. Los participantes ofrecieron perspectivas sobre la época imperial y la moderna para abordar –si bien de manera preliminar– continuidades y cambios del fenómeno. Como la discusión interesante del simposio abrió nuevas brechas, especialistas de tres continentes se pusieron de acuerdo para contribuir con este volumen. Con base en distintos trasfondos combinan diferentes enfoques: comparativos, regionales, atlánticos, nacionales o transnacionales. En su conjunto, los capítulos echan luz sobre procesos paralelos, divergencias y, en el mejor caso, interferencias o influencias mutuas de la comunicación sobre corrupción, mientras juntos sobrepasan las fronteras espaciales y temporales convencionales.

Dentro de un enfoque imperial, L. Miguel Costa arguye con base en categorías weberianas que el estado patrimonial del siglo XVI se apoyó en reglas formales o alusiones a las leyes que exigían, por ejemplo, que se proveyeran letrados para los tribunales superiores. Sin embargo, las reglas

8 Aquí se sigue a Engels 2014a, p. 373.

coexistían con extensos vínculos personales que superaban cualquier distinción vaga que haya existido entre lo público y privado. El conde del Villar, virrey del Perú (1585-1590) se movía en este entorno. No provenía de la alta aristocracia y había servido exitosamente al rey como corregidor de Sevilla. En el Perú utilizó sus enlaces sociales de manera autoritaria para reducir el número de los corregimientos. Por esta razón, el visitador Alonso Bonilla le inculpó de 108 ofensas, pero Villar salió sin condenación, soslayando una vez más "la validez de principios clientelares". Por su parte, Christoph Rosenmüller sostiene que grupos sociales en pugna comunicaban en base a dos conceptos distintos de corrupción. El pluralismo judicial permitió a las élites tradicionales rechazar "hombres corrompidos por ambición y codicia e infames por su sangre". De acuerdo con estos grupos, nombrar a gente sin "pureza de sangre" y de proveniencia humilde corrompía la judicatura, porque aquella gente era más dada a la avaricia y a aceptar sobornos. Al fin del siglo diecisiete, perdió pujanza la corrupción innata. Con el desarrollo de las ideas ilustradas, la corrupción se convirtió cada vez más en una violación de las leyes reales que regían los cargos públicos por parte de los funcionarios. Guadalupe Pinzón ilumina este proceso dieciochesco con un estudio de caso. En 1766, el castellano de Acapulco, Teodoro de Croix, frenó el contrabando en el galeón procedente de las Filipinas a partir de nuevas medidas arancelarias. De Croix tasó los impuestos según el valor y no el tamaño de los cargos, embargó el equipaje excesivo de la tripulación, y duplicó los impuestos sobre la plata importada fuera de registro. De acuerdo con la historiadora, aumentar las recaudaciones reales dio un paso hacia "transformaciones de más largo alcance", que llegaron con la navegación directa entre Cádiz y Asia.

Horst Pietschmann por su parte revisa algunos conceptos de sus trabajos anteriores sobre la corrupción novohispana. El historiador dejó atrás hace años el enfoque historiográfico en los abusos individuales contra leyes prudentes, inclinándose hacía la oposición sistémica criolla contra el avance del poderío monárquico, y hoy más bien interpreta transgresiones como conflictos durante la transición del imperio hacía un estado más jerarquizado y territorial. Según él, los debates globales contemporáneos impactaron en la reinterpretación del fenómeno. En las interpretaciones del historiador domina la idea –por demás muy importante para el entendimiento del funcionamiento del imperio en Nueva España– de determinar casos o ejemplos de corrupción. Seguir el alcance más amplio de la "nueva historia

de la corrupción" es, en las palabras de Pietschmann, "un gran tema digno de profundización por historiadores más jóvenes" (p. 124).

Las transformaciones en las prácticas informales del siglo decimonónico se hicieron eco de la época imperial. Según Pablo Whipple, en la primera mitad del siglo XIX, todavía vivían pocos abogados en las provincias de Perú, pero la ley exigía sus firmas para iniciar pleitos en los juzgados. Así los letrados fijaban precios altos para autenticar documentos, y con eso proliferaron tinterillos que se hicieron pasar por abogados. Para reformar la corrupción de la justicia que aquellos producían, en 1855 el gobierno abolió la obligación de obtener la firma de un abogado. Esta corrupción se marcó, según el gobierno, por el dinero y la capacidad manipuladora de las capas altas. No obstante ello, los abogados y los jueces en las capitales tacharon la reforma misma como corrupción, causada por "atraso e ignorancia prevalente". Los altos magistrados anhelaron el regreso a "un pasado idílico", y en 1862 el congreso reinstaló la obligación. Whipple hace hincapié en que, en el debate sobre la obligación, la acusación de corrupción sirvió a los dos bandos de argumento discursivo, por lo que los juicios sobre el sistema judicial peruano como "corrupto" dependen mucho de la valoración sociocultural de los contemporáneos.

La divergencia en las valoraciones socio-culturales retoma Stephan Ruderer, quien compara los conceptos de "corrupción" y "violencia" en el discurso de la segunda mitad del siglo XIX en Argentina y Uruguay. El autor constata una relación ambivalente y cambiante entre estos conceptos, ya que muchas veces la corrupción percibida sirvió incluso para legitimar medios revolucionarios y violentos. En Argentina especialmente a partir de la revolución de 1874, la oposición política criticaba la corrupción electoral para justificar sus intentos de acceder al poder por medio de la violencia. Mientras tanto en Uruguay, las quejas versaban más sobre la corrupción administrativa practicada en el gobierno; en tanto que los fraudes electorales se aceptaban más bien con cierta resignación. Ruderer muestra una diferencia en la priorización de los valores políticos que se produjeron en ambos países. Por otro lado, los gobiernos de ambos países descalificaron cualquier crítica sobre la corrupción como amenaza velada de violencia. Recalcando el énfasis de Ruderer, Inés Rojkind enfatiza que el presidente de Argentina, Miguel Juárez Celman, enfrentó duras acusaciones no sólo por las manipulaciones del sufragio, sino también por la "corrupción administrativa [...], las reiteradas denuncias por los gastos desmedidos del gobierno, por el enriquecimiento de los funcionarios, por los

negociados alrededor de la adjudicación de obras públicas" (p. 169). En el marco de una crisis económica, el gobierno podía vencer la rebelión armada de 1890, pero la presión pública y popular a la postre derrocó a Juárez Celman, exigiendo un gobierno de "reparación". En este caso, el discurso de corrupción sirvió como eje de articulación de un movimiento opositor, que valoró más el "triunfo moral" del pueblo sobre un "gobierno corrupto" que la victoria (finalmente no alcanzada) por las armas.

Luego Andrés Reyes Rodríguez muestra cómo, para evitar tales acusaciones de corrupción, el gobernador de Aguascalientes (México), Rafael Arellano Ruiz Esparza, cultivó una exitosa imagen pública de honradez y eficacia. En la segunda mitad del siglo XIX, el gobernador anunció la entrega de su salario "a obras e instituciones de beneficencia" –una estrategia usada también a lo largo del siglo XXI– lo que contrastaba con la costumbre de comprar las elecciones para ocupar empleos públicos vitalicios. El investigador sostiene que la imagen de honradez de Arellano se volvió políticamente funcional, a pesar de que su actuación de corte señorial o aristocrática y la frecuente negociación recíproca clientelar chocaba en algunos respectos con las premisas del estado liberal en desarrollo.

Frente a la imagen de un político corrupto, Jürgen Buchenau arguye que los presidentes mexicanos Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles vivían vidas más bien moderadas aunque adquirieron la fama de borrachos, mujeriegos y jugadores. Obregón originalmente se dedicaba a cultivar garbanzos y logró expandir sus posesiones agrícolas en la primera década del siglo. Sin embargo, el declive económico de los años 20 forzó a Obregón a retirarse de la presidencia para atender a sus negocios. Sus nuevos proyectos fallaron y regresado a la presidencia, él encontraba difícil encauzar dinero público a sus propiedades. Tal actuación de Obregón y también de Calles contrasta con la desmesurada corrupción de los científicos del Porfiriato y los políticos a partir del fin de la segunda guerra mundial.

Políticos moderados también vivían en Venezuela. José Alberto Olivar indica como las acusaciones de corrupción a oficiales reconocidos por honrados puede incluso hacer descarrillar una revolución. El golpe de estado de 1945 permitió a la Junta Revolucionara establecer el Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa. Este tribunal perseguía excesos cometidos por funcionarios pertenecientes a la familia extensa del ex-caudillo Juan Vicente Gómez. El jurado publicó la "lista de peculado" e incluyó los nombres de políticos de buena fama como Román Cárdenas, reconocido reformador de las finanzas públicas. A partir de este punto, la junta revolucionaria misma

empezó a aparecer excesiva y vengativa y rápidamente perdió legitimidad. El asunto coadyuvó en gran medida con el colapso de la revolución en 1948.

Con estas facetas muy diversas sobre la corrupción que los colaboradores aquí presentan, los editores esperamos dar un paso hacia "transformaciones de más largo alcance" de la nueva historia sobre América Latina. En la mayoría de las contribuciones se evidencia el alto potencial explicativo que contiene "la nueva historia de la corrupción". Considerar el uso e impacto político de la comunicación sobre corrupción parece ser un factor importante que nos lleva a un mejor entendimiento del funcionamiento de los sistemas políticos y del desarrollo histórico por el que pasó la acusación de corrupción. Los editores no pretendemos dar por zanjado el debate, por demás fructífero, sobre la relación entre corrupción y modernidad ni haber aclarado todas las facetas explicativas de un análisis que pone en el centro de la atención el discurso de la corrupción. Más bien, falta mucho que hacer. En vez de estudiar más si la corrupción era o no vista como tal, valdrían mucho estudios empíricos, por ejemplo, sobre precisamente los actos en el gobierno y la justicia que los contemporáneos percibían como ofensivos, y cómo las sociedades se distinguían en determinadas épocas y regiones en sus castigos. Por otra parte, creemos necesario estudiar con mayor profundidad la transformación que llevó el argumento que fijó la solución de la corrupción en el regreso a los valores tradicionales hacia la idea de que se erradicaría con el desarrollo y la aplicación de nuevas normas. Por todo ello, sería de interés mejorar la periodización orientada por los grandes cambios discursivos. Además, sería importante también tomar en cuenta los vínculos con los otros imperios atlánticos y entre los estados nacientes de la modernidad, tanto en el plano de las historiografías como en el estudio de las fuentes primarias.

Con nuestro trabajo esperamos haber mostrado que un interés renovado por la corrupción, sus usos discursivos y la interrelación entre las críticas de corrupción y el contexto político, pueda ofrecer un aporte importante al estudio histórico del pasado latinoamericano. Este avance no hubiera sido posible sin las valiosas aportaciones de nuestros colegas, a los cuales agradecemos mucho. Igual damos gracias al Dr. Gibrán Bautista y Lugo, UNAM, y a Sebastian Pattin del centro de excelencia de la universidad de Münster, por amablemente haber corregido la corrupción lingüística de nuestra introducción.

Münster/Ciudad de México, 2015.

Bibliografía

Alemann, Ulrich von (2005): "Politische Korruption: Ein Wegweiser zum Stand der Forschung". En: Alemann, Ulrich von (ed.): *Dimensionen politischer Korruption. Beiträge zum Stand der internationalen Forschung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 13-49.

Andrien, Kenneth J. (1982): "The Sale of Fiscal Offices and the Decline of Royal Authority in the Viceroyalty of Peru, 1633-1700". En: *Hispanic American Historical Review* 62, 1, pp. 49-71.

— (1985): *Crisis and Decline. The Viceroyalty of Peru in the Seventeenth Century*. Albuquerque: University of New Mexico Press.

— (1994): "Corruption, Self-Interest, and the Political Culture of Eighteenth-Century Quito". En: Matthews, Richard K. (ed.): *Virtue, Corruption, and Self-Interest. Political Values in the Eighteenth Century*. Bethlehem: Lehigh University Press, pp. 270-296.

Andújar Castillo, Francisco (2004): *El sonido del dinero: Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo xviii*. Madrid: Marcial Pons.

Asch, Roland G./Emich, Birgit/Engels, Jens-Ivo (eds.) (2011): *Integration - Legitimation - Korruption. Politische Patronage in Früher Neuzeit und Moderne*. Frankfurt a.M.: Peter Lang.

Bellingradt, Daniel (2012): "Organizing Public Opinion in a Resonating Box: The Gülich Rebellion in Early Modern Cologne, 1680-1686". En: *Urban History* 39, 4, pp. 553-570.

Bernecker, Walther (1989): *Schmuggel. Illegalität und Korruption im Mexiko des 19. Jahrhunderts*. Frankfurt a.M.: Vervuert.

Bertrand, Michel (2011): "Viejas preguntas, nuevos enfoques: la corrupción en la adminstración colonial española". En: Andújar Castillo, Francisco/Felices de la Fuente, María del Mar (eds.): *El poder del dinero. Ventas de cargo y honores en el Antiguo Régimen.* Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 46-62.

Blake, Charles/Morris, Stephen (eds.) (2009): *Corruption and Democracy in Latin America.* Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Bluhm, Harald/Fischer, Karsten (eds.) (2002): *Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit der Macht. Theorien politischer Korruption*. Baden-Baden: Nomos.

Dard, Olivier et al. (ed.) (2014): *Scandales et corruption à l'époque contemporaine.* Paris: Armand Colin.

Engels, Jens-Ivo (2006): "Politische Korruption in der Moderne. Debatten und Praktiken in Großbritannien und Deutschland im 19.Jahrhundert". In: *Historische Zeitschrift* 282, pp. 313-350.

— (2010): "Politische Korruption und Modernisierungsprozesse. Thesen zur Signifikanz der Korruptionskommunikation in der westlichen Moderne". En: Grüne, Niels/Slanička, Simona (eds.): *Korruption. Historische Annäherungen an eine Grundfigur politischer Kommunikation*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 35-54.

— (2014a): *Die Geschichte der Korruption. Von der Frühen Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert*. Frankfurt a.M.: Fischer.

— (2014b): "La modernisation du clientélisme politique dans l'Europa du XIX^e^ et du XX^e^ siècle. L'impact du capitalisme et des nouvelles formes d'organisation politique". En: Monier, Frédéric/Dard, Olivier/Engels, Jens Ivo (eds.): *Patronage et corruption politiques dans l'Europe contemporaine*. Paris: Armand Colin, pp. 33-51.

Engels, Jens-Ivo et al. (ed.) (2015): *Krumme Touren in der Wirtschaft. Zur Geschichte ethischen Fehlverhaltens und seiner Bekämpfung*. Köln/Weimar/Wien: Böhlau.

Engels, Jens-Ivo/Fahrmeir, Andreas/Nützenadel, Alexander (eds.) (2009): *Geld, Geschenke, Politik. Korruption im neuzeitlichen Europa*. (Historische Zeitschrift. Beihefte 48). München: Oldenbourg.

Engels, Jens-Ivo/Monier, Frédéric/Petiteau, Natalie (eds.) (2011). *La politique vue d'en bas. Pratiques privées et débats publics 19.-20. siècles*. Paris: Armand Colin.

Fajardo, Luis Eduardo (2002): "La corrupción heredada: pasado colonial, sistema legal y desarrollo económico en Colombia". En: *Revista de Estudios Sociales* 12, pp. 20-28.

Feros, Antonio (2000): *Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III, 1598-1621*. Cambridge: Cambridge University Press.

Frevert, Ute/Haupt, Heinz-Gerhard (eds.) (2005): *Neue Politikgeschichte. Perspektiven einer historischen Politikforschung*. Frankfurt a.M.: Campus.

Génaux, Maryvonne (2004): "Social Sciences and the Evolving Concept of Corruption". En: *Crime, Law & Social Change* 42, 1, pp. 13-24.

Grüne, Niels (2010): "'Und sie wissen nicht, was es ist'. Ansätze und Blickpunkte historischer Korruptionsforschung". En: Grüne, Niels/Slanička, Simona (eds.): *Korruption. Historische Annäherungen an eine Grundfigur politischer Kommunikation*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 11-34.

Grüne, Niels/Slanička, Simona (eds.) (2010): *Korruption. Historische Annäherungen an eine Grundfigur politischer Kommunikation*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Harrison, Elizabeth (2007): "Corruption". En: *Development in Practice* 17, 4/5, pp. 672-678.

Heidenheimer, Arnold/Johnston, Michael (eds.) (2002): *Political Corruption. Concepts & Contexts*. 3ª ed. New Brunswick: Transaction Publishers.

Hespanha, António Manuel (2006): "Porque é que existe e em que é que consiste um direito colonial brasileiro". En: Paiva, Eduardo França (ed.): *Brasil-Portugal: Sociedades, culturas e formas de governar no mundo português (séculos XVI-XVIII)*. São Paulo: Annablume, pp. 21-41.

Huppertz, Cornelius (2004): *Korruption in Argentinien. Eine netzwerkanalytische Erklärung der Finanzkrise*. Hamburg: Kovač.

Irurozqui, Marta (1999): "¡Que vienen los mazorqueros! Usos y abusos discursivos de la corrupción y la violencia en las elecciones bolivianas, 1884-1925". En: Sabato, Hilda (ed.): *Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina*. México, D.F.: El Colegio de México, pp. 295-318.

Johnston, Michael (1996): "The Search for Definitions: the Vitality of Politics and the Issue of Corruption". En: *International Social Science Journal* 48, pp. 321-335.

Karsten, Arne/Thiessen, Hillard von (eds.) (2006): *Nützliche Netzwerke und korrupte Seilschaften*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Kerkhoff, Toon/Kroeze, Ronald/Wagenaar, Pieter (2013): "Corruption and the Rise of Modern Politics". En: *Journal of Modern European History* 11, 1, pp. 19-30.

Klaveren, Jakob van (1957): "Die historische Erscheinung der Korruption, in ihrem Zusammenhang mit der Staats- und Gesellschaftsstruktur betrachtet". En: *Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* 44, 4, pp. 289-224.

— (1958): "Die historische Erscheinung der Korruption. II. Die Korruption in den Kapitalgesellschaften, besonders in den Großen Handelskompanien, III. Die internationalen Aspekte der Korruption". En: *Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* 45, 4, pp. 433-504.

— (2002): "Corruption as a Historical Phenomenon". Translated by Peggy Hofmann and Karl Kurtz. En: Heidenheimer, Arnold/Johnston, Michael (eds.): *Political Corruption: Concepts and Contexts*. 3ª ed., New Brunswick: Transaction Publishers, pp. 83-94.

Lomnitz-Adler, Claudio (ed.) (2000): *Vicios públicos, virtudes privadas: La corrupción en México*. México, D.F.: CIESAS.

McFarlane, Anthony (1996): "Political Corruption and Reform in Bourbon Spanish America". En: Little, Walter/Posada Carbó, Eduardo (eds.): *Political Corruption in Europe and Latin America*. Basingstoke/London: Palgrave Macmillan, pp. 41-63.

MacLachlan, Colin M. (1988): *Spain's Empire in the New World. The Role of Ideas in Institutional and Social Change.* Berkeley: University of California Press.

— (2006): *Argentina. What went wrong*. Westport: Praeger Publishers.

Monier, Frédéric (2014): "Mais la véritable corruption n'existe plus". Les patronages à l'ère de la critique. En: Monier, Frédéric/Dard, Olivier/Engels, Jens Ivo (eds.): *Patronage et corruption politiques dans l'Europe contemporaine*. Paris: Armand Colin, pp. 13-32.

Monier, Frédéric/Dard, Olivier/Engels, Jens Ivo (eds.) (2014): *Patronage et corruption politiques dans l'Europe contemporaine*. Paris: Armand Colin.

Moutoukias, Zacarias (1997): "Una forma de oposición: el contrabando". En: Flynn, Dennis O./Giráldez, Arturo (eds.): *Metals and Monies in an Emerging Global Economy. An Expanding World. The European Impact on World History 1450-1800.* Aldershot: Variorum, pp. 19-54.

Nef, Jorge (2001): "Government Corruption in Latin America". En: Caiden, Gerald/Dwivedi, O. P./Jabbra, Joseph (eds.): *Where Corruption lives*. Bloomfield: Kumarian, pp. 159-173.

Osterhammel, Jürgen (2009): *Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts*. München: C. H. Beck.

Oxhorn, Philip/Ducatenzeiler, Graciela (eds.) (1998): *What Kind of Democracy? What Kind of Market? Latin America in the Age of Neoliberalism*. University Park: Pennsylvania State University Press.

Palacios, Guillermo (ed.) (2007): *Ensayos sobre la Nueva Historia Política en América Latina, siglo XIX*. México, D.F.: El Colegio de México.

Parry, J. H. (1953): *The Sale of Public Office in the Spanish Indies under the Hapsburgs*. Berkeley: University of California Press.

Phelan, John L. (1967): *The Kingdom of Quito in the Seventeenth Century: Bureaucratic Politics in the Spanish Empire*. Madison: University of Wisconsin Press.

Pietschmann, Horst (1987): "Estado colonial y mentalidad social: El ejercicio del poder frente a distintos sistemas de valores, siglo xviii". En: Carmagnani, Marcello et al. (eds.): *America Latina dallo stato coloniale allo stato nazione: 1750-1940*. Milano: Franco Angeli, pp. 427-447.

— (1997): "Corrupción en las Indias Españolas: Revisión de un debate en la historiografía sobre Hispanoamérica colonial". En: *Memorias de la Academia Mexicana de la Historia* 40, pp. 39-54.

— (2013): "'Corrupción' en el virreinato novohispano: Un tercer intento de valoración". En: *e-Spania: Revue interdisciplinaire d'études hispaniques médievales et modernes*. <http://e-spania.revues.org/22848> (28.02.2016).

Plumpe, Werner (2009): "Korruption. Annäherungen an ein historisches und gesellschaftliches Phänomen". En: Engels, Jens-Ivo/Fahrmeir, Andreas/Nützenadel, Alexander (eds.): *Geld, Geschenke, Politik. Korruption im neuzeitlichen Europa*. (Historische Zeitschrift. Beihefte 48) München: Oldenbourg, pp. 19-47.

Porta, Donatella della/Rose-Ackerman, Susan (eds.) (2002): *Corrupt exchanges: Empirical Themes in the Politics and Political Economy of Corruption*. Baden-Baden: Nomos.

Quiroz, Alfonso W. (2008): *Corrupt Circles: A History of Unbound Graft in Peru.* Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press.

— (2013): *Historia de la corrupción en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Reinhard, Wolfgang (2011): "Die Nase der Kleopatra. Geschichte im Lichte mikropolitischer Forschung. Ein Versuch". En: *Historische Zeitschrift* 293, pp. 631-666.

Rosenmüller, Christoph (2008): *Patrons, Partisans, and Palace Intrigues: The Court Society of Colonial Mexico, 1702-1710*. Calgary: University of Calgary Press.

— (2016a): "'Corrupted by Ambition:' Justice and Patronage in Imperial New Spain and Spain, 1650–1755". En: *Hispanic American Historical Review* 96.1, pp. 1-37.

— (2016b): "'El grave delito de... corrupcion.' La visita de la audiencia de México (1715–1727) y las repercusiones internas de Utrecht". En: Escamilla González, Iván/Souto Mantecón, Matilde/Pinzón Ríos, Guadalupe (eds.): *Resonancias imperiales: América y la Paz de Utrecht de 1713*. México, D.F.: Instituto de Investigaciones Mora/UNAM, pp. 79-118.

Ruderer, Stephan (2014): "Crisis and Corruption. The Anglo-Argentine Scandal Surrounding the Privatisation of the Buenos Aires Sanitary Works between 1888-1891". En: Dard, Olivier et al. (eds.): *Scandales et corruption à l'époque contemporaine*. Paris: Armand Colin, pp. 66-79.

— (2015a): "Korruption und Staatsbildungsprozess. Der Korruptionsdiskurs bei der Legitimation von bewaffneten Aufständen in Argentinien und Uruguay zwischen 1870 und 1890". En: *Historische Zeitschrift* 300, pp. 66-102.

— (2015b): "'Eine Missachtung der wichtigsten Interessen des Landes' – Der Korruptionsskandal um den Hafenbau in Montevideo 1885". En: Engels, Jens-Ivo et al. (eds.): *Krumme Touren in der Wirtschaft. Zur Geschichte ethischen Fehlverhaltens und seiner Bekämpfung*. Köln/Weimar/Wien: Böhlau, pp. 63-82.

Sabato, Hilda (1998*): La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

— (ed.) (1999): *Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina*. México, D.F.: El Colegio de México.

Saguier, Eduardo (1989): "La corrupción administrativa como mecanismo de acumulación y engendrador de una burguesía comercial local". En: *Anuario de Estudios Americanos* 46, pp. 269-303.

— (1992): "La corrupción de la burocracia colonial bórbonica y los orígenes del federalismo: El caso del Virreinato del Río de la Plata". En: *Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas* 29, pp. 149-177.

Schuller, Wolfgang (ed.) (1982): *Korruption im Altertum*. München: Oldenbourg.

Schwartz, Stuart (1973): *Sovereignty and Society in Colonial Brazil. The High Court of Bahia and its Judges, 1609-1751*. Berkeley: University of California Press.

Scott, James (1972): *Comparative Political Corruption*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Stollberg-Rilinger, Barbara (ed.) (2005): *Was heißt Kulturgeschichte des Politischen?* (Zeitschrift für historische Forschung, Beiheft 35). Berlin: Duncker & Humblot.

Suter, Andreas (2010): "Korruption oder Patronage? Außenbeziehungen zwischen Frankreich und der Alten Eidgenossenschaft als Beispiel (16. bis 18. Jahrhundert)". En: *Zeitschrift für Historische Forschung* 37, 2, pp.187-218.

Ternavasio, Marcela (2002): *La Revolución del Voto. Política y Elecciones en Buenos Aires, 1810-1852*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Thiessen, Hillard von (2009): "Korruption und Normenkonkurrenz. Zur Funktion und Wirkung von Korruptionsvorwürfen gegen die Günstlings-Minister Lerma und Buckingham in Spanien und England im frühen 17. Jahrhundert". En: Engels, Jens Ivo/Fahrmeir, Andreas/Nützenadel, Alexander (eds.): *Geld, Geschenke, Politik. Korruption im neuzeitlichen Europa.* (Historische Zeitschrift, Beihefte 48) München: Oldenbourg, pp. 91-120.

— (2010): "Korrupte Gesandte? Konkurrierende Normen in der Diplomatie der Frühen Neuzeit". En: Grüne, Niels/Slanička, Simona (eds.): *Korruption. Historische Annäherungen an eine Grundfigur politischer Kommunikation*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 205-220.

Tulchin, Joseph/Espach, Ralph (eds.) (2000): *Combating Corruption in Latin America*. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press.

Waldmann, Peter (2010): *Argentinien. Schwellenland auf Dauer*. Hamburg: Murmann.

Waquet, Jean-Claude (1984): *De la corruption. Morale et pouvoir à Florence aux XVII^e^ et XVIII^e^ siècles*. Paris: Fayard.

— (1991): *Corruption. Ethics and Power in Florence, 1600-1770.* University Park: Pennsylvania State University Press.

Whitehead, Laurence (2002): "High Level Political Corruption in Latin America. A 'Transitional' Phenomenon". En: Heidenheimer, Arnold J./Johnston, Michael (eds.): *Political Corruption. Concepts & Contexts*. 3ª ed. New Brunswick, pp. 801-817.

Yarrington, Doug (2003): "Cattle, Corruption, and Venezuelan State Formation during the Regime of Juan Vicente Gómez, 1908-35". En: *Latin American Research Review* 38, 2 , pp. 9-33.

¿Prácticas corruptas o relaciones de patronazgo? Orden patrimonial y la naturaleza del sistema político en el Perú colonial durante el gobierno del virrey conde del Villar (1585-1590)

L. Miguel Costa

El 2 de mayo de 1590 zarpa del puerto del Callao con rumbo de regreso a España don Fernando de Torres y Portugal, conde del Villar, señor del Villardompardo, caballero de la Orden de Santiago, virrey del Perú, acompañado de su hijo, don Jerónimo de Torres y Portugal y un muy reducido número de familiares y sirvientes (Levillier 1921-1926, vol. 11: 306). El escenario y el ambiente resultaba considerablemente menos festivo de lo que había sucedido poco menos de cinco años atrás, el 21 de noviembre de 1585, día en que el conde del Villar entró en la ciudad de Lima acompañado por una corte de 64 personas, entre parientes, amigos, paisanos, sirvientes, en medio de vítores y halagos, en su calidad de recién nombrado virrey del Perú. Durante los casi cinco años de su presencia y accionar en este virreinato no solo generó polémica y malestar entre muchos grupos de la sociedad colonial peruana, sino que desató una crisis de autoridad política de grandes proporciones, dando a lugar a bandos en conflicto, enfrentamientos con y entre funcionarios e instituciones del más alto nivel del virreinato por temas de poder, y teniendo como punto más crítico su propia excomunión ocurrida en octubre de 1589 de manos de la Inquisición de Lima (Levillier 1921-1926, Vol. 11: 322).

Más allá de los sucesos relacionados a este hecho histórico, lleno de detalles y acusaciones escandalosas, recogidas de forma minuciosa en la numerosa correspondencia oficial de la época así como en las dos investigaciones llevadas a cabo en su momento, la más notable de ellas la visita de la Audiencia de Lima y del virrey conde del Villar que el rey Felipe II encarga al licenciado Alonso Fernández de Bonilla en octubre de 1588, los hechos en torno al gobierno del conde del Villar, séptimo virrey del Perú, representan una excelente y particular oportunidad para el estudio, análisis

y comprensión de las dinámicas de poder y prácticas políticas del sistema de gobierno que España estableció en América en las décadas inmediatamente posteriores a su llegada al continente.[1]

Los trabajos en torno al estudio del sistema político colonial español en América, y en particular el caso del virreinato peruano, forman parte de una amplia e importante tradición historiográfica que van desde las investigaciones clásicas que enfatizan la presentación y descripción detallada de instituciones y personalidades fundamentales en su funcionamiento, hasta aproximaciones más recientes que buscan entender la construcción de la realidad política fundamentalmente como el resultado del funcionamiento de dinámicas de poder flexibles y diversas entre los distintos grupos de población, que incluyen no solo aspectos legales e institucionales, sino también elementos ceremoniales/rituales, así como vínculos familiares y redes clientelares de poder, y en donde el Estado institucional pareciera ocupar un lugar secundario.[2] En las últimas décadas, nuevas preguntas han sido planteadas en relación a lo político en el mundo colonial, y el énfasis ha sido puesto en situaciones de crisis y tensiones de poder en las acciones llevadas a cabo por las autoridades coloniales, en un intento válido por entender estructuras, dinámicas políticas, perfiles y problemas propios de este modelo político y su posible relación con situaciones que aparecerán en los

1 La visita, casi en su totalidad, se encuentra en el Archivo General de Indias - Sevilla (AGI), fundamentalmente en la sección Justicia, 480-485; pero también en Lima, 1, 29, 32, 93, 108, 127, 129, 209, 217, 274, 318 y 570; Escribanía, 499A, 500A y 567A; y Quito, 9. En el caso de cartas y otros documentos, información valiosa relativa a este caso se halla en: Cartas de Cabildos hispanoamericanos. Audiencia de Lima; Colección de las memorias o relaciones que escribieron los virreyes del Perú; Encinas, Cedulario indiano; Hanke (1978-1980): *Los virreyes españoles en América*; Jiménez de la Espada (1985 [1965]): *Relaciones Geográficas de Indias*; Konetzke (1953): *Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica*; Levillier (1921-1926): *Gobernantes del Perú*; y Libros de Cabildos de Lima.

2 Entre los trabajos clásicos destacan: García de Valdeavellano (1982): *Curso de historia de las instituciones españolas*; García Gallo (1944): *Los orígenes de la administración territorial de las Indias*; Góngora (1951): *El Estado en el derecho indiano*; y Maravall (1986 [1972]): *Estado Moderno y mentalidad social*. Otros trabajos posteriores abrieron la puerta para nuevas preguntas en torno a la interacción entre autoridades y sociedad colonial, como: Burkholder/Chandler (1977): *From Impotence to Authority*; y Pietschmann (1980): *El Estado y su evolución*. Más recientemente, trabajos como los Cañeque (2004): *The King's Living Image*; Martin (1996): *Governance and Society in Colonial Mexico*; Andrien (1985): *Crisis and Decline: The Viceroyalty of Peru in the Seventeenth Century*; Latasa Vasallo (1997): *Administración virreinal en el Perú*; Torres Arancivia (2006): *Corte de virreyes* y Ramos (2012): *Identity, Ritual, and Power in Colonial Puebla* apuntan al estudio de otros aspectos, como los ceremoniales y relaciones entre grupos y clientes, como elementos importantes en la definición de la dinámica de poder colonial.

modelos políticos de siglos posteriores, puntualmente a partir del siglo XIX en adelante. Un caso en cuestión ha sido la rica e interesante discusión que se viene dando desde hace ya un tiempo en torno al tema de la corrupción en el mundo colonial.[3]

Mi trabajo busca aportar a estas discusiones con la presentación del caso del gobierno conde del Villar en tanto reflejo de las dinámicas entre autoridad y poder en el Perú virreinal en una etapa temprana, correspondiente a la segunda mitad del siglo XVI, poniendo especial atención en cómo estas dinámicas se articulan siguiendo una lógica propia y relativa a su momento histórico, quedando de manifiesto inclusive en momentos de conflicto y enfrentamiento, y en comportamientos que hoy en día podríamos considerar como ilegales y corruptos, pero que vistos en su contexto cobran un significado diferente.

El punto de partida que propongo es el entendimiento de conceptos teóricos generales como poder, autoridad, jerarquía, institucionalidad y conflicto, incorporando definiciones y reflexiones propias de la sociología y ciencias políticas, para a partir de allí pasar al análisis del caso puntual, el gobierno del conde del Villar como virrey del Perú entre 1585 y 1590, y tratar de entender allí las complejidades y particularidades manifiestas en la crisis política que se ocasiona. Al mismo tiempo, me interesa ver las dinámicas propias de la sociedad colonial, las relaciones que se articulan entre los grupos sociales, las redes de vínculos, colaboraciones y alianzas tácitas y explícitas que se generan en espacios privados pero que marcan la pauta de funcionamiento de las esferas públicas. La historiografía latinoamericana colonial se muestra muy rica en estos temas, incorporando investigaciones sobre venta de oficios, la dinámica entre ley y accionar social, vínculos sociales, redes familiares de poder (parentelas), entre otros.[4]

---

3 La producción historiográfica sobre el fenómeno de la corrupción política y económica en el mundo colonial hispanoamericano incluye importantes trabajos como: Andrien (1984): "Corruption, Inefficiency, and Imperial Decline"; Pietschmann (1998): "Corrupción en las Indias españolas"; Holguín Callo (2002): *Poder, corrupción y tortura en el Perú de Felipe II*; Portocarrero (2005): *El Pacto Infame: Estudios sobre la corrupción en el Perú*; Quiroz (2013): *Historia de la corrupción en el Perú*; y Moreno Cebrián/Sala i Vila (2005): "Una aproximación a la corrupción política virreinal".

4 El énfasis ha sido puesto en los funcionarios reales y su interacción con los grupos coloniales de poder político y económico local, con trabajos notables por su solidez documental y análisis teórico. Para mayor información, ver los trabajos de Herzog (1995): *La administración como un fenómeno social: La justicia penal de la ciudad de Quito (1650-1750)*; de la Puente Brunke (2006): "Codicia y bien público: los ministros de la Audiencia en la Lima seiscentista"; Bertrand (2011): *Grandeza y miseria del oficio.*

Resulta de suma utilidad para mi trabajo el uso de categorías teóricas presentadas por Max Weber en su análisis sobre la organización y evolución de las sociedades humanas, ya que ellas ofrecen conceptos referenciales que permiten entender mejor la complejidad del sistema político hispano de los siglos XV y XVI, y su instalación en los Andes peruanos hacia la segunda mitad del siglo XVI. Weber propone que los modelos políticos propios de Europa occidental en los siglos posteriores a la caída de Roma pueden ser considerados como sistemas que se sustentan y legitiman a través criterios de autoridad tradicionales, en los cuales el poder se sustenta en "la santidad de ordenaciones y poderes de mando heredados de tiempos lejanos "desde tiempo inmemorial" (Weber 2005 [1922]: 753-754). La autoridad tradicional puede dar lugar a modelos políticos que van desde formas puras de dominación, como es la patriarcal (sumisión y obediencia ilimitada debido a una devoción personal), pasando por las formas feudales/señoriales, hasta llegar al llamado Estado patrimonial, en donde la autoridad reside en el rey (dinastía real), como resultado de alianzas y relaciones de patronazgo con la nobleza y otros sectores importantes de la sociedad, entre ellos la Iglesia (Weber 2005 [1922]: 710-711).

Mi interés se centra en este último modelo político tradicional, el Estado patrimonial, ya que en él el ejercicio del poder no solo se considera como un atributo personal, como propiedad de quien ejerce el poder monarca (típico de todo modelo tradicional), sino que va a acompañado de la existencia de un aparato burocrático, con oficiales nombrados por el rey, quienes cumplen el rol de instrumento personal del monarca en sus funciones de gobierno, y a su vez repiten y perpetúan ese ejercicio del poder y la función de gobierno como algo personal, en la medida que el rey mismo les otorga jurisdicción amplia y poco delimitada en su calidad de burócratas de un Estado patrimonial:

> La separación entre los asuntos públicos y los privados, entre patrimonio público y privado, y las atribuciones señoriales públicas y privadas de los funcionarios, se ha desarrollado sólo en cierto grado dentro del tipo arbitrario, pero ha desaparecido a medida que se difundía el sistema de prebendas y apropiaciones. […] El ejercicio del poder es en primer lugar un derecho señorial personal del funcionario. Fuera de los límites fijados por la tradición sagrada, el funcionario decide también, lo mismo que el príncipe, de acuerdo con los casos, es decir, según su merced y albedrío personales. […] Todo se

Los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España, siglos XVII y XVIII; Schwartz (1970): "Magistracy and Society in Colonial Brazil".

> basa entonces completamente en "consideraciones personales", es decir, en la actitud asumida frente a los solicitantes concretos y frente a las circunstancias, censura, promesas y privilegios puramente personales. (Weber 2005 [1922]: 784-785)

Weber considera que los grandes imperios continentales europeos anteriores a la Edad Moderna, y aún en una etapa temprana dentro de ésta, presentan características claras de un Estado patrimonial, ya que se observa que el soberano construye un sistema de gobierno a la imagen de su poder doméstico, con una mayor complejidad y la incorporación de sirvientes que formarán una estructura burocrática regida por un criterio patrimonial, en donde si bien en muchos casos el nombramiento mismo de estas autoridades sigue un procedimiento que incluye criterios objetivos de selección (en el caso colonial hispanoamericano, por ejemplo, el rol del Consejo de Indias, y requisitos puntuales como el ser letrado para los oidores), y alusión a leyes y normas aprobadas por el mismo rey, en la decisión prima final la voluntad personal de la autoridad tradicional (rey), y dentro de ellas criterios de lealtad y vínculos personales y familiares. Existe un carácter casi racional en esta forma de poder político patrimonial, que sin embargo no deja de sustentarse en la tradición y el vínculo personal con el rey. Es más, en la medida que responde a la voluntad y vínculo personal con el gobernante, las instituciones y funcionarios que forman parte de ella carecen de nociones claras de jerarquía y jurisdicciones definidas, lo que lleva a constante conflicto y negociación entre las partes, quienes deben negociar sus espacios de poder, recurriendo constantemente y de forma directa a la figura del monarca en su calidad centro absoluto y único de la autoridad política (Weber 2005 [1922]: 211-212). Incluso la existencia de leyes solo tiene un peso político real, funcional y sobre todo legítimo dentro del Estado patrimonial si se presentan y son percibidas como manifestaciones del poder personal del rey, quien las crea y aplica, a veces de forma errática, como parte de su política de otorgar mercedes, establecer deberes y derechos, percibidos como parte de su ejercicio personal del poder, ya que "desde su punto de vista [el del rey] el servicio público se encontraba inscrito en la lógica personal del clientelismo, el mismo que también dominaba en las relaciones medievales de vasallaje. Honor, fidelidad y deber se encontraban vinculados a obligaciones morales de reciprocidad en favor de un patrón que tenía una posición de poder" (Génaux 2002 [2000]: 108). Sobre este particular, la propuesta teórica de Michael Mann permite

profundizar y ampliar la comprensión, en la medida que enfatiza de qué manera autoridad, entendida como monopolio exclusivo del monarca, y por otro lado la idea de poder, como algo asociado a las dinámicas propias de la sociedad o comunidad política, en donde el Estado interactúa como un grupo más entre muchos otros (Mann 1984: 111-112).[5]

En cuanto al perfil propio de este tipo de burocracia que el rey construye como instrumentos de autoridad y poder, las personas que ocupan una posición burocrática son considerados sirvientes personales del rey, y en se sentido dependen de su lealtad y sumisión para mantener dicha posición. El cargo que un oficial ocupa dentro en una burocracia patrimonial representa finalmente una manifestación pública de la relación privada que mantiene con el rey, y las remuneraciones otorgadas aparecen rodeadas de un lenguaje que alude al otorgamiento de regalos, mercedes, beneficios personales. Puntualmente, Weber habla que dentro del Estado patrimonial la prebenda aparece como forma de sostenimiento que la autoridad (señor, rey) otorga al servidor patrimonial, de forma constante, a manera de apropiación individual, reguladas por criterios establecidos por la propia tradición.[6] Aún más:

> […] el Estado patrimonial hace que toda la esfera de los favores otorgados por el soberano pueda convertirse en lugar de explotación para la formación de fortunas, y da vía libre –allí donde la subordinación a la tradición o a la estereotipación no imponen límites definidos– al enriquecimiento del soberano mismo, de sus funcionarios cortesanos, favoritos, gobernadores […]. (Weber 2005 [1922]: 837)

Así como las categorías y conceptos weberianos anteriormente mencionados permiten tener más luces sobre la posible lógica en el funcionamiento de las dinámicas de poder en la España y sus dominios coloniales en América entre los siglos xv y xvi, mi trabajo busca entender el significado real de prácticas políticas conflictivas en el contexto de un modelo político que

5 En clara referencia crítica al énfasis que Weber ponía al rol del Estado y su monopolio no solo de la autoridad sino también del ejercicio del poder, Mann indica que "the state can be defined in terms of what it looks like, institutionally, or what it does, its functions. Predominant is a mixed, but largely institutional, view put forward originally by Weber" (Mann 1984: 188).

6 Weber 2005 [1922]: 188. El autor también habla de otras formas de sostenimiento, como los feudos, que son poderes políticos otorgados a través de contratos que generan derechos y obligaciones en ambas partes, orientado todo a formas militares y administrativas en la organización de un territorio. Ver también: Rheinstein 1969: 262.

sin duda difiere sustancialmente de la lógica de los sistemas que hoy en día funcionan en gran parte de los países occidentales (racionales/legales, para utilizar la terminología weberiana en un sentido amplio). Probablemente la corrupción es quizás uno de los temas de mayor importancia hoy en día, en tanto factor de crisis y gran amenaza en el funcionamiento de los modelos políticos en Europa como en América, entre otras regiones del mundo, de allí que resulte de vital importancia entender su evolución como concepto y la validez de su uso como categoría según el orden político que se desee estudiar. La definición contemporánea de corrupción en occidente alude a una situación en la que una autoridad pública, representando alguna instancia de gobierno, hace uso de su posición pública para beneficiarse o beneficiar a terceros de forma particular. En la medida que hoy en día, el sustento del funcionamiento de un Estado se basa en la clara diferenciación entre las esferas públicas (estatales) y privadas (personales), las prácticas corruptas atentan la integridad del ente político (Estado), causando crisis de funcionamiento y de legitimidad (Friedrich 2002 [2000]: 15-23). Un punto importante a mencionar es que la distinción entre las esferas públicas y privadas no siempre resultan claras en todas las sociedades y modelos políticos. Como hemos señalado anteriormente, en los modelos políticos organizados de acuerdo a formas de autoridad y legitimidad tradicionales lo que predomina es un manejo político en donde la autoridad ejerce el poder a título personal, y proyecta y transmite dicho accionar a las demás esferas de su aparato de poder (burocracia).

Puntualmente en el caso de la Europa de la temprana Edad Moderna, Jean-Claude Waquet plantea la existencia de la corrupción política como una práctica que busca reconciliar aspectos religiosos (tradicionales) y legales propios de una dinámica de poder en transformación. De acuerdo a ello, Waquet propone que la corrupción fue un elemento funcional en el aparato administrativo de esta época, ya que no solo benefició a aquellos grupos de burócratas que eran parte del aparato político y de gobierno, otorgándole beneficios económicos y de poder, sino que a su vez permitió el fortalecimiento del orden y dinámicas de poder dentro de la sociedad. Si bien la corrupción, por un lado, resultó perjudicial para la autoridad monárquica y su intención de ejercer el poder de forma monopólica, en muchos casos resultó un elemento que permitió más dinamismo en las dinámicas de poder en el modelo en su conjunto (Waquet 1991: 73-74).

En ese contexto, resulta importante incorporar como concepto de análisis el patronazgo, en tanto mecanismo de construcción y participación de

dinámicas de poder dentro de este orden político tradicional –patrimonial–, que refuerza el funcionamiento de un Estado en donde la autoridad y su desempeño se sustentaba en relaciones entre patrones y clientes, en donde lo personal y la inexistencia de una diferenciación entre esferas públicas y privadas definían el accionar de quienes ejercían el poder. En ellas, por ejemplo, las relaciones de paisanaje resultan importantísimas para posicionarse en los círculos de poder, tanto en la corte como en territorios alejados de ella. Al mismo tiempo, en territorios alejados del poder del monarca, aquellos individuos beneficiados bajo una relación clientelar con el monarca, debían repetir asimismo esas dinámicas clientelares con grupos de poder propios del nuevo territorio a donde hubieren llegado, de lo contrario el circulo clientelar podía romperse y entrar en crisis (Moreno Cebrián/Sala i Vila 2005: 90). Al final, las relaciones clientelares y de patronazgo dentro del modelo del Estado patrimonial permitían su funcionabilidad y reforzaban la figura del monarca, percibido como el patrón por excelencia y único centro y fuente de poder y autoridad. Por su lado, los burócratas entendieron el ejercicio de sus funciones y autoridad como una merced personal recibida de la fuente de poder central y última (el rey), y de acuerdo a ello se desempeñaron en sus funciones como quien maneja sus asuntos personales. Las prácticas que hoy en día se dan en sistemas políticos legales y racionales y que caen dentro de la categoría de corrupción, en el contexto de la temprana Edad Moderna europea simplemente reflejaban las complejas relaciones clientelares y de patronazgo cuya funcionabilidad hacía viable el modelo en cuestión. Los límites a este accionar personal eran sutiles, y tenían que ver con nociones de legitimidad tales como el ejercicio del poder replicando los círculos clientelares en torno a otros actores (muchas veces locales).

En el caso de España en la temprana Edad Moderna, puntualmente el reino de Castilla, el sistema político que tenía a la cabeza la figura de la monarquía se sustentaba en relaciones de poder y patronazgo con los diversos sectores de la sociedad hispana. El monarca representaba la unidad política de autoridad y gobierno y garantizaba diversos derechos y privilegios a los diversos grupos o estamentos que conformaban su reino, según su posición. Este proceso de consolidación de una autoridad política centralizada se había dado en la península en el contexto de la Guerra de Reconquista contra los árabes, entre los siglos VIII y XV, muy específicamente a partir del siglo XI en que el avance cristiano hacia el sur empezó a cobrar impulso. Como resultado propio de la contienda militar, la actividad guerrera

asumió un rol protagónico en la construcción del orden político y social, convirtiendo en nobles a quienes participaban de forma destacada en las batallas, otorgándoles como tal privilegios y derechos especiales. (García de Valdeavellano 1982: 317). Ya para el siglo XII los reyes de Castilla y León habían consolidado su autoridad política y control territorial en las zonas de frontera a través del otorgamiento de beneficios y privilegios en la administración de territorios y fortalezas a particulares, en calidad de señoríos. Estos señoríos incluían beneficios de inmunidad jurisdiccional, administración de justicia, apropiación del cobro de tributos y gabelas, nombramiento de autoridades y representación de la autoridad real en todo quehacer administrativo (MacKay 1977: 42).

Es así como los grupos de poder y autoridad ubicados en los territorios recién recuperados de los árabes se constituyen como una nobleza militar que sustentaba su autoridad en torno a criterios tradicionales de autoridad recibidas como merced del rey. En algunos casos estos señoríos devinieron en entidades políticas autónomas, en muchos otros simplemente consolidaron una tradición política señorial en torno a la figura del monarca de Castilla. En todos los casos, el señorío se convierte en una práctica generalizada en la península, en la que las relaciones clientelares patrimoniales se reproducen no solo entre el monarca y el señor que recibe la merced, sino entre éste y los habitantes de los territorios. No hay duda de que el señorío es una delegación jurisdiccional e inclusive territorial que hace la Corona en favor de un individuo, como parte de una estrategia por parte del Reino de Castilla y Aragón de construir una red de alianzas políticas sobre la cual consolidar y continuar la reconquista y repoblamiento de los nuevos territorios. Como parte de ello vemos el surgimiento de los señores castellanos como un grupo poderoso y favorecido con mercedes y heredamientos. Hacia el siglo XV, con el gobierno de Isabel de Castilla, la Corona evitará el otorgamiento de nuevos señoríos y repartimientos, en un gesto claro de tratar de recuperar poder, autoridad y presencia en las zonas de frontera, específicamente en Andalucía y los alrededores del reino nazarí de Granada, a través de una política de centralización del poder y autoridad en la Corona. El cuidado especial estuvo puesto en el tema jurisdiccional, guardando los reyes para sí esa dimensión de poder (Kamen 1991: 156).

Con el advenimiento de la dinastía de los Habsburgo, el proceso de centralización y consolidación de una monarquía nacional continuó, y la dinámica patrimonial permaneció en tanto el rey se consolidó como la figura de donde el poder, prestigio y autoridad emanaba hacia sus súbditos,

con quienes negociaba temas de poder y llegaba a acuerdos constantemente. El nuevo rol asumido por la burocracia patrimonial, hacia donde se derivó gran parte de los sectores nobles y señoriales que habían sufrido recortes en algunas de sus jurisdicciones, no cambió de forma inmediata ni absoluta la percepción que los nombramientos para puestos oficiales y los beneficios que se desprendían de ellos eran finalmente producto de una relación o vínculo personal con el rey, y sostenida en tanto eso. Es ese contexto que el modelo de gobierno castellano se establece en las colonias americanas, combinando principios propios de una autoridad tradicional y legal: el funcionamiento del aparato burocrático se sustentaba en los privilegios otorgados por el rey a sus burócratas, teniendo como escenario la aprobación de decretos y normas paternalistas muy detallistas que buscaban regular el accionar de las instituciones y burócratas instalados en las colonias. La Corona de Castilla buscaba así evitar cualquier intento de cuestionamiento a su autoridad en los territorios americanos, pero al mismo tiempo usaba un lenguaje que dejaba entrever una relación personal hacia las autoridades nombradas, quienes finalmente eran legítimas autoridades debido a las mercedes personales recibidas del monarca (Sarfatti 1966: 25). La construcción de un orden institucional en América tomó gran parte de la primera mitad del siglo XVI. La firma de capitulaciones en la época de exploración y conquista muy pronto fue seguida por el nombramiento de adelantados y gobernadores. En el camino la fundación de ciudades, el funcionamiento de cabildos, el otorgamiento de encomiendas con jurisdicción y gobierno sobre grupos de indígenas, y el establecimiento de audiencias como órganos de administración de justicia marcaron esta época inicial en donde, nuevamente, estructuras burocráticas e institucionales combinaban prácticas modernas, al mismo tiempo que perpetuaban comportamientos patrimoniales en el ejercicio del poder (Góngora 1951: 87). Hacia la década de 1530 el andamiaje virreinal quedó establecido en los territorios más importantes para los intereses de la Corona, México y Perú, bajo un perfil claramente burocrático, institucional, pero con espacio a dinámicas clientelares y de patronazgo, no solo entre el rey y las altas jerarquías del poder virreinal (particularmente el virrey), sino también en las redes de poder construidas en los propios territorios coloniales:

> […] los virreyes encontraron que su poder se hallaba limitado debido a los derechos y libertades de los diferentes cuerpos sociales. In Nueva España, la autonomía de la autoridad eclesiástica probablemente constituía la limitación más grande al poder virreinal, aunque los oidores también representaban un

> control a las tendencias absolutistas de los virreyes. Hasta el cabildo de la Ciudad de México tenía suficiente poder para frenar, de considerarlo necesario, las pretensiones de quienes eran la viva imagen del rey. (Góngora 1951: 87)

Encontramos entonces un escenario complejo en América: un orden colonial sustentado en una estructura burocrática que más allá de aspectos modernos, contenía en relación con el monarca, y entre ellas mismas, una dinámica clientelar y de patronazgo que legitimaba la autoridad y poder de los funcionarios reales; autoridades e instituciones como el virrey, la audiencia, el cabildo, y la Iglesia (fortalecida en el contexto del Real Patronato, ya sea bajo la forma de obispados y arzobispados, o a partir de 1570 el propio Tribunal de la Santa Inquisición instalado en México y el Perú) interactuando en lo que Frederick Pike ha catalogado una política de "checks and balances" (Pike 1958: 152-154), especialmente beneficiosa para la política de control del rey; y un escenario ceremonial y ritual que hacía visual el ejercicio de poder de acuerdo a criterios tradicionales de legitimación.

Así, las prácticas clientelares y de patronazgo involucraron y vincularon a las distintas instituciones y autoridades en el escenario colonial hispano, tanto en el ejercicio real del poder como en el plano ceremonial. La Corona española imponía así un sistema político en el que el virrey otorgaba beneficios y privilegios en su calidad de representante del rey, y en un claro despliegue patrimonialista, pero pese a ello sus acciones se veían controladas y limitadas por la presencia de un conjunto de autoridades que, al igual que el virrey, sostenían su legitimidad en un vínculo directo y personal con el rey, en lo que podría ser considerado la forma pura e inicial del vínculo clientelar colonial.

En el caso específico de los virreyes, una vez llegados al territorio colonial repetían conductas de patronazgo propias a la figura del monarca y construían redes clientelares con grupos y autoridades locales, como una forma de asegurar lealtades y fortalecer su autoridad. Siendo la autoridad nominal más importante en su virreinato, en su calidad de representante del rey, se percibían a sí mismos como la fuente principal de poder clientelar en el Nuevo Mundo, y como tal otorgaban mercedes y colocaban en puestos claves y de prestigio en la administración colonial a gente de su entera confianza y cercana a ellos. De acuerdo a eso, mercedes y nombramientos en puestos públicos fueron las formas más comunes del sistema de patronazgo colonial. Ese mecanismo era controlado y ejercido por los

propios virreyes, y recreaban en sí mismos la propia naturaleza de prácticas clientelares y de patronazgo propias de un Estado patrimonial.[7]

El significado de los hechos en torno al gobierno de don Fernando de Torres y Portugal, conde del Villar, como virrey del Perú entre noviembre de 1585 y mayo de 1590 debe ser estudiado y analizado en el contexto de esta dinámica política y social propia de la España de la temprana Edad Moderna, o primera modernidad. Proveniente de una familia prestigiosa, cuya estirpe data desde mediados del siglo XII, en plena campaña de Reconquista llevada a cabo por el reino de Castilla en los territorios de Andalucía, el otorgamiento que recibieran en la segunda mitad del siglo XIV del señorío del Villardompardo, perteneciente al reino de Jaén, marcó el inicio de su status privilegiado como parte de las familias y grupos de poder que formaban parte de las redes políticas clientelares y de patronazgo en torno a los reyes de Castilla. Don Pedro Ruíz de Torres, primer señor del Villardompardo, proclamado como tal en el año de 1371, obtuvo reconocimiento por apoyar a don Enrique (futuro Enrique II de Castilla) en las disputas dinásticas con su hermano don Pedro. La merced y señorío otorgado a don Pedro claramente estipulaba el privilegio de almocatracía, "que era cierto derecho y renta sobre los tenderos, Traperos, Especieros, revendedores, esparteros, herreros, Zapateros, y todas las otras tiendas de vender pan, azeite & c. conforme las llevaban y pertenecían á los Reyes" (Martínez de Mazas 1978 [1794]: 91-92). El éxito de esta merced fue consolidado a través de alianzas y matrimonios. Hacia 1396 la familia Torres aseguró la continuidad en la posesión del señorío a través de la creación del mayorazgo del Villar Don Pardo, y en 1418 y 1457 reciben mercedes reales que añadían las villas de Escañuela y Villargordo a su señorío. Ya en el siglo XVI don Fernando de Torres y Portugal representaba el éxito y prestigio típico de un personaje señorial, partícipe de una fuerte alianza clientelar y de patronazgo con la Corona de los Habsburgo. Como tal, y en reconocimiento también a sus funciones dentro de la burocracia real, Felipe II lo nombrará en 1576 primer conde del Villardompardo (Méndez Silva 1646: f. 4-4v).

7 Puntualmente para el caso de la figura del virrey y el entorno de clientelismo y patronazgo que se construye en el mundo colonial teniéndolo como eje de acción, el trabajo de Christoph Rosenmüller (2008) *Patrons, Partisans, and Palace Intrigues. The Court Society of Colonial Mexico, 1702-1710*, ofrece un análisis fino y exhaustivo en relación al gobierno de Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, virrey de Nueva España, y cómo malas prácticas burocráticas y vínculos con los intereses locales terminan socavando la presencia y autoridad de la Corona española en dicho virreinato.

La actividad política y económica de los Torres y Portugal estuvo marcada por una presencia constante en las esferas del poder cortesano castellano, pero al mismo tiempo por una presencia constante en la administración y usufructo de los derechos señoriales otorgados en el Villardompardo. El propio Fernando de Torres y Portugal, una vez asumido el señorío del Villardompardo en 1524, de inmediato retomó y participó en largas y tediosas disputas con grupos urbanos y económicos rurales que cuestionaban las jurisdicciones y prerrogativas en manos del señorío, y frente a los cuales don Fernando llevó a cabo una fuerte y cerrada defensa. De forma continua, don Fernando llevó a cabo litigios en la Chancillería de Granada contra los gremios oficiales y menestrales de la ciudad de Jaén por jurisdicciones de sol y viento, inicialmente exitosas (1541, 1549), pero posteriormente sin éxito (1564, 1568, 1572, 1582, 1584, 1586 y 1592) (Molina Martínez 1983: 46-53). Lo que estaba en juego no solo eran mercedes y beneficios económicos, sino también el propio concepto de orden poder y autoridad tradicional que los señores no estaban dispuestos a dejar ir fácilmente. El señorío de los Torres y Portugal no era el único que para ella época empezaba a sentir los vientos de cambio político y nuevas dinámicas de poder:

> El deseo de los grupos nobles de introducir en la economía de la segunda mitad del siglo XVI elementos típicamente medievales revela con claridad la coexistencia de una clase social que aún vive y piensa bajo esquemas señoriales y unas formas económicas que van rompiendo con el pasado para adaptarse a la nueva realidad nacional. Si bien es cierto que un sector de la nobleza supo asimilar el cambio, incluso participar en él –es el caso de aquellos que abrazaron el gran comercio a raíz de la empresa americana– también lo es que otro sector pretendió beneficiarse de los nuevos tiempos aumentando las imposiciones sobre las actividades que florecían al abrigo de una situación general en alza […]. (Molina Martínez 1983: 48)

Al mismo tiempo que daba batalla por la continuidad y respeto de sus mercedes, fueros y jurisdicciones señoriales que databan del siglo XIV (1371), sin éxito desde la década de 1560, el señor del Villardompardo, futuro conde del Villar y virrey del Perú, empezó una carrera como burócrata de la Corona de Castilla, ocupando puestos políticos y administrativos como representante del rey. Era clara la actitud de la Corona por recuperar y consolidar su poder político sobre grupos de poder (nobleza pero también cabildos y otros fueros civiles), sobre los cuales había tenido una política laxa los siglos anteriores, en el contexto de la Guerra de Reconquista. El

nombramiento de asistentes (corregidores) en las ciudades más importantes de Castilla justamente respondía a esa nueva actitud de la Corona, en la medida que imponía la presencia monárquica en temas administrativos, de justicia y de gobierno normalmente manejados por los cabildos (Kamen 1991: 23-26). Fernando de Torres y Portugal empezó su carrera burocrática en 1565, siendo nombrado corregidor de Salamanca, para muchos años después ser nombrado asistente de la ciudad de Sevilla, un puesto administrativo de notable importancia de la época, dado el rol de la ciudad dentro de la estructura económica y de poder establecida en relación a los dominios americanos (Domínguez de Ortiz 1946: 207). Además, en el particular caso de Sevilla, el asistente ostentaba una doble función, no solo como representante de la Corona, sino también como autoridad máxima del cabildo. Sus funciones involucraban aspectos de gobierno, judiciales y legislativos, y como tal era necesario para el cargo alguien de confianza y ajeno a la ciudad (sin conexiones allí):

> [el Asistente] era Presidente nato del cabildo y estaba obligado a visitar en unión de los Alcaldes mayores, la tierra de la ciudad; tenía facultad para nombrar Teniente, el cual no podía asistir más de una vez en un pleito o negocio. Conservaba en su poder una de las llaves del arca de la Cuadra, donde estaban los votos de los Alcaldes Mayores. (Montoto 2001: 39)

El puesto era polémico y producía mucha oposición entre los grupos de poder y autoridades de la ciudad de Sevilla. De hecho la Revuelta de los Comuneros de 1520 incluía entre sus protestas la existencia de asistentes en las ciudades, debido a su accionar que limitaba el poder de las autoridades locales, y el alto sueldo que se les pagaba con dinero proveniente de las arcas de la ciudad (Kamen 1991: 26). El nombramiento de Fernando de Torres y Portugal como asistente en Sevilla era resultado de una carrera burocrática exitosa por méritos propios, pero también por su vínculo clientelar con figuras poderosas como el cardenal Diego de Espinosa (presidente del Consejo de Castilla entre 1565-1572) y Mateo Vázquez de Leca (secretario de Diego de Espinoza y posteriormente secretario real de Felipe II desde 1573) (Hampe Martínez 1992: 19).

La experiencia como asistente de Salamanca y posteriormente Sevilla (1578-1583) resultó muy beneficiosa para Torres y Portugal. Aprendió la administración de asuntos económicos asociados al cobro de impuestos como el almojarifazgo; el control de revueltas internas (puntualmente los moriscos de la ciudad); el manejo de plagas y epidemias; la organización

militar en torno a la movilización de tropas de apoyo al rey de Portugal. Al mismo tiempo lo expuso a las dificultades y enfrentamientos directos con instituciones como el cabildo, la inquisición y la Real Audiencia de Sevilla. La disputa con la audiencia fue especialmente tortuosa, ya que Torres y Portugal se sentía impotente frente al hecho de no tener ninguna autoridad ni jurisdicción sobre la audiencia, y por lo tanto hallarse constantemente subordinado a ella en sus funciones de justicia. Su frustración fue clara, así como su empeño de imponer su presencia como autoridad, en beneficio del poder real: "nuestro Señor ha sido servido y Su Magestad y los regidores de la dicha ciudad [Sevilla] recibido beneficio, no obstante la poca ayuda que a tenido de la Audiencia".[8] Por otro lado, el conflicto con el cabildo de Sevilla también resultó considerable, ya que el cabildo percibía que sus fueros habían sido reducidos en favor del asistente, quien veía así reforzada su autoridad como representante directo del rey (Morales Padrón 1989: 212).

La experiencia y buen desempeño de Torres y Portugal como asistente en Sevilla fue un factor importante para su nombramiento como virrey del Perú. Las semejanzas en las funciones de asistente en la península ibérica y de virrey en el Nuevo Mundo parecían justificar el hecho común de muchos asistentes siendo luego nombrados virreyes tanto de Perú como Nueva España en los siglos XVI y XVII. En ambos casos se trata de personajes pertenecientes a la gran nobleza española, es decir, herederos del poder tradicional señorial ahora asimilados al orden clientelar y de patronazgo en función a la autoridad del rey. Además, su función como autoridades se sustentaba en una relación personal y directa con el monarca, cuyo poder y prerrogativas ellos representaban.[9]

Fernando de Torres y Portugal, conde del Villar y señor del Villardompardo fue nombrado virrey del Perú por Felipe II el 31 de marzo de 1584, luego de meses de negociaciones y coordinaciones entre el rey el Consejo de Indias. El rey específicamente propuso y apoyó desde un inicio la candidatura del conde del Villar para el cargo, destacando su excelente desempeño como asistente en Sevilla, y pese a la insistente oposición del

8 BNM, Manuscrito 9372, f. 160.

9 Hampe Martínez 1992: 16. El autor menciona los casos de numerosos asistentes de Sevilla que luego se convirtieron virreyes de Nueva España y el Perú: Lorenzo Suárez de Mendoza, conde de Coruña, virrey de México (1580-1583); Juan de Mendoza y Luna, III marqués de Montesclaros, virrey de Nueva España (1603-1607) y del Perú (1607-1615); Diego Pimentel, marqués de Gelves, virrey de Nueva España (1621-1625); García Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra, virrey de Nueva España (1642-1647) y del Perú (1648-1655).

Consejo de Indias, aduciendo su avanzada edad, inicia los contactos para su nombramiento. Sin embargo, por un tema de premura en la ocupación del cargo, el conde del Villar no acepta, y es nombrado en su lugar Lorenzo Suárez de Mendoza, a la sazón virrey de Nueva España. La muerte abrupta de Suárez de Mendoza abre nuevamente la posibilidad de la candidatura de Torres y Portugal, y su nombramiento se oficializa (Levillier 1921-1926, vol. 10: 14-32).

Muy rápidamente se proceden con los trámites de rigor, emisión de títulos, aprobación de decretos reales, envío de certificados reales a las provincias que componían el virreinato del Perú, así como el envío al recién nombrado virrey de una lista de cincuenta instrucciones sobre cómo gobernar el Perú. El rey fue muy explícito en mencionar la necesidad de tener especial cuidado con las autoridades civiles y religiosas instaladas en el Perú, las cuales constantemente buscan interferir en temas que solo atañen al gobierno del rey. Felipe II va más allá e instruye al conde del Villar que de ser necesario castigue a dichas autoridades, sin importar la autoridad que representan, ya que su intromisión en asuntos del rey no puede ser tolerado (Levillier 1921-1926, Vol. 10: 14-32). Del mismo modo, el monarca pone sobre aviso al virrey en cuanto a la presencia de familiares y gente cercana a su entorno que pudieran acompañarle en su viaje al Perú:

> Y la misma advertencia y aviso haveys de tener en no dar a vuestros parientes allegados ni criados cossa alguna de los aprovechamientos officios ni salarios ni entretenimientos de la tierra porque por experiencia se ha visto los inconvenientes que de lo contrario an resultado de mas de ser contra lo que por mi esta proveydo. (Levillier 1921-1926, Vol. 10: 30)

Este mensaje claro por parte del rey obtiene inmediata respuesta por parte del conde del Villar, quien no solo menciona que viajará al Perú sin su esposa, pero que pide se le autorice llevar consigo al Perú a su hijo Jerónimo de Torres y Portugal, de 18 años, "por no yr tan solo, y sin persona a quien volver los ojos en lo que se me podría offreser".[10] Asimismo, y como un acto quizás común en la época, pero quizás también representativo de cómo lo político y público también involucraba aspectos más personales y privados, Torres y Portugal solicita al rey le de autorización para hospedarse en los Reales Alcázares de Sevilla, a lo que Felipe II accede.[11]

10 AGI, Indiferente, 740, N. 271, L. 2, f. 1.

11 AGI, Indiferente, 740, N. 271, L. 2, f. 1.

El 21 de noviembre de 1585 Fernando de Torres y Portugal entra en Lima bajo palio, en su calidad de virrey del Perú. Le acompañan no solo su hijo Jerónimo, sino también su sobrino Diego de Portugal, además de 62 personas, entre familiares y paisanos que formaban su corte. En total 64 personas sin contar al virrey, de las cuales 41 de ellos (64 %) eran andaluces, y puntualmente 28 (44 %) de Jaén.[12]

De inmediato, su actitud fue la de asumir el control en la administración del territorio virreinal a su cargo, sin admitir otra competencia que la suya. En una carta dirigía al rey el 5 de mayo de 1586, seis meses después de su arribo a Lima, el virrey conde del Villar critica abiertamente a los oidores y las visitas de inspección que llevan a cabo, cuestiona el desempeño de los corregidores nombrados a esa fecha, en especial a los de Potosí y Cuzco, e inclusive menciona que las personas que le han acompañado a Lima como parte de su corte podrían hacer un mejor trabajo en esos cargos: " y aunque alguno de mis criados y personas que vinieron conmigo tengo satisfacción que se les pudieran confiar corregimientos, no proveeré a ninguno de ellos. Guardaré puntualmente acerca de esto lo que S.M. me tiene mandado" (Hanke 1978-1980: 193).

A lo largo de 1586 Torres y Portugal, en su calidad de virrey del Perú, actuó en lo que él consideraba fundamental para el funcionamiento ordenado del gobierno del virreinato. Interviene el cabildo de Lima posponiendo por un año la elección de alcaldes ordinarios y juez de agua, nombrando en su lugar a Francisco de Quiñónez como corregidor de la ciudad. Esta medida desató una ola de protestas entre los vecinos, por lo que implicaba en cuanto a la vulneración de sus fueros y jurisdicciones, y por la imposición de una autoridad, el corregidor, nunca antes presente en la ciudad (Libros de Cabildos de Lima 1942, vol. 10: 274). En la segunda mitad del año lleva a cabo reformas a nivel de los corregimientos, unificando y reduciendo su número, y disminuyendo sus sueldos en mil pesos (Levillier 1921-1926, vol. 10: 225). En cuanto a su relación con las audiencias, hizo un análisis exhaustivo de los nombramientos hechos por la Audiencia de Lima durante los años de vacancia de virrey, cancelando muchos de ellos; inició una investigación en contra del licenciado Cañaveral, presidente de la Audiencia de Quito; y deslegitimó las funciones de la Audiencia de

12 AGI, Contratación, 725, N. 32, ff. 10-13; Contratación, 5229, R. 1-43; y Contratación, 5229, N. 6, R. 22.

Charcas en relación a la administración de los asuntos relativos a Potosí (Hanke 1978-1980: 193-195).

Paralelo a este accionar, el nuevo virrey construye su red patrimonial y ya para inicios de 1586 ha nombrado a miembros de su corte y entorno personal en puestos cercanos a la autoridad y accionar del virrey. Jerónimo de Torres y Portugal, su hijo de 18 años, ostentaba en 1586 los cargos de general de Infantería, capitán de Caballería de Lima y Callao, teniente de capitán general de Mar y Tierra, y veedor real del envío de plata a Tierra Firme (Levillier 1921-1926, vol. 10: 105, 139, 205). Diego de Portugal, su sobrino de 26 años, fue nombrado capitán de la Guardia Personal del virrey y miembro de la Compañía de Lanzas.[13] Juan Bello, su asistente personal desde sus épocas en Sevilla, de 26 años, recibe el puesto de Secretario de Gobierno y miembro de la Compañía de Lanzas.[14] Estos tres personajes representan el núcleo cercano al virrey, pero no son los únicos en recibir puestos y mercedes. En los meses y años siguientes a su llegada a Lima, el conde del Villar lleva a cabo una política de otorgar beneficios a los miembros de su corte, con pleno conocimiento del propio rey (Encinas 1945 [1596], vol. 4: 4).

Además de estos lazos de clientelismo y patronazgo con el grupo de personas que llegaron con él al Perú, el virrey conde del Villar desarrolló relaciones patrón-clientes con familias locales, otorgando puestos oficiales y mercedes a personas allegadas a los oidores, funcionarios de la audiencia e inclusive del propio arzobispo de Lima Toribio de Mogrovejo. Los roces iniciales debido a la acción impetuosa del virrey en relación a las autoridades que formaban parte de la estructura colonial del poder parecían de alguna manera haber quedado en el pasado. De hecho el conde del Villar contaba con un grupo de personalidades importantes del entorno local limeño muy cerca suyo, tal es el caso de Francisco de Quiñónez, prestigioso oficial del ejército y futuro corregidor de Lima; el doctor Alberto Acuña, abogado de la Audiencia de Lima; el doctor Pedro Muñiz, archidiácono de la Catedral del Cuzco; el doctor Pedro Esteban Marañón, juez de la división criminal de la Audiencia de Lima; y fray Pedro de Molina, prestigioso sacerdote de la orden de San Francisco.[15]

13 AGI, Justicia, 481, L. 1, pieza 1, ff. 2064v, 10553v-10556.

14 AGI, Justicia, 481, L. 1, pieza 1, ff.10553v-10556.

15 AGI, Justicia, 480, L. 1, ff. 126-562; AGI, Justicia, 481, L. 1, ff. 20602-20612; AGI, Justicia, 485, L. 6, ff. 1-30v. Entre los ejemplos más resaltantes se tiene a Francisco Quiñónez, cuñado del arzobispo de Lima Toribio de Morgovejo, nombrado corregidor

Este aparente manejo eficiente y tradicional de construir círculos clientelares en donde participan personas tanto de su entorno como de las familias poderosas locales, y que le permitió sortear con relativo éxito las diversas crisis administrativas ocurridas durante su gobierno, como la incursión de piratas en las costas peruanas entre 1586-1587, la reconstrucción de la ciudad de Lima tras el terremoto del 9 de julio de 1586, y la severa epidemia de viruela y sarampión de 1589, no estuvo sin embargo libre de situaciones de conflicto. A las constantes quejas por las malas formas públicas del virrey, tanto en los momentos de dar audiencia en corte a los diferentes solicitantes, así como su accionar insultante en la dinámica de protocolo, especialmente en relación a miembros de la audiencia de Lima, siguió muy rápidamente un conflicto serio con el Tribunal de la Santa Inquisición en Lima.

Constituida como una de las instituciones más poderosas del orden monárquico español en la península ibérica y en América debido a jurisdicción plena en relación a temas religiosos, y su pertenencia burocrática como uno de los brazos del poder monárquico, la Inquisición representó desde su establecimiento en el Perú en 1569 y México en 1570 un elemento de conflicto en su relación con el resto de las instituciones y autoridades que formaban la estructura de poder colonial, inclusive la figura del virrey.[16] En el caso particular de Lima, debido a la gran distancia con Madrid, contaba con gran libertad de acción independiente en procedimientos administrativos y judiciales, inmunidad a procesamientos fiscales reales y civiles, así como beneficios tales como el derecho a portar armas, exención en el pago de ciertos impuestos, entre otros. Como grupo, los miembros de la Inquisición se constituyeron como una autoridad poderosa y amenazante, y a partir de ello lograron tomar ventajas tanto en temas económicos como de impunidad legal (Escandell y Bonet 1980: 450).

A la llegada del virrey conde del Villar al Perú en 1585, la Inquisición en Lima estaba bastante bien consolidada en torno a la figura del licenciado Antonio Gutiérrez de Ulloa, inquisidor de Lima, presente en

de Lima; Diego Bravo, cuñado del más antiguo oidor de Lima Cristóbal Ramírez de Cartagena, nombrado corregidor de Porco; María Contreras, suegra del oidor de Charcas, licenciado Jerónimo de Calderón, recibió indios para su servicio personal.

16 AGI, Lima, 29, f. s/n. El virrey Toledo envía una carta a Felipe II en 1573, en donde anuncia que ha puesto de su parte para que la Inquisición se establezca y funcione en el Perú, pero teme que su presencia genere conflictos graves con otras autoridades, los mismos que solo podrían ser evitados si el rey toma cuidado y evita que se inmiscuya en asuntos fuera de su competencia.

el puesto de la ciudad desde 1571, casi desde la llegada misma de esta institución al Perú. El punto de partida del conflicto y rivalidad entre el virrey y la inquisición se remonta a mayo de 1586, seis meses después de la llegada del virrey al Perú, y se da en torno a temas más bien cercanos a la práctica clientelar y de patronazgo. Como parte de su política de reorganizar el funcionamiento del virreinato, Torres y Portugal pone especial atención al tema fiscal, puntualmente al estado de producción de las minas de mercurio de Huancavelica. El virrey escribe una carta a Felipe II el 25 de mayo de 1586 indicando la situación conflictiva en Huancavelica, en donde la Corona ha otorgado licencia de explotación a un particular llamado Amador de Cabrera, quien ha entrado en conflicto con un grupo de inversionistas cercanos a él, con el consiguiente peligro de retrasar la producción de mercurio. El virrey sugiere al rey que recupere el control directo sobre Huancavelica, en especial sobre su mina más importante llamada La Descubridora, que estaba en manos de Cabrera, para así poner fin a la crisis. Torres y Portugal descubre en el proceso de acciones que el yerno de Amador de Cabrera es Juan Gutiérrez de Ulloa, Alguacil Mayor de la Inquisición de Huancavelica y hermano del Inquisidor de Lima Juan Gutiérrez de Ulloa. La posibilidad de conflicto era demasiado evidente como para no ser percibida, y el conde del Villar lo indica:

> […] como de cosa que toca al Inquisidor yo lo entiendo hazer con cuidado y espero acabarlo mediante nuestro señor y aunque el fiscal ha scripto a V. magd. Según he visto por una copia de sus cartas que me ha mostrado que se podrá hazer sin costar nada a V. magd. Es imposible y dielo porque tomando la dicha mina de los dichos mineros se contentaran con que se les presten dineros para pagar al dicho amador de Cabrera lo que le deven […].[17]

El escenario resultaba claro. El virrey buscaba imponer su criterio y autoridad sobre el tema, y Amador de Cabrera, a través de Gutiérrez de Ulloa y la fuerza de la Inquisición, buscaba llegada y comunicación directa con el rey, con el fin de desvirtuar las afirmaciones del virrey. El conde del Villar no se amilana, por el contrario, pone en evidencia al inquisidor Antonio Gutiérrez de Ulloa, indicándole al rey sobre las graves acusaciones que caen sobre el inquisidor, todas relativas cómo interfiere a asuntos fuera de su jurisdicción, actuando de forma amenazante y tomando ventaja de su condición de sacerdote y autoridad inquisitorial (Levillier 1921-1926, vol.

17 AGI, Patronato, 239, R. 24, f. 3.

11: 6). Estas acusaciones ya habían llegado a oídos del rey, quien finalmente decide nombrar hacia finales de 1586 al licenciado Juan Ruiz de Prado como visitador de la Inquisición de Lima.

En esa misma dirección, ante la inminente posibilidad de una crisis política generada por el enfrentamiento entre virrey e inquisidor, el 20 de enero de 1587 Felipe II llama al orden a la inquisición:

> […] y no es justo que inquietéis por causas de poca importancia a los que me están sirviendo […] os encargo que advirtáis y considereys mucho vuestras determinaciones como lo requiere vuestro ministerio y guarde yo precisamente la dicha concordia porque asi conviene al bueno y recto exerçiçio de vuestros oficios y administración de justicia.[18]

Ruiz de Prado llega a Lima en febrero de 1587 y de inmediato asume sus funciones no solo como visitador de la inquisición, sino como un inquisidor más. Es así que a las tensiones entre el virrey y el inquisidor Gutiérrez Ulloa se sumaron los conflictos entre el virrey y el inquisidor visitador Ruiz de Prado. Más allá de toda rivalidad que pudiera existir entre Gutiérrez de Ulloa y Ruiz de Prado, éste último hizo cuerpo con su institución, defendiendo su honor, prestigio y prerrogativas frente a las intenciones del virrey (Medina 1956 [1887]: 241-261).

Resulta interesante ver que gran parte de los conflictos no solo se sucedieron de forma rápida, sino que se hicieron visibles en torno a temas jurisdiccionales así como en relación a cuestiones de protocolo y ceremonial. A lo largo de todo el año de 1587 a los conflictos de preeminencia en temas relativos a prerrogativas y jurisdicciones sobre prisioneros ingleses capturados en Paita, el desacato por parte de la Inquisición de respetar las órdenes del virrey en torno a la movilización militar de la población para la defensa del Callao ante la amenaza de piratas, se van sumando no solo venganzas en relación a la cancelación por parte del virrey de nombramientos a la compañía de lanzas a familiares de la Inquisición, o persecuciones contra sacerdotes vinculados a la inquisición y al propio Ruiz de Prado, sino también aquellos de tipo ceremonial y de protocolo.[19] El 30 de noviembre de 1587, en el auto de fe de San Andrés, el inquisidor y visitador Ruíz de Prada decide no darle al virrey el lugar de preeminencia que hasta ese

18 AGI, Lima, L. 15, N. 1, f. 6v.

19 AHN, Inquisición, 1652, Exp. 15, L. 1, ff. 3-6v; AGI Escribanía, 499A, ff. 14v y siguientes.

momento su figura había tenido en los autos de fe anteriores, en la medida que, según el inquisidor, violaba el protocolo establecido en la península. El virrey, reunido en Acuerdo Real, y con apoyo de sus colaboradores, decide ir a la ceremonia, pero de forma individual, sin corte, como forma de hacer pública y visible su molestia frente a la Inquisición.[20]

La disputa con la Inquisición pone al virrey conde del Villar en una posición delicada. Los enfrentamientos directos no solo involucraban a ambas autoridades, sino también al entorno clientelar que cada una de ellas había construido en torno a sí mismas y en relación a una con la otra. Tanto el virrey como el inquisidor hicieron uso de sus armas, y en al caso de Ruíz de Prado un recurso al que apeló cada vez con más frecuencia hacia fines de 1587 fue el de la excomunión, comunicándoselo inclusive a Felipe II en una carta fechada 2 de noviembre de 1587, en la que indica que "y si en esto con lo demás y el cuidado que ponen el [virrey] y los de su casa en desautorizar las cosas que tocan a este Santo Oficio […] es impedir el rrecto y libre exerciçio del, directo o indirecto Vuestra Señoria lo vera que aquí por descomulgado lo tenemos llanamente y esto esta bien claro".[21]

El conflicto entre la inquisición y el virrey, lejos de haberse resuelto con la llegada de Ruiz de Prada, se había vuelto inmanejable hacia inicios de 1588. La autoridad del virrey se había visto dañada severamente frente a las amenazas de excomunión, y empezaba a cuestionarse aspectos propios de su desempeño como autoridad y el otorgamiento de mercedes y puestos reales, allí donde antes no se había dado ninguna crítica. Lo que hasta entonces se percibía como prácticas clientelares propias a su condición de virrey, ahora aparecían como actos ilegítimos y sujetos a denuncia. El detonante se da en marzo de 1588, cuando se hacen públicas unas acusaciones anónimas bajo la forma de un libelo colocado en una de las esquinas de la Plaza Mayor de Lima, en donde se acusaba a los miembros más cercanos de su entorno, su hijo Jerónimo de Torres y Portugal, su sobrino Diego de Portugal, y a su secretario Juan Bello, de haber construido una red en el otorgamiento de favores y mercedes a cambio de dádivas. El libelo iba a acompañado de una carta dirigida al virrey, con tantos detalles que éste de inmediato nombró al licenciado Esteban Marañón, miembro de la Au-

20 AHN, Inquisición, 1652, Exp. 15, L. 1, f. 1-1v. y AGI Escibanía, 499A 1 documento de 1587, sin fecha específica, ff. 56v-60.

21 AHN, Inquisición, 1652, Exp. 15, L. 1, f. 3v.

diencia de Lima, para que lleve a cabo las investigaciones del caso.[22] El propio virrey, el 15 de abril de 1588 dirige una carta a Felipe II anunciándole los hechos:

> Es tanta la disolución que en esta materia tan perniciosa halle en esta tierra de dar dadivas los pretensores a los que les parece o imaginan que son alguna parte para aiudarle a conseguir sus pretensiones que aunque entre en este Reyno dicieno en publico y en secreto y haciendo a mi confesor que predicase en los pulpitos que nadie lo había de ser conmigo sino la Justicia y Raçon y que no me tratasen de intercesiones que no las quería oyr sino veer sus papeles y dara a cada uno lo que conforme a ellos fuese suio y que entendiesen que hijo ni criado ni ministro mio me había de tratar de negocios ni yo se lo avia de consentir […] y que elligi criados y ministros d quien se podía tener gran satisfacion me los an conquistado de manera de que a no tener ellos mucha entereça los ubieran pervertido a todos y al fin lo hicieron a uno de quien nunca yo creyera que tal lo avia de suceder que fue juan bello. (Levillier 1921-1926, vol. 11: 79)

Las acusaciones contra Bello se remontaban hasta 1586, e involucraban a personas notables como Juan Vargas, yerno del licenciado Juan Baptista de Monzón, oidor de Lima, así como Diego de Salinas. El virrey actuó de inmediato, tomando preso a Juan Bello y nombrando una comisión investigadora de diez personas (cinco de las cuales eran parientes o muy allegado al virrey), presidida por el licenciado Marañón. Sin embargo, el daño estaba hecho y la legitimidad de la autoridad del virrey estaba en cuestionamiento, y sus actos puestos en duda. La inquisición no deja pasar la oportunidad, y pese a que el conde del Villar envía una carta conciliadora a Ruiz de Prado el 4 de abril de 1588, la respuesta del inquisidor es recriminatoria, indicando que frente a los rumores de excomunión que se escuchaban en relación al virrey, éste no debería sentirse ofendido "antes me lo avia de agradecer el dicho señor vissorrey pues por este camino ha venido a su noticia y a llegado a entender el peligro a que se ponen las personas que tratan de semejantes cosas sin que ninguna se eçeptue de lo sussodicho".[23]

Mientras virrey e inquisición continuaban con sus disputas, el licenciado Marañón, como parte de su investigación, había interrogado a setenta testigos, entre miembros de la audiencia de Lima, cabildo, oficiales, comerciantes, vecinos de Lima, Arequipa, Huamanga y La Plata. El re-

22 AGI, Contratación, 725, N. 32, ff. 10-13.

23 AGI, Escribanía, 499A, ff. 117-118.

sultado al que llega hacia el 22 de abril de 1588 señala claramente que la responsabilidad recae en Juan Bello, Secretario de la Corte, cabeza de esa red de cohechos y prebendas que funcionaba a nivel de todo el virreinato, secundado por Pedro Fajardo, contador miembro de la corte del virrey conde del Villar. Don Jerónimo y don Diego son declarados inocentes de toda responsabilidad.[24] Más allá de ese resultado, que claramente encubría lo que más adelante se llegaría a saber a través de la visita que Felipe II mandaría realizar a la Audiencia de Lima y del virrey conde del Villar en octubre de 1588, lo interesante de la investigación del licenciado Marañón es los detalles sobre cómo se llevaban las prebendas, el tipo de pago que se recibía (dinero, caballos), cómo se disfrazaba el intercambio de mercedes por beneficios económicos a través de préstamos de pago a muy largo plazo, para ser usados en negocios en Tierra Firme y España.

Lo que vino luego fueron una serie de hechos de conflicto y mutuas acusaciones de liderar redes de prebenda y cohecho, que tuvo como puntos álgidos el secuestro llevado a cabo por la inquisición de Juan Bello, quien se encontraba bajo prisión en las cárceles reales. Aduciendo la existencia de una causa previa contra Bello en el Santo Oficio en relación a acusaciones que lo tildaban como judío, y teniendo como intención real obtener información de primera mano sobre hasta qué punto la red de cohechos solo involucraba a Bello, o si también eran parte de ellas don Jerónimo y don Diego, la Inquisición pone a Bello bajo su jurisdicción e inicia un interrogatorio que resultó infructuoso. Mientras tanto el virrey lleva a cabo investigaciones que ponen al descubierto redes de prebenda en las que la participación de Antonio Gutiérrez de Ulloa y su hermano el inquisidor Manuel Gutiérrez de Ulloa eran notorias y principales, en torno a la creación de una sociedad que diera dinero al rey para la obtención de la adjudicación de minas en el enclave de Huancavelica. En dicha red se encontraban grandes personalidades limeñas, como Gaspar Solís, tesorero de la Real Casa de la Moneda de Lima; Juan Martínez Rengifo, abogado de la Audiencia de Lima y yerno del oidor Ramírez de Cartagena; Diego Gil de Ave, depositario general y regidor del cabildo de Lima; y Diego Núñez de Figueroa, regidor del cabildo de Lima.[25]

Redes clientelares y de patronazgo quedaban al descubierto en ambos lados enfrentados, y aún había más. Los documentos y acusaciones hablan

24 AGI, Justicia, 481, L. 1, ff. 10436-10527.

25 AGI, Lima, 129, f. 5.

de cohechos, prebendas, disolución, materia tan perniciosa, intercesiones, no tener entereza, ser pervertido. Prácticas conocidas por todos, en las que todos participaban, de un momento a otro se habían vuelto razón de escándalo y delito.

El virrey conde del Villar ordena la prisión y tortura de Diego de Salinas el 31 de enero de 1589, criollo, abogado y familiar de la inquisición. Desde las primeras investigaciones contra Bello se había obtenido información que Salinas era parte de la red de prebendas en calidad de socio de Bello. Ante la presión de la inquisición el virrey ordena la excarcelación de Salinas el 3 de febrero, después de lo cual Salinas permanece en libertad y como persona muy cercana a Ruiz de Prado, hasta 1594, cuando el inquisidor visitador abandona Lima y el inquisidor Gutiérrez de Ulloa lo retira del cargo de abogado.[26]

En medio de la crisis política que lo enfrentaba a la inquisición, y puesta de manifiesto la red clientelar asociada a su gobierno, el 9 de abril de 1589, el conde del Villar comunica a Felipe II la concesión de media encomienda en Huarina (Cuzco) por dos generaciones a Francisco de Torres y Portugal, su nieto, hijo ilegítimo de su hijo Diego de Carvajal, que murió luchando por el rey en las Guerras de Flandes (Levillier 1921-1926, vol. 11: 277). Parecía un acto natural, que no envolvía ninguna intención equivocada ni cuestionable. No hubo respuesta del rey.

La Inquisición reacciona contra los actos cometidos contra Salinas, convoca a una comisión investigadora a fin de hallar a los culpables del delito de tortura. La primera persona en ser condenada es el licenciado Valdelomar, lugarteniente de corregidor directamente responsable por la tortura, sentenciado a vivir 20 años en destierro a veinte leguas de Lima. El siguiente en ser hallado responsable es el virrey conde del Villar, a quien se le excomulga en octubre de 1589. Pese a que pocos días más tarde, y gracias a la intervención de fray Pedro de Molina, franciscano, la Inquisición accede a levantar la excomunión (Holguín Callo 2002: 124-125). Cuestionado, deshonrado y excomulgado por la Inquisición, comprometido en una red de prebendas asociados a miembros de su casa, difamado públicamente por Diego de Salinas y otras personas notables de la ciudad, hacia fines de 1589 la autoridad y legitimidad de Fernando de Torres y Portugal, conde del Villar, virrey del Perú y señor del Villardompardo había sido golpeada severamente. Junto a ella, las redes clientelares y de patronazgo de ambos

26 AGI, Escribanía, 567A, f. 3.

bandos, virrey e inquisición habían quedado expuestas, pero el destino de ambas no sería el mismo.

La excomunión del virrey conde del Villar fue la primera dada a un virrey en América. En el futuro, solo habría una ocasión más en que una situación similar volvería a darse, cuando Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, Marqués de Gelves, antiguo asistente de Sevilla, y virrey de Nueva España entre 1621-1625, resultara excomulgado por el arzobispo de la Ciudad de México en enero de 1624.[27]

Era evidente que la situación en el Perú se había escapado de control, y se tenía un escenario en donde las principales autoridades coloniales se encontraban abiertamente enfrentadas y sus redes clientelares expuestas. Un año antes a la excomunión del virrey conde del Villar, el 18 de octubre de 1588, Felipe II nombra al licenciado Alonso Fernández de Bonilla, letrado en cánones y leyes en Salamanca, abogado, sacerdote e inquisidor permanente de la Ciudad de México como visitador de la audiencia de Lima y del virrey conde del Villar.[28] Menos de un mes después, hacia el 10 de noviembre de 1588 Felipe II escribe una carta al conde del Villar anunciándole que acepta el pedido que éste le había hecho reiteradamente de ser relavado de su cargo como virrey, ya que "habiendo visto lo que muchas vezes me haveys escripto cerca de la continuación de vuestras yndisposiçiones y el aprieto en que atenúan y el riesgo que podía tener en vuestra salud [...] y porque mediante lo referido he proveydo vuestro lugar a don Garçia de Mendoça, llegado que sea a esos reynos os esforçareys para venir a estos a descansar".[29]

El conde del Villar recién esta noticia en julio de 1589, poco antes de su excomunión, y anuncia que esperará al nuevo virrey, luego de lo cual regresará a España. Cuando el 6 de enero de 1590 el nuevo virrey entra a Lima, el conde del Villar y su hijo Jerónimo forman parte de la corte de entrada, ocupando un lugar principal. El 2 de mayo de 1590 el conde del Villar parte del Callao, junto con su hijo Jerónimo y sirvientes de su entorno. El licenciado Bonilla, su visitador, llega al Callao el 2 de agosto de 1590, tres meses luego de la partida del conde del Villar a España. El

27 Sobre el particular, revisar el trabajo clásico de Richard Everett Boyer (1982) "Absolutism vs Corporatism in New Spain: the administration of the marques of Gelves, 1621-1624"; así como la más reciente tesis de Gibrán Irving Israel Bautista y Lugo (2014) Castigar o perdonar El gobierno de Felipe IV ante la rebelión de 1624 en México.

28 AGI, Justicia, 480, L. 1, f. s/n.

29 AGI, Lima, 570, L. 15, N. 1, f. 18v.

proceso interrogatorio a testigos y recolección de documentos a lo largo de todo el virreinato fue del 2 de noviembre de 1590 al 17 de agosto de 1592. Abarca temas administrativos y fiscales, así como aspectos del comportamiento personal del virrey y de su entorno cercano, y las relaciones con otros poderes políticos y personalidades locales en general. Las pesquisas ponen al descubierto lo siguiente:

a) La compleja red patronazgo construida por el virrey conde del Villar, en sus diferentes niveles y campos de acción, favoreciendo constantemente a un grupo bien identificado de personajes: Francisco de Quiñones, doctor Alberto de Acuña, doctor Pedro Muñiz, doctor Esteban Marañón, fray Pedro de Molina.[30]
   Dentro del grupo de favorecidos se contaban a los propios miembros de la Audiencia de Lima, cuyos familiares recibieron del conde del Villar provisiones tales como corregimientos y puestos públicos (justicias mayor).[31]
b) El manejo personal, autoritario y señorial del conde del Villar: manda a prisión a oficiales públicos como el caso del tesorero real, Antonio Dávalos, debido a un intercambio de palabras, o Francisco Manrique, Factor real, quien fue maltratado y ridiculizado en público en las sesiones del Acuerdo General.[32]
   De igual manera hay quejas de malos tratos a solicitantes, levantando rumores en contra de su autoridad como virrey.[33]

30 AGI, Justicia, 480, f. 212v.

31 AGI, Justicia, 480, L. 1, f. 191-191v. testimonio dado por Juan Martínez Rengifo, en donde directamente indica al oidor Ramírez Cartagena (posteriormente muy crítico del conde del Villar) como beneficiado a través de un pariente suyo, Lic. Castañeada, quien recibió el corregimiento de Huaylas. Lo mismo en el caso del oidor Artiaga, cuyo sobrino Juan de Olazával recibió un corregimiento de indios.
AGI, Justicia, 480, f. 138v. Oidor Ramírez Cartagena no menciona lo del Lic. Castañeda, pero sí reconoce que algunos parientes suyos recibieron corregimientos en Cajamarca, Cabana, Arequipa, así como cargos como alférez mayor de Lima, etc.

32 AGI, Justicia, 480, f. 125. Testimonio dado por el Lic. Cristóbal Ramírez de Cartagena, oidor más antiguo de la Audiencia de Lima.
AGI, Justicia, 480, ff. 340v-341. Testimonio dado Tristán Sánchez, Contador Real.

33 AGI, Justicia, 480, L. 1, f. 518v. Testimonio en donde fray Juan de Vega, Guardián del Convento de San Francisco de Lima y provincial de dicha orden, narra situaciones de maltrato del virrey hacia diversos solicitantes.
AGI, Justicia, 480, L. 1, f. 443. Testimonio de Juan de Sotomayor, personaje que recibió privilegios para explotación minera de manos del conde del Villar en muchas ocasiones, indica la actitud displicente del virrey en especial a quienes iban a hacer

c) Subvertir el orden político y las dinámicas de poder, al tener como asesores a personas de su entorno, al intervenir en instituciones sin respetar las instancias y autoridades (Cabildo, Universidad), "*por convertir el* gobierno de la çibdad en sus intereses y por aver en su eleçion muchas parcialidades y pendençias".[34]

En 1593, el visitador Fernández de Bonilla declaré al conde del Villar culpable de 108 cargos, incluidas acusaciones de favoritismo y prebenda. Desafortunadamente, no he podido encontrar los descargos presentados por los representantes del virrey, quien había muerto en Sevilla el 15 de octubre de 1592. Tampoco hay evidencia directa de la actitud de la Corona en relación al virrey y a sus familiares envueltos en estas acusaciones. Solo se tiene información referencial sobre el destino de estos personajes.

Don Jerónimo de Torres y Portugal, acusado en la visita de ser responsable de recibir dinero y bienes a cambio de interceder en el otorgamiento de mercedes y beneficios reales gracias a su cercanía a su padre el virrey, no recibió ningún castigo. Por el contrario, a su regreso a España continuó una muy exitosa carrera como miembro de la Real Armada Española, siendo beneficiado con numerosas mercedes reales debido a los méritos de su padre y a los suyos propios.[35] En los años 1603, 1606, 1608, 1609, 1611 y 1613 fue general de la Armada de Tierra Firme.[36] Hacia 1613, poseedor de una enorme fortuna y de mayorazgo propio, se retiró a vivir en la ciudad de Granada, siendo considerado vecino principal. En 1615 su nombre fue considerado entre los posibles candidatos para reemplazar a don Juan de Mendoza y Luna, Marqués de Montesclaros, en el puesto de virrey del Perú (Schäfer 1947: 29).

Don Diego de Portugal, sobrino y colaborador cercano del virrey conde del Villar, acusado de colaborar en los actos de prebenda, no recibió ninguna sentencia y permaneció en el Perú como representante de los asuntos del conde del Villar en el Perú. En reconocimiento a sus labores diversas en favor de la Corona, don Diego fue nombrado corregidor de

peticiones muchas veces seguidas, o el error de rodearse a asesores que conocen poco de la realidad local y aíslan al virrey de todo contacto con la gente.

34 AGI, Justicia, 480, f. 213. Testimonio de Francisco Quiñones, quien había sido nombrado Corregidor de Lima por el conde del Villar, como resultado de la decisión del virrey de anular las elecciones para miembros del cabildo de Lima.

35 AGI, Patronato, 190, R. 43, ff. 1-4.

36 AGI, Contaduría, 2976, f. s/n.

Quito y posteriormente de Charcas, así como Alcalde Ordinario de Lima. En 1610, debido a su impecable hoja de servicios al rey, fue nombrado oidor y presidente de la Audiencia de Charcas.[37]

El gobierno de Fernando de Torres y Portugal, conde del Villar, señor del Villardompardo y caballero de la Orden de Santiago, virrey del Perú representa una oportunidad particularmente interesante para analizar los mecanismos políticos y dinámicas patrimoniales, de patronazgo y clientelares propias de un modelo colonial construido a semejanza de Castilla. Más aún, las características de la crisis de poder y legitimidad en relación a la autoridad del virrey justamente reflejan las peculiaridades de los conflictos políticos en sistemas tradicionales y patrimoniales en donde los mecanismos de poder y alianzas entre los distintos grupos de poder funcionan como sólidas estructuras de gobierno, pero al mismo tiempo frágiles en la medida que los balances no se mantienen ni reinventan. La disputa entre el virrey conde del Villar y la Inquisición y las acusaciones posteriores contra el virrey responden justamente a una ilegitimidad que no nace necesariamente de acciones que hoy en día podríamos considerar como corruptas, sino de una pérdida de legitimidad en donde los actos de la autoridad pierden todo reconocimiento y aceptación. La particular intervención de la Corona, en donde más allá de enviar un visitador y llegar a cabo investigaciones burocráticas, no termina de sancionar a ninguno de los participantes directos del conflicto, sino todo lo contrario, refleja justamente la validez de principios clientelares y de patronazgo, que estaban a la base del funcionamiento del Estado patrimonial colonial en el siglo xvi.

37 AGI, Charcas, 18, R. 7, N. 121/1, f. 1.

Bibliografía

Fuentes de archivo:

Archivo General de Indias - Sevilla (AGI)
Secciones: Contaduría 2976.
Contratación 725 y 5229.
Charcas 18.
Escribanía 499A, 500A y 567A.
Indiferente 606, 740 y 742.
Justicia 480-485.
Lima 1, 29, 32, 93, 108, 127, 129, 209, 217, 274, 318 y 570.
Pasajeros 10.
Patronato 190, 227, 239 y 258.
Quito 8, 9 y 25.

Archivo Histórico Nacional - Madrid (AHN)
Secciones: OM-Caballeros-Santiago, Exp. 8167 y 8170.
Inquisición 1035 y 1652.

Archivo Histórico Provincial de Jaén
Secciones: Legajos varios II, años 1585-1595.

Biblioteca Nacional - Madrid (BNM)
Manuscritos: 2058, 2835, 3043, 3044 y 9372.

Biblioteca Nacional - Lima
Secciones: Siglo XVI
Legajos varios

Biblioteca de la Universidad de Sevilla
Manuscrito: Tomo 4, Documento 17.

Fuentes primarias impresas:

Cartas de Cabildos Hispanoamericanos. Audiencia de Lima (1999). 5 vols. Edición, introducción e índices de Javier Ortiz de la Tabla Duchase, Mª. Jesús Álvarez, and Águeda Rivera Garrido. Sevilla/Lima: Escuela de Estudios Hispano-Americanos/Instituto Riva-Agüero.

Cartas de Cabildos Hispanoamericanos. Audiencia de Lima (2000). 2 vols. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos.

Colección de las memorias o relaciones que escribieron los virreyes del Perú acerca del estado en que dejaban las cosas generales del reino (1921). 5 vols. Madrid: sin editorial.

Encinas, Diego de (1945 [1596]): *Cedulario indiano*. Reproducción facsímil. 4 vols. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica.

Hanke, Lewis (1978-1980): *Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria. Perú*. 7 vols. Madrid: Atlas.

Jiménez de la Espada, Marco (1965 [1885]): *Relaciones Geográficas de Indias*. 3 vols. Madrid: Atlas.

Konetzke, Richard (1953): *Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica, 1493-1810*. 3 vols., 5 tomos. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Levillier, Roberto (1921-1926): *Gobernantes del Perú: Cartas y papeles del siglo XVI*. 14 vols. Madrid: Sucesores de Rivadeneyra.

Libros de Cabildos de Lima (1942). Descifrados y anotados por don Juan Bromley. 18 vols. Lima: Torres Aguirre.

Martínez de Mazas, José (1978 [1794]): *Retrato al natural de la ciudad y termino de Jaén: Su estado antiguo y moderno, con demostración de quanto necesita mejorarse su poblacion, agricultura y comercio*. Barcelona: Ediciones El Albir.

Méndez Silva, Rodrigo (1646): *Memorial de las Casas del Villar Don Pardo y Cañete*. Madrid: sin editorial.

Fuentes secundarias:

Andrien, Kenneth J. (1984): "Corruption, Inefficiency, and Imperial Decline in Seventeenth-Century Viceroyalty of Peru". En: *The Americas* 41, 1, pp. 1-20.

— (1985): *Crisis and Decline: The Viceroyalty of Peru in the Seventeenth Century*. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Bautista y Lugo, Gibran Irving Israel (2014): "Castigar o perdonar. El gobierno de Felipe IV ante la rebelión de 1624 en México". Tesis de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México (Facultad de Filosofía y Letras).

Bertrand, Michel (2011): *Grandeza y miseria del oficio. Los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España, siglos XVII y XVIII*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Boyer, Richard Everett (1982): "Absolutism vs. Corporatism in New Spain: the Administration of the marqués of Gelves, 1621-1624". En: *International History Review* 4, 4, pp. 475-503.

Burkholder, Mark A./Chandler, Douglas S. (1977): *From Impotence to Authority: The Spanish Crown and the American Audiencias, 1687-1808*. Columbia: University of Missouri Press.

Cañeque, Alejandro (2004): *The King's Living Image. The Culture and Politics of Viceregal Power in Colonial Mexico*. New York: Routledge.

Domínguez de Ortiz, Antonio (1946): "Salarios y atribuciones de los asistentes de Sevilla". En: *Archivo Hispalense* 7, 20, pp. 207-213.

Escandell y Bonet, Bartolomé (1980): "Una lectura psico-social de los papeles del Santo Oficio: Inquisición y sociedad peruana en el siglo XVI". En: Pérez Villanueva, Joaquín (ed.): *La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes*. Madrid: Siglo XXI, pp. 437-467.

Friedrich, Carl J. (2002 [2000]): "Corruption Concepts in Historical Perspective". En: Heidenheimer, Arnold J./Johnston, Michael (eds.): *Political Corruption. Concepts and Contexts*. New Brunswick/London: Transaction Publishers, pp. 15-23.

García de Valdeavellano, Luis (1982): *Curso de historia de las instituciones españolas: de los orígenes al final de la Edad Media*. Madrid: Alianza Editorial.

García Gallo, Alfonso (1944): *Los orígenes de la administración territorial de las Indias*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Génaux, Maryvonne (2002 [2000]): "Early Modern Corruption in English and French Fields of Vision". En: Heidenheimer, Arnold J./Johnston, Michael (eds.): *Political Corruption. Concepts and Contexts*. New Brunswick/London: Transaction Publishers, pp. 102-121.

Góngora, Mario (1951): *El Estado en el derecho indiano. Época de fundación (1492-1570)*. Santiago de Chile: Universidad de Chile.

Hampe Martínez, Teodoro (1992): "Esbozo de una transparencia política: asistentes de Sevilla en el gobierno virreinal de México y Perú". En: Sarabia Viejo, María Justina (ed.): *Europa e Iberoamérica: cinco siglos de intercambios*. Sevilla: Asociación de Historiadores Latinoamericanos Europeos, pp. 5-26.

Herzog, Tamar (1995): *La administración como un fenómeno social: la justicia penal de la ciudad de Quito (1650-1750)*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

— (2004): *Upholding Justice. Society, State, and the Penal System in Quito (1650-1750)*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Holguín Callo, Oswaldo (2002): *Poder, corrupción y tortura en el Perú de Felipe II: El Doctor Diego de Salinas (1558-1595)*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

Kamen, Henry (1991): *Spain 1469-1714. A Society of Conflict*. New York: Longman.

Latasa Vasallo, Pilar (1997): *Administración virreinal en el Perú: gobierno del Marqués de Montesclaros (1607-1615)*. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.

MacKay, Angus (1977): *Spain in the Middle Ages. From Frontier to Empire, 1000-1500.* New York: St. Martin's Press.

Mann, Michael (1984): "Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and results". En: *Archives Européennes de Sociologie* 25, pp. 185-213.

— (2012 [1986]): *The Sources of Social Power*. 4 vols. Cambridge: Cambridge University Press.

Maravall, José Antonio (1986 [1972]): *Estado Moderno y mentalidad social (siglos XV a XVII)*. 2 vols. Madrid: Alianza Editorial.

Martin, Cheryl English (1996): *Governance and Society in Colonial Mexico. Chihuahua in the Eighteenth Century*. Stanford: Stanford University Press.

Medina, José Toribio (1956 [1887]): *Historia del Tribunal de la Inquisición de Lima (1569-1820)*. 2 tomos. Santiago de Chile: Fondo Histórico y Bibliográfico J.T. Medina.

Molina Martínez, Miguel (1983): "Los Torres y Portugal. Del señorío de Jaén al Virreinato peruano". En: *Andalucía y América en el siglo XVI. Actas de las II jornadas de Andalucía y América (Universidad de Santa María de la Rabía, marzo 1982)*. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, pp. 35-66.

Montoto, Santiago (2001): *Sevilla en el Imperio.* Sevilla: Ediciones Libanó.

Morales Padrón, Francisco (1989): *Historia de Sevilla. La ciudad del quinientos.* 3ª ed. revisada. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Moreno Cebrián, Alfredo/Sala i Vila, Núria (2005): "Una aproximación a la corrupción política virreinal. La confusión entre lo público y lo privado en el Perú de Felipe V". En: *Histórica* XXIX, 1, pp. 69-105.

Pietschmann, Horst (1980): *El Estado y su evolución al principio de la colonización española en América*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

— (1982): "Burocracia y corrupción en Hispanoamérica colonial". En: *Nova Americana* 5, pp. 11-37.

— (1998): "Corrupción en las Indias españolas: Revisión de un debate en la historiografía sobre Hispanoamérica colonial". En: González Jiménez, Manuel/Pietschmann, Horst/Comín, Francisco/Pérez, Joseph (eds.): *Instituciones y corrupción en la historia*. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, pp. 31-52.

Portocarrero, Felipe (ed.) (2005): *El Pacto Infame: Estudios sobre la corrupción en el Perú.* Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.

Pike, Frederick (1958): "The Municipality and the System of Checks and Balances in the Spanish American Colonial System". En: *The Americas* 15, 2, pp. 139-158.

Puente Brunke, José de la (2006): "Codicia y bien público: los ministros de la Audiencia en la Lima seiscentista". En: *Revista de Indias* LXVI, 236, pp. 133-148.

Quiroz, Alfonso W. (2013): *Historia de la corrupción en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Ramos, Frances L. (2012): *Identity, Ritual, and Power in Colonial Puebla.* Tucson: University of Arizona Press.

Rheinstein, Max (ed.) (1969): *Max Weber on Law in Economy and Society*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rosenmüller, Christoph (2008): *Patrons, Partisans, and Palace Intrigues. The Court Society of Colonial Mexico, 1702-1710*. Calgary: University of Calgary Press.

Sarfatti, Magali (1966): *Spanish Bureaucratic-Patrimonialism in America*. Berkeley: Institute of International Studies University of Berkeley.

Schäfer, Ernst (1947): *El Consejo Real y Supremo de las Indias. Su historia, organización y labor administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria*. Vol. 7. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos.

Schwartz, Stuart B. (1970): "Magistracy and Society in Colonial Brazil". En: *The Hispanic American Historical Review* 50, 4, pp. 715-730.

Torres Arancivia, Eduardo (2006): *Corte de virreyes. El entorno del poder en el Perú del siglo XVII*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Waquet, Jean-Claude (1991): *Corruption. Ethic and Power in Florence, 1600-1700*. University Park: Pennsylvania State University Press.

Weber, Max (2005 [1922]): *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

De lo innato a lo performativo: dos conceptos rivales de la corrupción, siglos XVII y XVIII

Christoph Rosenmüller

Introducción

En 1673, el jurista Domingo Antúnez Portugal lamentó que los "hombres corrompidos por ambición y codicia e infames por su sangre"[1] torcieran la justicia.[2] Según esa idea ampliamente compartida en los imperios atlánticos, la corrupción era una calidad innata y vinculada con el insuficiente origen social. En lugar de enfocarme en la discrepancia entre las leyes reales y el desempeño en el cargo, sostengo que existía otro concepto que correspondía con los valores del antiguo régimen. Necesario para evitar abusos en la justicia fue el mérito o la buena procedencia social la que otorgaba las cualidades necesarias para actuar virtuosamente en las magistraturas.[3] En gran medida, el origen social, a veces combinado con los servicios, formó el mérito. Mientras tanto, nombrar jueces en violación del mérito tradicional era corrupción, porque aquella gente no tenía las cualidades a resistir la avaricia y los sobornos. Como el imperio español se enfrentó con otras potencias Atlánticas, paulatinamente se alineó más la actuación de los jueces y oficiales con las leyes reales, y la noción de corrupción se transformó. A

1 "Magistratus viris ambitione, & avaritia corruptis, & sanguine infamibus", Antúnez Portugal (1673), *Tractatus*, pars. sec., lib. i, cap. xiv, para. 7; Pedro de Portocarrero y Guzmán (1700) por ejemplo extensamente citó a Antúnez Portugal, *Theatro*, 372-377. Las tendencias historiográficas sobre la corrupción atlántica discutimos los editores en la introducción.

2 Este capítulo es un avance del libro monográfico titulado *Corruption and Justice in Imperial New Spain and Spain*, mismo que se fue realizado gracias a la beca de investigación Fulbright García-Robles. Agradezco al Dr. Gibrán Bautista y Lugo, de la UNAM, al Dr. Stephan Ruderer, de la Universität Münster, y a Marcela Saldaña, del INAH, sus valiosas sugerencias al texto, igual como los comentarios de los participantes del Seminario de Historia Económica de El Colegio de México y del Dr. Andrés Lira.

3 La distinción entre cargos públicos y persona privada desarrolló ya Tomás de Aquino (2001) en *Suma Teológica* II IIae, cap. 67, art. 3. Véase también Garriga (2006): *Sobre el gobierno*, 81.

partir del tardío siglo dieciséis, los tratadistas y políticos pusieron más atención en la utilidad para la Corona y el desempeño en el cargo para evitar la violación de disposiciones reales. Las alianzas entre el poderío real y los grupos extraídos en gran parte de la hidalguía y la burguesía favorecían el cambio en la noción. El poder económico y la influencia política de aquellos grupos crecieron en la medida que la Corona los necesitaba.

Para explicar este concepto diferente de la corrupción tanto como la gran divergencia entre lo que mandan las leyes reales y la actuación de los jueces y oficiales, una corriente más reciente de la historiografía legal hace hincapié en el "pluralismo judicial". Según esta perspectiva, esta polivalencia se componía de las leyes de Indias y Castilla, del *ius comune*, es decir, la recepción medieval de las leyes romanas y canónicas, los comentarios de las autoridades eclesiásticas, y el sinfín de casos o precedentes adjudicados en las cortes (Tau Anzoategui 2000: 2-4, 25-26; Hespanha 2006: 23). Algunos historiadores de la corrupción ya enfatizan aquel pluralismo. Sin embargo, hasta cierto punto la historia jurídica ha restado importancia a la operación concreta de las leyes en el entorno social (Garriga 2006). Por otro lado, algunos historiadores como Tamar Herzog se enfocan predominantemente en los fenómenos sociales que determinaron la actuación de los oficiales y subexponen la función de los mandatos legales. Herzog concluye que en el antiguo régimen existía una idea distinta de la justicia que era irreconciliable con el concepto de la corrupción (Herzog 2004: 154).

Aunado a esos avances importantes, yo sostengo que la polivalencia proveía justamente las normas de un concepto alternativo: el de la corrupción innata. Más allá de las leyes reales, el discurso sobre la corrupción innata cristalizó en comentarios sobre el buen gobierno, textos legales y teológicos, y en prácticas de control como la visita de la audiencia de Francisco de Garzarón (1715/16-27). Como el pluralismo judicial dio normas a varias perspectivas de la justicia que estaban en pugna, se trata aquí de una comunicación sobre la corrupción más que reglas fijas que la determinaron. Por esta razón, este artículo se concentra en un periodo que va de la mitad del siglo XVII, donde los discursos de la corrupción innata estuvieron todavía muy presentes, hasta el reinado de Carlos III, cuando aquella perspectiva ya estaba en pleno declive.

1. La corrupción innata

En el imperio español, la Corona empezó en 1633 a vender nombramientos a oficios sin derechos patrimoniales, es decir, el llamado beneficio, lo cual causó largos y amargos debates. Diversas voces censuraron la venta como abuso o corrupción. Mark Burkholder y D. S. Chandler, cuyo trabajo perspicaz sigue siendo la referencia principal sobre el tema, sugirieron hace décadas que a través de este proceso "ministros de cuestionable carácter y conducta profesional" conseguían plazas de justicia y gobierno (1977: 6 nota 10, 15, 17-21, 32-40). Los historiadores se basaron en muchos comentaristas del antiguo régimen según los cuales la venta violaba el principio de la asignación de cargos por mérito, una noción que remitía al ámbito de la justicia distributiva. A la justicia distributiva correspondía, según los historiadores, el arreglo de los nombramientos de oficios indianos entre americanos, peninsulares y criados de los virreyes (Burkholder 2013: 63; Hespanha 1997: 22). Más allá de esta vista, el término tenía una definición precisa, prescribiendo la atribución de cargos según el mérito y servicios de una persona. El eminente teólogo aristotélico Tomás de Aquino (c. 1225-1274) propuso que:

> la justicia distributiva se da a una persona tanto más de los bienes comunes cuanto más preponderancia tiene dicha persona en la comunidad. Esta preponderancia se determina en la comunidad aristocrática por la virtud; en la oligárquica, por las riquezas; en la democrática, por la libertad, y en otras, de otra forma. (Aquino 2001: II IIae, cap. 61, art. 2, sol.)

La justicia distributiva entonces difiere de la noción moderna de la "justicia social", consistente en dar a los menos privilegiados para equilibrar diferencias sociales. Al contrario: Cuando la comunidad política repartía premios o cargos, la justicia distributiva exigía que personas con preeminencia social (*principalitatem*), es decir, el mérito tradicional, merecieran los cargos correspondientes a su nivel social. Este concepto no se refería tanto a la riqueza de una persona sino a su descendencia noble y esclarecida. La idea explica, entre otros factores, que los virreyes de Nueva España solían ser aristócratas o sus hijos, ya que a este grupo selecto correspondía tal mérito. En el nivel más bajo, el jurista Juan Solórzano y Pereira (1575-1655) recomendó que los virreyes nombraran los "beneméritos" descendientes de los pobladores originales para las alcaldías mayores, es decir

administradores y jueces de provincias, tomando en cuenta la "justicia distributiva" (Solórzano 1972: lib. v, cap. xii, 35, 38, cita en 39).

Observar la justicia distributiva era primordial, ya que el juez era vicario del rey mismo y sólo los ministros con reputación irreprochable deberían ascender a la judicatura. El juez perfecto o *iudex perfectus* determinaba en el tribunal de su conciencia la solución adecuada para cada caso escogiendo entre múltiples leyes, ya que el derecho pre-moderno no se reveló a través de un párrafo o principio legal (Garriga 2006: 84-86, 158). Por lo cual, se debería dar las plazas a los jueces idóneos, hábiles, y con mérito según los estándares del antiguo régimen.

Este mérito no era conforme con lo de hoy, y no consistía principalmente en la performatividad en el cargo o la educación examinada, sino se definía en buena medida con base en el origen social esclarecido. En muchos casos, sólo esta proveniencia otorgó las cualidades innatas que permitían a un funcionario actuar virtuosamente. Por ello, era importante demostrar ritualmente la pureza del linaje o limpieza de sangre, es decir, la descendencia exclusivamente cristiana y blanca, y cualquier falta de la limpieza podía afectar hasta los estamentos más altos. La gracia divina y la voluntad del príncipe fundaron la nobleza en la teoría, pero en la práctica era cuestión de herencia. En el norte de la península el porcentaje de hidalgos era más alto que en otras partes del imperio, y aquellos bajos nobles confirmaron sus privilegios a través de probanzas con testigos. Otra forma de demostrar origen destacado fue la pertenencia a órdenes militares. En el mundo hispano, las de Santiago, Calatrava y Alcántara fueron las principales. Además un título de nobleza, como un condado, marquesado o ducado daba por hecho la preeminencia, y la grandeza era aún más exclusiva y legalmente garantizada. Durante el siglo xvii diversos grupos de la aristocracia hispana buscaban mantener la exclusividad y restringir el avance de familias nuevas a su estamento (Büschges 2005: 161-164; Hering Torres 2011: 30, 38; Hausberger 2011: 102). También existía una nobleza autóctona en Indias la que originalmente no era cristiana. Después de la conquista, la Corona reconoció la nobleza india a la par de la hidalguía castellana. En 1673, por ejemplo, doña María Montezuma "viznieta del emperador Montezuma que lo fue de las Indias de la Nueva España", pedía un gobierno importante para poder casarse con "persona de su sangre y obligaciones".[4] El mérito de su descendencia ilustrada otorgó a doña

4 La reina al conde de Medellín, Madrid, 29 de abril de 1673; AGI, México 14.

María Montezuma la razón de pedir un cargo comparable a lo que se dio a los nobles peninsulares.

En esta perspectiva tradicional, el arquetipo de un juez era el noble de estirpe establecida, acaudalado, y con cierto margen de independencia frente a la voluntad real. En 1654 el portugués Luis Torres de Lyma elogió precisamente este ideal. Según el autor, Ezequías, rey de Judá de ca. 725 hasta 697 A.C., "no sufría en su reino injusticias, siendo vigilantísimo en administrar la justicia & para ministros buscaba íntegros y no partidarios, ricos y no pobres, letrados y no idiotas, libres y puros y no cautivos o dependientes".[5]

Estas calidades eran clave, y una persona demostraba la aspiración de mudar de estado social y alcanzar la nobleza a través de obras como el servicio de las armas, la obtención de grados universitarios y el ejercicio de cargos públicos, como por ejemplo en los cabildos municipales. La distinción entre esos conceptos de la nobleza adquirida, los méritos y los servicios no era siempre precisa, y la manera cómo se relacionaban estos tres aspectos cambiaba a través del tiempo (por ejemplo, Lancina 1687: 10). Los servicios tenían frecuentemente el carácter de un contrato directo y personal entre el rey y los candidatos. En sus probanzas de servicios, los peticionarios argumentaban que habían brindado servicios –en especial los militares– a la Corona, el bien público o la república, sus vecinos y la iglesia; bajo riesgo, con gastos y trabajo, y no habían recibido la recompensa correspondiente, especialmente cuando se trataba de personas de edad avanzada o con escasos recursos. El rey tenía el deber de compensar sus servicios con cargos reales (Mazín 2011: 64-65, 72; Hausberger 2011: 86, 94-96; Thompson 2012: 285-286).

Como los cargos eran muchas veces premios por servicios brindados en el pasado, la capacidad en el desempeño también jugó un papel, pero los criterios sobre su carácter e importancia eran generales y remitían a las virtudes mientras sólo constituyeron un aspecto entre muchos otros. El jurista Castillo de Bobadilla exigía que los tenientes de los corregidores peninsulares hubieran estudiado derecho y "pasado las leyes del reyno", haber sido examinados en el real consejo, y que dispusieran de "experiencia de

5 El "Santo Rey Ezechias não sofreo em seu Reyno injustiças, sendo vigilantissimo em se administrar a justiça: & pera ministros del la, buscaua inteiros, & não partidos; ricos & não pobres; letrados, & não idiotas, liures, & puros, & nâo catiuos, & ligados", Torres de Lima, *Compendio*, 71.

negocios, buen entendimiento" (1616: lib. 1, cap. xii, para. 16).[6] Sin embargo, esos requisitos no eran bien claros, y la "experiencia de negocios", o el "buen entendimiento" poco definidos.

Además de estos criterios, vivir la buena fama según las virtudes cristianas importaba. La nobleza, la pureza, y el propio dinero otorgaron al individuo la posibilidad de vivir las buenas costumbres como justicia, prudencia, valor y moderación, tanto como fe, caridad, y esperanza. Para los alcaldes mayores, Solórzano exigía "christiandad y bondad y [ser] cuerdos", mientras un autor anónimo –probablemente el proponente del poderío real, Melchor de Macanaz (1670-1760)– enfatizó al principio del siglo dieciocho que estas virtudes seguían en vigencia ya que "la fe [...] es la que da valor a estas quatro virtudes".[7]

En algunas instancias los funcionarios bajo investigación, aunque fuera rutinaria, usaban el mérito como estrategia defensiva. El virrey del Perú, el conde de Chinchón (1628-1638), se quejó de que el oficial "ingresaba bajo palio, y a la salida se debía pasar por las horcas caudinas del juicio de residencia" (en Vallejo García-Hevia, 2008: 465, nota 263). El oidor de la audiencia y presbítero, Juan Díaz de Bracamonte, insistió frente al visitador de la audiencia de México, Francisco de Garzarón (1715/16-27) en la "presuncion que tienen a su favor, los jueces, y mas los que son eclesiasticos".[8] En el fondo, estas refutaciones se basaban en la idea de que había que interpretar cualquier acusación a la luz de la preeminencia de una persona. Sin embargo, era más común defenderse en mantener que ninguna ofensa había ocurrido, o que un acto específico no era un delito. El mérito garantizó supuestamente la jurisprudencia recta, pero una vez inculpado de un delito, era más difícil sostener que el mérito permitía tal conducta.

Mientras el mérito jugó un papel importante, era imprescindible en muchos, si no en todos casos la recomendación de un patrón. Es decir, la actuación en una red clientelar era clave para avanzar a una plaza (Droste

6 Domingo de Soto ya insistió en equilibrar la justicia distributiva contra la justicia conmutativa en escoger magistrados y exigía "necesidad de la ciencia, de la prudencia, de la habilidad y sobre todo de la fortaleza de ánimo, además de la buena conducta", y "otras cualidades que son útiles para gobernar" (de Soto 1968: 2: 267).

7 Solórzano 1972: lib. 5, cap. 2, para. 3; Macanaz: "El deseado gobierno, buscado por el amor de Dios [...] ," sin fecha, Biblioteca Nacional de España (BNE), MS 5671, f. 25-25v.

8 "Cargos particulares contra [...] Juan Díaz de Bracamontte," in "Relacion de los Autos de Visita General [...] fecha en Buen Retiro a 21 Diciembre 1715," AGI, México 670 B, f. 128v.

2002: 577-579). Sin embargo, los contemporáneos estaban bien conscientes de la tensión entre el ideal del mérito y el clientelismo. El agustino Juan Zapata y Sandoval arguyó que cuando se prefiere la "propincuidad o consanguinidad" de los promovidos, aunque no tengan que ver con el "negocio que había de tratarse" entonces "la acepción de personas es un pecado opuesto a la Justicia Distributiva" (1994: [vol. 1] cap. iv, 9; cap. v, para. 7). El pecado en la acepción de personas o *crimen acceptionis personae* consistía en nombrar a una persona por el favor o la pasión en vez de considerar la idoneidad o aptitud con base en el mérito y los servicios. Por su parte, el aristocrático canónigo de la catedral de Toledo, Pedro de Portocarrero y Guzmán, mantuvo en 1700 que la "distribucion de premio […] si no es arreglada al merito sin excepcion de personas, inquieta los animos, y tal vez la opression" (Portocarrero y Guzmán 1700: 337). Más bien que a la excepción, Portocarrero y Guzmán se refirió a la acepción de personas. Este postulado también era conocido fuera del imperio español. Nicolás Maquiavelo, por ejemplo, rechazó conferir un puesto al que sabía cortejar más que tener mérito (Fernández de Otero 1732: pars 1, cap. iii, para. 1; de Soto 1968: 2:250-251; 266-270; Maquiavelo 1967: lib. 1, cap. 18).

Nombrar a personas sin suficientes servicios y méritos era para muchos una violación de la justicia y por ende, corrupción e incluso tiranía. Pedro de Portocarrero y Guzmán afirmó que "los Tribunales [...] descaecen de su estimacion, por introducirse en ellos sugetos indignos de semejante carácter [...] por su inexperiencia, ò inhabilidad, echan à perder los negocios con detrimento de la publica utilidad [...] de la corrupcion, que oy padecen los Tribunales, es esta la causa" (Portocarrero y Guzmán 1700: 374, 337). Es decir, los nombramientos de sujetos sin suficiente mérito causaba la corrupción del imperio español. Esta visión se basó mucho menos en la falta de actuación según las leyes reales que en los defectos de procedencia.

El perfil de gente poco idónea o inhábil esbozó Antonio Fernández de Otero, cuya tercera edición del *Tractatus de Officialibus Reipublicae* se publicó en 1732. El autor exigía excluir a "Judíos, y los recién conversos", los neófitos "que en Castilla se llaman Marranos", y los descendientes de herejes. Los conversos y sus descendientes habían traicionado la fe y sus valores, incluso la lealtad, según él, y no se les podía confiar los cargos públicos (pars 1, cap. iii, para. 1, 1). Algunos grupos sociales extendieron esta visión en América a los mestizos, los africanos y sus descendientes. El visitador general de la audiencia de México, Francisco de Garzarón, por

ejemplo, inculpó al alguacil mayor de la corte de haber nombrado tenientes "mulatos coyotes y mestizos y que por sus malas inclinaciones han sido procesados por varios delictos". Igual la universidad y el protomedicato de Lima se resistieron en 1750 a admitir a "mestizos, zambos, mulatos ni cuarterones" en los estudios y oficios por ser "sujetos no beneméritos" con "nota de infamia" y "defectos de nacimiento".[9] Sin embargo, esta posición era más controvertida en referencia a los indios. Juan Zapata y Sandoval en 1609 soslayó que según la justicia distributiva, los indios precisamente merecían los cargos eclesiásticos y seculares, como ya no eran neófitos y habían pasado 90 años desde su conversión.[10]

Aparte de los mestizos y nuevos cristianos eran también sospechosos quienes trabajaban en oficios "viles" con sus manos o que trataban mucho con dinero. Además de herreros y carpinteros (Böttcher 2011: 188-189), Fernández de Otero exigió excluir casi todos los trabajadores manuales, es decir "los taberneros, arrieros, zapateros, hospedadores, vulgo, mesoneros, los empanaderos, y los que [ejercen] oficios mecánicos [...] pastores".[11] Además de estos grupos, el autor recomendó excluir a mercaderes y vendedores, de hecho, a todas personas que intercambiasen dinero por su ocupación, por que

> Bartolus de Sassoferrato reclama que los negociantes, los artes serviles, no solicitan las dignidades y honores, y se rechaza tales solicitantes, por ende surge la cuestión, que Ioannes de Platea contesta, que se los rechaza de las dignidades y honores, incluso de los bajos y humildes, por la vileza de sus tratos, pero no sólo cuando sirven sus oficios de manera punible, o porque son infames, sino porque ejercen tales oficios [...] porque se corrompen a través de los cargos viles tanto como los dineros, y por lo cual anuncian sin duda que

9 "Cargos del alguacil de Corte Don Francisco de Fonseca Enriquez", s.d., AGI, Escribanía de Cámara 288A, "Relacion [...] de los ministros inferiores [...]", f. 2; el cabildo de Veracruz excluyó escribanos de origen "indio y mulato", real cédula, Casa Tejada, 15 de marzo de 1704, Archivo General de la Nación, Reales Cédulas Originales 32, exp. 14, f. 2; real cédula, Buen Retiro, 27 de septiembre de 1752, en Konetzke (1953-1962) (ed.), *Colección* vol. 3, tomo 1, pp. 265-266; *Recopilación de leyes* [...] (1953), lib. 1, tít., 22, ley 57.

10 Los indios eran ciudadanos y por ende "civis est nec a civitatis privilegiis et praerrogativis prohiberi potest" (Zapata y Sandoval 1995 [vol. 2], cap. ix, para. 4-16, cita de 14).

11 "Nec tabernarii, muliones, sutores, hospitatores, vulgo, Misoneros, artocrearii & alii qui Mechanica officia de quibus loquitur Tiraq[ueau] de nobilit[ate] cap. 34 […] nec pastores", (Fernández de Otero 1732: pars 1, cap. iii., para. 1, 37); sobre el jurista francés (1488-1558), Jonathan Otto (2009): "Tiraquellus, Andreas (André Tiraqueau)".

> son empleados en bajos trabajos de mano y viles prestantes, y se les quita los oficios honoríficos.[12]

Fernández de Otero citó a los reconocidos juristas Juan de Platea (siglo XIV/XV) y Bartolo de Sassoferrato (1313/14-1357), quienes ya habían aclarado la idea de la gente inhábil. En sus comentarios al Derecho Romano, Bartolo calificó a los negociantes como viles e incluyó a los pastores de cerdos y vendedores de aceite.[13] Su parecer importaba, porque el reconocimiento del jurista era tal que "cuando no se podía encontrar una regla positiva sobre un asunto, la mejor práctica era seguir lo que Sassoferrato había enseñado. En algunas jurisdicciones eso era una regla en sí misma. En un periodo tan tardío como el fin del siglo XVIII, las universidades requerían que el derecho civil se enseñara 'según Bartolo'".[14] La preocupación de Bártolo de Sassoferrato muestra que el discurso sobre las actividades corrompidas por el dinero y la gente inhábil para cargos de justicia se formuló por lo menos desde la Baja Edad Media, si no antes, y siguió vivo durante el siglo XVIII. En este sentido, el fiscal de la chancillería de Valladolid, Jerónimo Castillo de Bobadilla, señaló en su *Política para corregidores*, originalmente publicada en 1597 y reimpresa en 1704, que "la vida del mercader es vil, y contraria a la virtud, y aquel es mejor mercader, que mas adquiere y es mucho de llorar que los que con usuras, falacias, y engaños acumulan dineros, rijan y goviernen las Republicas" (Castillo de Bobadilla 1616: 1: 489; esbozo biográfico en González Alonso 1978: 7-34). En 1716 el fiscal del

12 "Ne quis ex ultimis, c. De dignitatibus lib 12 qui Bart[olus de Saxoferrato] Expressè sumit illum textum: sic quod negociantes, artes vilissimas ad dignitatem seu honorem non aspirant & aspirantes repelluntur a dignitate seu honore etiam quaesito, & ubi Ioannes de Platea, ubi etiam ait quod propter vilitatem negotiationum repelluntur a dignitatibus & honoribus, tanquam viles & humiles, non autem propter poenale exercitium negotiationum, nec quia sunt infames, sed quia talia officia exercent & ponderanda sunt verba illa, abjectisque officis ut l. Deformibus monetariis etiam, que utique insinuant quod exercentes mechanica officia abiecta ista praestantes vilia, privantur Officiis honorificis [...]", (Fernández de Otero 1732: cap. iii, para. 1, 37).

13 De tal manera rechazando la glosa a la ley romana, "Ars vilissima dicitur vendere oleum & fal. Ne quis. Artes vilissimas ad dignitate non aspirant, & aspirantes repelluntur ab ea. hoc dicit. Facit inf. negoci. ne militent. l. j & no. appellari vilissimas artes illorum, qui stant ad custodiam porcorum, & illorum q vendunt oleum, & fal. ut dicit gl.; Bartolus de Saxoferrato (1595): *Omnium Iuris Interpretum Antesignani Comentaria*, Bar. ad duodecimum Librum Codicis. De dignitatibus, lex vi (f. 48v).

14 Peter Weimar (2009): "Bartolus of Saxoferrato"; véase los esbozos de Bartolus y Platea en Speer (2014): *Rechtshistorische Notizen.*

Consejo de Indias recuperó esta idea en su parecer a excluir mercaderes de los cargos de alcaldes mayores en la Nueva España.[15]

Inhábiles para oficios de justicia eran también la gente con discapacidad, los hijos de uniones ilegítimas, y mujeres. Fernández de Otero excluyó a los ciegos, sordos, y mudos, tanto como el "stultus furiosus", es decir, gente vista como mentalmente inestable (Fernández de Otero 1732: pars 1, cap. iii., para. 1, 28-29). Aunque esta calificación hoy sería discriminatoria, se la puede ver como una forma temprana de garantizar estándares mínimos de actuación, limitando la entrada de aquella gente a través del clientelismo que no tenía la capacidad de escuchar pleitos. También se argumentó contra la inclusión de "bastardos o incestuosos". Una opinión sostuvo que regularmente se excluían a estos por haber "nacido en lugar indigno". Sin embargo, Fernández de Otero reconoció que había en la península una serie de capaces hijos de uniones ilegítimas (1732: pars 1, cap. iii., para. 1: 30-32; Castillo de Bobadilla 1616: lib. 1, cap. xii, para. 16). Por ejemplo, don Juan (José) de Austria, hijo ilegítimo de Felipe IV, encabezó el partido conservador en Madrid como primer ministro (1677-79). Aparte de aquellos hijos, tampoco podían regularmente servir mujeres como jueces. Sin embargo, en 1687 Juan Alfonso Lancina rechazó la máxima que "imperio de las mugeres suele ser insoportable, porque en todo son estremadas", porque "en España no vale [...] pues las Berenguelas, Marias, Juanas, y Marianas han dado norma à muchos Reyes". El autor se refiere a la reina Berenguela de Castilla (1180-1246) y Mariana de Austria (1634-96), la madre de Carlos II, entre otras (Lancina 1687: 30; Bianchini 2012; Llorente 2013: 197-198). La tensión entre la actuación capaz de una serie de reinas y los valores tradicionales de mérito era ya evidente para los contemporáneos.[16]

Finalmente, se excluyó a personas conocidas por vivir una mala vida. Los que se entregaron a la codicia, la pasión o la inmoralidad sexual eran descalificados. Más precisamente, la gente debería abstenerse de los pecados capitales, los cuales eran soberbia, envidia, ira, avaricia, pericia, lujuria y gula. No resistir a los pecados era vivir la mala fama. Domingo de Soto (1494-1560) arguyó que el ánimo corrupto o *corruptus animus* no podía

15 "Parecer", fiscal, Madrid, 27 de febrero de 1716, AGI, México 485, f. 281; "que ninguno sea tratante, ni mercader" (Zevallos 1623: 177v).

16 Incluso la historiografía juzgó duramente sobre Mariana de Austria. Ahora hay una re-evaluación, por ejemplo, en Storrs (2006: 153-157), aunque todavía falta una biografía. Más bien parece que Mariana era una gobernante capaz.

obrar para la equidad de la justicia (de Soto 1968: 2: 267; Lira 2006: 1141).

En la perspectiva del Antiguo Régimen, la mala vida, la falta de limpieza de sangre, el nacimiento bajo o dudoso, el trato ocupacional con dinero o con las manos manchaba a la gente. No se debería fiar en el recto proceder de aquella gente. Nombrar tales personas para ocupar cargos de justicia era considerado corrupción por los tratadistas revisados, y la corrupción era por lo cual, hasta cierto punto, una calidad innata o heredada. Aunque la distinción entre cargos de justicia y otros no era siempre precisa, ya que muchos cargos tenían jurisdicción en algún aspecto, había un consenso que los alcaldes mayores y corregidores, los ministros de la audiencia, y la mayoría de los consejeros eran jueces. Por lo cual, nombrar candidatos con mérito para aquellos cargos era la manera de cumplir con la justicia distributiva.[17]

La venta de cargo violaba estos principios, porque gente de insuficiente mérito y corrompida por codicia llegó a adquirir las magistraturas. Este punto arguyó, por ejemplo, el teólogo y jurista francés Pierre Grégoire de Tolosa (Toulouse) (1540-1617), frecuentemente citado en el imperio español. Pierre Grégoire sostuvo que "el príncipe adquiere una mala reputación si vende lo que se ha de distribuir por justicia, y no promueve los doctos e idóneos, los que no pagan voluntariamente, sino los perniciosos, ambiciosos e indignos". El magistrado "que compra también vende", notó Pierre Grégoire, basándose en el emperador romano Severo Alejandro (222-235),[18] y "las leyes aplican a los jueces que tuercen la justicia siendo corrompidos por codicia y juzgando por dinero". Similarmente, el jurista Domingo Antúnez Portugal (1673) sostuvo que era "indecente e indecoroso" para príncipes vender las magistraturas por que las llenaba con "hombres corrompidos por ambición y codicia e infames por su sangre".[19]

17 Las leyes de Indias marcaron la distinción entre cargos con y sin jurisdicción, *Recopilación de leyes* [...] (1953 [1741]), libro 8, título 20, ley 1.

18 "Necessum onim est, ut dicebat Alexander Caesar, ut is, qui emit, vendas [...] Princeps quippe male audit, quod pro iustitia distribuenda, ad quam ipse tenetur, negotiatur in ea, non doctos, & probos qui lubentissime non emunt onus, sed perniciosos ambitiosos & indignos promovet [...] Huc etiam pertinent leges, plectentes iudices corruptos sordibus & per pecunias iudicantes & corruptores, & eos qui nituntur corrumpere, de quibus nos diximus alibi" (Pierre Grégoire Tholosianus 1642: lib. 2, cap. 6, 17).

19 "Reges, & Principes [...] ab huiusmodi venditionibus se abstinere debent, tum quia indecens & indecorum illis est…quippe dum sunt venalia officia, non pendunt personae, quibus venduntur, meritis, sed pecunia. Et tunc saepissime conseruntur Magistratus vi-

Esta ambición era el intento indebido y excesivo de subir en la escala social, lo cual era un rasgo principalmente de grupos socialmente emergentes y no-nobles.[20] La infamia de sangre era lo mismo como la insuficiente limpieza de sangre. De tal forma, en 1677 la cámara de Indias, cuya tarea era proponer al rey candidatos a plazas en América, rechazó proveer el gobierno de Yucatán en Antonio de Layseca Alvarado a cambio de un préstamo por 100.000 pesos a la Corona, por los

> graves inconvenientes que se siguen a la buena administracion de Justicia, de no proveer los goviernos en la forma regular, eligiendo los sugetos de mayor integridad, y experiencias, que con desinteres, celo, y cuidado, atiendan al bien publico, y a la satisfaccion de los vasallos, de que depende la quietud y conservación de los reinos, [porque los candidatos] viendose destituidos del premio que podian esperar por sus servicios [y] siendo materia mui escrupulosa no observar la justicia distributiva de que depende todo lo demas que mira al Govierno universal.[21]

Esta condenación de la venta de nombramientos, por ser violatoria de la justicia distributiva, se compartía ampliamente en Europa occidental.

Este discurso contra el juez corrupto era la expresión de los grupos sociales en pugna. Más que todo los grupos privilegiados del imperio rechazaban el avance de los grupos sociales emergentes. Pedro de Portocarrero y Guzmán, por ejemplo, un aristócrata vinculado con la casa del conde de Palma, un grande de Castilla, propuso que eran los "sugetos indignos" que corrompían la justicia (Peña Izquierdo 2004: 155-156, 207-210, 290-316; Portocarrero y Guzmán 1700: 374). Más que todo los estamentos privilegiados rechazaron la ambición y la mala sangre. De un lado estaban los juristas procedentes del principado municipal que tenían acceso preferente a los cinco colegios mayores de las universidades de Salamanca, Valladolid, y Alcalá de Henares. Aunque originalmente fundados para gente más humilde, los colegios se convirtieron en bastiones socialmente cerrados con amplios privilegios para sus integrantes. Los ministros de los consejeros de la monarquía reclutaron a sus sucesores de este estrato social para las audiencias y consejos (Dedieu 1997: 170-171). Igualmente, el alto clero tanto como la nobleza media y alta fueron los principales grupos

---

ris ambitione, & avaritia corruptis, & sanguine infamibus, absque litteris, & prudentia qui pecuniis supplent" (Antúnez Portugal 1673: pars. sec., lib. i, xiv, 6, 7).

20 En Latín: ambitio implicaba exceso (Jiménez Arias 1792: 30).

21 Consulta, Cámara de Indias compuesto por el conde de Medellín, Tomás de Valdés, y el marqués de Santillán, Madrid, 21 de octubre de 1676, AGI, México 362 R., N. 8.

beneficiarios de la justicia distributiva. Este conjunto defendía sus intereses frente a grupos sociales "nuevos", como bajos nobles, mercaderes, banqueros, los graduados no-colegiales, y burócratas de nivel bajo e intermedio, que buscaban entrar en cargos importantes. Tenían recursos económicos adquiridos por los negocios y el trabajo y podían ser de origen converso o étnicamente mezclados. Cuando la Corona vendía cargos, miembros de estos grupos tuvieron la capacidad de comprarlos.

El discurso contra la corrupción innata de los jueces mantuvo su fuerza incluso en América. Castillo de Bobadilla ya había formulado la crítica contra los alcaldes mayores que actuaban como mercaderes. En 1686 el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz (1677-1699), de ninguna manera sospechoso de inclinaciones reformadoras, criticó la venta de mercancías por los alcaldes mayores.[22] Con lo anterior, puede matizarse la tesis de Jeremy Baskes sobre que los reformadores tardío-borbónicos calificaron de corrupta la venta o repartimiento de mercancías por parte de los alcaldes mayores a los indígenas, mientras localmente no se veía el intercambio como tal (Baskes 2000: 76). Como se ha visto, el discurso contra los jueces corruptos por los tratos con dinero era más antiguo que las reformas borbónicas. Fue una noción originalmente medieval vinculada a la pureza de sangre y al mérito. Por lo cual, más bien parece que los reformadores del siglo XVIII utilizaron el discurso estamental para prestar legitimidad a su proyecto. La meta reformista, sin embargo, ya no consistió en restituir la preferencia del mérito tradicional, sino en reestructurar la administración hacia un brazo de la voluntad real.

2. La corrupción performativa

En el tardío siglo XVII avanzaba la ilustración temprana en el imperio español, y el Aristotelismo como fundación ideológica perdió influencia igual como su principal intérprete, Tomás Aquino. La tradicional "economía de gracia" marcado por la justicia distributiva estaba en pleno declive (Hespanha 1993: 67-86). fray Francisco Palanco (1657-1720), un exponente destacado de aristotelismo, vapuleó en su *Dialogus physico-theologicus contra philosophiae novatores* el pensamiento cartesiano. Su tratado constituyó

22 Real cédula, Madrid, 10 de febrero de 1716, en Konetzke 1952-1963: vol. 3, tomo 1, p. 123.

el mejor síntoma de que aquellos innovadores de la filosofía, a quienes denunciaba, ya estaban ganando terreno. Paulatinamente, cambiaban los valores que definían la justicia y el buen gobierno. Surgía un intercambio más racional a través del mercado y la burocracia y afloró el ideal burgués de la utilidad para la Corona. La capacidad examinada, la educación formal, la experiencia y el rendimiento en la ocupación infiltraron sucesivamente al sentido del mérito, mientras el origen social selecto como argumento contra la corrupción perdió influencia, aunque no desapareció (Llombard Rosa 2000: 7-8; Israel 2001: 528-540; Asch/Emich/Engels 2011: 29; Thompson 2012: 285-286, 294-295; Reinhard 2003: 338; Ruiz Torres 2007: 212-214).

Con el declive del mérito tradicional, nombrar a alguien por los logros de sus antepasados resultó más cuestionable. Ya en 1687 Juan Alfonso de Lancina expuso que "la nobleza, y el mérito para los cargos, estos deben preferirse, quando no estan juntos, debe tener el merito mejor lugar" (1687: 10). Lancina entendía el mérito ya como un conjunto de actos más importantes que la herencia. Un autor anónimo, probablemente el ya mencionado Melchor Macanaz, sostuvo que las "varas de iudicatura, y govierno no se dan en dote a muger alguna [...] Parece ignominia, que el haber servido un padre en ministerios de diversa especie, sean meritos para que la hija disponga de una plaza". Macanaz añadió "si ellos no son capaces, y pasan por el rigor del examen: El Monarca sabe premiar semejantes servicios con oficios meramente legos que no necesitan de ciencia", y si no "arrinconaria la virtud, enflaqueceriala".[23] Incluso los oficiales navales Jorge Juan y Antonio de Ulloa, al regresar de América hacia mitad del siglo XVIII, sugerían que fuera "el mérito solo de otros servicios el principal móvil de la gracia" (Juan/Ulloa 1826, vol. 1: 258, véase McFarlane 1996: 46-47). Al fin del siglo XVIII, experiencia y obediencia –no meramente lealtad– al rey determinaban más la carrera ocupacional de los corregidores en España. Administradores exitosos con estudios legales podían coronar su trayecto con una plaza en las audiencias (Loupès/Dedieu 1998: 174; Dedieu 1997:

23 "El deseado gobierno", ff. 111-12. La crítica de la nobleza ociosa y poco virtuosa tanto como el pensamiento de actuación son más antigua. El jesuita Andrés Mendo arguyó en 1626 que "Quando la nobleza heredada està desnuda de acciones generosas, no es gloriosa. El alabar à uno de noble, es, dar à sus progenitores la alabanza, aplaudirle por rico, es, significar el favor de su fortuna, aclamarle por sus artes, y costumbres, es, engrandecerla à el mismo [...] Tu animo y tu virtud te han de dar el lleno de la grandeza" (Mendo 1662: 17).

179). Como parte de este proceso, en 1783 Carlos III removió legalmente la "vileza" de los oficios mecánicos:

> Declaro que no sólo el oficio de curtidor, sino también los demás artes y oficios del herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros a este modo, son honestos y honrados [...] no envilece la familia ni la persona del que lo ejerce; ni la inhabilita para obtener los empleos municipales de la república [...] tampoco han de perjudicar las artes y oficios para el goce y prerrogativas de la hidalguía.[24]

El rey de esta manera quitó una columna de la corrupción innata, y la corrupción performativa avanzó.

3. El derecho a la luz de la justicia distributiva en oposición al legalismo

Hay indicios de que las quejas de las élites tradicionales sobre la nueva gente corrompiendo la justicia no sólo se referían a la baja procedencia social sino también a su perspectiva del derecho. Estos grupos tradicionales también interpretaron la normatividad de manera más conservadora, aunque las ideas siguientes deberían probarse de manera más sistemática. Los jueces que ascendieron por los mecanismos tradicionales construían el derecho más a la luz de la justicia distributiva y según los intereses de sus grupos. Se puede asumir que hacían referencia a toda la gama de las normas del pluralismo judicial, incluso a las colecciones Romanas, las fuentes teológicas, los intérpretes medievales, etc. Algunos comentaristas exigían tomar en cuenta el estado social en el gobierno. Luis Torres de Lyma, por ejemplo, favoreció a los "ministros, gobernadores, generales, y consejeros que distributivamente tratan del bien general y del aumento y conservación de los vasallos y del reino, que así se hace gobierno justo".[25] Según Castillo de Bobadilla el buen corregidor debería pasar sentencias justas según la "disposicion de la ley, o de la común opinion" (Castillo de Bobadilla 1616:

24 Real cédula, El Pardo, 18 de marzo de 1783, Madrid: Imprenta de Don Pedro Marín, 1783, <http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=447433#infoejemplares>; prohibiendo exclusión de hijos ilegítimos de oficios, real cédula, San Ildefonso, 2 de septiembre de 1784, en Konetzke 1952-1962: vol. 3, tomo 2, pp. 539-540.

25 "Ministros, governadores, Generaes, & Conselheiros, que distributiuamente tratem do bem géral, & do augmento, & conseruação dos vassalos, & do Reyno: que por aqui se fazo gouerno justo" (Torres de Lima 1654: 130-131).

tomo 1, lib. 1, cap. xii, para. 12). Lo que era exactamente el derecho entre la disposición legal y la común opinión no estaba claramente determinado y abrió espacio para escoger las normas indicadas para cada caso. Como base de aquella interpretación, Tomás de Aquino ya había establecido que la justicia penal era predominantemente el ámbito de la justicia conmutativa, es decir, la atribución igual entre partes sin mirar a la preeminencia. Aquino, no obstante, insistía que "la condición de la persona influye en la cantidad de la cosa, puesto que mayor es la injuria si se hiere al príncipe que si se hiere a una persona privada; y de este modo, la condición de la persona, en la justicia distributiva, es considerada por sí misma" (Aquino 2001: II IIae, 61, art. 2, res. 3). Según Aquino una persona que cometía un delito contra otra con más prestigio social merecía recibir un castigo más duro que cuando la víctima hubiera sido del mismo o más bajo estado social.[26] Esta perspectiva convenía a los élites tradicionales, y aún más cuando tenían jurisdicción sobre la gente como en determinadas regiones de la península. Una sector del pueblo rechazó esta idea. La ley, decía esta parte, era como "telas de arañas, que prenden con executivo rigor para las moscas pequeñas, pero qualquier fuerza mayor rompe la tela", no obstante de que la justicia debería ser una combinación de rigor y clemencia (Mendo 1662: 117-118). Las quejas del aristócrata Pedro de Portocarrero y Guzmán y sus contemporáneos sobre la corrupción de los tribunales tenían entonces lógica dentro de su perspectiva de corrupción. Como los jueces del nuevo perfil no consideraban el derecho suficientemente a la luz de la justicia distributiva, sus sentencias bien podrían ser corruptas. Estos jueces se identificaron con una lectura más ancha de las leyes de Castilla y de Indias y sus principales intérpretes y promotores, como Juan de Solórzano y Pereyra.

Francisco de Quevedo (1580-1645) todavía había alabado la abundancia de las normas como garantía de la justicia, libertad y virtud, exigiendo que se "admita y practique el Derecho y Leyes de los Romanos" (1772: 2: 525-531, cita en 526). Esta diversidad jurídica, sin embargo, encontró críticas incluso dentro de los grupos conservadores. Para Portocarrero y Guzmán, la "multiplicidad de leyes es evidente prueba de corrupcion de costumbres", aunque su desdén se dirigió contra las pragmáticas reales, es decir, innovaciones por el poderío real (Portocarrero y Guzmán 1700: 172-173). Ya mucho antes

26 El derecho civil alemán incluso conoce la idea que normas de conducta moral entran en la jurisprudencia por el término *Billigkeit* o equidad, como en §§ 138, 157, 242 del *Bürgerliches Gesetzbuch,* lo cual garantiza la *Austauschgerechtigkeit*, es decir, la justicia conmutativa en el sentido moderno (véase *Duden* 2010).

Juan Bodino (Jean Bodin) había criticado la excesiva flexibilidad de una ley a la luz de la justicia distributiva, la que Bodino con vocabulario aristotélico llamó la justicia geométrica. Según él, observando "la justicia geométrica y dar la pena conforme a la hacienda, y al delicto, no tenia necesidad de hacer ley [...] la variedad de las personas, de los casos, del tiempo, del lugar, es infinita e incomprehensible" (Bodino 1590: lib. 6, cap. 6, p. 621). Al principio del siglo XVIII Macanaz siguió a Bodino en cuanto que la

> multitud de nuestras leyes mas confunden que dirigen a la equidad y a la Justicia [...] cuia contradiccion que arrojan [...] ofuscando los entendimientos de los jueces, tal vez entre la infinidad de dictamenes que encuentren, eligen el menos adaptable á la razon [...] aquello mismo que estaba fundado para distribucion de la justicia [...] no es atendible el que decidan las costumbres del Reyno o las Leyes patrias.[27]

Macanaz demandaba un fin al pluralismo y un código de pocas leyes sólidas como "pauta y regla á los Jueces y Letrados".[28] Similarmente el visitador de la Audiencia de México, Francisco de Garzarón, descartó las costumbres locales como parte de la normatividad. El patrón de la medida para él eran infracciones de las leyes de Castilla e Indias. Suspendió 13 de los 19 ministros togados y alrededor de 155 oficiales inferiores como los porteros, carceleros, escribanos, y abogados "en conformidad de las leyes", y prometió restablecer "la práctica de Ordenanzas y Leyes Olvidadas".[29] Después de este castigo de la audiencia, el rey amonestó precisamente la

> poca observancia de quanto con madura reflexion prebienen las Leyes de esos, y estos Reynos, sino tambien su entero abandono, con grabe menoscabo de mi real authoridad a esa Audiencia, y no menores perjuicios a la causa publica, por la mala Administracion de Justicia y [...] muchas incombeniencias", exigiendo "el exacto cumplimiento de las Leyes, y Ordenanzas que teneis juradas [...] para que reformeis y quiteis todos los abusos introducidos y practicados, con nombre de estilos, siendo, como son realmente corruptelas.[30]

El rey demostraba el declive del pluralismo normativo, ya que el estilo en este sentido no sólo significaba la costumbre, sino "la formula de proceder

27 "El deseado gobierno", f. 21-21v.

28 "El deseado gobierno", f. 21-21v.

29 Garzarón al rey, México, 20 de febrero de 1723, AGI, México 547.

30 El rey a la audiencia de México, Lerma, 13 de diciembre de 1721, AGN, Historia 102, f. 82-82v.

jurídicamente" (RAE 1732: 3: 635, 1; Quevedo 1772: 527). Garzarón y la Corona veían estos métodos en la Nueva España como corruptos, porque se desvían demasiado de las leyes reales. Otros autores como Macanaz compartían esta idea.[31] Un ejemplo es la defensa del oidor Félix Suárez de Figueroa contra cargos de la visita, recurriendo al pluralismo judicial. En 1724 Garzarón suspendió al juez porque se había comprado una casa en la ciudad de México entre varias otras ofensas. Suárez de Figueroa citó una real cédula de 1663 que permitía tal compra. Igual el oidor impugnó haber cobrado honorarios excesivos como juez de la comisión de tierras. Esta comisión legalizaba la transferencia de tierras baldías en manos particulares, y por lo ende ofrecía amplias oportunidades de abuso. El juez sostuvo que toda la comisión era fuera del ámbito de la visita. Según el fiscal del Consejo de Indias, sin embargo, la recopilación de las leyes de Indias derogaba la cédula citada. Además, seguía el jurista, el intento de excluir la comisión de tierras de la visita ya "solo en su proposición justifica la pena impuesta", porque un "ministro que mereció la honra de Vuesa Majestad [...] falte a su obligación recibiendo dones que indistintamente le prohibe la ley [...] produjo los repetidos agravios de los dueños de tierras".[32] El fiscal en Madrid y el visitador en la Nueva España rechazaron la defensa polivalente del juez, el cual perdió su plaza. Después Suárez de Figueroa y su esposa seguían presionando a la Corona y cuando el ex oidor murió, ella logró la restitución del salario perdido, lo que era equivalente con una compensación financiera.[33] Hay entonces fuertes indicios que el pluralismo era una arma cada vez más débil, e hizo una tímida impresión en Garzarón y en el fiscal. No se puede aquí probar que los dos se adhirieron a una interpretación exclusivamente legalista, es decir, basado sólo en las leyes reales, pero sí que aquellas leyes jugaron el rol principal para juzgar a los ministros de la audiencia.

Mientras tanto en un contexto distinto, Tamar Herzog argumenta que las "reglas dominantes en Quito eran sociales y teológicas, y no legales [...] y las reglas procedieron de otra fuente que el rey" (Herzog 2004: 9). En el

31 "No es atendible el que decidan las costumbres del Reyno o las Leyes patrias", Macanaz: "Los veinte y dos auxilios para el buen gobierno de una Monarquia [...]", Paris 29 August 1722, Memorial y Advertencia al Rey Felipe Quinto", Biblioteca de Aragón, Miscelánea, MS 141, f. 21-21v.

32 "Parecer", fiscal José de Laysequilla, Madrid, 14 de agosto de 1724, AGI, Escribanía de Cámara 287B, "pza. 39", ff. 1-1v, 133.

33 "Sentencia definitiva", Madrid, 7.7.1725, AGI, Escribanía 287B, "pza 39 escripturas presentadas en la ultima instancia", ff. 132-135, 136, 142.

caso de la Nueva España visitada por Garzarón, difícilmente podría sostenerse una visión similar. El visitador se basó en las leyes promulgados por la Corona. No había una clara distinción entre visiones de justicia de la sociedad local y la del visitador. Garzarón necesitaba respaldo político local para sus veredictos y sólo pudo reunir una gran cantidad de testigos dispuestos a declarar contra los ministros porque partes de la sociedad compartían su visión. El visitador no actuaba por encima de la sociedad, sino forjaba alianzas con la sociedad local para conseguir sus metas.

Conclusión

En este artículo se yuxtaponen dos conceptos, o más bien, dos tipos ideales, de la corrupción del antiguo régimen. La falta de origen social esclarecido, la "sangre manchada" por herejes o gente no-blanca, el trabajo vil y manual tanto como el manejo del dinero eran reprochables. Tales personas iban a actuar de manera viciosa en las magistraturas, y por lo tanto eran corruptas y violaban los principios de la justicia distributiva, basada en los nombramientos por mérito. El mérito tradicional se definía por la limpieza de sangre, la nobleza, y por los servicios, del candidato o sus antepasados, de armas, estudios universitarios cumplidos, o en el ejercicio de cargos públicos. Más que todo, las élites estamentales, como la aristocracia, el alto clero, o los juristas predominantemente procedentes del patriciado municipal de Castilla, sostuvieron tal concepto. Sin embargo, cuando la economía de gracia disminuyó al fin del siglo XVII y los pensadores ilustrados reemplazaron cada vez más a los protagonistas del aristotelismo y del tomismo en el discurso público, también se debilitó la justicia distributiva. En esa medida avanzó la idea de la corrupción como violación de las leyes de Castilla e Indias gobernando la actuación en el cargo público. Grupos burgueses económicamente exitosos forjaron una alianza con protagonistas del poderío real para dar más vigencia al concepto de la corrupción performativa en cambio por el más fácil acceso a cargos importantes. Juntos dejaron de lado la corrupción basada en el origen social.

Es imprescindible entender la transformación de la corrupción sin imputarle ideas modernas. No se debería asumir que la corrupción tenía la conotación actual, ni que tal concepto no se empleaba por ser ajeno a la moralidad de tiempos distintos. Más bien coexistían sentidos distintos de corrupción dentro de un sistema jurídico y moral del antiguo régimen

en proceso de cambio. Según la hipótesis aquí propuesta, los representantes estamentales como Pedro de Portocarrero y Guzmán lamentaron la corrupción de los tribunales y tenían razón en que los jueces del nuevo perfil se basaban menos en la justicia distributiva vinculada al pluralismo judicial. Para Portocarrero y Guzmán, menospreciar esta forma de justicia también era corrupto. Mientras tanto, los protagonistas del poder real favorecían las leyes de Castilla e Indias como pauta de la justicia y criticaron la abundancia y confusión del pluralismo. Este argumento muestra cuán difícil es juzgar si la corrupción debilitó el estado del antiguo régimen. La venta de cargos corrompía la justicia según la visión innatista, pero hasta ahora no hay evidencia de que los compradores ignoraran las leyes reales o aceptaran sobornos más que los jueces nombrados por criterios tradicionales. Por lo cual, este análisis pone en tela de juicio la visión historiográfica –ya algo obsoleta– de la decadencia (véase Storrs 2006: 10-14) tanto como de la corrupción del imperio español al fin del siglo XVII causada por la masiva venta de cargos de justicia a partir de 1675.

Bibliografía

Andrien, Kenneth J. (1994): "Corruption, Self-Interest, and the Political Culture of Eighteenth-Century Quito". En: Matthews, Richard K. (ed.): *Virtue, Corruption, and Self-Interest. Political Values in the Eighteenth Century*. Bethlehem: Lehigh University Press, pp. 270-296.

Andújar Castillo, Francisco (2004): *El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII*. Madrid: Marcial Pons.

Antúnez Portugal, Dominico/Domingo (1673): *Tractatus de donationibus jurium et bonorum regiae coronae*. 2 vols. Lisboa: Ioannis a Costa.

Aquino, Tomás de (2001): *Suma de Teología.* Dirigida por los regentes de estudios de las provincias de Dominicos de España, presentación Damián Byrne, 4ª ed. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

Asch, Ronald/Emich, Birgit/Engels, Jens Ivo (2011): *Integration, Legitimation, Korruption, Politische Patronage in Früher Neuzeit und Moderne*. Frankfurt: Peter Lang.

Baskes, Jeremy (2000): *Indians, Merchants, and Markets. A Reinterpretation of the repartimiento and Spanish-Indian Economic Relations in Colonial Oaxaca, 1750-1821.* Stanford: Stanford University Press.

Bertrand, Michel (2011): "Viejas preguntas, nuevos enfoques: la corrupción en la adminstración colonial española". En: Andújar Castillo, Francisco/del Mar Felices de la Fuente, María (eds.): *El poder del dinero. Ventas de cargo y honores en el Antiguo Régimen.* Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 46-62.

Bianchini, Janna (2012): *Queen's Hand: Power and Authority in the Reign of Berenguela of Castile.* Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Bodin, Jean (1590): *Los seis libros de la republica traducidos de la lengua Francesa, y enmendados Catholicamente: por Gaspar de Añastro Ysunza, thesorero general de la Serenisima Infanta de España Doña Catalina, Duquesa de Savoya al principe nuestro señor*. Torino: Herederos de Bevilaqua.

Böttcher, Nikolaus (2011): "Inquisición y limpieza de sangre en Nueva España". En: Böttcher, Nikolaus/Hausberger, Bernd/Hering Torres, Max S. (eds.): *El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico.* México, D.F.: El Colegio de México, pp. 187-217.

Burkholder, Mark A. (2013): *Spaniards in the Colonial Empire. Creoles vs. Spaniards?* Chichester: Wiley & Blackwell.

Burkholder, Mark A./Chandler, D. S. (1977): *From Impotence to Authority: the Spanish Crown and the American Audiencias, 1687-1808.* Columbia: University of Missouri Press.

Büschges, Christian (2005): "Don Quijote in Amerika. Der iberoamerikanische Adel von der Eroberung bis zur Unabhängigkeit". En: Edelmayer, Friedrich/Hausberger, Bernd/Potthast, Barbara (eds.): *Lateinamerika 1492-1850/70.* Wien: ProMedia, pp. 154-170.

Castillo de Bobadilla, Gerónimo (1616) [original de 1597, reimpreso 1704]: *Politica para corregidores y señores de vasallos en tiempo de paz y de guerra, y para juezes eclesiasticos, y seglares, y de sacas aduanas, y de residencias y sus oficiales, y para regidores y abogados, y del valor de los corregimientos y goviernos realengos y de las ordenes*. Barcelona: Gerónimo Margarit.

Dedieu, Jean-Pierre (1997): "La haute administration espagnole au XVIII[e] siècle. Un projet". En: Descimon, Robert/Schaub, Jean-Frédéric/Vincent, Bernard (eds.): *Les figures de l'administrateur. Institutions, réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au Portugal 16[e]-19[e] siècle.* Paris: EHESS, pp. 167-180.

Droste, Heiko (2002): "Patronage in der frühen Neuzeit – Institutionen und Kulturformen". En: *Zeitschrift für historische Forschung* 30, pp. 555-590.

Duden (2010): *Duden Recht A-Z. Fachlexikon für Studium, Ausbildung und Beruf*. 2ª ed. Mannheim: Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus.

Fernández de Otero, Antonio (1732): *Tractatus de Officialibus Reipublicae, necnon oppidorum utriusque Castellae, tum de eorundem electione, usu, exercitio. Opus non solum tironibus, sed etiam magistris pernecessarium, duplici indice, capitum scilicet, & rerum locupletatum. Editio Tertia, auctior et accuratior*. Colonia (Genève): Fratres de Fonties.

Garriga, Carlos (2006): "Sobre el gobierno de la justicia en Indias (siglos XVI-XII)". En: *Revista de Historia del Derecho* 34, pp. 67-160.

González Alonso, Benjamín (1978): "Estudio preliminar". En: Martín-Retortillo, Sebastián (ed.): Castillo de Bobadilla, *Politica para corregidores y señores de vasallos en tiempo de paz y de guerra, y para juezes eclesiasticos, y seglares, y de sacas aduanas, y de residencias y sus oficiales, y para regidores y abogados, y del valor de los corregimientos y goviernos realengos y de las ordenes*, facsímile. Madrid: Instituto de Estudios de Adminstración Local, pp. 7-34.

Grüne, Niels (2010): "'Und sie wissen nicht, was es ist': Ansätze und Blickpunkte historischer Korruptionsforschung". En: Grüne, Niels/Slanička, Simona (eds.): *Korruption. Historische Annäherungen an eine Grundfigur politischer Kommunikation*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 11-34.

Hausberger, Bernd (2011): "Limpieza de sangre y construcción étnica de los vascos en el imperio español". En: Böttcher, Nikolaus/Hausberger, Bernd/Hering Torres, Max S. (eds.): *El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico.* México: El Colegio de México, pp. 77-111.

Hering Torres, Max S. (2011): "Limpieza de sangre en España. Un modelo de interpretación". En: Böttcher, Nikolaus/Hausberger, Bernd/Hering Torres, Max S. (eds.): *El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico.* México: El Colegio de México, pp. 29-62.

Herzog, Tamar (2004): *Upholding Justice. Society, State, and the Penal System in Quito (1650-1750)*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Hespanha, António Manuel (1993): "Les autre raisons de la politique. L'économie de la grâce". En: Schaub, Jean-Frédéric (ed.): *Recherche sur l'histoire dans le monde ibérique*. Paris: Presses de l'École Normale Supérieure, pp. 67-86.

— (1997): "Paradigmes de légitimation, aires de gouvernement, traitement administratif et agents de l'administration". En: Descimon, Robert/Schaub, Jean-Frédéric/Vincent, Bernard (eds.): *Les figures de l'administrateur. Institutions, réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au Portugal 16e-19e siècle.* Paris: EHESS, pp. 19-28.

— (2006): "Porque é existe e em que é que consiste um direito colonial Brasileiro?" En: França Paiva, Eduardo (ed.): *Brasil-Portugal. Sociedades, culturas e formas de governar no mundo portugés (séculos XVI-XVIII)*. São Paulo: Annablume, pp. 21-41.

Israel, Jonathan I. (2001): *Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750.* Oxford: Oxford University Press.

Jiménez Arias, Diego (1792): *Lexicon ecclesiasticum latino-hispanicum: Ex sacris Bibliis, conciliis, pontificum decretis, ac theologorum placitis*.... Girona: Narcissum Oliva.

Juan, Jorge/Ulloa, Antonio de (1826): *Noticias secretas de America : sobre el estado naval, militar, y politico de los reynos del Perú y provincias de Quito, costas de Nueva Granada y Chile, gobierno y regimen particular de los pueblos de Indios, cruel opresión y extorsiones de sus corregidores y curas, abusos escandalosos introducidos entre estos habitantes por los misioneros, causas de su origen y motivos de su continuación por el espacio de tres siglos escritas fielmente segun las instrucciones del excelentisimo Señor Marqués de la Ensenada, primer secretario de estado y presentadas en informe secreto á S. M. C. el señor don Fernando VI*. London: R. Taylor.

Klaveren, Jakob van (2002): "Corruption as a Historical Phenomenon". En: Heidenheimer, Arnold J./Johnston, Michael (eds.): *Political Corruption. Concepts & Contexts*. New Brunswick: Transaction Publishers, pp. 83-94.

— (1957): "Die historische Erscheinung der Korruption, in ihrem Zusammenhang mit der Staats- und Gesellschaftsstruktur betrachtet". En: *Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* 44, 4, pp. 289-324.

Konetzke, Richard (ed.) (1953-1962): *Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica, 1493-1810*, 3 vols. Madrid: CSIC.

Lancina, Juan Alfonso de (1687): *Commentarios politicos a los Annales de Cayo Vero Cornelio Tacito dirigidos al Excelentissimo Señor Don Manuel Joachin Garcia Alvarez de Toledo y Portugal Cordova Zuñiga Pimentel Monroy y Ayala, Conde de Oropesa*. Madrid: Oficina de Melchor Álvarez.

Lira, Andrés (2006): "Dimension jurídica de la justicia. Pecadores y pecados en tres confesionarios de la Nueva España, 1545-1732". En: *Historia Mexicana* 220, pp. 1139-1179.

Llombard Rosa, Vicent (2000): "El pensamiento económico de la Ilustración en España (1730-1812)". En: Fuentes Quintana, Enrique (ed.): *Economía y economistas españoles. Vol. 3. La Ilustración*. Barcelona: Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, pp. 7-89.

Llorente, Mercedes (2013): "Mariana of Austria's Portraits as Ruler-Governor and *Curadora* by Juan Carreño de Miranda and Claudio Coello". En: Cruz, Anne J./Galli Stampino, Maria (eds.): *Early Modern Habsburg Women: Transnational Contexts, Cultural Conflicts, Dynastic Continuities*. Brookfield: Ashgate, pp. 197-222.

Loupès, Philippe/Dedieu, Jean-Pierre (1998): "Pouvoir et vénalité des offices en Espagne. Corregidores et échevins, un groupe médian?" En: Cassan, Michel (ed.): *Les officiers "moyens" à l'époque moderne: pouvoir, culture, identité*. Limoges: Presses universitaires de Limoges.

Machiavelli, Niccolò (1967): *Il Principe, e pagine dei Discorsi e delle Istorie*, ed. Luigi Russo. Firenze: Sansoni.

McFarlane, Anthony (1996): "Political Corruption and Reform in Bourbon Spanish America". En: Little, Walter/Posada-Carbó, Eduardo (eds.): *Political Corruption in Europe and Latin America*. London: Macmillan, pp. 41-64.

MacLachlan, Colin M. (1988): *Spain's Empire in the New World. The Role of Ideas in Institutional and Social Change*. Berkeley: UCLA Press.

Mazín, Oscar (2011): "La nobleza ibérica y su impacto en la América española: tendencias historiográficas recientes". En: Böttcher, Nikolaus/Hausberger, Bernd/Hering Torres, Max S. (eds.): *El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico.* México: El Colegio de México, pp. 63-76.

Mendo, Andrés (1662): *Príncipe Perfecto y Ministros Aiustados, Documentos Políticos y Morales. En Emblemas.* León/Lyon: Horacio Boissat/George Remeus.

Moutoukias, Zacarias (1997): "Una forma de oposición: el contrabando". En: Flynn, Dennis O./Giráldez, Arturo (eds.): *Metals and Monies in an Emerging Global Economy. An Expanding World. The European Impact on World History 1450-1800.* Aldershot: Variorum, pp. 19-54.

"Original Sin" (2009). En: Cross, F. L./Livingstone, E. A. (eds.): *The Oxford Dictionary of the Christian Church*. Oxford: Oxford University Press. <http://www.oxfordreference.com> (2.3.2015).

Otto, Jonathan (2009): "Tiraquellus, Andreas (André Tiraqueau)". En: *The Oxford International Encyclopedia of Legal History.* Oxford: Oxford University Press. <http://www.oxfordreference.com> (1.10.2014).

Phelan, John L. (1967): *The Kingdom of Quito in the Seventeenth Century: Bureaucratic Politics in the Spanish Empire.* Madison: University of Wisconsin Press.

Pietschmann, Horst (1997): "Corrupción en las Indias Españolas: Revisión de un debate en la historiografía sobre Hispanoamérica colonial". En: *Memorias de la Academia Mexicana de la Historia* 40, pp. 39-54.

— (2013): "'Corrupción' en el virreinato novohispano: un tercer intento de valoración". En: *e-Spania. Revue interdisciplinaire d'études hispaniques médievales et modernes.* <http://e-spania.revues.org/22848> (13.12.2013).

Portocarrero y Guzmán, Pedro (1700): *Theatro monarchico de España que contiene las mas pvras, como catholicas, maximas de estado, por las quales, assi los principes, como las republicas, avmentan y mantienen sus dominios, y las causas que motivan su ruyna*. Madrid: Juan Garcia Infançon.

Peña Izquierdo, Antonio Ramón (2004): *La casa de Palma. La Familia Portocarrero en el Gobierno de la Monarquía Hispánica (1665-1700)*. Córdoba: Universidad de Córdoba.

Plumpe, Werner (2009): "Korruption. Annäherung an ein historisches und gesellschaftliches Phänomen". En: Engels, Jens Ivo/Fahrmeir, Andreas/Nützenadel, Alexander (eds.): *Geld-Geschenke-Politik. Korruption im neuzeitlichen Europa.* München: Oldenbourg, pp. 19-48.

Quevedo, Francisco de (1772): *Fortuna con seso. En Obras de D. Francisco de Quevedo Villegas, Caballero del Habito de Santiago, Secretario de S. M. y Señor de la Villa de la Torre de Juan Abad*. tomo 2. Madrid: Joachin Ibarra, pp. 479-567.

Real Academia Española (1732): *Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua* […]. Madrid: Real Academia.

Recopilación de leyes de los reynos de las Indias. Mandadas imprimir, y publicar por la Magestad Católica del Rey Don Carlos II. Nuestro Señor. Va dividida en tres tomos, con el Índice general, y al principio de cada tomo el Índice especial de los titulos que contiene. Madrid: Viuda de D. Joaquín Ibarra, 1741. Reimpresión Madrid: Consejo de Hispanidad, 1943.

Reinhard, Wolfgang (2003): *Geschichte der Staatsgewalt: Eine vergleichende Verfassungsgeschichte*. 3ª ed. München: C.H. Beck.

Rosenmüller, Christoph (2008): *Patrons, Partisans, and Palace Intrigues: The Court Society of Colonial Mexico, 1702-1710*. Calgary: University of Calgary Press.

Ruiz Torres, Pedro (2007): *Reformismo e Ilustración.* Vol. 5 de *Historia de España*. Madrid: Crítica/Marcial Pons.

Saxoferrato, Bartolus de [Sassoferrato, Bártolo de] (1590): *Omnium Iuris Interpretum Antesignani Comentaria Nunc Recens, praeter alias additiones ad hanc diem editas, Aureis Adnotationibus Iacobi Anelli De Bottis & Petri Mangrellae . Tomus octavus In secundam, atque tertiam Codici partem*. Venezia: Apud Iuntas.

Schwartz, Stuart (1973): *Sovereignty and Society in Colonial Brazil. The High Court of Bahia and its Judges, 1609-1751.* Berkeley: University of California Press.

Solórzano y Pereyra, Juan de (1972 [1629/1648, republicado Madrid: M. Sacristán 1736-1739]): *Política Indiana.* Amendada por Francisco Ramiro de Valenzuela. Madrid: Atlas.

Soto, Domingo de (1968): *De iustitia et iure libri decem. De la justicia y del derecho en diez libros,* facsimile, tomo 2. Trad. Marcelino González Ordóñez, intro. Venancio Diego Carro. Madrid: Instituto de Estudios Políticos.

Speer, Heino: *Rechtshistorische Notizen und Texte.* En: <http://drqerg.de/RHN/personen/> (20.9.2014).

Storrs, Christopher (2006): *The Resilience of the Spanish Monarchy, 1665-1700*. Oxford: Oxford University Press.

Suter, Andreas (2010): "Korruption oder Patronage? Außenbeziehungen zwischen Frankreich und der Alten Eidgenossenschaft als Beispiel (16. bis 18. Jahrhundert)". *Zeitschrift für Historische Forschung* 37, 2, pp. 187-218.

Torres de Lima, Luis (1654): *Compendio das mais notaveis cousas que no reyno de portugal acontecerão desde a perda del Rey D. Sebastião até o anno de 1627 com outras cousas tocantes ao bom governo, & diversidade d'Estados.* Coimbra: Officina de Manoel Dias.

Tau Anzoátegui, Victor (2000): "El poder de la costumbre. Estudios sobre el Derecho Consuetudinario en América hispana hasta la Emancipación". En: *Nuevas Aportaciones a la historia jurídica de Iberoamérica* [CD-Rom]. Madrid: Fundación Histórica Tavera/Hernando de Larramendi/Mapfre.

Tholosianus, Petrus Gregorius [Toulouse, Pierre Grégoire] (1642): *De republica libri sex et viginti: Antea en duos distincti tomos, nunc vno concise & artificiose comprehensi*. 3ª ed. Frankfurt: Typis Matthæi Kempfferi, sumpt[i]bus Philippi Jacobi Fischeri.

Thompson, I.A.A. (2012): "*Do ut des*: La economía política del 'servicio' en la Castilla moderna". En: Esteban Estríngana, Alicia (ed.): *Servir al rey en la Monarquía de los Austrias. Medios, fines y logros del servicio al soberano en los siglo XVI y XVII.* Madrid: Silex.

Vallejo García-Hevia, José María (2008): *Juicio a un conquistador. Pedro de Alvarado*. Madrid: Marcial Pons.

Waquet, Jean-Claude (1991): *Corruption. Ethics and Power in Florence, 1600-1770.* University Park: Pennsylvania State University Press.

Weimar, Peter (2009): "Bartolus of Saxoferrato". En: Katz, Stanley N. (ed.): *The Oxford International Encyclopedia of Legal History.* Oxford: Oxford University Press. <http://www.oxfordreference.com> (24.2.2015).

Zapata y Sandoval, Juan (1994-1995 [1630]): "Disceptación sobre justicia distributiva y sobre la acepción de personas a ella opuesta". Vol. 1: *Sobre la justicia conforme a sí misma*. Vol. 2: *En qué cosas tiene lugar la acepción de personas y la injusta distribución de los bienes*. Traducción del latín de Arturo Ramírez Trejo, edición de Paula López Cruz y Mauricio Beuchot Puent. México: UNAM.

Zevallos, Geronymo de (1623): *Arte Real para el buen govierno de los Reyes, y Principes, y de sus vassallos, en el qual se refieren las obligaciones de cada uno, con los principales documentos para el buen govierno. Con una tabla de las materias, reduzidas a trezientos Aforismos de Latin y Romance. Dirigido a la catolica magestad del Rey don Felipe IIII. N. S. Monarca y Emperador de las Españas, no reconiciente superior en lo temporal. Por el licenciado Geronymo de Zevallos, Regidor de la Imperial ciudad de Toledo en el vanco, y assiento de los Cavalleros, y unico Patron del Monasterio de los Descalços Franciscos de la dicha ciudad.*. Toledo: A costa de su autor.

Un interinato contra las prácticas corruptas en Acapulco. El castellano Teodoro de Croix al arribo del galeón *San Carlos de Borromeo* (1766)[1]

Guadalupe Pinzón Ríos

La ruta transpacífica que unió a Nueva España con las islas Filipinas desde sus orígenes en el siglo XVI tuvo relevancia para la economía novohispana pues ofreció la posibilidad de llevar a cabo transacciones mercantiles con cierta autonomía con respecto al comercio practicado por el Atlántico. El hecho de que este tráfico se incrementara rápidamente llevó a que desde el mismo siglo XVI las autoridades metropolitanas implementaran una serie de limitantes con la esperanza de reducir las remesas de plata americana a territorio asiático, pero estas lo que provocaron fue la práctica de actividades ilícitas en las cuales participaron con regularidad las propias autoridades tanto de los galeones como de Acapulco. Si bien constantemente se dictaron ordenanzas que prohibían esas corruptelas fue hasta el siglo XVIII cuando se tomaron medidas más severas para combatirlas, en especial tras la visita general de José de Gálvez y del nombramiento de Teodoro de Croix como castellano interino de Acapulco. El objetivo de este texto es analizar las acciones tomadas por el caballero Croix durante su primer año como castellano a partir de los informes y registros que se generaron al arribo del galeón *San Carlos de Borromeo* en 1766. Esto se debe a que su paso por el puerto y sus acciones para reducir los contrabandos e incrementar los ingresos del erario real dejaron ver diversos niveles de corrupción existentes en Acapulco en el que participaron los propios oficiales del lugar. Es decir que aunque anteriormente esta situación se había denunciado, fue hasta la llegada del caballero Croix cuando se tomaron acciones más estrictas y se hicieron revisiones más profundas sobre los irregulares tratos y contratos practicados en Acapulco al arribo de los galeones, pero sobre

1 Este trabajo se realizó en el marco del proyecto PAPIIT N402114 "Nueva España: puerta americana al Pacífico asiático (siglos XVI-XVIII)".

todo se evidenció de mejor forma la manera en la que las autoridades locales estaban directa o indirectamente envueltas en ellas.

En el caso de Acapulco, hay que entender que las ilegalidades no pueden separarse de los contrabandos, pero estos en general eran practicados por particulares involucrados en el comercio del lugar que simplemente incumplía, o se desviaban, de las ordenanzas establecidas.[2] Sin embargo, lo que llegaba a considerarse corrupción era la postura maliciosa de las autoridades del puerto pues fueron sus disimulos o bien su participación en las ilegalidades los que permitieron defraudar al erario real. Esto último era lo que más debía modificarse pues las autoridades tenían la obligación de ver por el bien de la monarquía y resguardar sus intereses.[3] El tema de la corrupción en Acapulco ha sido considerado en otras investigaciones aunque de forma general cuando se hace referencia al galeón de Manila. Hay estudios que han puesto más énfasis en este asunto como se ve con el trabajo de Ostwald Sales quien ha analizado la visita de Pedro de Quiroga al puerto en 1635 así como la aprensión que hizo del cargamento del galeón, lo cual puso en peligro la continuidad del tráfico asiático, aunque finalmente fue restablecido ante la necesidad de mantener el situado filipino desde Nueva España (Sales 1997: 127-146; Sales 2000). Por otro lado, los intentos por reestructurar las llegadas de los galeones a Acapulco, así como algunos intentos por reducir los contrabandos en el lugar a partir de reglamentos y ordenanzas, ha sido estudiado por Carmen Yuste aunque en una perspectiva amplia que abarca todo el siglo XVIII (Yuste 2007: 316-337). Por otro lado, la figura de Croix ha sido más estudiada en relación a su nombramiento como comandante general de las Provincias Internas y también cuando fue a Perú a implementar el sistema de intendencias,

2 Según el *Diccionario de autoridades* (edición de 1729) el contrabando se liga a "contravención de alguna cosa que está prohibida por bando, publicado a voz de pregonero, en los lugares o sitios destinados para hacer público lo que el Príncipe quiere que se observe, o que no se ejecute. Contrabando es una dicción moderna, compuesta de la preposición Contra y de la voz Bando, no conocida de los Jurisconsultos. Es decir que no se obedece lo indicado en los bandos. Los contrabandos van de la mano con mercadería, ropa o géneros, es decir que se llama así a todo lo prohibido de introducir en estos Reinos, por ser de Países enemigos, con los cuales está cerrado el comercio". Ver <http://web.frl.es/DA.html> (2.3.2015).

3 Sobre el tema de la corrupción puede verse cómo Christoph Rosenmüller analiza las distintas discusiones que el término corrupción ha generado y las posturas que han llegado a tomarse al respecto (Rosenmüller 2008: 29-33). En este trabajo se intenta retomar su postura al explicar que se utiliza el término como una herramienta de análisis de un proceso político, que en este caso serán las medidas tomadas en Acapulco para reducir las evasiones fiscales y mejorar el control de la zona.

pero menos se ha hablado de él como castellano (Thomas 1968; Moreno 1967).[4]

Analizar las acciones de Croix es relevante pues sus acciones para reducir las irregularidades en Acapulco se insertan en un momento de transformaciones político-administrativas con las que se intentó sujetar de mejor forma a los virreinatos y a sus finanzas; además de ser un momento de cambios marítimo-comerciales que llevaron a la diversificación de contactos mercantiles, los cuales terminaron por desarticular las relaciones monopólicas tradicionales. Si bien la presencia y acciones tomadas por el castellano Croix tuvieron poca continuidad, al menos fueron un llamado de atención a las autoridades novohispanas y metropolitanas de lo que acontecía en el puerto, pero sobre todo fue una manera de mostrar a los comerciantes involucrados en los tratos del galeón las nuevas posturas de las autoridades que a la larga implicaron mayores cambios. De esta forma, el paso del caballero Croix por Acapulco permite conocer de mejor forma el momento coyuntural en el que comenzaron a llevarse a cabo cambios con el pretexto de combatir las prácticas ilícitas comúnmente llevadas a cabo en el puerto.

Primeros cambios

Hay que recordar que tras la llegada de los Borbones al trono español inició un proceso de cambio sobre las relaciones que tenía España con sus colonias de ultramar. Por un lado, ante la creciente presencia de otras potencias europeas en el Caribe, aunado a las incursiones que éstas llevaban a cabo por el Mar del Sur, (en ocasiones con el fin de capturar al galeón de Manila) se hizo necesario evaluar sus condiciones defensivas (Gerhard 1960; Pinzón Ríos 2011a). Por otro lado, para financiar esos cambios y

4 Sobre este personaje Roberto Moreno explica que venía de una familia noble flamenca, que desde los 17 ya servía en el ejército español y se desempeñó en lugares como Italia y Madrid. Para 1747 su tío Carlos Francisco Marqués de Croix lo incluyó en algunas de sus actividades y terminó al servicio del monarca, por eso cuando dicho marqués fue nombrado virrey de Nueva España llevó consigo a su sobrino, quien en 1766 fue nombrado capitán de la guardia virreinal de México. Teodoro de Croix permaneció al servicio de su tío incluso cuatro años más luego de que regresaron a España (1772-1776) pero posteriormente volvió al virreinato novohispano tras ser nombrado comandante general de las Provincias Internas (1776-1783). Este puesto lo dejó tras ser nombrado virrey de Perú (1783-1790). Finalmente Croix solicitó regresar a España por estar viejo y enfermo, lo cual le fue concedido (Moreno 1967: 17-31 y 83-137).

tener mayor noticia de ellos se planearon formas de mejorar la administración de los territorios de ultramar a partir de una mayor su sujeción y vigilancia. Para ello comenzaron a realizarse tanto descripciones de los territorios coloniales como a planearse ciertas modificaciones. Algunas de ellas fueron reestructurar el sistema de flotas con el Reglamento de 1720 (Lynch 1991: 128-138; Walker 1979:145-148), fomentar el uso de navíos de registro, crear compañías comerciales que traficaran con zonas no alcanzadas por las flotas (Lynch 1991: 110-112 y 138-139; Walker 1979: 26), reabrir los puertos centroamericanos de cara al Atlántico (Pérez Brignoli 1993: 45-51), intentos por permitir que el cacao guayaquileño se remitiera a Nueva España (Escamilla 2011: 125-126), financiar el situado de Florida con alcabalas de Puebla (Celaya Nández 2010: 271-298), entre otros. Estos paulatinos cambios derivaron en la reestructuración del comercio colonial en especial tras la aplicación del comercio libre desde 1765 (Fisher 1992: 172), la reapertura comercial entre virreinatos (Pinzón Ríos 2011b: 213-226; Bonialian 2011: 409-414) y la desaparición del sistema de flotas (Lynch 1991: 314-329).[5] En algunos casos los cambios planeados tuvieron continuidad y en otros sirvieron de muestra para nuevos proyectos. A recientes rechas algunos autores han llamado a este proceso primer reformismo borbónico pues los cambios (discutidos, aplicados, exitosos y no) sentaron las bases de los llevados a cabo hacia la segunda parte del Setecientos. Al respecto Ernest Sánchez Santiró sugiere que fue durante las décadas de 1720 a 1750 cuando se experimentó un primer embate reformista que tuvo por objetivo lograr mayores ingresos, control del gasto ordinario local y remisión creciente de remesas para la metrópoli, además de que fue hacia 1751 cuando se representó la culminación de una primera etapa en el reformismo fiscal de los Borbones en Nueva España el cual fue el precedente de los cambios llevados a cabo a partir de la década de 1760, durante el reinado de Carlos III (Sánchez Santiró 2013: 30-32).

En el caso del Pacífico novohispano, uno de los aspectos considerados por las autoridades metropolitanas durante la primera parte del Setecientos fue el comercio practicado a través del galeón de Manila. Desde su origen (1572) generó quejas por parte de los comerciantes andaluces que alegaban que su práctica afectaba los tráficos atlánticos ya que los géneros asiáticos inundaban el mercado novohispano e ilegalmente el peruano, lo

5 En 1778 se fue la última flota de la Nueva España; las de Tierra Firme habían desaparecido desde antes que iniciara la Guerra de la Oreja de Jenkins (1739-1748).

cual reducía las ventas de las mercaderías que llegaban en las flotas. Esto en gran medida se debía a que a pesar de que se había estipulado que los galeones únicamente llevaran 500 toneladas de carga y adquirieran plata con valor al doble de lo que había costado las mercaderías, eso fue algo que en múltiples ocasiones no se respetó. Era sabido que los galeones llevaban más géneros de los permitidos, que se registraban productos de gran calidad como de bajo costo para así pagar menos aranceles y que incluso los tripulantes rentaban a los comerciantes los espacios que se les asignaban. En estos tratos además estaban muy inmiscuidos los novohispanos, lo cual estaba prohibido pues el comercio transpacífico únicamente se había concedido a los vecinos de Manila para ayudarlos con su nuevo asentamiento (Yuste 2007: 21-44).

Cuando la dinastía Borbón ascendió al trono español se dictaron una serie de ordenanzas que intentaron regular el comercio asiático pues todavía se consideraba que éste era uno de los principales obstáculos del comercio atlántico ya que el galeón de Manila inundaba al mercado novohispano de mercancías orientales de mucho refinamiento y bajos precios. Incluso llegó a ordenarse que toda la seda que llegara de China fuese quemada públicamente para con ello permitir que los paños europeos tuvieran cabida. Lógicamente los habitantes de Filipinas, apoyados por las autoridades reales de las islas, protestaron vigorosamente ante la Corona española. Era evidente que el éxito en potencia del comercio entre Manila y Acapulco contrastaba vivamente con la creciente inoperancia de las flotas de Nueva España (Walker 1979: 204). De esta manera, la ruta transpacífica continuó realizándose y por tanto se siguieron practicando las irregularidades habituales.

En gran medida los excesos cometidos en el comercio del galeón se debían a la complicidad establecida entre comerciantes filipinos y mexicanos con funcionarios del puerto (Yuste 2007: 316-317). Dichos tratos se debieron al afianzamiento de las autoridades en la región, como lo sugiere el hecho de que desde principios del siglo XVIII y hasta 1760 la alcaldía mayor de Acapulco recayó en la misma familia de apellido Gallo.[6] Ade-

6 Hay que señalar que Acapulco dependía directamente del virrey, por lo que no contaba con un gobernador sino con un alcalde mayor (a diferencia de Veracruz que por recibir el nombramiento de ciudad contó con su propio gobernador). Éste debía residir en el castillo de San Diego y por ello se le llamó castellano. Sin embargo, la mayoría de las veces tanto el castellano como el resto de los oficiales reales del puerto sólo se trasladaban a él cuando llegaban los galeones y en su lugar se quedaban oficiales menores como los tenientes.

más, hubo poca movilidad de los oficiales reales de la Caja de Acapulco pues prácticamente entre 1747 y 1766 los mismos individuos ejercieron los cargos de contador, tesorero, oficial mayor, guarda mayor y escribano de Acapulco. Esta situación intentó combatirse desde que a principios de la centuria y hubo empeño por descubrir actividades dolosas y fraudes, pero pocos cambios pudieron llevarse a cabo.[7]

Obviamente la estrecha relación entre comerciantes y autoridades de Acapulco, así como los buenos ingresos de estos últimos, estaban íntimamente asociados a los tratos mercantiles y, sobre todo, a la consigna de ocultar y apartar de los documentos oficiales las anomalías en los registros de los cargamentos, así como en ignorar el manejo de las representaciones privadas del comercio. La forma de proceder por las que los comerciantes de Manila y México se ganaban a las autoridades del puerto era con regalos de preciadas piezas de seda china y finos muebles de marquetería japonesa que el castellano y oficiales reales elegían durante la visita administrativa a las casas donde los comerciantes filipinos colocaban sus mercancías. Generalmente las cargas de los galeones eran mayores a las permitidas, pero además era común que los comerciantes compraran a las tripulaciones sus espacios en las naves para llevar géneros de gran valor cuando ellos sólo podían cargar productos baratos con un valor no mayor a 30 pesos. Y otro aspecto que generaba críticas era la entrada ilegal de mercancías fuera de permiso y su conducción a casas de particulares donde se llevaban a cabo grandes permutas privadas sobre las cuales no quedaba ninguna manifestación ni rastro. Por otro lado, cuando se trataba de embarques de plata fuera de registro, los comerciantes involucrados (filipinos y mexicanos) contribuían con 5, 6, 7 y hasta 10 % sobre su valor que en lugar de acreditarse a la Real Hacienda del virreinato se adjudicaba al bolsillo de las autoridades del puerto, entre quienes se distribuía. En cuanto al almojarifazgo de salida (16,66 %) debía pagarse sobre el valor de la ganancia obtenida por la venta de las mercaderías (que en teoría era el doble del valor de la carga que había llegado), además del 10 % sobre la plata excedente. El método oficial de pago era que cada comerciante filipino presentara una declaración en donde manifestara lo que se pagaría de almojarifazgo y de forma separada lo que se pagaría por el monto individual de sus caudales. Pero

7 Yuste explica que llegaron a nombrarse nuevos castellanos como en 1761 se hizo con Juan Antonio Gutiérrez de la Vega, en 1764 con Fernando Monserrat y en 1766 con Teodoro de Croix, pero los miembros de la caja real de Acapulco se mantuvieron hasta 1770, lo cual dificultó las modificaciones planeadas (Yuste 2007: 320-321).

el método más utilizado era cargar el total de la plata que se presentaba al registro oficial pagando por fuera el gravamen correspondiente a las cargas personales, con lo cual se estaba embarcando un porcentaje adicional de plata y año con año salían cantidades significativas de caudales particulares no acreditados fiscalmente (Yuste 2007: 321-324).

Como ya se indicó, estos excesos quisieron evitarse desde inicios del siglo XVIII y para ello la Corona expidió cinco reglamentos que intentaron regular el comercio transpacífico. Dictados en 1702, 1720, 1726, 1734 y 1769 todos estos reglamentos prestaron especial atención al reparto de boletas o permisos para llevar a cabo comercio con Acapulco, pero al ser todos ellos diferentes en lugar de servir para establecer mejores controles generaron desórdenes, lo cual fue aprovechado por los comerciantes para no cumplirlos (Yuste 2007: 58-59). El caso del reglamento de 1734 fue especial pues fue el que se retomó durante el interinato de Teodoro de Croix, como más adelante se mencionará. Así que pese a los intentos mencionados, pocos fueron los cambios que se aplicaron a la ruta transpacífica durante la primera parte del Setecientos. Sin embargo, el detonante que cambio esta situación fue la Guerra de los Siete Años (1756-1763) pues tras la toma de La Habana y Manila a manos inglesas se cerraron los principales contactos marítimos de Nueva España y las escalas del comercio hispánico en general. Esto obligó a las autoridades peninsulares a implementar cambios más drásticos. En el caso de la Nueva España, se envió a José de Gálvez como visitador general pero, a diferencia de sus antecesores, él tuvo poder plenipotenciario para ordenar cambios incluso sin la venia del virrey, lo que lo hizo entrar en conflicto con el marqués de Cruillas. Sin embargo, éste pronto fue removido y se envió en su lugar al marqués de Croix, con quien Gálvez tuvo buen entendimiento y juntos aplicaron diversas ordenanzas en el virreinato. Una de ellas se relacionó con los puertos y entre sus objetivos estaba el llevar a cabo una serie de reformas administrativas para combatir la corrupción de los funcionarios fiscales (Jáuregui 1999: 68).

En el caso de Acapulco se envió al marqués de Rubí en 1765 para realizar una visita al puerto. Este funcionario llegó a Nueva España un año antes como parte de la misión militar comandada por Juan de Villalba, quien debía establecer formalmente un ejército en el virreinato (Archer 1983: 25-26). Casi desde su llegada a Nueva España a Rubí se le instruyó para que se trasladara a Acapulco y llevara a cabo el registro del galeón *Santa Rosa* que recién arribaba con noticias sobre la situación del archipiélago filipino tras

la ocupación inglesa.[8] Pero la inspección comprobó los vínculos existentes entre autoridades del puerto y los comerciantes mexicanos. Se revisaron las cajas de artilleros y grumetes y se vio que excedían el valor de su carga permitida por más de 60 mil pesos con mercancías que pertenecían a comerciantes filipinos. Además Ildefonso Ovalle, a quien el virrey Cruillas había encomendado llevar el navío *Santa Rosa* a Manila el año anterior, estableció en Acapulco una tienda de géneros asiático, actividad que tenía prohibido realizar. Pero pese a los informes enviados al virrey, Rubí no pudo intervenir y combatir estas acciones debido a que todos los efectos de Ovalle aparecían registrados a nombre de comerciantes de Manila, por lo que supuestamente eran oficiales aunque era evidente que se escondía una simulación. Así que la existencia del registro impidió a Rubí levantar una acusación sobre las irregularidades que detectó (Yuste 2007: 325-326). Su informe no obstante fue de utilidad pues sirvió de antecedente a las acciones tomadas por Teodoro de Croix.

Llegada y misión

Cuando José de Gálvez arribó al puerto de Veracruz pronto sustituyó a los principales funcionarios del puerto luego de ver que participaban en diversos contrabandos. Inmediatamente nombró a oficiales designados por la Real Hacienda, entre ellos Antonio de Cossío, para que se hicieran cargo del cobro de alcabalas así como del buen funcionamiento del lugar. Poco después el visitador también llevó a cabo las mismas acciones en Acapulco y suspendió de sus empleos a los oficiales reales, escribano, guarda mayor y juez de guías que anualmente se trasladaba al puerto. En su lugar se nombró a dos contadores del Tribunal de Cuentas para que con ministros de Real Hacienda hicieran las funciones de contador y tesorero de aquellas cajas.[9] También se destinó al guarda mayor de la capital dándole orden de elegir a cuatro subalternos de confianza que le ayudaran y estos tendrían la obligación de impedir las fraudulentas introducciones de géneros y ocultas extracciones de caudales. Y finalmente como nuevo castellano interino fue

8 La ocupación de Manila duró dieciocho meses y las fuerzas invasoras provinieron de Madrás (Lynch 1991: 284).

9 Archivo General de la Nación (AGN), Marina, vol. 27, f. 151-151v.

nombrado el sobrino del nuevo virrey, el caballero Teodoro de Croix,[10] removiéndose de su puesto al castellano Fernando Monserrat que a su vez era sobrino del marqués de Cruillas (Moreno 1967: 46). El nuevo virrey Marqués de Croix consideró prudente el nombramiento de su propio sobrino para eliminar las malas prácticas comunes en el puerto:

> […] y aunque por lo antecedente se ha considerado por el vulgo que hay en aquel puerto algunos motivos de corrupción por los intereses bien cierto de que no aplicará las más activas providencias a estarlos he nombrado a mi sobrino don Teodoro de Croix para este destino tanto porque quite cualquier abuso que perjudique el comercio de Filipinas cuanto porque continúe su mérito en este reino [...].[11]

A Teodoro de Croix se entregó una instrucción reservada donde se le indicaban algunos de los fraudes más comúnmente practicados y que en realidad iniciaban desde Filipinas. Incluso esto lo retomó el castellano un año después para hacer un informe en donde enlistaba algunos de los principales desórdenes del comercio transpacífico que iniciaban desde la entrega de boletas a los vecinos de Manila, así como con las escalas que se hacían a lo largo del canal de San Jacinto para introducir géneros no registrados, los cuales muchas veces terminaban desembarcándose en la bahía de San Blas con el pretexto de hacer aguada o bien en el puerto de la Navidad con el de dejar los pliegos reales y al gentilhombre.[12]

Croix no podía corregir los desórdenes al momento de cargar los galeones, pero sí denunciarlos. Por ello el castellano debía llevar a cabo la visita al galeón inmediatamente después de su arribo para así evitar que hubiera tiempo de cometer fraudes y poder aprender todo aquello que viniera fuera de registro, dándolo por comiso. Las cajas y fardos debían ser desembarcados con el libro de sobordo para así contabilizarlos pieza por pieza. En cuanto a las tripulaciones, debía revisarse que no llevaran géneros

10 Conocido o nombrado caballero por pertenecer a la Orden Teutónica (Thomas 1968: 17).

11 AGN, Correspondencia de Virreyes (Segunda Serie), vol. 11, f. 131.

12 AGN, Marina, vol. 28, ff. 259-266v. Hay que recordar que los galeones se acercaban a la costa de la Navidad (Nueva Galicia) para dejar el pliego donde se daba aviso de su próximo arribo a Acapulco. Esto era enviado con un gentilhombre que por tierra se trasladaba a la ciudad de México. Y luego de 1768 que se fundó el departamento marítimo de San Blas paulatinamente los galeones hicieron escala en el lugar para llevar a cabo reparaciones pues se contaba con astillero y personal marítimo más completo que en Acapulco, lo cual poco a poco sirvió para llevar a cabo transacciones ilícitas (Pinzón Ríos 2011b: 228-231 y 245-255).

exquisitos ni que excedieran las cantidades que les estaban permitidas, por lo que se revisarían primero las cajas de soldados y marinos, así como baúles, petacas y otras piezas de equipaje de oficiales, mercaderes y pasajeros; de haber en ellas mercaderías éstas debían ser decomisadas (Pinzón Ríos 2011b: 229-230). Eran tantas las formas usadas para introducir géneros en Acapulco que el castellano debía describirlas para dar mejor cuenta de ellas:

> […] estos las ocultan regularmente poniendo géneros y efectos en cajas que traen cubiertas con mantas o bombacies. En tinas que llaman balsas traen loza china que sirve para disimular las mercaderías encubiertas, y en tinajas y cajones poniendo encima semillas, menestras y frutas secas de rancho, por lo que se hace preciso registrar todas estas piezas y otras de igual clase […].[13]

Pero además de vigilar a las embarcaciones era necesario poner atención en la gente de tierra, así que debía observarse que los habitantes del puerto no cometieran las habituales irregularidades como era acercarse al galeón de noche o con naves pequeñas, por lo que se prohibió que salieran embarcaciones de cualquier tipo por las fechas del arribo de la nao y además se ordenó vigilar varias leguas de costa para evitar dichas navegaciones. Esto porque se sabía que se hacían salidas maliciosas para sacar cargas del galeón en pequeñas lanchas y que las poblaciones locales ayudaban a esconderlas, acciones en las que las autoridades locales no habían hecho mucho caso (Moreno 1967: 48). También se ordenó que los vecinos o forasteros que ocurrieran por mar o tierra al puerto no se acercaran al bordo del galeón sin expresa licencia ni recibieran u ocultaran géneros o mercaderías de las que condujeren para embarcarlos en la nao. Indicó también que se publicaran bandos que informaran lo anterior para que no se alegara ignorancia. Esos bandos también debían remitirse a pueblos, ranchos o estancias de la jurisdicción, especialmente los de la banda sur de Acapulco pues esa era la costa por donde se detenía el galeón regularmente dos o tres días antes de llegar al puerto. Para evitar esto también debían enviarse guardas y soldados con la orden de evitar que el galeón entrara en alguna bahía, puerto o surgidero de la costa como se había verificado en varias ocasiones con el fin de arrojar a tierra lo que venía fuera de registro. Parece que también era común que cuando llegaba el galeón arribaban nave de la California y

13 AGN, Marina, vol. 27, f. 156v.

algunas veces incluso de Guatemala o Perú, lo cual debía evitarse "por estar prohibido el comercio de ropas de china en todos ellos".[14]

A Croix le tocó recibir a dos galeones. El primero, el *San Carlos de Borromeo*, llegó en 1766 y fue en el que más acciones se tomaron para revisar la carga, detectar irregularidades y en realidad la que puso en jaque a los comerciantes. Es de esta revisión donde más se puede sacar información de las prácticas fraudulentas. Posteriormente en 1768 llegó el galeón *Santa Rosa* y Croix procedió de la misma manera que en el anterior arribo aunque hubo menos detenciones por haber menos envíos por parte de comerciantes filipinos (Yuste 2007: 333-334; Moreno 1967: 52-55).

Revisión de cargas y aranceles

Cuando Croix se hizo cargo del arribo del galeón *San Carlos de Borromeo* se basó en el Reglamento de 1734 pues en 1760 se expidió una ordenanza donde se indicaba al virrey marqués de Croix y al gobernador de Filipinas don Simón de Anda y Salazar que se apegaran a él (Fonseca/Urrutia 1978 [1845]: T. IV, 515-516). Dicho reglamento tenía diversos puntos que fueron contemplados estrictamente por el castellano. Algunos de ellos fueron:

a) Excluir de manera absoluta la regulación del permiso de comercio por piezas, mandando que las manifestaciones y avalúos de la carga se hicieran por facturas presentadas ante la Contaduría de Manila con el juramento solemne de no contener más de lo que expresaban y no ser ninguna porción de ellas pertenecientes a vecinos de Nueva España ni a otra persona no autorizada en el comercio transpacífico.
b) Que la numeración de los comerciantes o libro de repartimiento lo hiciera la ciudad de Manila, sin intervención de ninguna autoridad de las islas, incluyendo en ella a los militares o de otra profesión que residieran en el puerto de Cavite.
c) Que las personas que no pudieran emplear mercancías debían regresar su espacio de carga a la Junta de Repartimiento para que ésta la repartiera justificadamente entre los demás comerciantes, vecinos y naturales de Filipinas, con excepción de las viudas y los po-

14 AGN, Marina, vol. 27, ff. 151-162.

bres que sí podían ceder su acción a cualquiera de los comerciantes competentes que estuviera inscrito en el libro de repartimiento.

d) Que una vez realizada la numeración de los vecinos de Manila fuera la Junta de Repartimiento la encargada de distribuir las toneladas a embarcar entre los nominados sin incluir por ningún pretexto ni simulación a los ministros eclesiásticos, seculares o regulares, ni a forasteros residentes en las islas.
e) Realizado el reparto del permiso de comercio, los interesados debían concurrir a la Junta de Avalúos, formada por dos diputados del comercio, dos oficiales reales y el fiscal de la Audiencia, para dictaminar el valor de los embarques.
f) Asimismo, expresaba que a la tripulación de los galeones, con excepción de los oficiales, se les permitiera embarcar como permisión una caja que no excediera su contenido al valor de 30 pesos, pagando los mismos derechos que el resto de los embarques (Yuste 2007: 61).[15]

Lo anterior sobre todo llevó a que los funcionarios de Real Hacienda de México que fueron enviados a Acapulco, don Antonio de Mier y don Juan Baptista de Lecumberri, en primer lugar consideraran que los desórdenes en el comercio transpacífico en gran medida eran resultado de las irregularidades practicadas en Manila pues ahí las cargas se avalúan no por sus facturas sino por piezas "pero con un modo tan simulado que parece que se ejecuta como previene el reglamento y en la realidad se hace por piezas".[16] Pero para poder aplicar el reglamento, así como algunas órdenes dictadas en 28 de enero y 3 de marzo de 1764, era necesario dar aviso a los comerciantes sobre la manera en la que se procedería al momento de hacer la descarga. Así que Croix ordenó se notificara a los comerciantes del galeón que se prepararan a exhibir las facturas originales de sus respectivas consignaciones, y en caso de negarse se cobrarían multas de dos mil pesos a los consignatarios que no lo ejecutaran. Cabe decir que esta medida no era nueva sino que se había intentado previamente, como se ve cuando el castellano Fernando de Monserrat avisó que en el galeón de 1764 había cuatro piezas sin registro, por lo que se notificó a los comerciantes que en

15 Original de este reglamento puede verse en Fonseca/Urrutia 1978 [1845]: T. IV, 484-516.

16 AGN, Marina, vol. 24, f. 363-363v.

lo sucesivo debían abrir todas las piezas con facturas; sin embargo, éstos se negaron a hacerlo pues lo que se había practicado generalmente era valuar las piezas por las medidas de todas sus calidades. Luego de consultar al fiscal Joseph Gorraez, éste respondió que debido a que era cada vez más común encontrar más piezas de las registradas se hacía necesario ver el valor de todas, por lo que en lo sucesivo había de abrirse los bultos; sin embargo, como lo habitual era el medir las piezas que ya venían arregladas desde Manila no pudieron cambiar dicha práctica. Eso llevó a que generalmente la autoridad del puerto se contentaran con valuar los volúmenes de la carga por estar prohibido abrir los fardos. Esto fue consultado al mismo virrey Marqués de Cruillas quien también estuvo de acuerdo en que las regulaciones de la carga de los galeones se hicieran por facturas y no por piezas. Pese a que no fue aplicado, dicha discusión fue revisada y retomada por Croix.

Por supuesto los comerciantes se opusieron a la orden de Croix e hicieron junta general en la que acordaron no entregar las facturas pues alegaban que con ellos se perjudicaban sus intereses.[17] Redactaron una misiva donde se negaban a presentar las facturas y que se las rubricaran las autoridades pues eso violaba las exenciones que se habían concedido al comercio de Manila.[18] Pese a sus quejas, los comerciantes tuvieron que exhibir sus facturas y comenzaron a detectarse anomalías, Por ejemplo, entre las facturas entregadas por Manuel Antonio Ruano había 30 piezas de carga pertenecientes a don Manuel Suarez López, quien se retiraba a España: pero este caso significaba que se estaba cometiendo una irregularidad pues se prohibía el comercio de las islas a aquellos que no fueran vecinos de ellas. Aunque Suárez López había sido oficial en las cajas de Manila ya no residía en el lugar, por lo que quedaba fuera de dicha permisión y su carga debía ser decomisada. Esto fue aceptado por las autoridades de México pues no constaba que Suárez López fuese oficial real en aquellas cajas.[19] Por otro lado, a los comerciantes también se les ordenó mostrar las alhajas de oro o piedras preciosas que llevaran y no constaran en las facturas.[20] En general, se informó que en las facturas aparecían muchas piezas que según el reglamento debían ser comisadas pero eran tantas que de hacerlo no quedarían mercancías para llevar a cabo la feria. Esto en gran medida debido a que

17 AGN, Marina, vol. 24, ff. 246-253v.
18 AGN, Marina, vol. 24, f. 256.
19 AGN, Marina, vol. 24, ff. 262-264.
20 AGN, Marina, vol. 24, ff. 265-267.

las cargas no únicamente excedían cantidades sino también su calidad pues al parecer había piezas que eran de gran valor pero no fueron registradas así. Por eso se insistía en abrir algunos fardos para comprobar lo anterior y luego enviarlas cerradas a la capital si es que no había problema.[21]

La carga que fue considerada iba fuera de registro se compuso de 8 fardos y 20 cajas y cajones, los cuales fueron llevados a los almacenes reales. Además, también se encontraron alhajas de oro como bejuquillos, cajas, puños de bastón y algunos brillantes.[22] Dichas cargas posteriormente fueron rematadas en el mismo puerto (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Nota de los remates que se hicieron de los efectos que se debían vender en este puerto

Cantidad	Género	Cantidad de remate
294 arrobas 10 libras	Cera de 16 pesos cuatro reales	4.857 pesos 4 ½ reales
	Loza	4.600 pesos
1	Vajilla de metal de China entre fina	940 pesos
1	Envoltorio de cañas ordinarias	28 pesos
1	Cajoncito de tinta ordinaria	27 pesos 4 ½ reales
	Cabalonga	480 pesos 6 reales
	Peines	550 pesos
Importe total 11.483 pesos 7 reales		

Fuente: AGN, Marina 24, f. 243.

De esta forma se ve que las presiones ejercidas por el castellano y los nuevos oficiales del puerto llevaron a que los comerciantes se vieran obligados a mostrar sus facturas y con ello varias irregularidades quedaron al descu-

21 AGN, Marina, vol. 24, ff. 268, 271-271v.
22 AGN, Marina, vol. 24, ff. 356-357v.

bierto. Pero dichos comerciantes no fueron los únicos en ser sometidos a las exhaustivas revisiones.

Cajas de tripulaciones y de oficialidades

El tema de las cajas de tripulaciones también había sido discutido con antelación pues era común que los oficiales y mercaderes que venían en la nao introdujeran en ellas géneros exquisitos y que por tanto se excediera en demasía las cantidades permitidas.[23] Al mismo Marqués de Cruillas le tocó recibir informe sobre el tema y ante ello emitió órdenes diversas:

> […] avisándome el efectivo momento de las cajas artilleras, marineras y grumetes que condujese el navío sin que pierdan vuestra merced instante en asegurar con toda su vigilancia en la playa no se experimenten los dolorosos desordenes que ha permitido la omisión en los años anteriores [...].[24]

Las denuncias sobre estas prácticas fueron retomadas por el castellano Croix quien al arribo del galeón *San Carlos de Borromeo* intentó que las cajas de artilleros, marineros y grumetes fueran llevadas a los almacenes pues más bien debían ser consideradas como cajones de los comerciantes por llevar cargamentos de éstos.[25] Sugería además decomisarlas pues al parecer incluían más de los 30 pesos permitidos a las tripulaciones.[26]

Pero estas cajas no eran el único problema, sino que lo eran también las cajas de la oficialidad pues ellos generalmente llevaban cargamentos fuera de registro como si fueran mercancías para su uso personal. Incluso en el informe de Croix se explicó cómo era común que los oficiales de mar y guerra vinieran como consignatarios o compromisarios de las mercaderías, lo cual estaba prohibido. Además, mucha de la carga no era de vecinos de Manila, cuando ellos eran los únicos con licencia para cargar los galeones y eso hablaba de las negociaciones previamente establecidas. Y además, los permisos concedidos a los religiosos para que embarcaran efectos correspondientes a su estado y para provisión de sus misiones muchas veces

23 AGN, Marina, vol. 18, f. 156.
24 AGN, Marina, vol. 18, f. 28.
25 AGN, Marina, vol. 24, ff. 265-267.
26 AGN, Marina, vol. 24, ff. 356-357v.

también era vendido a los comerciantes.[27] Por ello el castellano Croix y los oficiales de guerra y mar del puerto pasaron oficio solicitando se les entregaran las cajas y petacas que la oficialidad había traído fuera de permiso sin exigirles derecho alguno o que se sujetaran a las mismas contribuciones de las piezas registradas.[28] A dicha oficialidad también se le ordenó colaborar en la presentación de las facturas, pero el general, el maestre de plata y otros oficiales de la nao se excusaron de hacerlo, por lo que el virrey ordenó al castellano Croix que decomisara todo aquello que les perteneciera y estuviera fuera de registro:

> […] procederá VS a obligar a todos los demás a que exhiban y manifiesten las facturas que traen, y en defecto de ellas a que presenten sus relaciones juradas del verdadero valor de los efectos que contienen las piezas y fardos registrados en Manila, para regular el legítimo importe de los reales derechos que deben contribuir y [sic] ficar de consiguiente la verdadera pertenencia de los mismos efectos de que se compone la carga de la Nao.[29]

Entre los desórdenes ligados a la oficialidad de los galeones estaba el hecho de que sus cargas en realidad pertenecían a comerciantes novohispanos, lo cual debía evitarse, como se indicaba en el artículo 3º del reglamento de 1734:

> […] y de no ser cosa alguna de los géneros comprendidos en ellas pertenecientes a vecinos y residentes en el reino de Nueva España, ni a otra persona alguna de las prohibidas en el comercio de Filipinas con dicho reino.(Fonseca/ Urrutia 1978 [1845]: T. IV, 489)

Ejemplo de esta situación fue el de don Joachin González del Rivero, general de la nao, quien dio frívolas respuestas respecto a las mercancías que llevaba pertenecientes a don Joseph González Calderón, vecino de la Nueva España pero que tenía comercio en las islas. El general declaró que sólo llevaba fuera de permiso 11 piezas de loza, 2 piezas de raso liso y 2 bastones con puño de oro, lo cual fue conducido a los reales almacenes. Luego añadió que aunque traía dos vajillas finas, una de metal y otra de loza, no eran para comerciar sino que eran de su uso personal. Pero esa misma tarde que declaró se bajó su equipaje y en 12 de las 20 tinajas que llevaban su marca

27 AGN, Marina, vol. 28, ff. 259-266v.
28 AGN, Marina, vol. 24, ff. 233-234.
29 AGN, Marina, vol. 24, f. 236v.

y se suponía contenían distintos comestibles se hallaron, bajo una ligera superficie de menestras, cera del peso común de 6 arrobas cada una y otras dos de loza. Además, entre los ranchos del general se hallaron dos cajones de loza y dos jacales, dos cajas de peines con bizcocho por encima, otro con vajillas de metal fina, otros dos de mercancías diversas y una capa de bizcochos encima, dos bolsas con diferentes piezas de metal, otro cajón cerrado y embreado que se juzgó ser de buenos efectos, y otro de loza fina. En cuanto al general y la solicitud que se le hizo para que mostrara sus facturas dijo que él llevaba 10 fardos pero que no podía manifestar factura por no serle conveniente. Se le insistió pero se negó nuevamente. Para Croix era evidente el perjurio de este oficial porque aseguraba no tener más géneros pero se descubrieron los arriba mencionados. Sin embargo, pese a los anteriores descubrimientos el general del galeón envió una queja al virrey sobre los retrasos que se le ocasionaban. Por su parte, el maestre de la nave hizo lo mismo que el capitán al excusarse de presentar las facturas de su carga. La misma postura tomaron don Vicente de Memije y don Juan Pablo de Lara. El castellano terminó escribiendo al virrey que estos personajes eran indignos por todas las ruindades que cometían.[30] Esto hacía aún más necesario obligar a mostrar las facturas:

> […] respecto a que por ellas se descubrirán a todas luces los enormísimos fraudes que para este camino padece la Real Hacienda pues me hallo bien informado que cada pieza contiene más de veintitantos de valor de la compra hecha en Manila y es necesario cortar de raíz abusos tan perniciosos.[31]

Los decomisos generaron correspondencia con reclamaciones. Así se vio cuando se avisó de las misivas enviadas por el apoderado de Francisco Xavier Ramírez, maestre de plata de la nave *San Carlos de Borromeo*, luego del comiso que se le hizo por llevar carga fuera de registro, pero éste alegaba que esto se hizo cuando se resistió a presentar sus facturas. Se preguntó en consulta al visitador general al respecto y éste consideró que al maestre se le debían cobrar dobles derechos por la carga para que pudiera ser liberada, pero los precios serían los que se indicaban en la factura, lo cual fue avisado al castellano.[32]

30 AGN, Marina, vol. 24, ff. 273-275v.
31 AGN, Marina, vol. 24, f. 275v.
32 AGN, Marina, vol. 24, f. 277-277v.

Estas acciones llevaron a que otros oficiales enviaran cartas donde explicaron por qué tanto ellos como los marineros excedieron sus cargas permitidas en sus baúles y cajas; esto lo hicieron a fin de solicitar que se les tratara con equidad y conmiseración. Así que se le ordenó al castellano proceder al cobro de aranceles pues lo más relevante era, además de evitar fraudes, asegurar derechos reales según la cuota que correspondía al verdadero valor de los géneros registrados. De dicho proceso debía excluirse el caso del maestre de plata Francisco Xavier Ramírez porque éste estaba siendo revisado por el propio visitador general.[33] Al hacer la revisión de la carga, los oficiales del puerto también encontraron que en la bodega del galeón había siete fardos y un cajoncito mediano fuera de registro, cuatro de los cuales pertenecían al maestre de dicha fragata Francisco Reina, mientras que el resto llevaban marca de San Agustín.[34]

Luego de dichas revisiones poco después se dio aviso de que había iniciado la entrega de las cargas y su remisión a la ciudad de México con sus guías correspondientes, mientras que la loza incautada se quedaría y sería vendida en el puerto por evitarse así que se perdiera en el camino; dicha carga, al igual que la cera, fueron subastadas.[35] Además, se avisó la celebración de pública almoneda de los efectos que iban fuera de registro.[36]

Los regalos

Otro de los aspectos a considerar era el de los regalos. Generalmente se llevaban cargas que como no serían vendidas no pagarían alcabala. Pero dichas cargas debían ir registradas por fardos o cajas, además de indicarse el remitente y destinatario. Había mercaderías enviadas a órdenes religiosas pero de cuándo en cuándo también se mencionaba a autoridades coloniales (ver cuadro 2). Sin embargo, como Carmen Yuste ha señalado, en el caso de los funcionarios del puerto sus regalos eran escogidos en el mismo lugar al momento de hacer las descargas (Yuste 2007: 321-324), lo que hace poco probable que se tenga registro de ellos.

33 AGN, Marina, vol. 24, ff. 331-332v.
34 AGN, Marina, vol. 25, f. 192-192v.
35 AGN, Marina, vol. 25, f. 338- 338v.
36 AGN, Marina, vol. 24, ff. 242-244v.

Cuadro 2: Razón de cajones de regalo que se embarcaron sin pagar derechos reales (1760)*

Carga	Remitente	Destinatario
2 cajones de la medida regular	R. P. Fr. Raphael de Aguilar de la Sagrada Orden de nuestro P. S. Juan de Dios y al cuidado de don Pedro Quijano	para entregar a su convento y Hospital de la Ciudad de México
2 cajones de la medida regular y media maqueta de cera	R. P. Fr. Sebastian Martinez de la orden de los hermitaños de nuestro P. S. Agustin y al cuidado de don Thomas Dotado	Hospicio de esta Nueva España
2 cajones de la medida regular	R. P. de las madres del Beaterio de Santa Cathalina de Zena al cuidado de don Joseph de Azevedo	a sus bienhechores de la ciudad de México
1 cajoncito de la medida regular	R. P. Fr. Joseph de Pedro Bernardo procurador de la provincia de San Gregorio de religiosos franciscos descalzos y viene al cuidado de dicho don Joseph de Acevedo	
2 cajones	embarcó el capitán de fragata de la Real Armada don Juan de Cazens	para regalar a sujetos de la corte
2 cajones de la medida regular	R. P. Fr. Joseph de San Buenaventura Procurador general de la Provincia de Recoletos descalzos vienen al cuidado de don Reinaldo Kelikeli	para el avío del Hospicio de la Ciudad de México
2 cajones	embarcó el P. Joseph de Leon de la Compañía de Jesus procurador del colegio maximo viene al cuidado de don Leon Martinez	que remite dicho colegio para la estancia llamada San Nicolás en el reino de la Nueva España

2 tibores de loza de una y media vara de alto con la del margen	embarcó don Francisco Casañas viene al cuidado de don Reinaldo Kelikeli	[para] remitir al reino de Cataluña para el monasterio de Nuestra Señora de Mazarrate [¿Monserrate?]
baúles en cuatro cajones marcados con la del margen	embarcó don Henriquez de Davides y vienen al cuidado de don Leon Martinez	
2 cajones de regalo	embarcó don Joseph Balberde piloto segundo en virtud de decreto de aquel superior gobierno	a entregar al señor oidor don Domingo Trespalacios
2 tibores grandes	al cuidado de don Leon Martinez	embarcaron y no consta en el registro
2 cajones	al cuidado del general don Joseph Eslava	no consta en el registro al Hospicio de San Francisco de Borxas

Fuente: AGN, Marina, vol. 18, ff. 42-43.

(*Texto en el cuadro modernizado salvo los acentos.)

El tema de los regalos, como en los casos anteriores, también fue revisado desde tiempo atrás y retomado por el caballero Croix. Incluso éste lo mencionó:

> […] y por lo tocante a los cajones y envoltorios rotulados a varios sujetos con el pretexto de regalos, quedo impuesto en lo que Vuestra Excelencia me previene con la condición de que vengan en el registro: pero debo advertir a Vuestra Excelencia que siendo en bien crecido número solo uno viene incluido en dicho registro y así espero que nueva orden de Vuestra Excelencia lo deuda sobre esta advertencia para obrar en el asunto […].[37]

Sin embargo, entre las primeras órdenes que había recibido el castellano estaba la de mantener detenidos los paquetes, envoltorios y regalos que se encontraran, lo cual hizo en un inicio. Además debía hacerse relación sobre la práctica que hasta ahora se había tenido en su embarque y uso.[38] Efecti-

37 AGN, Marina, vol. 24, f. 267.

38 AGN, Marina, vol. 24, f. 88.

vamente se informó además que había alhajas de oro y piedras preciosas no incluidas por los consignatarios de Manila. Ejemplo de ello se ve cuando el capitán del galeón llevaba de parte del marqués de Montecastro para don Josep González Calderón, vecino de Nueva España, "un cajoncito con varias alhajas de oro".[39] Si bien poco refiere Croix a los obsequios llevados en los galeones, es probable que éstos debieran ser revisados con gran cuidado por ser piezas de pago por favores y alianzas.

Al regreso

El regreso del galeón a las Filipinas implicaba el reto de revisar los cargamentos de plata pues generalmente había ocultaciones de ésta. Para evitarlo debían publicarse bandos donde se indicara que nadie llevara plata al puerto sin registro y sin su correspondiente licencia, pues toda la que fuera ilegalmente sería aprendida. También debía evitarse que este metal fuera embarcado de noche a través de canoas, cayucos u otras pequeñas barquillas que comúnmente se usaban en el Mar del Sur. Por otro lado, en tierra se debía evitar que las monedas se pegaran con brea en las tinajas llenas de agua, o bien que se introdujeran pesos en costalillos muy estrechos que llamaban culebras y eran usados por los marineros para dormir; tampoco debían echarse monedas en las barcinas y tercios de zacate que embarcaban para mantener vivo al ganado del rancho. Además, debía vigilarse que los marinos se ciñeran costalillos con plata en el cuerpo. Finalmente, había que evitar que se introdujera plata en las cajas de los pasajeros y misioneros que se embarcan a las islas.[40] Es decir, todos aquellos trucos utilizados para ingresar plata a los galeones ya eran conocidos y por tanto Croix debía evitarlos.

Finalmente, un aspecto más que debía vigilarse era el de los arribos maliciosos que pudiera hacer el galeón. Esto es, que se acercara a tierra en lugares cercanos al puerto o bien que retrasara su salida a altamar pues eso significaba que esperaban recibir cargamentos excepcionales. Por eso para Croix fue necesario cuestionar sobre la arribada maliciosa que se había detectado pues el *San Carlos de Borromero* hizo una maniobra contraria a la práctica de los buenos pilotos que generó sospechas y obligó a despachar

39 AGN, Marina, vol. 24, f. 279v.

40 AGN, Marina, vol. 27, ff. 151-162.

guardas para que observaran si había malicia en las acciones de los oficiales. Sin embargo, en cuanto se acercaron los oficiales del puerto el galeón inició su travesía.

Los resultados

La presencia del castellano Croix en Acapulco llevó a hacer una relación de los métodos más comunes utilizados en el puerto para hacer contrabandos al arribo, descarga y despacho de los galeones. Esto permitió que más allá de la simple aprensión de alhajas y mercaderías que venían fuera de registro se pusiera al descubierto que la descomposición del ministerio de Acapulco iba más allá del castellano y el resto de los oficiales del puerto, y que la corrupción desbordaba a todo individuo involucrado en dichos tratos pues a cambio de su sigilo o disimulo los comerciantes mostraban su agradecimiento distribuyendo dádivas por todas partes (Yuste 2007: 332-333). Había que evitar que esas situaciones se volvieran a presentar y cortar de raíz el problema que en especial se debía a la tolerancia o vinculación de las autoridades portuarias en los tratos del lugar; sus acciones (o falta de ellas) ocasionaban graves daños al erario y eso justificaba los autos de comiso hechos por Croix.[41] Para solucionar lo anterior el castellano había indicado en su informe lo necesario que era nombrar como oficiales del puerto a personas de suma confianza:

> Últimamente es digna de la mayor atención la elección de los sujetos que deben servir todos los ministerios de Acapulco, pero en especial la de Castellano y oficiales que despachen por comisión y guarda mayor pues siendo estos sujetos de entera confianza es imposible que los demás puedan obrar mal aún cuando tengan disposición para ello.[42]

Además de que era necesario eliminar a los oficiales fijos que establecieran lazos con personas de la localidad, en lo sucesivo había que nombrar anualmente a funcionarios que desde la capital se trasladaran al puerto.[43] Por ello el visitador general tomó la determinación de eliminar los empleos perpetuos de Acapulco y en lo sucesivo se nombrarían sujetos que

41 AGN, Marina 28, ff. 259-266v.

42 AGN, Marina 28, f. 264v.

43 AGN, Marina 28, ff. 259-266v.

por lo común asistieran al puerto y percibieran un salario fijo. Se sugería que los oficiales reales recibieran 3 mil pesos, los dos oficiales de tesorería 2 mil pesos, el contador 500 pesos, el guarda mayor mil pesos y los ocho subalternos que cuidan el resguardo del puerto 300 pesos cada uno.[44] Es decir, había que entregar salarios fijos y regulares para con ello evitar que el personal del puerto tuviera que hacer negocios por su cuenta.

Por otro lado, debía darse continuidad a las acciones tomadas y aclararse a comerciantes y funcionarios de los galeones que las siguientes descargas se apegarían al reglamento de 1734:

> […] los fraudes que se han verificado este año en Acapulco al arribo de la fragata de registro *San Carlos Borromeo*, me ponen en la precisión de manifestar a Vuestra Señoría que los galeones sucesivos deben venir exactamente arreglados a la concesión de su Majestad de 8 de abril de 1734 si quieren los interesados en ese comercio que se les continúe el que hacen con este reino […].[45]

Lo que se pretendía entonces era dar noticia a los comerciantes y autoridades filipinas para que en viajes posteriores llegaran a Nueva España informados de lo que pasó con el *San Carlos de Borromeo* y de esa manera evitaran en lo sucesivo negarse a exhibir sus facturas con el libro de sobordo, como se indicaba en el reglamento de 1734. Las cargas serían revisadas y en caso de registrar cargamentos con mejor valor del que les correspondía se les exigirían derechos dobles.[46] Esto serviría para cobrar de forma correcta los reales derechos. En cuanto a las cargas, alhajas y demás cosas que viajaran fuera de registro deberían ser decomisadas inmediatamente sin permitirse reclamo alguno, conforme se indicaba en el reglamento mencionado. Y las cajas que eran libres de pagar derechos, como era el caso de las cajas de religiosos, debían abrirse para que las autoridades pudieran revisar que no llevaran géneros comerciables que pertenecieran a particulares. En cuanto a envoltorios y cajones que vinieran como regalos y no aparecieran en los registros, había orden de no reconocerlos. [47]

Desde la perspectiva de las autoridades, la presencia del castellano había sido exitosa pues se pensó que con sus acciones se ponía orden al comercio transpacífico. Incluso Croix y los oficiales del puerto hicieron

44 AGN, Correspondencia de Virreyes (segunda serie), vol. 15, ff. 181-182v.
45 AGN, Marina, vol. 25, f. 227.
46 AGN, Marina, vol. 25, ff. 282-284v.
47 AGN, Marina, vol. 25, ff. 251-252.

relaciones de los documentos referentes a los arribos de los galeones anteriores a fin de mostrar cómo eran comunes las evasiones al erario real desde tiempo atrás. Esto lo hicieron mostrando casos específicos, como fue el del galeón *Santa Rosa* que llegó a Acapulco en 1765. Dichos oficiales explicaron que al bajar los cargamentos se cobraron los 125 pesos por bulto como era lo habitual. En el registro se indicaba que el producto obtenido por la venta final de las mercancías fue de 681.242 pesos y se suponía que la cantidad a pagar al erario era de 113.543 pesos 3 tomines 8 granos, pero sólo se pagaron 58.204 pesos 4 granos, por lo que se defraudó al rey con 55.336 pesos 3 tomines 4 granos. Otro ejemplo de la forma en la que estaban mal registradas las mercancías fue el arribo de la nave que llegó en 1766 la cual vendió sus mercancías en 913.069 pesos, por lo que debió pagarse a la Corona 152.708 pesos 1 tomín 4 granos pero solamente se pagaron 59.565 pesos 6 tomines 8 granos, por lo que se defraudaron 92.612 pesos 1 tomín 8 granos. En dos años, la defraudación al rey había sido de 147.948 pesos 5 tomines.[48] A diferencia de lo anterior, las medidas tomadas por Croix, además de evidenciar las prácticas ilícitas, permitieron que los ingresos del rey fueran de cerca de 400 mil pesos, lo cual a fin de cuantas era su objetivo principal (Moreno 1967: 57). Sin embargo, aunque es verdad que los ingresos del erario se incrementaron, lo cierto es que las medidas tomadas no fueron del todo útiles pues las acciones de Teodoro de Croix lo llevaron a cometer excesos. Los comerciantes filipinos al siguiente año prefirieron reducir sus cargamentos y únicamente comerciar con aquello que fuera necesario para cubrir sus requerimientos urgentes. Además, se presentaron quejas formales ante el Consejo de Indias donde se reprobó la actuación del castellano y hacia 1774 algunos comerciantes incluso fueron indemnizados por sus pérdidas (Yuste 2007: 333-334).

* * *

Tras la partida del castellano Croix del puerto de Acapulco el comercio del galeón se restableció y no volvió a solicitarse la exhibición de facturas, pero fueron otras las medidas tomadas por las autoridades metropolitanas para intentar reducir la presencia de los comerciantes novohispanos en el tráfico asiático. Lo anterior se hizo a partir de la apertura de negociaciones directas entre Cádiz y Filipinas a través del cabo Buena Esperanza a tra-

48 AGN, Marina, vol. 24, ff. 358-373v.

vés de compañías comerciales como la Casa de Uztáriz y la de los Cinco Gremios Mayores de Madrid (1765), con la licencia otorgada para que los galeones comerciaran en San Blas (1789), así como con la creación de la Compañía de Filipinas (1785), la cual tuvo posibilidad de llevar mercaderías directamente a Perú sin pasar por Nueva España. Con ello el monopolio comercial novohispano paulatinamente se fue debilitando al igual que la ruta transpacífica. De esta forma, el ataque frontal a las irregularidades cometidas por parte del visitador general a través del nombramiento del caballero Teodoro de Croix como castellano de Acapulco modificaron poco las prácticas establecidas, pero sirvieron para sentar las bases de otras transformaciones de más largo alcance que posteriormente tuvieron efectos importantes para el virreinato novohispano. Por eso el interinato de Croix puede verse como un evento inmerso en un momento coyuntural de dichas transformaciones.

Bibliografía

Archer, Christon I. (1983): *El ejército en el México Borbónico*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Bonialian, Mariano (2011): *El Pacífico hispanoamericano. Política y comercio asiático en el imperio español (1680-1784)*. México, D.F.: El Colegio de México.

Celaya Nández, Yovana (2010): *Alcabalas y situados: Puebla en el sistema imperial (1638-1742)*. México, D.F.: El Colegio de México.

Diccionario de Autoridades (1726-1739). España: Real Academia Española. <http://web.frl.es/DA.html> (2.3.2015)

Escamilla, Iván (2011): *Los intereses malentendidos: el consulado de comerciantes de México y la monarquía española, 1700-1739*. México, D.F.: UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas.

Fisher, John (1992): *Relaciones económicas entre España y América hasta la Independencia*. Madrid: Mapfre.

Fonseca, Fabián de/Urrutia, Carlos de (1978 [1845]): *Historia General de Real Hacienda*. VI vols. México, D.F.: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gerhard, Peter (1960): *Pirates on the West Coast of New Spain 1575-1742*. Glendale: The Arthur H. Clark Company.

Jáuregui, Luis (1999): *La Real Hacienda de Nueva España: su administración en la época de los intendentes, 1786-1821*. México, D.F.: UNAM, Facultad de Economía.

Lynch, John (1991): *El siglo xviii. Historia de España* (traducción de Juan Faci). Barcelona: Crítica.

Moreno y de los Arcos, Roberto (1967): *Teodoro de Croix. Su actuación en América*. México, D.F., Tesis para obtener el título de Licenciado en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México.

Pérez Brignoli, Héctor (1993): *Historia General de Centroamérica*, vol. II, De la Ilustración al Liberalismo (1750-1870). Madrid: Ediciones Siruela.

Pinzón Ríos, Guadalupe (2011a): "En pos de nuevos botines. Expediciones inglesas en el Pacífico novohispano (1680-1763)". En: *Estudios de Historia Novohispana*, 44, pp. 45-76.

— (2011b): *Acciones y reacciones en los puertos del Mar del Sur. Desarrollo portuario del Pacífico novohispano a partir de sus políticas defensivas, 1713-1789*. México, D.F.: UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas.

Rosenmüller, Christoph (2008): *Patrons, Partisans, and Palace Intrigues: The Court Society of Colonial Mexico, 1702-1710*. Calgary: University of Calgary Press.

Sales, Ostwald (1997): "Una coyuntura en el comercio transpacífico: fuentes complementarias para la visita de Pedro Quiroga en Acapulco, 1635-1640". En: Yuste, Carmen (coord.): *Comercio marítimo colonial. Nuevas interpretaciones y últimas fuentes*. México, D.F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 127-146.

— (2000): *El movimiento portuario de Acapulco. El protagonismo de Nueva España en la relación con Filipinas, 1587-1648*. México, D.F.: Plaza y Valdés Editores.

Sánchez Santiró, Ernest (2013): *Corte de caja. La Real Hacienda de Nueva España y el primer reformismo fiscal de los Borbones (1720-1755): Alcances y contradicciones.* México, D.F.: Instituto Mora.

Thomas, Alfred Barnaby (1968): *Teodoro de Croix and the Northern Frontier of New Spain*, 1776-1783. Oklahoma: University of Oklahoma Press.

Walker, Geoffrey (1979): *Política española y comercio colonial 1700-1789*. Barcelona: Ariel.

Yuste, Carmen (2007): *Emporios transpacíficos. Comerciantes mexicanos en Manila 1710-1816*. México, D.F.: UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas.

Un epílogo: "corrupción" en el virreinato novohispano

Horst Pietschmann

El título de este breve aporte requiere explicaciones: ¿Por qué "epílogo"?, ¿Por qué el virreinato novohispano, cuando actualmente la corrupción es un fenómeno tan generalizado, que involucra tanto entidades estatales, empresariales y bancarias, burocracias e individuos, que uno se inclina a considerarla como fenómeno universal en la historia?[1] ¿Permite el estudio de la corrupción en la actualidad identificar fenómenos que se pueden aplicar al pasado histórico?, ¿hasta dónde la difusión de la corrupción[2] permite sacar conclusiones sobre la solidez de un orden estatal, sea en el pasado o en la actualidad? Y finalmente ¿hasta dónde la corrupción es un fenómeno que a pesar de la antigüedad del término se presenta en formas muy variadas y concordes con los cambios históricos que vive una sociedad a través de su historia?

Comencemos con las referencias personales que señala el término "epílogo", es preciso indicar que el presente ensayo es el cuarto intento de aproximarnos al fenómeno de la "corrupción" en la historia colonial hispanoamericana durante algo más de 30 años. Lo cual significa que el tema se enfrentó en distintas coyunturas historiográficas y es necesario señalar el contexto de cada uno de estos intentos. La serie comenzó en 1983 con un artículo ampliamente documentado pero que apenas distinguió fases históricas a través de los tres siglos de historia colonial (Pietschmann 1983).

1 Leyendo el diario suizo *Neue Zürcher Zeitung* durante sus vacaciones de agosto de 2015, este autor encontró casi a diario informaciones sobre casos relacionados por el diario mismo con el fenómeno de la corrupción o sugerían al lector hacerlo por la información trasmitida a lo largo y ancho del globo.

2 Como un indicador que podría servir para un análisis de este género: "Transparency International, World Corruption Index", en: <https://www.transparency.de/Tabellarisches-Ranking.2574.0.html> (13.9.2015). La página, empleando distintos idiomas, diferencia el *corruption index*, el *bribery index* y un *global corruption barometer*; explica detalladamente los métodos empleados y ofrece una sección llamada *corruption research*, en la cual se refieren algunas redes de investigación sobre el tema. Transparency International se caracteriza como una entidad global civil con secciones nacionales que se autofinancia.

Como alumno de Richard Konetzke, fundador de la historiografía alemana sobre la historia ibérica y latinoamericana en la Universidad de Colonia, quien esto escribe, se había ocupado de los antecedentes coloniales del Estado moderno en Hispanoamérica en sus dos libros de calificación académica (Pietschmann 1996a; 1989). Dicha temática tenía entonces una gran importancia en la República Federal de Alemania debido a haberse superado recientemente la dictadura nazi y estar en vías de formar un Estado moderno democrático, un desarrollo, que se consideró como el futuro general bajo la influencia de la ONU y de sus esfuerzos de descolonización. En ambos trabajos se recurrió además de la bibliografía internacional, a los autores clásicos alemanes de sociología histórica como Otto Hintze y Max Weber y también a escritores emigrantes españoles en Hispanoamérica como Claudio Sánchez Albornoz, Rafael Altamira y Crevea y José Miranda. Estas tradiciones historiográficas presentaban visiones alternativas a la escuela hispánica de matriz franquista y marcadamente influenciada por Alfonso García-Gallo y su escuela.[3]

En la línea de investigación tradicional sobre la legislación para Hispanoamérica colonial, prácticamente se había generalizado la afirmación de que las transgresiones legales, como procedimientos fuera de lo prescrito, se caracterizaron como "abusos" individuales de funcionarios que frente a las circunstancias de distancia con las autoridades centrales, los problemas de comunicación, las situaciones imprevistas y otros motivos más, resultaban comprensibles y por lo general no restaban mérito a la legislación cuidadosamente elaborada de acuerdo a principios judiciales generalmente aceptados. De cara a estas tendencias metropolitanas por resaltar la legislación bien intencionada y de minimizar o perdonar sus transgresiones, el referido artículo sobre si la corrupción invirtió la perspectiva para discutir las transgresiones legales y los llamados abusos eran inherentes al sistema,

3 La historia del derecho en España y Portugal se abrió a estas corrientes a partir de la década de 1990, en "¿Nuevos aires en la Historia del Derecho Indiano?", en la red distribuida de Nicanor Domínguez [<nicanorjdf@gmail.com>], enviado el 8 de septiembre de 2015, el cual contiene los vínculos a diversos estudios de Carlos Antonio Garriga Acosta, catedrático de historia del derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, quien desde 1996 publicó una serie de artículos que no solamente reflejan esta recepción sino reinterpretan importantes facetas de la legislación y política administrativa hispánica hacia América y su aplicación. En el citado mensaje distribuido por Domínguez, se encuentran las referencias a los siguientes estudios de Garriga Acosta: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=278837>; <http://www.almanack.unifesp.br/files/journals/1/articles/1047/attachment/1047-1036-1-AT.doc>; <http://www.istor.cide.edu/archivos/num_16/dossier1.pdf>. (04.03.2016).

de suerte que la corrupción tenía un carácter sistémico y no casual. Los discursos desarrollistas en el marco de los diálogos norte –sur de la década de 1970 y dos estudios previos sobre colonización y desarrollo e integración latinoamericana y burocracias multinacionales (Pietschmann 1981; 1983),[4] conformaban el trasfondo para el autor al plantearse el problema de esta manera. Conviene señalar que en aquel entonces consideré muy diferente la realidad histórica de Hispanoamérica de la del sur de Europa, al tocar el tema de la mafia siciliana en un coloquio sobre historia y cultura siciliana (Pietschmann 1987).

Este primer estudio sobre corrupción cerró el ciclo de formación universitaria en muchos aspectos, ya que en 1985 me mudé como catedrático de historia latinoamericana a la Universidad de Hamburgo y a raíz del Congreso Internacional de Ciencias Históricas en Stuttgart recibí de la editorial Klett-Cotta la propuesta de reiniciar un proyecto iniciado en 1967 y frustrado en aquel momento: la edición de un primer manual en idioma alemán de historia latinoamericana en 3 volúmenes. La coincidencia de ambos sucesos cambió en muchos sentidos la labor de investigación y su orientación historiográfica. A esto se sumó que en 1985 se había lanzado en el seno de la Organización de Estados Americanos [OEA/OAS] en el contexto de las planificaciones para el Quinto Centenario del Descubrimiento de América en 1992, la propuesta de sustituir el denominador histórico tradicional de "Descubrimiento y Conquista" por "Encuentro de Culturas" para resaltar más el papel de actores históricos de las poblaciones indígenas americanas. La propuesta lanzada por la delegación mexicana a la OEA/OAS a través de su presidente Miguel León Portilla fue muy discutida y hasta rechazada, especialmente en Europa, pero modificó lentamente los enfoques de la investigación y de la historiografía, al grado que indirectamente fue muy apoyada por la publicación, más o menos paralela, de los volúmenes del *Handbook of Middle American Indians* y grandes obras de conjunto sobre la historia de las poblaciones indígenas posteriores. Lográndose la colaboración de muchos investigadores, organizados en la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos [AHILA],

4 La organización de una sección sobre "historia de la integración" en el marco de la reunión anual de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina [ADLAF] y estudios en alemán sobre "unidad del reino y sucesión al trono", sobre la iglesia en Hispanoamérica, y sobre el "nacionalismo" en Castilla en tiempos de Carlos V, publicados entre 1982 y 1986, completaron aquel marco de aproximación.

se publicó entre 1992 y 1996 el manual referido[5] (Bernecker et al., 1992-1996) con lo que concluyó otro ciclo para este autor. A continuación volvió a investigar y trabajar en América Latina y en México, en concreto sobre el período colonial, después de no haber cruzado el Atlántico desde 1985. Este "regreso" a América comenzó con la recuperación de los estudios sobre las élites novohispanas, los sistemas clientelares y el criollismo que se habían desarrollado dentro de la historiografía hispanoamericana y dominaban los debates historiográficos (Pietschmann 1996b; 1998b).[6]

En ese periodo se empezó a imponer por un lado el concepto de "imperio" para las regiones colonizadas por europeos durante la época moderna y por otro el Atlántico se impuso cada vez más como marco geográfico para el estudio de la historia moderna transatlántica (Bailyn 2005).[7] Cuando en esta línea, el que escribe se orientó cada vez más hacía lo "atlántico" y lo "imperial" (Pietschmann 2002; Kuntz Ficker/Pietschmann 2006), le fue extendida una invitación de la Universidad de Valladolid para un simposio sobre "Instituciones y Corrupción en la Historia", en el que a través de cuatro comunicaciones que cubrían desde la época medieval hasta la contemporánea, se estudió el fenómeno en la historia de España y de las Indias. Retomando entonces la problemática de 1983 se intentó con referencia al "imperio", primero diferenciar el problema y el concepto de acuerdo a fases históricas, destacando como, por ejemplo, Carlos V impuso una misma política de disciplina social con medios completamente diferentes en Castilla y en el Sacro Imperio. Refiriéndonos al concepto de imperio hemos puesto en duda muchas de las afirmaciones del primer intento, distinguiendo entre intención política de imponer normas y medios de realizarlo: en un caso por medio de la autoridad imperial y en el otro a través de sínodos provinciales eclesiásticos, sirviéndose de la autoridad del patronato. A la luz de la historiografía hispanoamericana reciente, se

5 El que escribe, editó por si sólo el volumen 1. En su momento este manual fue el único en Alemania que intentó un resumen de la historia de una región continental no-europea. Los autores eran todos europeos porque al iniciarse los preparativos aún no existía el internet y la comunicación instantánea intercontinental.

6 Agradezco al Dr. José Enrique Covarrubias Velasco la colaboración y traducción del estudio sobre el dinero y crédito.

7 ¿Hasta dónde este desarrollo historiográfico era una especie de respuesta internacional a las múltiples actividades en torno al Quinto Centenario? Será un tema por estudiar para la historia de la historiografía. Bernard Bailyn, autor del texto *Atlantic History...,* ha sido un pionero en este campo, organizando durante más de una década reuniones de jóvenes investigadores procedentes de toda el área involucrada.

destacó para el siglo XVIII, la cuestión de hasta dónde las transgresiones observadas fueron en realidad, signos de oposición criolla frente a una nueva política de la Corona que implícitamente revocaba las normas imperiales expuestas en la *Recopilación de Leyes de Indias* de 1680. De esta manera el aporte sobre las Indias resultó ser el único de los cuatro presentados que no adoptó rotundamente la corrupción como fenómeno inherente al sistema político-social (Pietschmann 1998a).

Más de una década después fuimos invitados nuevamente para hablar sobre corrupción en un ciclo de conferencias en la Sorbona de París (Pietschmann 2013). Iniciamos aquella conferencia destacando que:

> el tema de la "corrupción" tanto en la actualidad como en el pasado histórico es un fenómeno recurrente desde la antigüedad, aunque surge siempre en contextos históricos diferentes. Tomando en cuenta el fenómeno de la globalización, concepto que se difundió después del gran cambio del "corto siglo XX", para emplear el término del recién fallecido historiador E. Hobsbawm, tenemos que constatar que desde 1989/1992 organismos de corte internacional, como por ejemplo la ONU o la Comunidad Europea elaboraron normas internacionales para definir "corrupción" y para perseguir, respectivamente evitarla, normas que ya se han ratificado por muchos estados, aunque no de todos.

Como permiten entrever estas palabras introductorias, se abarcó el problema desde una perspectiva de actualidad global de aquel momento. Aparte de caracterizar brevemente los contextos de los estudios previos, se resaltaron, al lado de la universalidad del fenómeno, destacada ya en la introducción de este "epílogo personal", los esfuerzos de definición y de represión de la corrupción por parte de organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, o la Comunidad Europea y se especificaron los problemas de definición en diferentes sistemas de derecho, como en el caso alemán del derecho germánico más individualizante con el concepto de *Untreue* (tanto "deslealtad" como "infidelidad"). Además se introdujo la referencia a los llamados "estados fracasados", los *failed states* en inglés, para referir la amplitud que el problema puede adquirir, y así otros fenómenos que forman parte del proceso de "glocalizacion" como movimientos independentistas en estados unificados desde siglos, para no hablar del sistema financiero internacional actual o de instituciones deportivas internacionales. Todos dejan entrever el problema de enmarcar claramente qué es y hasta dónde alcanza el concepto de "corrupción" o si se convierte en un factor de desarrollos históricos de mayor trascendencia, de los cuales la corrupción

tan sólo es un factor causante entre muchos otros. No obstante, paralelamente se pueden observar ya medidas más o menos exitosas para reprimir tales fenómenos. Así, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA/OAS desarrolló una labor pacificadora precisamente en América Central (Dykmann 2004) y los procedimientos judiciales combinados de la justicia estadounidense y Suiza en el caso de la Asociación Mundial de Futbol o, aun en menor medida, los procesos judiciales en contra de grandes bancos multinacionales especialmente en Gran Bretaña y Estados Unidos. Unos y otros ejemplos dejan entrever que la corrupción más allá de casos individuales tiende a establecerse en un factor sistémico a través de procesos de difusión social. Esta tendencia característica de nuestro tiempo, requiere aparatos judiciales fuertes y bien dotados para investigar y ser investigados a fondo, fenómeno que resalta las dificultades para el historiador de indagarla en el pasado, aunque sea para demostrar su existencia o inexistencia.

Pasemos ahora al tema novohispano. En este caso, el autor se considera parcial en cierta forma, por haber publicado durante su carrera académica muchos estudios sobre la formación estatal en Hispanoamérica en general y sobre México en particular. Pero con el mismo procedimiento ya señalado, es decir, centrándonos en el México actual, o dicho de otra forma, en el Estado más grande e importante de los que surgieron de los antiguos virreinatos españoles y aun más, en el Estado más grande de habla española, casi se debería hablar de un Estado en vías de fracaso, que se mantiene precisamente por su vecindad con los Estados Unidos. Ésta inversión de la perspectiva tradicional sugiere el carácter sistémico de lo referido arriba, mencionando tan sólo el caso de los estudiantes desaparecidos en Guerrero, en el cual una comisión investigadora internacional recientemente puso en tela de juicio los resultados de los esfuerzos de las instituciones oficiales por aclararlo. Leyendo tan sólo la prensa reciente, como el informe del *Neue Zürcher Zeitung* del 7 de septiembre de 2015 sobre la fuga de "El Chapo" Guzmán[8] queda la impresión de que muchos estados de la Federación ya no están bajo el control del gobierno, que jefes de poderosos carteles de droga se han convertido, por lo menos de forma regional,

8 "Ein Massenmörder als Volksheld. Der mexikanische Drogenboss Joaquín 'El Chapo' Guzmán ist einer der meistgesuchten Männer der Welt", p. 6. El mismo diario del 9 de septiembre 2015, p. 5: "Mexikos 'historische Wahrheit' ist unhaltbar. Ein Expertenbericht widerlegt die offiziellen Ermittlungsergebnisse zum Verschwinden von 43 Studenten".

en héroes populares que inspiran géneros de música igualmente popular, que periodistas que investigan casos de corrupción terminan asesinados y muchos ejemplos por el estilo. Hay que conocer el país a fondo para saber que de tiempo en tiempo se acumulan tales informes en los medios de comunicación, especialmente desde que se liberalizó la prensa, y que la vida cotidiana de los más de 100 millones de habitantes, transcurre por lo general con normalidad o a lo mucho, expuesta a la pequeña criminalidad habitual en megalópolis de tales dimensiones como las que se encuentran en México.

Sin embargo hay que resaltar que un factor ha sido endémico en la historia del país desde la época colonial, nos referimos al control del territorio por las autoridades gubernamentales. En la época colonial en esta función se dividieron los representantes de la Corona, del común o sea los municipios y de la iglesia. Con frecuencia las tres autoridades no estaban de acuerdo, lo cual desembocó en la gran serie de revueltas, levantamientos populares y motines que entretanto se han estudiado ampliamente por la historiografía, por ejemplo por William Taylor, para mencionar tan sólo uno de los clásicos. Ya Taylor destacó que muchos de estos movimientos fueron capitaneados por mujeres. Hasta dónde en estos movimientos influyeron distintas idiosincrasias, representadas por miembros de diferentes instituciones e intereses organizados que hacen difícil de calibrar qué de lo ocurrido a nivel de pueblo o villa, responde a qué influencia y por lo tanto se puede calificar de "corrupción". La serie de estudios sobre procesos individuales en jurisdicciones diferentes que se han realizado en los últimos tiempos muestran claramente tales problemas (Corteguera 2012).[9] Frente a estos profundos estudios, ahora me veo obligado a dejar de lado varios "ejemplos de corrupción" que presenté en mi primer trabajo sobre el tema.

Para la época colonial en general se deberían tomar en consideración los distintos estudios y debates sobre dicho periodo y su significado, compilados recientemente y distribuidos por el ya citado Nicanor Domín-

9 Para mencionar tan sólo un ejemplo.

guez.[10] Pero lo que en todo caso es una continuidad en esta problemática es la geografía.[11]

Ésta durante la fase de los Habsburgo –la imperial propiamente–, se centra en lo gubernativo como en lo eclesiástico sobre la población, asentada en ciudades y villas, ya sean de españoles, ya de indios y en repúblicas de indios, en total bastante más de 4000, autónomas y yuxtapuestas, gobernadas por unos 250 funcionarios reales a lo máximo, por un número elevado de representantes electos y por curas parroquiales que ganaron su plaza por oposición en los obispados, pero que frecuentemente dejan sus funciones en manos de capellanes, también por doctrineros puestos por las respectivas órdenes religiosas que aún conservan doctrinas o por misiones jesuitas. De todos estos en realidad, solamente los representantes reales son "candidatos para corrupción", ya que los demás ni conocen la legislación real, y si acaso, las costumbres y prácticas locales, se manejan en lo jurídico administrativo por lo que les sugieren los escribanos y escribientes o algún manual impreso que contiene ejemplos de los tipos de documento en uso. Los eclesiásticos de por si responden a otra jerarquía bastante independiente de la legislación real. Para una gran parte del grupo de los más o menos 250 funcionarios reales, que recibieron su cargo como merced real o virreinal, la legislación, tal como la conocemos en la Recopilación de Leyes de Indias, no debe de haber sido muy conocida, salvo si habían cursado estudios de jurisprudencia. De esta manera los "sospechosos de corrupción" se reducen considerablemente al pequeño grupo dirigente del virreinato. Esto no excluye que los demás cometan cualquier clase de irregularidades, cohechos, etc., Resulta difícil de juzgar en términos estrictamente legales como se puede calibrar la gran serie de gruesos expedientes de procedi-

10 Los mensajes en la red distribuida de Nicanor Domínguez [<nicanorjdf@gmail.com>], enviado el 6 de septiembre de 2015: Sobre las *COLONIAS* Hispanoamericanas (ss. xv-xix) y de la misma fecha: Mas sobre las *COLONIAS* Hispanoamericanas (ss. xv-xix); acompaña a los dos mensajes desde los antiguos trabajos de Ricardo Levene y de Mario Góngora, hasta estudios más recientes como los de Annick Lempérière: <http://www.istor.cide.edu/archivos/num_19/notas.pdf> y <http://nuevomundo.revues.org/437>; de Francisco Ortega: <http://www.scielo.org.ar/pdf/prismas/v15n1/v15n1a01.pdf> y varias otras contribuciones de debate, publicados en la revista digital francesa *Nuevo Mundo – Nuevos Mundos, New World – New Worlds*, <http://nuevomundo.revues.org/430>, entre los números 430 y 441, que aportan importantes puntos de vista que en nuestro contexto no se pueden discutir a pesar de tener relevancia para el problema (última consulta de todas las páginas: 25.11.2015)

11 Un ejemplo reciente es el anuncio de un coloquio importante a desarrollarse en Francia en 2016 bajo el título: *Space, Mobility, and Power in Early America and the Atlantic World, 1650-1850*, París, 8.-10.12.2016 , organizado por Állan Potofsky.

mientos judiciales interminables, sobre los cuales solamente se pueden sacar conclusiones tras estudios como el ya citado de Luis R. Corteguera. Tal es, en todo caso, la visión de José de Gálvez a la hora de su visita de Nueva España bajo Carlos III.

Con las reformas borbónicas de hecho se pretende cambiar la situación e introducir un gobierno territorial. Con lo cual nuevamente la geografía se convierte en un elemento decisivo, ya que esta política empieza con las reformas fiscales antes de la visita de Gálvez. Sin entrar en un debate sobre la cronología, no cabe duda de que éstas entran en función bajo el virrey primer conde de Revillagigedo, dirigiendo la política metropolitana aun el marqués de la Ensenada. Este virrey, rechazando aun la introducción de las intendencias, es nombrado superintendente general de real hacienda, como hemos destacado en muchos trabajos anteriores –cabe recordar que los superintendentes posteriores introducido bajo el ministerio de Gálvez todos eran superintendentes subdelegados–. Aun así se mantuvo la autonomía novohispana producto del sistema imperial introducido por Carlos V, con las reformas de Gálvez y la reforma territorial se vulnera la autonomía, de manera que nos encontramos frente a un problema en el fondo "constitucional" (Pietschmann 2014).[12] Con la toma en administración de la renta de alcabala por Revillagigedo empezó también la jerarquización de las jurisdicciones. Así, por ejemplo, el nuevo gobierno militar establecido en la ciudad de Puebla recibió bajo su subordinación varias jurisdicciones indígenas de la cercanía, que habían permanecido autónomas hasta entonces, como por ejemplo Totimehuacán. Pero en la década de 1750 solamente se erigieron 3 o 4 gobernaciones en total, entre éstas Zacatecas y Veracruz. También la administración de la renta de alcabala respondió a una jerarquía administrativa que culminó en la dirección general de la ciudad de México. Hasta la fecha, que yo sepa, no se ha estudiado el impacto de esta jerarquía de la administración de la renta indirecta novohispana más importante que afectó de manera seria las redes comerciales, Más aún cuando se acompañó del intento de cuantificar en aranceles los repartimientos de comercio que se toleraban a los corregidores y alcaldes mayores por falta de un sueldo. El intento de realizar este arancel motivó una maniobra en los altos niveles del gobierno: se hizo desparecer el expe-

12 Éste fue el primer aporte de mi revisión de los estudios sobre el siglo XVIII novohispano, presentado en 2007 en un coloquio en El Colegio de México y publicado sólo años después sin modificaciones.

diente mientras corrían los trámites, siendo devuelto años después bajo el secreto de confesión al virrey. Éste incidente lo calificamos en 1983 como un ejemplo de "corrupción". Conociendo ahora más fondo las realidades sociales y políticas, debo retirar esta afirmación. La razón es que este caso, en último término, cristaliza el problema clave del siglo XVIII hispanoamericano: ¿qué significa el tan sobrestimado concepto "reformas borbónicas"?

Dejamos de lado el hecho de que el concepto de "reformas borbónicas" es absurdo de por sí. No conozco ningún otro caso durante la época moderna en el cual para todo un siglo se identifica una determinada política con toda una dinastía de cuatro reyes de diferente personalidad y equipo de gobierno. Los expertos en la historia de Austria me afirman que las reformas del emperador José II, similares a las de Carlos III, llevaban al país al borde de la revolución y que ésta no estalló por la repentina muerte de José II y la revocación parcial de sus reformas. En el caso de la monarquía española del XVIII ya Fernando VI se despide de la política de su padre Felipe V. Más tarde Carlos III la reanuda en términos generales y Carlos IV la despide nuevamente tras haber recibido, cuando aún era príncipe heredero, el regalo de poco menos de un millón de pesos del conde de Regla. Francisco de Saavedra, colaborador de Gálvez, recibe el encargo de transferir la suma secretamente –para que Carlos III no se enterara– al infante, como el mismo Saavedra relata (Pietschmann 2009). Carlos IV nos descubre de lo que se trataba durante el siglo XVIII con las llamadas reformas por sus intentos de convertir a España también formalmente en un imperio (Pietschmann 2010). Después de la Revolución Francesa se desvanece la reserva existente previamente, es decir, discutir de forma encubierta tales problemas que actualmente se pueden llamar constitucionales, aunque en la época de las monarquías firmemente establecidas el concepto era odioso y se tenía que debatir de forma encubierta. La pregunta metropolitana que se dirigió al primer conde de Revillagigedo sobre si convenía introducir intendencias en Nueva España a fines de la década de 1740, se hizo con la consciencia de que la medida rompería/mudaría de forma fundamental el orden establecido. No hay que olvidar que en la Península misma esta reforma se introdujo en tiempos de guerra abierta en tierras españolas y aun así encontró grandes resistencias. Todavía hoy los catalanes justifican históricamente sus pretensiones de independencia con la abolición de sus derechos y fueros multiseculares. Tal como hemos referido a los nuevos debates sobre "colonialismo" e "historia del derecho" faltaría agregar un debate sobre el significado y las consecuencias del uso del concepto de "imperio"

en las provincias subordinadas a un emperador. Hasta ahora tales intentos se refieren, si acaso, al centro y las formas de gobierno de un emperador. Muy poco, en cambio, se discuten los aspectos de autonomía con los cuales se regían las provincias sometidas. En el caso del imperio de Carlos V no solamente se ha ido descubriendo la gran influencia del imperio romano para la conformación de una política propia. Así se observa en la concesión del estatus jurídico de ciudad, de acuerdo al modelo de Sevilla, a poblaciones indígenas. En Nueva España tan sólo se han ido identificando como 60 ciudades y villas de este tipo. En cuanto a la formación de obispados y arzobispados es también Sevilla la que sirve de modelo.

Rastreando brevemente el concepto de corrupción que se incluye en el derecho romano en tiempos del emperador Justiniano, cuando por cierto, el imperio romano ya estaba en decadencia, lo encontramos en los textos coetáneos, como por ejemplo en Cicerón, solamente con referencia a los gobernantes romanos que rigen las provincias. A los gobernantes "indígenas" no se suele aplicar. Estos se castigan si se exceden originando disturbios y levantamientos. De suerte que el concepto parece aplicable en el fondo solamente al pequeño grupo de funcionarios reales que operaban en la Nueva España. Conviene recordar que los virreyes novohispanos estaban sometidos al juicio de residencia, pero no los virreyes españoles en Nápoles, Sicilia, Aragón, etc., es decir en los reinos considerados constitutivos y heredados de la "Corona".

Que las estructuras imperiales están en el centro de los conflictos internos sobre las reformas dieciochescas, lo documentan muchos coetáneos de la segunda mitad del XVIII: un Revillagigedo I ambivalente, sucedido por un Marqués de las Amarillas, de corta duración por su muerte, pero viajando a Nueva España acompañado por Antonio Joaquín de Rivadeneyra y Barrientos. Éste, entonces fiscal de la Audiencia, compone en el viaje una poesía sobre México como una segunda Roma (Pietschmann 2012), más tarde, ya oidor de la Audiencia, defiende con energía las "Leyes de Indias", resultado de la política imperial metropolitana y puestas en vigor tardíamente frente al problema de la sucesión en la Casa de Habsburgo, tanto en la representación que redacta para el cabildo de México al rey, como después en calidad de asistente real en el IV Concilio Provincial de México en contra de la política de la Corona y de las cabezas regalistas de la iglesia (Zahino Peñafort 1999: 735 ss.).

Los intentos actuales de organismos internacionales de promover una legislación anti-corrupción y de enfrentar/perseguir casos evidentes y graves

en defensa de unas normas de comportamiento internacional concordes con legislaciones nacionales para estabilizar un sistema de conjuntos estatales que se declararon en favor de valores comunes, serían dignos de comparación con las políticas imperiales de la época moderna. La multiplicación de imperios formales a comienzos del siglo XIX en una fase de restauración, después de las guerras revolucionarias respondieron a intentos similares. En suma, un gran tema digno de profundización por historiadores más jóvenes.

Bibliografía

Bailyn, Bernard (2005): *Atlantic History. Concept and Contours*. Cambridge/London: Harvard University Press.

Bernecker, Walther L./Buve, Raymond Th./Fisher, John R./Pietschmann, Horst/Tobler, Hans Werner (eds.) (1992-1996): *Handbuch der Geschichte Lateinamerikas*. 3 vols. Stuttgart: Klett-Cotta.

Corteguera, Luis R. (2012): *Death by Effigy. A Case from the Mexican Inquisition*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Dykmann, Klaas (2004): *Philanthropic Endeavors or the Exploitation of an Ideal? The Human Rights Policy of the Organization of American States in Latin America (1970-1991)*. Madrid/Frankfurt a.M.: Iberoamericana/Vervuert.

Kuntz Ficker, Sandra/Pietschmann, Horst (eds.) (2006): *México y la economía atlántica (siglos XVIII- XX)*. México, D.F.: El Colegio de México.

Neue Zürcher Zeitung. Agosto / Septiembre, 2015.

Pietschmann, Horst (1981): "Integración y burocracias en América Latina desde el punto de vista histórico". En: Mols, Manfred (ed.): *Integración y cooperación en América Latina*. Mainz: V. Hase & Köhler.

— (1982): "Burocracia y corrupción en Hispanoamérica colonial". En: *Nova Americana*, 5, pp. 11-37. Reimpreso en "A manos llenas I: Burocracia y corrupción". En: *La Cultura en México. (Suplemento cultural de la revista Siempre!)*, 1170, 4 de julio de 1984, pp. 63-66, y "A manos llenas II: Crónica de una mexicanización anunciada". En: *La Cultura en México*. *(Suplemento cultural de la revista Siempre!)*, 1171, 11 de julio de 1984, pp. 52-54 [reimpreso sin las notas de pié de página]; reimpresión completa en: Becker, Felix (1988) (comp.): *América Latina en las letras y ciencias sociales alemanas*. Caracas: Monte Ávila Editores, pp. 69-103.

— (1983): "Entwicklungspolitik und Kolonialismus. Die spanische Kolonialpolitik des 16. Jahrhunderts und der Entwicklungsgedanke". En: Buisson, Inge/Mols, Manfred (eds.): *Entwicklungsstrategien in Lateinamerika in Vergangenheit und Gegenwart*. Internationale Gegenwart, vol. V. Paderborn: Schöningh.

— (1987): "Sizilien und das aragonesisch-katalanische Imperium im Spätmittelalter". En: Harth, Helene/Heydenreich, Titus (eds.): *Sizilien. Geschichte-Kultur-Aktualität*. Tübingen: Stauffenburg-Verlag.

— (1989): *El estado y su evolución al principio de la colonización española de América*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, [versión alemana publicada en 1980].

— (1996a): *Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España. Un estudio político administrativo*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, [versión alemana publicada en 1972].

— (1996b): "Dinero y crédito en la economía mexicana a finales del período colonial (1750-1810)". En: *Históricas. Boletín el Instituto de Investigaciones Históricas* 47, pp. 27-51.

— (1998a): "Corrupción en las Indias Españolas. Revisión de un debate en la historiografía sobre Hispanoamérica colonial". En: González Jiménez, Manuel/Pietschmann, Horst/Comín, Francisco/Pérez, Joseph: *Instituciones y corrupción en la historia*. Valladolid: Instituto de Historia Simancas/Universidad de Valladolid, pp. 31-52.

— (1998b): "Las élites políticas de México en la época de la emancipación, 1770-1830". En: Jáuregui, Luis/Serrano Ortega, José Antonio (coords.): *Historia y Nación. Actas del Congreso en homenaje a Josefina Zoraida Vázquez*. Vol. II: *Política y diplomacia en el siglo XIX mexicano*. México, D.F.: El Colegio de México, pp. 45-63.

— (ed.) (2002): *Atlantic History. History of the Atlantic System 1580-1830.* (Veröffentlichungen der Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften, Nr. 94.) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

— (2009): "Francisco de Saavedra y Sangrois, 1746-1819. Der Versuch einer Autobiographie eines spanischen politischen Akteurs zwischen Reform, Revolution und Reaktion". En: Scheuzger, Stephan/Fleer, Peter (eds.): *Die Moderne in Lateinamerika. Zentren und Peripherien des Wandels*. Hans Werner Tobler zum 65. Geburtstag. Frankfurt a.M.: Vervuert, pp. 161-187.

— (2010): "Paralelismos y percepciones mutuas en el proceso de formación de la representación político-democrática en México y Alemania en el primer tercio del siglo XIX". En: Kohut, Karl/Mayer, Alicia/Mentz, Brígida von/Torales, María Cristina, (eds.): *Alemania y el México independiente. Percepciones mutuas, 1810-1910*. México, D.F.: Herder, pp. 193-212.

— (2012): "Diego García Panes y Antonio Joaquin de Rivadeneyra y Barrientos, pasajeros en un mismo barco. Reflexiones en torno al México 'Imperial' entre 1755 y 1808". En: Mayer, Alicia (coord.): *Un hombre de libros: homenaje a Ernesto de la Torre Villar*. México, D.F.: UNAM, pp. 203-232.

— (2013): "Corrupción" en el virreinato novohispano: un tercer intento de valoración". En: *e-Spania, revue interdisciplinaire d'études hispaniques médiévales et modernes*, 16, <https://e-spania.revues.org/22848> (19.9.2013).

— (2014): "Antecedentes políticos de México, 1808: Estado territorial, Estado novohispano, crisis política y desorganización constitucional". En: Gonzalbo Aizpuru, Pilar/Lira González, Andrés (coords.): *México, 1808-1821. Las ideas y los hombres*. México, D.F.: El Colegio de México, pp. 23-70.

Transparency International: "Transparency International, World Corruption Index". En <https://www.transparency.de/Tabellarisches-Ranking.2574.0.html> (13.9.2015)

Zahino Peñafort, Luisa (1999): *Recopilación documental. El Cardenal Lorenzana y el IV Concilio Provincial Mexicano*. México, D.F.: UNAM, IIJ/Miguel Ángel Porrúa, pp. 735 ss.

Guerra a los abogados. La defensa libre y los debates sobre el monopolio de los abogados y la corrupción de la justicia peruana, 1841-1862

Pablo Whipple[1]

Junto con asegurar su triunfo militar sobre el presidente Echeñique en la batalla de La Palma (5.1.1855), el nuevo gobierno del Perú liderado por el general Ramón Castilla (1855-1862) se impuso la tarea de llevar adelante una serie de reformas de corte liberal que afectarían distintos ámbitos de la vida nacional.[2] Entre ellas, la reforma del sistema judicial ocupaba un lugar central por lo que a inicios del año 1855 el Gobierno decretó una serie de medidas tendientes a agilizar la administración de justicia como reducir el número de jueces, eliminar la súplica o tercera instancia, reorganizar algunos distritos judiciales, y permitir la defensa libre ante los tribunales (Oviedo 1863: 400-403).

Conocida como la "Revolución de la Honradez", el movimiento liderado por Castilla había nacido como una reacción liberal ante la corrupción que caracterizó al gobierno de Echeñique (Sobrevilla 2004). No extraña entonces que en una circular enviada en abril de 1855 al presidente de la Corte Suprema y prefectos departamentales, el nuevo gobierno anunciara su "firme resolución" ante "la tarea de reorganizar las instituciones públicas sobre las bases de la moral y de la justicia", para lo cual consideraba que la reforma del Poder Judicial era "el principio de una nueva era de garantías públicas y privadas" (Oviedo 1863: 401).

1 Este artículo es producto de una investigación en curso financiada por el Fondo de Ciencia y Tecnología de Chile (Fondecyt), Proyecto Regular 1150779 titulado "Expansión y formalización de la justicia republicana en Perú. Poder Judicial y formación del Estado, 1823-1872".

2 Presidente del Perú en dos periodos, de 1845 a 1851 y de 1855 a 1862, la historiografía peruana reconoce al general Ramón Castilla como al caudillo que logró dar estabilidad institucional al proyecto estatal peruano gracias a sus reformas de carácter liberal y a la prosperidad económica proveniente de la explotación del guano. Entre las reformas impulsadas por Castilla estaban la modernización del presupuesto nacional (Gootenberg 1993), la abolición de la esclavitud (Aguirre 1993), la abolición de la pena de muerte (Aguirre 2005) y la ampliación de la ciudadanía (del Águila 2013).

En la memoria presentada ese mismo año ante la Convención Nacional, el ministro de Justicia Pedro Gálvez argumentaba que "reformas tan enérgicas como necesarias" seguían el sentir de la opinión pública.[3] Efectivamente la administración de justicia republicana era el blanco, desde su creación en 1824, de permanentes críticas en la prensa, tanto de parte de los litigantes como de juristas. Las acusaciones sobre las tácticas ilegales utilizadas por los abogados para dilatar los juicios, sobre jueces indolentes que se dejaban influenciar por gente poderosa y sobre los intrincados procedimientos judiciales eran la norma (Whipple 2013a: capítulo 7).

La imagen prevalente en la prensa durante los inicios de la república era la de un sistema judicial corrupto frente al cual no existían instancias eficaces de fiscalización. A esto se sumaban las deficientes condiciones materiales en que los jueces debían realizar su labor, la que según los propios magistrados, no solo dificultaba el proceso de legitimización de su autoridad, sino que también los hacía vulnerables ante la corrupción (Whipple 2013b). Todo, en conjunto, creaba una sensación generalizada de indefensión que llevó a Juan Bustamante a sostener que la espada no había causado al Perú tantos males como el foro, concluyendo que "el desacato a la ley, el absoluto desprecio de todos los principios de justicia, procede originariamente de nuestro cuerpo judicial donde la prevaricación, la parcialidad y la injusticia ejercen sus estragos con una audacia criminal" (Bustamante 1849: 52).

Ante este escenario, las reformas propuestas por Castilla estaban efectivamente en sintonía con la opinión pública, con excepción de la defensa libre. Esta medida había sido resistida por varios años de manera enérgica por muchos abogados y jueces del país, y aunque también había sido rechazada por el congreso nacional en los años 1849 y 1851, el gobierno decretó en junio de 1855 que se aceptaran en todos los tribunales del país recursos sin firma de abogado. De esta forma, el gobierno decretaba que cualquier persona podía representarse ante los tribunales por sí misma, argumentando que "el patrocinio forzoso de abogado" limitaba las libertades individuales y afectaba la dignidad de la profesión de abogado, generando una demanda que permitía ejercer la profesión a individuos "sin los conocimientos necesarios" (Oviedo 1863: 402).

3 *Memoria que presenta a la Convención Nacional de 1855 el Ministro encargado del despacho de Justicia, Culto y Beneficencia*. Lima, Tipografía de la Dirección General de Estudios, 1855, 4.

A través del estudio de los debates generados en torno a los proyectos de defensa libre, este artículo busca analizar el impacto que el ejercicio de la abogacía tuvo sobre la creciente percepción de corrupción prevalente entre la opinión pública, al mismo tiempo que su estudio permite distinguir el papel que cumplían en el proceso formativo del sistema judicial republicano, otros agentes judiciales tanto formales como informales.

Como ha argumentado Carlos Aguirre en su estudio sobre los tinterillos o falsos abogados en el Perú republicano, la historiografía peruana no ha puesto suficiente énfasis en el estudio de agentes que son críticos a la hora de entender cómo funcionan los sistemas legales, en especial aquellos que actúan como intermediarios entre la ley y la gente común y corriente (Aguirre 2012: 119-120). El estudio de los debates sobre la defensa libre permite en efecto acercarnos a la dimensión de los agentes informales, pero al mismo tiempo, nos permite ir más allá, adentrándonos en el intento del propio Estado por redefinir los límites de dicha barrera entre la formalidad y la informalidad y detectar las relaciones e intercambios existentes entre ambas dimensiones, al permitirse a cualquier individuo ejercer su representación ante los tribunales de justicia.

Del mismo modo, el estudio de la defensa libre en un contexto en el que predominan las acusaciones contra los agentes que participan de la administración de justicia, permite contribuir al estudio de lo que Alfonso Quiroz distingue como las variables dependientes e independientes de corrupción. Son estas variables las que afectan el funcionamiento de las instituciones en un contexto de corrupción tanto sistémica como percibida, y que en el caso de los debates en torno a la defensa libre, impactan el desarrollo de la institucionalidad judicial en su momento fundacional (Quiroz 2013: 46-48).

Los debates en torno a la libertad de defensa[4]

Según el Reglamento Provisional de Tribunales y Juzgados de 1822 en ningún tribunal o juzgado del país se admitiría "escrito o pedimento que no esté firmado por un letrado" comprendido en la matrícula del colegio de abogados, para lo cual en cada tribunal del territorio se fijaría "un ejemplar de la matrícula del colegio", además de establecerse pena de un mes de suspensión para el funcionario que no cumpliera con la disposición (Oviedo 1863: 138).

Vigente hasta 1845, la obligatoriedad de la firma de abogado resultaba absolutamente impracticable en un país donde el número de abogados no era si quiera suficiente para cubrir las plazas de juez de primera instancia establecidas por la Constitución (Whipple 2013b: 68). A la obligatoriedad de la firma de letrado, el reglamento agregaba además otras exigencias que dificultaban aún más el cumplimiento de la norma, como por ejemplo, exigir que para recibirse de abogado, todo aspirante debiese practicar por al menos cuatro años bajo la dirección de un abogado titulado. El problema era tan evidente que ya en 1825 el presidente de la Corte Suprema hacía ver al gobierno central que en ciudades importantes como Trujillo sencillamente no había abogados que defendieran los intereses de la población.[5]

La situación era ciertamente más dramática en pequeños poblados costeros o del interior del país, donde la total ausencia de abogados era la norma. Aunque la Constitución no lo permitía, el Estado enfrentó la carencia de abogados y jueces permitiendo que las funciones judiciales de primera instancia fueran asumidas de manera extraordinaria y momentánea por las autoridades ejecutivas locales, aunque estas no tuvieran formación en derecho (Bilot/Whipple 2014), además de flexibilizar circunstancialmente los requisitos para ejercer como abogado.

4 Las fuentes utilizadas para seguir las distintas posiciones frente al proyecto incluyen documentos oficiales, discursos de los presidentes de las cortes superiores de justicia, sesiones del congreso y principalmente remitidos publicados el diario *El Comercio* de Lima. Este periódico logró posicionarse como uno de los más importantes de la capital peruana durante el siglo XIX dando amplio espacio en sus páginas a artículos remitidos por los propios lectores, los que se convirtieron al mismo tiempo en su principal fuente de financiamiento. El periódico no restringía los temas que se publicaban a una línea editorial de carácter partidista, permitiendo que distintos debates relevantes al país se dieran al interior de sus propias páginas y no entre distintos periódicos con posiciones políticas divergentes (Whipple 2013a, capítulos 3 y 4).

5 "Sobre falta de abogados", 23 de marzo de 1825, en: Archivo General de la Nación (AGN), Corte Suprema de Justicia, RJ 6.1.162, N. 9, f. 1.

En la práctica estas medidas estuvieron lejos de ser suficientes. La insistencia de los distintos gobiernos por profesionalizar el sistema sin contar con los recursos humanos para ello, alentó la existencia de instancias informales de mediación judicial como por ejemplo, que los jueces de paz se hicieran cargo de las judicaturas de primera instancia, o la proliferación de los falsos abogados conocidos como tinterillos. Como sostiene Carlos Aguirre, la existencia de estos intermediarios sin instrucción formal en derecho "debe relacionarse con el proceso más amplio de privatización del poder al nivel local, donde funciones como la defensa legal de los indígenas, antes considerada una obligación del estado colonial, pasó a manos de privados" durante los inicios de la república (Aguirre 2012: 126). En concordancia con lo sostenido por Aguirre, creemos sin embargo, que esa informalidad no solo se expresará entre grupos subalternos de la sociedad, sino que será capaz de permear distintos grupos sociales y ser parte de una dimensión que torna difusos los límites entre la práctica formal e informal del derecho.

Efectivamente, muchos de los reclamos contra la administración de justicia publicados en la prensa Limeña de principios del siglo XIX criticaban el monopolio y la privatización de la representación legal, resaltando el alto costo que tenía para la población de la capital llevar sus asuntos contenciosos ante la justicia, donde además del pago al juez y los derechos de escribano "todo escrito ha de ser con firma de abogado". Esto, según un comerciante de Lima, implicaba "que la suerte de los ciudadanos en el Perú ha de estar siempre sujeta a trabajar y deslomarse para mantener a una gabilla de ociosos que están como chanchos regoldando sobre la sangre de los infelices" (*El Mercurio Peruano* 262, 25.6.1828). Por la misma razón, muchos sostenían que la justicia era un asunto de dinero, de la posición social de los litigantes y su capacidad de asumir los costos que implicaba acceder a la justicia, por lo que recomendaban a la población evitar los juicios, y así evitar "la concurrencia de gente extraña [los abogados] en las disputas de familia" (*El Comercio* 1954, 11.12.1845).

Fuera de la capital el impacto sobre los litigantes también era de carácter económico. Al no existir suficientes letrados dispuestos a trasladarse a zonas remotas ya fuese para ejercer como juez o como abogado, por considerar que no era económicamente atractivo,[6] los litigantes se veían

6 En octubre de 1843, por ejemplo, la Corte Superior de Arequipa informaba al gobierno de la dificultad para encontrar abogados aptos que quisieran asumir como jueces de

forzados a recorrer grandes distancias en busca de un profesional que los representara, o un juez que viera sus causas, aumentando el costo que ya significaba la obligación de ser representado por un letrado. Así lo reclamaba, por ejemplo, Toribio Góngora al Ministerio de Justicia en 1832, argumentando que en Chuquibamba, provincia de Condesuyos no existían letrados, y que los más cercanos se encontraban a 50 leguas de distancia en Arequipa, lo que generaba excesivos gastos a los litigantes.[7]

A lo económico, se sumaban también razones socio-culturales. Como apuntaba el ministro de Justicia en su memoria anual de 1848, el gobierno experimentaba "graves inconvenientes para la provisión de judicaturas de primera instancia por la repugnancia que siempre oponen los letrados de alguna reputación a servir fuera de las capitales de los departamentos". La falta de abogados, más el "estado de cultura de muchos de nuestros pueblos", hacía también, según el ministro, que los jueces tuvieran que enfrentarse a permanentes "informalidades en la sustanciación" de los juicios (*El Comercio* 3041, 23.8.1849).

Ante esta realidad, se comenzaron a levantar voces que pedían eliminar la prohibición de presentar escritos sin firma de abogado, o dicho de otro modo, formalizar realidades que eran la norma fuera de ciudades como Lima o Arequipa, pero que hasta ese momento eran consideradas ilegales, o en el mejor de los casos, su aceptación dependía del criterio de autoridades locales. En sesión del Consejo de Estado del 4 de agosto de 1841, por ejemplo, el ministro de Gobierno presentó una solicitud del juez José Mariano Alvarado para que se permitiera en los juzgados de primera instancia del país escritos sin firma de abogado, la que no prosperó (*El Comercio* 656, 7.8.1841).

En septiembre de 1843 un artículo publicado en el periódico limeño *El Comercio* describía la obligatoriedad de la firma de abogado como una "servidumbre tan degradante, que cuasi reduce al ciudadano a la clase de esclavo, a quien no se puede oír sin el patrocinio de su amo". Agregaba el autor del artículo que esta dependencia no solo era ignominiosa e injusta, sino "gravosísima porque el abogado en el asunto más trivial exige honorario por delante" contra el orden natural de la sociedad donde se paga el

primera instancia, argumentando que los buenos abogados "no quieren abandonar sus estudios que les producen ganancias efectivas" comparados con "los sueldos mal pagados de los empleados". AGN, Corte Superior de Arequipa 5.2.91, Legajo sin número, f. 1, 27 de octubre de 1843.

7 AGN, Expedientes Particulares RJ 1.6.17, L. 52, N. 33, f. 1, 1832.

trabajo después de realizado según su calidad, "mientras que el abogado se ha de llevar por la parte que menos sus cincuenta pesos adelantados por cada seis meses: aunque dentro de ocho días abandone su causa el litigante tiene que tributar a su forzoso protector cien pesos anuales, saliendo regularmente perdido en los intereses que reclama; pues entre abogado, procuradores y escribanos se va la sustancia del litigante" (*El Comercio* 1248, 8.9.1843).

Asumiendo la realidad que se vivía por la falta de letrados, especialmente fuera de la capital, el nuevo reglamento de tribunales sancionado en 1845 durante el primer gobierno constitucional de Ramón Castilla, estipulaba en su artículo 257 que donde existiera "abundancia de abogados o pase del número de seis, no se admitirá en ningún tribunal o juzgado, cualquiera que sea, escrito o pedimento que no esté firmado por letrado comprehendido en la matrícula" (Oviedo 1863: 179). Aunque se formalizaba y sacaba de la ilegalidad el actuar de los tinterillos y de los propios litigantes cuando optaban por asumir su propia representación ante los juzgados, la medida no causó mayor cuestionamiento entre la opinión pública, tal vez porque precisamente no afectaba la labor de los abogados que se concentraban en ciudades como Lima y Arequipa. Por el contrario, si es que existieron críticas, estas consideraban la medida como insuficiente. Así lo hacía ver José Chiri, procurador de la provincia de Moquegua, quien en octubre de 1848 escribió al Consejo de Estado pidiendo la derogación del artículo 257 del Reglamento de tribunales. Según el procurador, en un lugar como Moquegua, donde no existían siete abogados para defender los pleitos, existía "la temeridad de no admitir en los juicios escritos sin firma de abogado", resultando que los derechos de los individuos quedaban a merced "de los poderosos que de ordinario son los que abusan contra el miserable, asegurados de que no habrá quien los acuse o demande".[8]

El proyecto de defensa libre de 1849

No resulta extraño, entonces, que en la legislatura del año 1849, el diputado José Modesto Vega, representante por una zona periférica del país como Chachapoyas, presentara un proyecto de Ley que en su artículo único establecía que "[t]odo ciudadano puede defender sus acciones y derechos judi-

8 AGN, Corte Superior de Arequipa 5.2.91, octubre de 1848, f. 4-4v.

cial o extrajudicialmente, sin necesidad de ser obligado a nombrar abogado ni procurador".[9] Esta vez, sin embargo, la reacción en la prensa limeña fue inmediata, generándose a partir de ese momento un intenso debate entre partidarios y opositores a la medida que duraría varios años.

Antes de discutirse el proyecto en la Cámara de Diputados, ya se publicaban artículos periódicamente. Quienes apoyaban el proyecto hacían ver que las instancias de fiscalización tanto de la labor de jueces como de abogados no se cumplían porque estos no se acusaban entre ellos, a lo que se sumaba la obligatoriedad de la firma de abogado, y sus graves consecuencias para los litigantes de Arequipa, Cusco y Lima. Según un articulista, la obligatoriedad era "un monopolio abominable" que iba en contra de la igualdad ante la ley, "un cáncer oligarca que destruye el corazón de la sociedad" (*El Comercio* 3029, 8.8.1849).

Otro articulista argumentaba que si "no se requiere la calidad de letrado matriculado para los altos y delicados cargos de Diputados, Senadores, Presidente de la República, Ministro de Estado y Consejeros de Estado", tampoco debía exigirse para defender los intereses personales ante los tribunales de justicia. La obligatoriedad, por tanto, atacaba al sistema democrático en su base, infringía la Constitución y solo era el producto de una "aristocracia de abogados matriculados" que "ata y encadena la libertad del hombre, reduciéndolo al pupilaje de la firma, a pesar de que reúna ilustración y saber" (*El Comercio* 3060, 15.9.1849).

Al discutirse el proyecto en la Cámara de Diputados, quienes se manifestaban en contra resaltaban que para decretarse la defensa libre era necesario que el país tuviera "una legislación completa en lengua vulgar". La labor del abogado era compleja, debiendo citar libros en latín y "haber estudiado cuando menos el plan" de la materias. Sin dicho conocimiento era imposible pensar que alguien pudiese defender una causa ante los tribunales y el "monopolio de las defensa" debía "seguir por necesidad" (*El Comercio* 3066, 22.9.1849). A esta razón, se sumaba la experiencia de la defensa libre decretada por el Reglamento de Tribunales donde no existiera abundancia de tribunales. Esta medida, según el diputado Cabero, había permitido que se apoderaran "de las causas todos los chicaneros", quienes "introducen el desorden en las familias y cada una de ellas vendrá a ser una inagotable mina para la rapacidad de tales hombres irresponsables". Por eso pedía recordar "lo que sucede en cada provincia con los papelistas",

9 AGN, Cámara de Senadores 7.2.174, doc. sin número, 20.4.1855, f. 4v.

quienes enredan los juicios y hacen "campear la ignorancia, la mala fe y la codicia extrema". El diputado reconocía que también existían abogados "que mancillan tan ilustre carrera y exceden a los rábulas, y que quizá entre nosotros obtienen más crédito un curialista y enredador majadero y despreciable, que un abogado prohibido de buena fe", pero consideraba que "tales abusos, que ciertamente nos ruborizan", no eran la generalidad (*El Comercio* 3066, 22.9.1849).

Distinguir quienes eran los agentes que corrompían el sistema judicial era central en los argumentos tanto a favor como en contra de la libertad de defensa, y fue sobre este punto que se centró el debate luego de aprobado el proyecto en la cámara de diputados por 38 votos contra 12 en septiembre de 1849 (*El Comercio* 3066, 22.9.1849), debiendo luego ser ratificado o rechazado por el Senado.

Un extenso artículo publicado pocos días después de la aprobación del proyecto por los diputados respaldaba la iniciativa e insistía en que en el Perú la profesión de abogado había "degenerado su carácter", se había apartado "de su noble fin" y "se había corrompido al extremo de producir los efectos contrarios de su creación", por lo que era necesario "abolirla o cuando no reformarla al menos". Para el articulista, la profesión de abogado era "noble y honrosa" y demandaba "profundo estudio, talento" así como "probidad, desinterés y elevación de sentimientos". Y si bien en el Perú habían algunos notables y dignos de honra, había que confesar que aquellos eran muy pocos. La mayoría de los abogados peruanos eran una "multitud de ignorantes, incapaces de ser cosa alguna a la sociedad" y que era más fácil hacerse "abogado que herrero o zapatero". Insistía el autor diciendo que muy pocos jóvenes de talento realizaban los estudios necesarios en los ramos de la jurisprudencia y la práctica exigida por la ley, mientras la gran mayoría eran "jóvenes rudos o muy limitados" que "apenas toman algunas lecciones de filosofía, aprenden el Manual del Abogado y con alguna práctica se presentan a los exámenes con el amparo del algún padrino y con la consabida táctica de los empeños" logran el título. En resumen, eran abogados "como se dice vulgarmente, practicones o romanticistas", cuya ciencia consistía en "hacer lo blanco negro y lo negro blanco, y en eternizar los pleitos con artículos maliciosos, con recusaciones y apelaciones y en no tener consecuencia con nadie con tal que esté por medio en interés y la ganancia" (*El Comercio* 3067, 25.9.1849).

Los opositores a la medida llamaban al senado impedir un futuro caótico para el país y rechazar el proyecto. Según un artículo publicado en

El Comercio la defensa libre traería "funestas consecuencias, un espantoso desorden y la completa dislocación social" (*El Comercio* 3069, 27.9.1849), mientras otro explicaba que "abogado es el que sabe, y puede defender; y el que necesita defensa se dirige al que sabe y puede hacerla". Estos eran "principios que emanan de la naturaleza misma de las cosas, y como tales han sido de todos los tiempos, y los siglos". Por ende, argumentaba, la prerrogativa de los abogados de asumir la defensa no se sustentaba en "la clase" sino en las "aptitudes" y "conocimientos profesionales". Esta era una "prerrogativa que se ha extendido, a cuantos han adquirido la capacidad necesaria" y "que no es el resultado de un privilegio, sino de la necesidad de los hombres de todos los países y de todas las edades" (*El Comercio* 3069, 27.9.1849).

Otro artículo, publicado días después en el mismo periódico, decía que sería una imprudencia de los legisladores dejar los preciosos intereses de los litigantes a "defensores inexpertos o a la malicia y rapacidad de tinterillos ignorantes" (*El Comercio* 3075, 4.10.1849). Efectivamente, entre quienes defendían la labor de los abogados, permitir la defensa libre implicaba traer a la capital el desorden y la ignorancia que predominaba en el interior del país y entre los sectores populares de la capital. Al mismo diputado Vega se le criticaba en términos raciales, al describir su actuar en el congreso como uno inspirado en "su lógica mulata" que sabía "arrancar a la Cámara de Diputados cuantas leyes cree convenientes a su interés personal" (*El Comercio* 3068, 26.9.1849). Otro artículo decía que tinterillos como "los Perrochenas, Saravias, Puentes, Fracias, Riscos y demás" estaban contentos ya que la ley presentada por el "Taita Vega" era "una verdadera California para los susodichos", quienes "defenderán los pleitos judiciales ni más ni menos como defienden los extrajudiciales de las chinganas y pulperías". Finalmente, el artículo acusaba al propio Vega de ser un papelista, y que su proyecto de ley lo había presentado en su propio provecho" para "sacar más lucro en sus defensas, es decir, por especulación y egoísmo, y no por patriotismo" (*El Comercio* 3074, 3.10.1849).

De aprobarse la defensa libre, un escrito predecía la desaparición de los abogados, lo que era como "acabar con la ilustración y entronizar el reinado de la ignorancia". Peor aún, de suprimirse a los abogados "al cabo de veinte años incluso los magistrados serían "tan ignorantes" como "lo son hoy los jueces de paz" (*El Comercio* 3075, 4.10.1849). Es más, según otro escrito, el proyecto condenaba a muerte al "útil establecimiento del Colegio de Abogados; porque pudiendo todos los ciudadanos defenderse por

sí mismos, ya no será necesario en adelante pertenecer a aquel cuerpo para ejercitarse en la noble tarea de proteger los derechos de la humanidad". La institucionalidad de la República estaba en peligro y "todo se echa abajo con el golpe de pluma por esa ley tan monstruosa que contrariando las leyes de la naturaleza concede a todos igual capacidad y aptitudes que de hecho les ha negado su Soberano autor". En síntesis, de aprobarse la ley por el Senado, el sistema judicial peruano sería dominado por "la ignorancia y la mala fe", y ya no habría "freno que sujete la rapacidad de los que especulen en la ruina de sus semejantes", confirmándose "el triunfo del oscurantismo sobre la capacidad y el saber" (*El Comercio* 3079, 9.10.1849).

En respuesta a este oscuro diagnóstico, quienes apoyaban el proyecto respondían haciendo ver que la defensa libre no significaría el fin de los abogados, ni de su colegio, ni de los magistrados. Por el contrario, era una forma de dar acceso a la justicia en los lugares donde no existían abogados o para quien no podía pagar por sus servicios. Ejemplificaban la situación destacando que de los dos millones de peruanos no más de trescientas mil personas estaban sujetas a la firma forzosa de acuerdo a la legislación vigente, y que el resto se manejaba "sin abogados defendiéndose por sí, o por personas de su confianza". Agregaban que "de las setenta y dos provincias de la República", al menos sesenta ya gozaban "del derecho de la defensa libre, sin que se noten aquellos grandes males con que se nos amenaza" (*El Comercio* 3070, 28.9.1849).

La visión que se tenía de la realidad de las provincias era totalmente opuesta entre quienes rechazaban el proyecto. Un litigante que decía conocer bien la realidad de los pequeños pueblos de diversos departamentos del país, escribía en *El Comercio* dando detalles de lo que había visto con sus propios ojos. En cada pueblo había al menos un par de tinterillos "que sin más libros que la Curia filipica, o el Elisondo, enredan y roban a esa miserable gente. Nadie, puedo asegurarlo, se defiende por sí mismo: respetan sus dotores, que así los llaman, como a unos sabios, y se entregan los infelices al sacrificio". El mismo articulista explicaba que con solo saberse en Ayacucho que él había estudiado en un colegio, había sido suficiente para que toda la población, incluyendo los tinterillos, se le acercaran a consultarle sobre "los pleitos que estaban defendiendo, para que les dijese si habían desempeñado bien su cargo, y para que les indicase lo que tenían que hacer; y aquella gente se agolpaba toda a mí, para que decidiese sus diferencias, oyendo y obedeciendo los miserables y desgraciados sumisamente cuanto disparate me daba la gana resolver". El autor decía haberse

convertido en " el abogado general" de esos pueblos, "yo era el juez, en fin yo era todo, y me daba pena ver cómo estaban entregados a esos bichos tan ignorantes como malvados, que despúes de robarlos y saquearlos materialmente, no hacían más que enredarlos, y hacerlos pleitear toda su vida" (*El Comercio* 3079, 9.10.1849).

Otro artículo en defensa del proyecto de Vega decía que los temores de los abogados no eran más que un "sofisma miserable". El asunto en debate era el del monopolio que significaba la firma forzosa de letrado en aquellas ciudades donde existía abundancia de abogados. Los juicios eran de por si enredados y lo que se planteaba era el derecho a que "se enreden los mismo interesados o que los enrede otro, obligandoseles a gastar en honorarios de abogado". El alto costo de los juicios era una realidad sufrida por todos. Pedían que se le preguntara a cualquiera y aseguraban que la respuesta sería que en el juicio "ya ha gastado más de lo que vale lo que pelea, y que su pleito no tiene cuando concluir: ya ha durado diez años, ya ha durado quince, veinte y más años, y todavía se halla al principio". Esto afectaba ciertamente a los sectores más pobres de la sociedad, quienes debían hacer grandes esfuerzos "para pagar un honorario, porque hay que hacer un apremio, contestar un traslado, y ya se han pasado los seis meses aunque en ellos no se haya hecho nada". Todo esto, según el artículo, mientras los abogados gozan de su monopolio y se divierten "con la humillación y abatimiento de los que no son de la profesión" (*El Comercio* 3071, 29.9.1849).

El asunto planteado no era menor. Efectivamente en ciudades como Lima, las relaciones entre litigantes y abogados estaban definidas por las categorías de diferenciación socio-racial prevalentes en la época, y aunque en la capital se concentrara la gran mayoría de abogados existentes en el país, esto no significaba la ausencia de tinterillos. Al igual que en las provincias donde no habían abogados, eran estos agentes informales quienes se encargaban de representar los intereses de los sectores populares, aunque a diferencia de lo que ocurría en provincias, ellos también debían someterse a la obligatoriedad de la firma de abogado. Esto quiere decir que el monopolio que establecía la firma forzosa de letrado obligaba a los agentes informales a mantener relaciones clientelares con abogados titulados, quienes finalmente eran quienes firmaban cada recurso.

Esto queda de manifiesto en la demanda entablada por el indígena José María Ojeda contra Don Jerónimo Boza por reconocimiento de escrito, en que las diligencias presentadas por el indígena durante el proceso ante los tribunales eran firmadas por distintos abogados, entre ellos los doctores

Felipe Barriga Álvarez, Marcos Berrio Luna, Manuel José Gutiérrez Cosío; Antonio Arenas y José Celedonio Urrea, algunos de ellos, destacados abogados de la capital. En un texto publicado en *El Comercio*, el mismo abogado Urrea explicaba que él se entendía con D. Andres Sorogastua, apoderado del indígena, quien concurría frecuentemente a su estudio para "que le trabajase diferentes escritos para los litigantes que tenía". Urrea explicaba en su escrito que "los tales litigantes nunca se entendían" con él, "sino con Sorogastua, y que uno de ellos fue un cholo que litigaba con D. Jerónimo Boza; que el tal cholo nunca habló conmigo, sino que en la puerta de calle esperaba á Sorogastua" (*El Comercio* 2770, 22.9.1848).

En la explicación del abogado Urrea queda clara la labor de Sorogastua como tinterillo y representante del indígena, así como también la dependencia de este agente informal a la firma de letrado. Lo interesante es que la relación entre Sorogastua y el abogado Urrea no aparece como circunstancial sino que una práctica reiterada. Más adelante en el texto publicado por Urrea, este reconocía la existencia de una relación formal entre ambos al declarar que por algunas malas acciones del tinterillo, se había visto "en la necesidad de despedirlo", por lo cual él y "sus litigantes" se habían separado de su estudio (*El Comercio* 2770, 22.9.1848).

Prácticas semejantes quedan al descubierto en una disputa que mantenían el abogado José Miraval y el juez de primera instancia de Huánuco. Los defensores del juez describían a Miraval como inmoral, "un abogado bruto en la extensión de la palabra, venal, prevaricador y ladrón", quien por no conseguir clientes en Huánuco, se veía obligado a viajar a Cerro de Pasco "a firmar escritos ajenos por una o dos pesetas" (*El Comercio* 3025, 3.8.1849).

Tanto las acciones de Miraval como de Urrea, dejan de manifiesto que el monopolio que defendían los abogados frente al proyecto de defensa libre era más amplio de lo que ellos reconocían. De la misma forma las fronteras entre los ámbitos de acción de la justicia formal y la informal parecen haber sido mucho más difíciles de definir y muchas veces se entrelazaban para conectar mundos que en el discurso aparecían como independientes uno del otro. Es así como el debate aquí revisado parece confrontar no solo dos ideas sobre la labor de los abogados y tinterillos frente a los litigantes y la supuesta corrupción de estos agentes, sino que también nos muestra dos ideas que se tenían del Perú, transformándose el proyecto de defensa libre en una metáfora de las distintas visiones que del país se tenían desde

la capital o desde las provincias, dos realidades que difícilmente podían convivir en un mismo espacio.

De la misma forma, tanto entre quienes apoyaban o rechazaban el proyecto de defensa libre existía concordancia en definir el sistema judicial peruano como corrupto y ambos bandos ponían a la corrupción en el centro de sus argumentos. En lo que no concordaban, sin embargo, era en distinguir las fuentes de dicha corrupción. Para quienes apoyaban la defensa libre la corrupción venía de abogados y jueces que eternizaban los conflictos en su propio beneficio, gozando de total impunidad ante la incapacidad del Estado de ejercer una fiscalización efectiva. Para los abogados, en cambio, la corrupción del sistema se originaba en la mala fe, atraso e ignorancia generalizada que caracterizaba la vida en provincias y el consiguiente desorden promovido por quienes ejercían funciones judiciales en ese contexto, sin tener la debida preparación y cultura.

El proyecto de defensa libre fue finalmente rechazado por la Cámara de Senadores en su sesión del sábado 13 de octubre de 1849 (*El Comercio* 3085, 16.10.1849). Dos años después, se volvió a presentar el mismo proyecto, esta vez patrocinado por el diputado por Huarochirí Esteban Jiménez (*El Comercio* 3693, 4.11.1851). La tramitación del nuevo proyecto tuvo un devenir semejante al de 1849, siendo aprobado por una gran mayoría en la Cámara de Diputados para posteriormente ser rechazado por el Senado, luego de pedir los senadores detallados informes sobre su parecer al Colegio de Abogados y a la Corte Suprema de Justicia.[10] Esta vez, la presentación del proyecto volvió a generar un intenso debate en la prensa, aunque replicando los mismos argumentos sostenidos dos años antes. Finalmente, la Cámara de Diputados pidió al Senado en agosto de 1853 que reconsiderara el proyecto de 1851, manteniendo esta última su posición de rechazo.[11]

Los esfuerzos de quienes buscaban acabar con el monopolio que tan insistentemente se defendía desde Lima tuvieron mejor acogida desde el poder ejecutivo. Un nuevo Reglamento de Tribunales dictado en 1854 amplió la posibilidad de que en muchos poblados no se exigiera la firma de letrado al aumentar a diez la cantidad de abogados necesarios para permitir la auto representación frente a los tribunales, comparado con los seis que se exigían según el reglamento de 1845 (Oviedo 1863: 232).

10 AGN, Cámara de Senadores 7.2.174, doc. sin número, 20 de abril de 1855, f. 1.

11 AGN, Cámara de Senadores 7.2.174, doc. sin número, 20 de abril de 1855, f. 1.

La aprobación de la defensa libre y su pronta derogación

Un año después, en abril de 1855, a través de su ministro de Justicia, el Gobierno liderado por Ramón Castilla pidió al Congreso todos los antecedentes de las discusiones que se habían tenido anteriormente ante los proyectos de defensa libre, luego de lo cual, y considerando que "no hay razón para que sea obligatorio a los profesores del derecho firmar las solicitudes de las personas a quienes dirijan en el curso de sus gestiones judiciales", decretó que se admita "toda clase de recursos en los juzgados y tribunales, sin necesidad de que lleven firma de abogado" (Oviedo 1863: 402). En palabras del ministro de Justicia Pedro Gálvez pronunciadas ante el Congreso pocos meses después de decretada la libertad de defensa, este explicaba que con la medida el gobierno buscaba evitar el perjuicio a los litigantes, como también proteger "la noble profesión del foro",[12] la que se veía constantemente atacada por el actuar de abogados que no tenían suficiente preparación.

Aunque el gobierno creía que la reforma iba por el camino correcto, la resistencia a la medida no se hizo esperar, aunque esta vez no se generó mayor discusión en la prensa. Por el contrario, la medida fue consistente y reiteradamente rechazada por los magistrados de las cortes superiores y de la Corte Suprema, quienes en sus discursos de apertura del año judicial dejaban ver de manera explícita, los males que causaba al país la libertad de defensa. Como miembros del colegio de abogados, los altos jueces de la república defendían en cierta medida sus propios intereses. Al mismo tiempo presentaban una visión de un pasado idílico que no reconocía los problemas que históricamente había enfrentado el sistema judicial aun antes que se decretara la defensa libre, y que incluso ellos mismos habían denunciado en más de una oportunidad, apuntando a los vicios de los abogados en el entorpecimiento de las causas y falta de probidad en sus acciones.

A inicios de 1856, el presidente de la Corte Superior de La Libertad destacaba que la defensa de letrado era una garantía que "precavía los pleitos dolosos, siendo punible el abogado que abusaba", mientras que al asumir su propia defensa se perdía esta fiscalización frente a los litigantes. Agregaba en su discurso que la profesión de abogado "se halla en inminen-

12 *Memoria que presenta a la Convención Nacional de 1855 el Ministro encargado del despacho de Justicia, Culto y Beneficencia.* Lima, Tipografía de la Dirección General de Estudios, 1855, 6.

te peligro de retrogradar o desaparecer, si se retiran los incentivos para el estudio y dedicación especial que demanda; seducidos los litigantes, o por una presunción engañosa de su propia capacidad, o por el ahorro mal calculado", dejándola sin clientela. Ejemplificaba este punto detallando que existían en todo el distrito "treintaitantos abogados y trece practicantes", de los cuales "la mayor parte se está dedicando a otra carrera o industria" (*El Peruano*, 16.2.1856).

Aunque como vimos anteriormente muchos críticos del sistema judicial destacaban que las instancias de fiscalización sobre la labor de los abogados no eran efectivas, Luciano María Cano, presidente de la Corte Superior de Ayacucho y Huancavelica, insistía en 1858 que con la defensa libre se eliminaba la responsabilidad de los litigantes. A diferencia de quien se defiende por sí mismo, el abogado era un individuo conocido quien podía ser suspendido del ejercicio de su profesión "por inepto y hasta por provocador de la desobediencia de las leyes". El ejercicio de la abogacía era para el juez una garantía ya que al firmar sus escritos los letrados "manifiestan sus talentos, sus opiniones y también sus rectas intenciones", tomando "sobre si resueltamente la responsabilidad de sus actos" (*El Peruano*, 16.1.1858).

Luego de cinco años de vigencia, el presidente de la Corte Superior del Cusco pedía derechamente al gobierno "la derogación del decreto de defensa libre". Según el juez, desde su puesta en práctica los pleitos se habían convertido "en un laberinto, y por eso los jueces, después de una relación que no presenta más que oscuridad y confusión, tienen que redoblar su estudio y atención y gastar doble tiempo para sacar la luz de la verdad de las tinieblas con que la han envuelto". Agregaba que los escritos que ahora presentaban los litigantes "ya no ilustran a los jueces para una acertada resolución, porque en lugar de razonamientos legales no se lee en ellos sino importunidades y despropósitos venidos sin respeto ni moderación, y lo sensible es que no hay corrección con que contener a los que, abusando de la defensa libre, han prostituido la ilustra profesión de abogado" (*El Peruano*, 4.2.1860).

Una visión un poco más crítica era la del presidente de la Corte Superior de Arequipa. En su discurso de 1860 este reconocía que el monopolio de los abogados sobre la defensa de los litigantes no garantizaba su rectitud dado que a pesar de los conocimientos y responsabilidad a que estaban sujetos los abogados, estos "no dejaban de abusar de su oficio promoviendo artículos maliciosos, formulando solicitudes ilegales e interponiendo

recursos prohibidos e improcedentes". El problema era que con la defensa libre estos abusos se habían hecho aún más recurrentes. Por ende, la solución no solo pasaba por volver a exigir la firma de letrado, sino que además fiscalizarlos de forma debida para que fueran "más cautos y prudentes para no aceptar el patrocinio de causas manifiestamente injustas y para arreglar sus solicitudes a la ley" (*El Peruano*, 26.1.1860).

Al finalizar su discurso, el presidente de la Corte declaraba que a pesar de los inconvenientes tenía esperanza en un futura mejora en la defensa de los litigantes, más aun cuando contrario a lo que todos predecían, en vez de reducirse el interés por el ejercicio de la abogacía con la defensa libre, en Arequipa el número de abogados matriculados había subido en diez en el último año, todos "con probidad acreditada", conocimientos y capacidad "que prometen el buen desempeño de su profesión" (*El Peruano*, 26.1.1860). Según el discurso del año siguiente, los abogados en Arequipa seguían en alza, subiendo la matrícula en 7 nuevos abogados y sumándose trece individuos más a la lista de practicantes del foro (*El Peruano*, 16.2.1861).

Más allá de estos datos, no sabemos el impacto real que la defensa libre tuvo sobre los procedimientos del sistema judicial. Sin embargo lo anterior, la ley de defensa libre tuvo una corta vida. Ya en enero de 1861 se presentó en el congreso un proyecto de ley prohibiendo la libertad de defensa, el que fue rápidamente aprobado por el Senado. Luego de este primer trámite el proyecto pasó a la Cámara de Diputados y su comisión de justicia para su ratificación, proceso que tomó más tiempo, alegándose desde la prensa que la "imperdonable apatía" de la Cámara no hacía caso de "la grande urgencia", ni "de los grandes males que está ocasionando en toda la República, la maldecida autorización de defensa libre" (*El Comercio* 6855, 9.4.1861).

Finalmente, en noviembre de 1862, el congreso derogó el decreto dictatorial de 1855 argumentando que la defensa libre había "presentado en la práctica graves inconvenientes para la buena administración de justicia". Junto a lo anterior, la ley estipulaba que quedaban "restablecidas las leyes relativas a la intervención y responsabilidad de los abogados", y establecía en 8 el "número de abogados que se requiere para que en una población se exija la firma de letrado".[13]

13 *Colección de Leyes y Resoluciones sancionadas por el Congreso de 1862.* Lima, Tipografía de Mariano Cáceres, 1863, 14.

Conclusión

En su espíritu de reforma liberal el Gobierno de Castilla vio en la defensa libre y la institucionalización de las instancias informales de defensa legal una forma de ampliación de las libertades individuales y del ejercicio de la ciudadanía. Si bien la defensa libre, independiente de si fuese legalmente sancionada o no, fue una práctica común en la mayoría del territorio peruano, el debate sobre su pertinencia se dio cuando intentó dársele carácter nacional, afectando a las plazas donde se concentraba la mayor parte de los abogados del país. En consonancia con este parecer, en su estudio sobre la obra del destacado abogado Francisco García Calderón, Carlos Ramos sostiene que el apoyo de éste a la defensa libre se debía a sus auténticas convicciones liberales, las que se oponían a las ideas de la mayoría de sus colegas que buscaban proteger el monopolio de la profesión (Ramos 2004: 149-150).

Más allá de lo anterior, las discusiones generadas a partir del proyecto de defensa libre permiten distinguir aspectos relevantes relativos a la administración de justicia durante el proceso de formación estatal. En un contexto en que la administración de justicia era constantemente acusada de desorden y corrupción al mismo tiempo que se mostraba incapaz de cubrir formalmente el territorio nacional, los debates intentan distinguir las fuentes de dicha corrupción, destacándose la tensión existente entre ciudades principales como Lima y Arequipa, y la realidad que vivía el resto del país. No extraña entonces que entre quienes buscaban formalizar la defensa libre, realidad vivida por años en la mayoría del territorio, la corrupción provenga de lo que ellos definen como el monopolio de los abogados, entiendan la justicia como un asunto dominado por el dinero, la posición social de los litigantes y su capacidad de manipular el sistema; mientras abogados y jueces apunten al atraso e ignorancia prevalente en las provincias como fuente principal de la corrupción.

Queda a este respecto profundizar en la investigación para distinguir, por ejemplo, la composición de las cámaras de senadores y diputados en estos años, tanto en lo que respecta a la procedencia como a las profesiones de sus integrantes, para tener más elementos a considerar en la confrontación de visiones que se da entre ellos. Igualmente, es necesaria la revisión de prensa de provincias que pueda ser cotejada con los debates aquí analizados, provenientes mayoritariamente de Lima, y ver si se confirma la confrontación entre distintas ideas sobre la correcta administración de

justicia, incluso entre jueces de primera instancia y la voz más oficial de los jueces de cortes superiores.

Lo que sí es claro, es que esta dualidad se transfiere entonces a las visiones que se tienen de los distintos agentes que participan de la defensa judicial de los litigantes, sean estos informales como los tinterillos o formales como los abogados titulados. Relacionado con esto último, las discusiones aquí analizadas dejan en evidencia que la informalidad era una práctica que nacía del propio rechazo de los abogados a realizar su trabajo fuera de Lima o de representar a los sectores populares, aunque de todas formas, los tinterillos muchas veces dependían del sistema formal para realizar su actividad.

Queda de manifiesto entonces que las conexiones entre ambas prácticas del derecho parecen ser más estrechas de lo que hemos pensado, siendo estos dos mundos interdependientes entre sí. De la misma forma, al ser la defensa libre una realidad sancionada legalmente en gran parte del territorio nacional, su inclusión dentro de los binomios formal/informal o corrupto/íntegro, parece depender en definitiva del espacio en que se manifieste y la valoración sociocultural que los distintos actores hagan de ella.

Bibliografía

Águila, Alicia del (2013): *La ciudadanía corporativa: política, constituciones y sufragio en el Perú (1821-1896)*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Aguirre, Carlos (1993): *Agentes de su propia libertad: los esclavos de Lima y la desintegración de la esclavitud, 1821-1854*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.

— (2005): *The Criminals of Lima and their Worlds: The Prison Experience, 1850-1935*. Durham: Duke University Press.

— (2012): "Tinterillos, Indians, and the State: Towards a History of Legal Intermediaries in Post-Independence Peru". En: Kirmse, Stefan (ed.): *One Law for All? Western models and Local Practices in (Post-) Imperial Contexts*. Frankfurt a.M.: Campus, pp. 119-151.

Bilot, Pauline/Whipple, Pablo (2014): "Los desafíos de la justicia republicana. Profesionalización e independencia de la judicatura en Chile y Perú durante el siglo xix". En: Francesco, Antonino de/Mascilli, Luigi/Nocera, Raffaele (eds.): *Entre Mediterráneo y Atlántico. Circulaciones, conexiones y miradas, 1756-1867*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, pp. 477-500.

Bustamante, Juan (1849): *Apuntes y observaciones civiles, políticas y religiosas con las noticias adquiridas en este Segundo viaje a la Europa*. Paris: Imprenta de Lacrampe Son y Compañía.

Colección de Leyes y Resoluciones sancionadas por el Congreso de 1862. Lima, Tipografía de Mariano Cáceres, 1863, 14.

Gootenberg, Paul (1993): *Imagining Development. Economic Ideas in Peru's "Fictitious Prosperity" of Guano, 1840-1880.* Berkeley: University of California Press.

Memoria que presenta a la Convención Nacional de 1855 el Ministro encargado del despacho de Justicia, Culto y Beneficencia. Lima, Tipografía de la Dirección General de Estudios, 1855, 4.

Oviedo, Juan de (1863): *Colección de leyes, decretos y órdenes publicadas en el Perú desde el año de 1821 hasta el 31 de diciembre de 1859*, tomo XI. Lima: Felipe Bailly.

Quiroz, Alfonso (2013): *Historia de la corrupción en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Ramos, Carlos (2004): "El Diccionario de la legislación peruana de Francisco García Calderón o la obra de un jurista burgués". En: McEvoy, Carmen (ed.): *La experiencia burguesa en el Perú (1840-1940)*. Madrid/Frankfurt a.M.: Iberoamericana/Vervuert, pp. 107-150.

Sobrevilla, Natalia (2004): "El proyecto liberal y la Convención de 1855". En: McEvoy, Carmen (ed.): *La experiencia burguesa en el Perú (1840-1940)*. Madrid/Frankfurt a.M.: Iberoamericana/Vervuert, pp. 223-243.

Whipple, Pablo (2013a): *La gente decente de Lima y su resistencia al orden republicano: Jerarquías sociales, prensa y sistema judicial durante el siglo* XIX. Lima/Santiago de Chile: Instituto de Estudios Peruanos/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.

— (2013b): "Carencias materiales, respetabilidad y prácticas judiciales en Perú durante los inicios de la República". En: *Historia Crítica* 49, pp. 55-79.

Corrupción y violencia. Una relación ambivalente en Argentina y Uruguay en el siglo XIX

Stephan Ruderer

En 1890, Carlos D'Amico, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1884 y 1887, se pregunta por qué el "pueblo argentino, tan favorecido naturalmente, no ha cumplido la ley del progreso impuesto a todos los pueblos" (D'Amico 1952: 53). Si bien plantea que, para la primera mitad del siglo XIX, la respuesta a esta interrogante se encuentra en el desarrollo histórico poco favorable, para la segunda mitad del siglo, el autor solo puede hacer referencia, con cierta resignación, a dos factores: la corrupción y la violencia.[1]

Ya para los contemporáneos, entonces, estos dos conceptos sirvieron como factores explicativos para describir una crisis percibida. Por esta razón, en lo que sigue, se analizará el discurso público sobre corrupción y violencia en la segunda mitad del siglo XIX para determinar, de manera más exacta, la relación entre ambos conceptos y la importancia que tuvieron en la legitimación de los acontecimientos políticos. Como el estudio surge del interés en el discurso de la corrupción, el marco teórico y las conclusiones se centran más en el poder explicativo de este concepto. Esto, entre otras razones, porque se parte de la base de que hacen falta estudios sobre el concepto de corrupción en América Latina, que vayan más allá de constatar su existencia abundante o de juzgar moralmente a las sociedades latinoamericanas por ser corruptas. En la actualidad, la historiografía europea "redescubrió" la historia de la corrupción y le adscribe a la investigación histórica un nuevo papel interpretativo. Por esta razón, en un primer punto, se hace breve referencia a la nueva historia de la corrupción,[2] para después introducir el contexto histórico en Argentina y Uruguay en la se-

1 D'Amico 1952: 54/55: "Es que en ese país […] han llegado a perder la conciencia pública […] de especular en la bolsa o en tierras". – "Es que el pueblo argentino tiene una propensión ingénita, una violenta inclinación al despotismo".

2 En este punto solamente se esbozan las ideas centrales de la historiografía, ya que para una descripción más detallada, se refiere a la introducción a este libro.

gunda mitad del siglo XIX. La parte principal consiste en el análisis de los conceptos "corrupción" y "violencia" en el discurso público de la época, para terminar con unas primeras conclusiones.

Marco teórico

Debido a la dificultad para definir el término "corrupción" y a la carga moral que contiene, los historiadores se han mostrado reacios, durante mucho tiempo, de utilizarlo como categoría analítica. Una definición mínima, que hoy también es aceptada por la mayoría de los investigadores, se refiere al "abuso de un puesto público para el beneficio privado" (Johnston 1996: 321-335). Fue la definición de James Scott la que abrió el campo de la corrupción a la investigación historiográfica. Scott destaca tres aspectos de la corrupción: abuso de un puesto público, discusión pública y existencia de reglas y normas establecidas, que se quiebran para beneficio propio (Scott 1972: 36-55). En este marco, el debate público adquiere un papel fundamental al definir corrupción como un "delito de percepción"; está sólo se vuelve tangible en la "comunicación sobre corrupción" (von Alemann 2005: 14). Esto implica que el significado del término corrupción es algo cambiante, que depende del estado actual de las normas y reglas que rigen una sociedad. Por esta razón, el historiador tiene que usar el término corrupción de manera anti-esencialista, lo que significa, tratar de entender corrupción en su contexto histórico y no proyectar los criterios morales actuales a la interpretación de fenómenos históricos (Grüne 2010: 32). La idea de la nueva historia de corrupción no es establecer jerarquías de países o épocas históricas más o menos corruptas ni relevar nuevos escándalos de corrupción hasta ahora desconocidos. Se trata más bien de entender el rol que jugó la comunicación sobre corrupción en un caso determinado sin juzgar, por eso, el pasado con la carga moral que conlleva la idea de corrupción actual. Esto nos lleva al potencial explicativo de la nueva historia de corrupción, si se entiende la acusación de corrupción como un elemento base de la comunicación política.

La investigación de la corrupción puede, según estas teorías, arrojar explicaciones acerca de las normas y valores de una sociedad y de su evolución histórica. La comunicación sobre corrupción se puede entender como una descripción del estado moral de una sociedad, en donde se puede determinar la diferencia entre la imagen ideal, perfecta y la prác-

tica real de la política. Además, los escándalos de corrupción remiten al potencial de movilización y a los límites de tolerancia de una sociedad. La reacción de la opinión pública a hechos de corrupción demuestra el grado de apatía o interés político y puede entregar pistas acerca del dinamismo político de una sociedad (Asch/Emich/Engels 2011: 22; Plumpe 2009: 19-47; Engels/Fahrmeir/Nützenadel 2009; Engels/Monier/Petiteau 2011; Dard/Engels/Fahrmeir/Monier 2014; Engels 2014).

A la luz de este marco teórico analizaré, en lo que sigue, la relación entre "corrupción" y "violencia" en el discurso público de Argentina y Uruguay durante la segunda mitad del siglo XIX. Un estudio de ambos conceptos y de su uso discursivo permite entregar pistas tanto acerca del desarrollo histórico presente en el proceso de formación de naciones en dichos países como de los valores dominantes entre la elite política.

La elección de estos conceptos alude al rol clave que jugaron en la historia de Argentina y Uruguay en el siglo XIX. Tanto la corrupción como la violencia son dos "problemas" que acompañan el proceso de formación de naciones en ambos países durante todo el siglo y que, además, ya fueron percibidos como tales por los contemporáneos, como se ve en las palabras de D'Amico arriba citadas.[3]

Debo mencionar que, en el presente artículo, el interés se centra en el discurso de violencia y de corrupción, por lo que carece de relevancia si cierto hecho de violencia o acto de corrupción pueden o no incluirse en una definición actual de "violencia política" o "corrupción política".[4] Lo importante es el hecho de que estos actos o hechos fueron descritos por los contemporáneos como "violencia" o "corrupción". Por esta razón, las citas acerca de la "violencia" que se dan en el texto, pueden aludir a los choques violentos en el atrio el día de una elección o a las guerras civiles que surgieron por la proclamación de una revolución. De la misma manera, el término "corrupción" puede incluir tanto fraudes y falsificaciones de votos como soborno o enriquecimiento ilícito en un puesto político. En los dos casos, los actos mencionados se discutieron en la prensa del siglo XIX, bajo los significados de "corrupción" o "violencia".

3 Para el caso de la "violencia" véase entre otros Macías/Sabato 2013.

4 Para las definiciones de "violencia política" véase entre otros: Riekenberg 2014; Enzmann 2013.

El contexto histórico

En la historiografía existe un amplio consenso de que en ambos países, a partir de 1860, empieza a consolidarse el proceso de formación de Estado, en donde un grupo de elite liberal deja atrás la época de los caudillos y trata de formar un Estado "moderno". Esto significa que se empieza a imponer, con más éxito que en los años anteriores, el monopolio de poder (militar, económico y político) de un gobierno centralizado, que vence la resistencia de aspiraciones provinciales y trata de construir estructuras nacionales.

Argentina

En el caso de Argentina, se habla de un comienzo del proceso de consolidación de Estado con la presidencia de Bartolomé Mitre (1862-1868), cuando la provincia acaudalada de Buenos Aires se relaciona nuevamente con la Confederación de las provincias restantes, para formar el Estado argentino (Rock 2002; Oszlak 1982; Halperin Donghi 1972; Sabato 2012). Anteriormente, durante casi diez años, existían dos Estados separados, la provincia de Buenos Aires y la Confederación Argentina, cuyos conflictos determinarían el desarrollo histórico del proceso de formación de Estado hasta el final del siglo XIX (Sabato 2012: 45ss.). La historiografía divide este proceso, a grandes rasgos, en dos etapas: con la presidencia de Mitre empieza la época de los gobiernos "liberales", donde las elecciones tenían un carácter más inclusivo (pero también más violento), donde la opinión pública era aceptada como base de legitimación del poder y donde la idea de la revolución seguía jugando un papel importante como medio de la lucha política (Sabato 2009). A partir del gobierno de Julio A. Roca (1880) empieza la etapa del "orden conservador", donde un grupo de elite logra, a través de acuerdos y maquinarias electorales, controlar el acceso al poder y donde, al mismo tiempo, surgen actores políticos nuevos que critican los mecanismos del poder, justamente a través de la acusación de corrupción (Botana 1994). La reforma electoral de 1912 y la victoria del radical Hipólito Yrigoyen en 1916 lleva, ya en el siglo XX, a una nueva etapa caracterizada por una inclusión más masiva y una democratización de la sociedad argentina, con lo que concluye, para la historiografía, la primera gran etapa del proceso de formación del Estado argentino (Castro 2012; Rock 2002; Oszlak 1982).

Si bien es cierto que durante la presidencia de Mitre hubo varias rebeliones armadas en las provincias del interior, contrarias a los esfuerzos centralizadores del gobierno de Buenos Aires, recién las revoluciones de 1874 y de 1880 alcanzaron una dimensión nacional. En ambas fechas ganó las elecciones presidenciales un candidato de las provincias interiores: en 1874 Nicolás Avellaneda y en 1880 Julio A. Roca. La provincia de Buenos Aires temió por su superioridad económica y política, por lo que se rebeló en contra de los nuevos presidentes electos, de tal manera que las revoluciones violentas tuvieron, sobre todo, razones político-económicas (Sabato 2012: 227-231; Míguez 2011: 161-205. Para 1880: Sabato 2008).

Debido, entre otros, a la violencia de estas revueltas, que marcaron profundamente la sociedad argentina, el gobierno de Roca trató de asegurar el control político a través de negociaciones con los gobernadores de las provincias, que se unieron bajo la organización del PAN (Partido Autonomista Nacional). Con el eslogan "paz y administración", Roca organizó un estado autoritario, que le permitió controlar y/o negociar el resultado de la mayor parte de las elecciones (Botana 1994; Alonso 2010: 97ss.). Por esta razón, y desde muy temprano, surgieron acusaciones contra la corrupción y el "gobierno elector" de este "orden conservador" en la prensa opositora. Estas acusaciones aumentaron en cantidad y cualidad bajo el gobierno de Miguel Juárez Celman, sucesor de Roca. Juárez Celman favoreció una política económica de laissez-faire, basó su poder en un sistema clientelístico de amigos y parientes y entregó más autonomía a los gobernadores de las provincias a cambio de declaraciones de lealtad (Alonso 2010: 221ss.; Duncan 1981: 149ss.). Esta línea política abrió paso a la fundación de un nuevo partido político opositor en 1889, la Unión Cívica (UC, que más tarde se transformaría en la Unión Cívica Radical, UCR), y gatilló una crisis económica en 1890, que fue la principal causante de una nueva revolución liderado por la UC. Las causas de esta recensión argentina radican en una crisis económica mundial, las decisiones equivocadas del gobierno argentino y las especulaciones y la corrupción económica de la elite del país (Gerchunoff/Rocchi/Rossi 2008; Lotersztain 2010). Si bien el ejército nacional fue capaz de aplacar la revolución del 90, la notoria falta de apoyo político hizo que el presidente no tuviera otra alternativa más que renunciar, concediendo una victoria moral a la revolución. (Alonso 2010: 263ss.; Sabato 2012: 328; Rojkind 2016 en este libro). A mediano plazo, sin embargo, no generó ningún cambio profundo en el sistema del "orden conservador", ya que el nuevo presidente Carlos Pellegrini logró resolver la

crisis económica y estabilizar la República argentina (Gerchunoff/Rocchi/Rossi 2008). En los 25 años que siguieron, la UCR se consolidó como un actor importante en el tablero político, pese a sus fallidos intentos de revolución (en 1893 y 1905). Recién con la ley electoral de 1912, que permitió la llegada del radical Hipólito Yrigoyen al poder en 1916, se terminó con el sistema del "orden conservador".

Uruguay

La historia de Uruguay en el siglo XIX se caracteriza por un rasgo particular, ya que en el país se formaron, luego de la independencia en 1828, dos "partidos" distintos. Los Colorados representaron más bien a los ciudadanos de Montevideo, mientras que los Blancos encontraron sus bases de apoyo en los campesinos del interior.[5] En la historiografía suele mencionarse que el proceso de formación de Estado empezó con el gobierno del general colorado Venancio Flores en 1865, quién trató de sentar las primeras bases de un gobierno central. Sin embargo, el proceso fue mucho más inestable que en Argentina. Debido a la existencia de los dos "partidos", la segunda mitad del siglo XIX estuvo marcada por varias revoluciones armadas que, lideradas por un caudillo blanco, se dirigieron en contra de los gobiernos colorados de turno. De esta manera, en 1870 estalló la "revolución de las Lanzas", una guerra civil entre Colorados y Blancos, que terminó en 1872 con un acuerdo que estableció el característico sistema de "coparticipación", que permite que ambos partidos comparten el poder, por lo menos en regiones (Faraone/París/Oddone 1997; Oddone 1989: 453-474; Caetano/Rilla 1994). Después de este compromiso, ganó influencia, por algunos años, el movimiento del *principismo*, que trató de consolidar un gobierno basado en principios morales. Este intento fracasó con el golpe militar de Lorenzo Latorre que, en 1875, impuso el gobierno provisorio de Pedro Varela (Oddone 1956). Aunque Varela dictó unas leyes bancarias para superar la crisis económica de Uruguay, tuvo que enfrentarse con una nueva rebelión armada, la "revolución Tricolor", liderada por los principistas. La revolución fue acallada por Latorre, quién aprovechó esta victoria para declararse presidente en marzo de 1876. Con Latorre empezó la época

5 Véase para esta diferencia, que aquí está trazado de manera poco detallada Halperin Donghi 2000; Reyes Abadie/Vázquez Romero 2000; Arteaga 2008; Pivel Devoto 1994.

del militarismo, en la que el país fue gobernado por los jefes militares, que, a pesar de la existencia de elecciones y de un parlamento, poseían poderes cuasi-dictatoriales. El gobierno de Latorre (1876-1880) constituyó un primer hito en el proceso de formación del Estado, ya que el poder del gobierno central también se consolidó en las regiones del interior (Méndez Vives 1977: 11ss.). Sin embargo, bajo su sucesor, el general Máximo Santos, la corrupción de los círculos de poder era tal que en 1886 se originó otra revolución, la "Revolución del Quebracho". De manera parecida como en Argentina, esta revolución fracasó en el ámbito militar, pero llevó a mediano plazo a la renuncia de Santos, que ya no encontró apoyo político entre la elite montevideana (López-Alves 1993; Méndez Vives 1977: 67ss.; Aguirre Ramírez 1989; Fernández Labeque/Villa 2010). En 1890 el país volvió a los gobiernos civiles. Sin embargo, recién a partir de 1903, con el gobierno colorado de José Batlle y Ordoñez, se inicia un proceso de reformas políticas y sociales, que se interpreta, de manera parecida al gobierno de Yrigoyen, como un primer término del proceso de formación del Estado que, por lo menos en el caso de Batlle, tuvo una influencia bastante prolongada en el siglo XX (Caetano 2011; Barrán/Nahum 1981; Vanger 1980).

A raíz de lo anterior, entonces, se optó por la segunda mitad del siglo XIX como periodo de estudio. No sólo porque en estos años se sentaron las bases de las instituciones, normas y estructuras de Estado en ambos países, sino que, además, en esta época se puede observar una historia entrelazada entre "violencia" (en forma de rebeliones armadas o choques violentos en los días de elecciones) y "corrupción" (escándalos de fraude electoral o de enriquecimiento ilícito) que está en el origen de un discurso cuyas repercusiones se dejan ver hasta nuestros días.

El discurso de corrupción y violencia en Argentina y Uruguay

La base analítica de este discurso público de corrupción se encuentra en la prensa de la época cuyo rol fue clave en la legitimación del poder y que casi siempre fue partidista, o sea que luchaba y argumentaba claramente a favor de una fracción de la vida política (Álvarez Ferretjans 2008; Halperin Donghi 1985; Moreno 1944; Sabato 1998). Por esta razón, en las referencias que siguen, se trata de mantener cierta representatividad: se cita, en la mayoría de los casos, siempre el discurso de la prensa opositora y la del

gobierno. Estoy consciente de que no se consideraron todos los discursos y argumentos existentes, pero tengo la convicción de que hay un fundamento empírico bastante sólido como para fundamentar el análisis y las conclusiones del texto.

Argentina

Con respecto a Argentina, es interesante observar el uso en conjunto de los conceptos corrupción y violencia, durante el gobierno de Mitre, para referirse a los males de la nueva nación. De esta manera, el diario *La Nación*, fundado por Mitre, exclamó, acerca de unas elecciones en 1864: "La soberanía del pueblo se traduce aquí por el fraude y la violencia" (*La Nación* Argentina, 13.12.1864). Mientras que este diario usaba este argumento para llamar al gobierno a poner orden en las elecciones a través del uso de las tropas, los diarios de la oposición utilizaron el mismo argumento para acusar la intromisión del gobierno en las elecciones. Así y todo, hubo consenso en que la violencia y el fraude en las elecciones eran los males más graves de la nueva vida republicana. Ante este diagnóstico, hubo dos reacciones prevalecientes en la prensa:

Por un lado, se criticaba la corrupción electoral y la violencia, pero se los aceptaba implícitamente como los reglas de facto del juego democrático (Sabato 1998). De esta manera, en *La Tribuna* de 1864, en un artículo que llamaba a la moderación, también aparecía esta advertencia a los adversarios políticos:

> Si los órganos del *Club del Pueblo* hablan de ganar las elecciones á todo trance, lo que importa decir, por medio del fraude, y aún de la violencia si es preciso ¿se cree que los hombres del *Club de la Libertad* han de cruzar los brazos, para contemplar impasible el asesinato de sus amigos de causa? (*La Tribuna*, 18.2.1864, cursivas en el original)

Para los hombres de la época, el fraude y la violencia eran parte de las elecciones, y había que aceptarlas si se quería ganar las votaciones. En el mismo sentido se entiende el llamado, después de las elecciones, de acatar los resultados a pesar de tantos fraudes y a pesar de las batallas violentas en los atrios, ya que una repetición de las elecciones solamente llevaría a nuevos tumultos (*La Tribuna*, 29.3.1864).

Por otro lado, en esta época todavía se confiaba en dejar atrás el fraude y la violencia por medio de nuevas reglas y leyes. La modernización ins-

titucional era vista como un camino para erradicar los males inherentes a una república joven. Por esta razón, *La Nación* consideró un nuevo registro cívico como "un baluarte de la libertad y del órden [...] ante la violencia y el tumulto" (*La Nación*, Argentina, 20.9.1863), y *La Tribuna* manifestó claramente: "si se quiere que concluyan los escándalos á que da lugar la ley de elecciones actuales, con su deficiencia y con los abusos á que se presta; es preciso que se trabaje sin descanso hasta hacer una nueva ley de elecciones" (*La Tribuna*, 27.3.1864). Los hombres públicos estaban convencidos de que, a través de la modernización, iban a superar los problemas y vicios de la nueva república argentina. Por esta misma razón, la violencia y la corrupción electoral eran vistos como males similares que se arreglarían con la creación de nuevas leyes, instituciones y reglas. Al ser una nación en formación, todavía no existía una jerarquización de los valores entre "corrupción" y "violencia".

Este discurso cambió, en el decenio siguiente, con la revolución de 1874 gatillada por la elección de Avellaneda como presidente de Argentina. En ese momento comenzó una división discursiva entre "violencia" y "corrupción": un concepto serviría de legitimación para el otro. Para la oposición, "la corrupción escandalosa" de las elecciones se estableció como argumento fundamental para legitimar su rebelión armada. Según *La Nación*: "el pueblo [...] se ha levantado indignado, dispuesto a quebrar por completo el cinismo de los que [...] han impedido con el fraude más escandaloso las manifestaciones de la voluntad soberana" (*La Nación*, 27.1.1874). En palabras de la oposición, como la corrupción de las elecciones hacía imposible la vida democrática y el acceso justo al poder, el único camino para terminar con estos males era la revolución armada, la violencia: "si [al pueblo] se le dice que va á ser dominado por los falsarios ó los presidiarios, se levantará como un solo hombre para [...] llevar a donde no dañen esos miembros corrompidos de la sociedad" (*La Nación*, 30.3.1874). En esta argumentación, se estableció claramente una jerarquía entre los dos conceptos: la corrupción era el mal mayor, cuya erradicación justificaba hasta la violencia en contra de "esos miembros corrompidos de la sociedad". Esta idea se ve reflejada en las palabras de *La Tribuna* que, en las elecciones de Buenos Aires a principios de 1874, defendía la posición opositora:

> un batallón de línea que hace fuego sobre una masa de pueblo que rodea una urna electoral, solo consigue dejar algunos cadáveres: - un círculo de hombres

> que se oculta para escamotear la soberanía popular por medio del fraude, puede dejar un tirano, puede arruinar una Nación, puede hacerla desaparecer del mapa de los pueblos libres. Es pues el fraude, mucho más peligroso que el vulgo de las fuerzas. (*La Tribuna*, 8.4.1874)

Esta argumentación también se aplicó de manera parecida a la justificación de las revoluciones armadas en los próximos decenios y se mantuvo durante el resto del siglo XIX. Para los que perdieron las elecciones, la corrupción era la culpable y justificaba el uso de la violencia como camino para llegar al poder y terminar con los fraudes. Así, a modo de ejemplo, en 1880 algunos meses antes de la revolución, la oposición advertiría: "si el fraude se produce, [...] el más serio de los conflictos va a estallar" (*La Nación*, 14.4.1880), ya que en su opinión, ellos eran los únicos partidarios de elecciones libres, que el mismo presidente trató de evitar por medios fraudulentos: "lo que [nos] preocupa es salvar el libre sufragio, y solo de la lucha puede surgir, ál menos que el presidente desista de sus propósitos" (*La Nación*, 4.2.1880). La lucha armada se justificó con el ideal del libre sufragio. La corrupción electoral era el mal que había que combatir incluso por la vía de la violencia.

También en 1890, algunos días después de la revolución liderada por los radicales, se justificó el uso de la violencia: "nos alzamos en armas contra el gobierno corrompido y corruptor" (*La Nación*, 11.8.1890). En este caso, la corrupción económica del gobierno de Juárez Celman jugó un rol importante en la legitimación del levantamiento armado. Sin embargo, incluso en esta situación, que no estaba determinada por elecciones presidenciales, la corrupción electoral siguió siendo el argumento más relevante a la hora de explicar la revolución (Ruderer 2015b). De este modo, el documento de los revolucionarios menciona que se quiere devolver el poder al pueblo, para que éste pueda elegir a sus representantes en elecciones libres (*La Nación*, 1.8.1890). El argumento de la "corrupción", ahora (después de 1890) muchas veces entendido como una mezcla entre corrupción electoral y corrupción administrativa, siguió siendo el recurso principal para justificar la violencia en la forma de revoluciones armadas: "agotada la paciencia de los ciudadanos, no queda ya más recurso que el derecho de propia defensa", que se explica ya que "ha desaparecido el gobierno propio, el sufragio libre, la moral administrativa y la garantía de todos los intereses particulares y públicos" (*La Nación*, 2.8.1893). Para la segunda mitad del siglo XIX se puede constatar, entonces, una clara jerarquización de los dos

conceptos. "Corrupción" y "violencia" ya no tenían el mismo valor, el uno servía de justificación para el otro.

Esta misma relación entre corrupción y violencia fue usada en este periodo por la prensa de los gobiernos, sólo que con una valoración opuesta. Aquí se negaba a la oposición el derecho de quejarse de la corrupción, ya que ella era la responsable de tantas rebeliones violentas. Que la valoración de los dos conceptos dependía sobre todo de la posición política, se nota claramente en el discurso de 1874 de *La Tribuna*. Al defender la postura de la oposición para las elecciones de Buenos Aires, consideraba que el mayor peligro era el fraude. Para las elecciones presidenciales del mismo año, en que *La Tribuna* estaba a favor del triunfo de Avellaneda, ya no era la corrupción sino la revolución el mal mayor: "llevarla á cabo sería un atentado tan atroz que levantaría la indignación pública hasta el último grado" (*La Tribuna*, 17.4.1874).

Sin embargo, fue sobre todo a partir del gobierno de Roca en que se comenzó a usar el argumento de que un gobierno trae la paz y el orden para restarle importancia a las acusaciones sobre corrupción. Así entonces, en medio de un debate sobre una nueva ley electoral en 1883, el diario del gobierno le negaba a la oposición el derecho de argumentar justamente por el pasado violento, ya que "esa oposición ha entretenido el país con la revuelta dominada y con las agitaciones provocadas por la insurrección" (*La Tribuna Nacional*, 6.8.1883). Para el gobierno, la violencia no era el camino. Bien al contrario, había que reconocer los esfuerzos oficiales para mantener la paz y el orden en el país y ver con cierto realismo la corrupción tradicional en las elecciones, cuya erradicación sólo se lograría con el tiempo:

> Cada vez que se ha abierto en la República un nuevo período electoral se ha hablado de los medios reprobados [...], de los fraudes cometidos al amparo del poder oficial [...], de la falsificación del voto [...]; y esas acusaciones han sido bandera de guerra y proclama revolucionario, con el cual hemos sido arrastrados á las luchas civiles. (*La Tribuna Nacional*, 14.10.1885)

En esta argumentación, la revolución solamente traía el caos y el desorden y no se podía justificar de ninguna manera por la corrupción reinante, que era considerada un mal menor frente a la tarea de pacificar el país. De hecho, en el discurso público del gobierno, se dio vuelta el argumento opositor, de legitimar sus revoluciones con la corrupción reinante, diciendo que la acusación de corrupción era un mero pretexto para llegar a la

violencia. Así, en 1889, el diario del gobierno reclamaba: "se comienza por hablar de *coimas* y se concluye con el ultraje sangriento" (*Sudamérica*, 16.8.1889). Con esta argumentación era posible rechazar de antemano todas las acusaciones de corrupción como "calumnias" de la oposición que, a pesar del progreso y de la paz, no estaría contenta con su distanciamiento del poder. En los diarios de la oposición "se oye condenarlo todo, hablar a cada momento de corrupción y escándalos" pero, en realidad "el progreso nos trae cada día algo nuevo. Todo aumenta de valor, todo crece" (*Sudamérica*, 26.7.1889). Frente al progreso, la paz y el orden, la acusación de corrupción devino en una mentira, en un instrumento discursivo que la oposición utilizaría solamente para justificar sus ansias de poder y su violencia innecesaria. Aquí puede observarse también una relación jerárquica entre "violencia" y "corrupción", solo que ahora la corrupción es el mal menor que no justifica ningún acto violento.

Uruguay

En Uruguay, a primera vista, esta relación entre "corrupción" y "violencia" parecía similar. Allí, el argumento de la "corrupción" del gobierno también era el punto más relevante al momento de legitimar una rebelión armada. De esto hablan los manifiestos de los revolucionarios, pero también se reconoció esto en el discurso público de la prensa. De esta manera, para explicar la "revolución de las Lanzas" de 1870 en Uruguay, un diario cercano al gobierno dijo: "La oposición acusaba al gobierno de [...] realizar malversaciones de dineros públicos. Aparicio y Benite [sic, los líderes de la revolución] dicen lo mismo, escriben en sus banderas las acusaciones de la oposición" (*La Tribuna*, 20.03.1870). Aquí también la corrupción era claramente el mal mayor y un "gobierno corrupto" y "malversador de dineros públicos" era una razón suficiente para tratar de derrocarlo por las armas, vale decir usando la violencia. En esta misma línea justificaba la prensa opositora la "revolución de las Lanzas", comparando el gobierno antes del estallido violento con la situación después:

> Entonces, un gobierno repudiado por propios y estraños, haciendo de la corrupción administrativa sistema de gobierno [...] hoy [...] la esperanza de mejores tiempos, la aspiración á más nobles luchas que las luchas sangrientas de las a cuchillas [...]; situación que se debe en gran parte á los sacrificios de la Revolución. (*La Democracia*, 12.6.1872)

Esta argumentación continuó, con pocos cambios y matices, hasta el final del siglo. De esta manera, los revolucionarios de 1875 legitimaban el levantamiento armado con la existencia de un gobierno que "dilapida los dineros del erario, que reparte esos dineros entre los favoritos que lo adulan […] – Gobierno de injusticia, de despotismo, de robo, de corrupción moral" (Proclama 1875, citado en: Caetano 2004: 277). De modo similar, los revolucionarios de 1886 reprochaban al gobierno de Santos, que ya había tenido que hacer frente a muchas acusaciones de corrupción en la prensa opositora (Ruderer 2015a), que "toda la riqueza pública […] ha sido sistemáticamente esterilizado por una inmoralidad administrativa que llega hasta los últimos límites del más descarado latrocinio" (*Los jefes de la Revolución a los ciudadanos y habitantes de la República Oriental del Uruguay* 1886, citado en: Caetano 2004: 334). Cada vez que la oposición blanca en Uruguay recurría a la violencia en forma de una revuelta armada, se justificaba con acusaciones acerca de la corrupción administrativa del gobierno de turno. En esto, la oposición estaba bien consciente que una revolución armada, una guerra civil, significaba un mal profundo para el país, pero era un mal que había que aceptar momentáneamente, si se quería terminar con la corrupción de los gobiernos que, en su discurso, era mucho más dañino para el país. Esto también quedó muy claro en la justificación de la última revolución del siglo, en 1897. En ella, los revolucionarios se muestran "convencid[os] de que los inmensos sacrificios que impone al país serán fecundos en bienes para éste, si la revolución logra que triunfe su bandera de honradez administrativa" (*La Razón*, 29.7.1897). En Uruguay, un presidente que era visto como "dilapidador de los dineros públicos" era visto al mismo tiempo como un "promotor de la discordia y de la guerra civil" (*El Día*, 3.3.1897). Para la oposición uruguaya, la "corrupción" representaba claramente el mal mayor que llevaba a la "discordia" y justificaba su propia violencia como único camino para terminar con la "inmoralidad administrativa".

Respecto a las acusaciones de la oposición, los gobiernos uruguayos respondieron de manera parecida a los de Argentina. También aquí se argumentó que la acusación de corrupción era solamente un pretexto para justificar la violencia y que, por eso mismo, no había que creerla. Mientras en el país reinara la paz y el orden, se podía restar importancia a las acusaciones de corrupción. Ya en 1869, el gobierno se defendió de este modo contra los ataques de la oposición: "Es verdad que ya se han puesto á decir

que si no vencen es porque ha habido fraude [...] por parte del gobierno. [...] Esto no es más que un pretesto [...] para justificar sus ataques" (*La Tribuna*, 26.11.1869). En este discurso, la violencia era el mal mayor y mientras hubiera paz, orden y progreso no había ninguna razón para la rebelión armada. Así, *La Tribuna* alababa en 1875 las leyes económicas del gobierno para aclarar que "después de las leyes de septiembre, la revolución no es un deber, es un crimen" (*La Tribuna*, 14.10.1875). Esta argumentación sirvió también a los gobiernos militares para justificar su poder. Así pues, al considerar la violencia como mal mayor ante lo que la corrupción administrativa y el acceso democrático al poder parecían subordinados, podría existir hasta un gobierno dictatorial que, contra las acusaciones de fraude y corrupción se defendía diciendo, como lo hizo *La Nación* en 1880: "preferimos nosotros y con nosotros todo el país, la paz y el orden que dan los gobiernos bien inspirados, aunque se llamen dictaduras provisorias" (*La Nación*, 10.3.1880). En la misma línea argumentativa, el gobierno dictatorial de Santos legitimaba un decreto de censura de prensa para acallar las críticas de corrupción en su contra de este modo: "Háse demostrado, en efecto, que la República niega su concurso a los movimientos armados, convencida como está por una prolongada y dolorosa experiencia, que ellos no engendran sino males, ruinas y desolación para la patria" (*La Situación*, 26.10.1886). En el discurso del gobierno, la oposición no tenía ningún derecho de quejarse de la corrupción, mientras todavía propagaba la violencia en forma de revoluciones armadas. Aquí, igual que en Argentina, en la escala de valores, la "corrupción" parecía el mal menor frente a la "violencia".

Sin embargo, en Uruguay también existían ciertas diferencias respecto del discurso público en Argentina, que vale la pena destacar. En la época sujeto de esta investigación, no siempre la oposición rechazaba la corrupción como el mal mayor para justificar la violencia. También existían voces discordes con esa idea que trataron de interrumpir el círculo vicioso entre acusaciones de fraude y legitimación de la violencia. Así exclamó un diario blanco en 1872: "Un profundo convencimiento nos ha alejado de los medios violentos [...], antes de lanzarse al recurso desesperado de la revolución, bien puede [el partido blanco] esperar con resignación el desenlace de los acontecimientos" (*La Democracia*, 19.11.1872). Esta idea se repitió en el transcurso de los años con referencia a la corrupción electoral de los gobiernos colorados. El fraude en las elecciones fue aceptado con cierta resignación como parte del juego político, siempre que con ello se pudiera

evitar la violencia. "Ya que los registros están adulterados por el fraude y no arrojan ellos la espresión de la mayoría legal, ¡que no alcance igual éxito la violencia!" (*La Democracia*, 10.1.1875). De manera parecida, el diario opositor *La Razón* recomendaba, en 1886, vivir con la corrupción electoral, ya que "es difícil […] reabrir los registros y purificarlos del fraude" (*La Razón*, 4.12.1886). Esta resignación ante la corrupción electoral marca una diferencia importante con el discurso en Argentina y con los manifiestos revolucionarios de la misma oposición uruguaya cuando se trató de justificar la rebelión armada.

Tanto en Argentina como en Uruguay, el concepto de "corrupción" sirvió a la oposición para legitimar su violencia en contra del gobierno, con la diferencia de que la principal característica de la "corrupción" significaba algo distinto en cada país. Mientras que en Argentina, la *corrupción electoral* representaba el argumento principal para justificar la violencia, en Uruguay la acusación de *corrupción administrativa, económica* fue el principal recurso para legitimar las revoluciones. Aquí, el fraude electoral era más bien visto con apatía y, de todas formas, a la hora de justificar la violencia, no tenía la misma importancia como el actuar corrupto de los gobernantes en el cargo. Esta diferencia remite a un análisis interesante que hay que considerar para las conclusiones.

Conclusión

El análisis empírico del discurso de "corrupción" en la segunda mitad del siglo XIX en Argentina y Uruguay demuestra la importancia que puede tener la nueva historia de corrupción, siguiendo los criterios esbozados en la introducción de este libro. Una visión integral sobre el discurso de corrupción no solo permite arrojar nuevas luces sobre las prácticas corruptas de la época, sino también entregar un aporte nuevo para el entendimiento de los valores que rigieron la sociedad durante el proceso de formación de Estado y para la explicación de los acontecimientos históricos.

Para concluir, quiero destacar solamente algunos puntos que se dejan extraer del análisis precedente y terminar con una tesis que pueda servir como punto de partida para futuras investigaciones.

El análisis de los debates sobre corrupción puede ayudarnos a explicar (no como única razón, pero sí como punto importante) el surgimiento de tantas rebeliones armadas en el proceso de formación de estados en Argen-

tina y Uruguay. La carga moral que conllevaba la acusación de corrupción no permitía dejar el asunto de lado, una vez perdidas las elecciones o cuando se descubría un escándalo de corrupción en el gobierno. En estos casos, la relación entre "corrupción" y "violencia" en el discurso público funcionó como uno de los discursos sociales que analiza Metz en su historia de la violencia. Metz se refiere a dos discursos que justifican la violencia con la meta superior de llegar a la paz duradera. Uno, que está dirigido hacia el consenso, que ve la violencia como mal mayor, que hay que minimizar a través del monopolio del Estado. El otro opta por la violencia, ya que la ve como mal menor frente a una sociedad imperfecta (Metz 2010: 43). En el caso de las sociedades argentina y uruguaya en la segunda mitad del siglo XIX, esto significó que la violencia fuera considerada como mal menor ante el mal mayor de una sociedad imperfecta, corrupta. En esta argumentación, para llegar a la sociedad perfecta, que era una aspiración moral- y políticamente "buena", había que recurrir a la violencia para erradicar el mal de la corrupción, ya que esta misma corrupción no dejaba otro camino. En muchos casos, para los revolucionarios suramericanos, la sociedad perfecta ya existía en el papel (en las constituciones escritas), pero la corrupción de los gobernantes evitaba la aplicación correcta de estas constituciones a la vida real (Botana 1994). Por esta razón, las acusaciones de corrupción no siempre iban acompañadas por llamadas a la modernización institucional de la sociedad (como lo vimos todavía bajo el gobierno de Mitre en Argentina), ya que, en la argumentación de la oposición, no siempre se necesitaban nuevas leyes, sino más bien una aplicación correcta, no corrupta, de las leyes ya existentes. Esto representa un factor explicativo de por qué los escándalos de corrupción en América Latina no siempre se convirtieron en catalizadores de procesos de modernización, como fue el caso en la mayoría de los países europeos en la misma época (Engels 2014: 215ss.): para erradicar la corrupción, solamente había que desplazar a los gobernantes corruptos por la vía de la violencia y después volver a las leyes ya existentes.

Junto con eso, en el centro de la lucha política se situaron la toma del poder y las acusaciones de corrupción que, al igual que las acusaciones de violencia, representaban instrumentos discursivos de lucha muy poderosos. Debido a la carga negativa que conllevan los dos conceptos, sirvieron de manera ideal para la justificación respectiva del otro concepto. Esto permite otra observación: el uso de los dos conceptos como instrumentos discursivos de legitimación hizo virtualmente imposible una crítica esencial a las prácticas de corrupción o violencia. Cada vez, que alguien criticaba la

corrupción o la violencia de un contrincante político, se veía bajo la sospecha de usar la acusación solamente como instrumento táctico sin estar interesado realmente en un cambio en las prácticas (Asch/Emich/Engels 2011: 22). Esto puede tener consecuencias para las actuaciones corruptas o violentas, que, en el caso de la "corrupción", no se han analizado de manera suficiente para los casos latinoamericanos.

Otro punto muestra una diferencia interesante en las características de la corrupción entre Argentina y Uruguay. En Argentina era, sobre todo, la corrupción electoral, el fraude en las elecciones, lo que sirvió de argumento para legitimar la violencia. En Uruguay, era más bien la corrupción económica, administrativa, como lo demostraron las citas referidas, ya que en este país se reaccionó más bien con resignación que con violencia ante la corrupción electoral. Esta diferencia, que en otra parte analicé más profundamente (Ruderer 2015b), remite a una diferencia en los valores públicos y políticos: en Argentina, lo más importante era el *acceso* al poder, las formas democráticas de la república. En Uruguay, al contrario, eso no importaba tanto, ya que un gobierno todavía se podía autodenominar como "dictadura", mientras fuera honesto –algo imposible en Argentina en la misma época. En Uruguay, lo más importante no era el acceso al poder sino *las actitudes* y prácticas *en* el poder, que tenían que estar dirigidas hacia el bien del país. Estas diferencias tienen, a mi juicio, consecuencias profundas para el análisis, que aquí solo puedo esbozar: en Argentina, en la búsqueda de una solución para terminar con la corrupción, el enfoque estaba dirigido más bien hacia las leyes electorales, no tanto hacia la corrupción económica de los gobernantes. Esta idea ayuda también a explicar la importancia que se dio a la ley electoral de Sáenz Peña de 1912, que originó la llegada al poder de los radicales, sin que por eso se terminara con la corrupción en el gobierno (Negretto/Aguilar-Rivera 2000: 390). En Uruguay, el enfoque estaba dirigido hacia la corrupción administrativa y las prácticas y acciones del gobierno, lo que explica, entre otros, la idea muy influyente de José Batlle y Ordoñez de crear un colegiado para reemplazar al presidente con el fin de limitar las posibilidades de corrupción (Vanger 2009). Una de las instituciones que caracterizó la historia de Uruguay en la primera mitad del siglo XX puede explicarse, entonces, entre otros (¡no se trata de entregar explicaciones monocausales!), por las peculiaridades del discurso de corrupción en el Uruguay de la segunda mitad del siglo XIX.

Además, y a modo de tesis para futuras investigaciones, la diferencia en el discurso de corrupción entre Argentina y Uruguay podría ayudar a ex-

plicar otra diferencia entre ambos países, que es la diferencia en la percepción de corrupción en la actualidad, como lo demuestran las encuestas de Transparency Internacional (TI).[6] Sin querer afirmar una línea argumentativa directa entre el siglo XIX y la actualidad, se puede argumentar que, en el discurso de corrupción aquí analizado, se encuentran las raíces de una percepción de corrupción que, quizás, mantuvo su vigencia durante el siglo XX. Como en Argentina las acusaciones de corrupción se centraban en la corrupción electoral, no se dio la misma relevancia a la corrupción económica de los políticos, que era vista más bien como algo normal.[7] Se podría afirmar, entonces, que esta idea sobre las prácticas (fraude electoral como mal mayor, enriquecimiento ilícito de un político como algo normal) se mantuvo bastante estable entre la elite argentina, mientras que la percepción de "corrupción" cambió durante el siglo XX. Con la llegada de la democratización de masas y nuevas tecnologías electorales, el fraude en los sufragios perdió su relevancia, mientras que, para el ciudadano argentino, la corrupción económica empezó a ganar importancia. Esta diferencia entre las prácticas corruptas (algo normal que todos hacen) y la percepción pública (algo cada vez más grave) se refleja en las encuestas de TI.[8] En Uruguay, la corrupción económica siempre fue vista como el mal mayor, por lo que, después de las reformas de Batlle, los políticos uruguayos tuvieron más conciencia de no aparecer como "corrupto", en el sentido de un enriquecimiento ilícito. Esto creó la idea de un país con poca corrupción, como se refleja en las encuestas de TI.[9]

Para basar esta tesis en un fundamento empírico, se necesitan más estudios sobre el desarrollo del discurso de corrupción en ambos países. Pero, como observación desde un análisis del siglo XIX, parece lo suficientemente interesante como para esbozarla aquí.

---

6 En el *Corruption Perception Index* de 2014, Uruguay obtiene un puntaje de 73 (100 puntos significa ninguna corrupción percibida) y el lugar 21 de todos los países del mundo, mientras que Argentina se sitúa en el lugar 107 con un puntaje de 34, véase <www.transparency.org/cpi2014> (última consulta 23.02.2016). Este *ranking* no mide la corrupción existente, sino solamente la percepción de la corrupción. Para una crítica de Transparency International y sus métodos, que favorecen un modelo neoliberal de la economía y política, véase Engels 2014: 365, y Harrison 2007.

7 Para el siglo XIX véase: Ruderer 2014.

8 Para la percepción de corrupción en la actualidad argentina, véase Pereyra 2013.

9 Hay que mencionar que eso no significa ni quiere decir que los uruguayos eran o son menos corruptos que los argentinos. Aquí se habla solamente de la percepción de corrupción.

En resumen, creo que este análisis del discurso de la corrupción demuestra el potencial de la nueva historia de la corrupción. Para los historiadores, un nuevo acercamiento a la corrupción de los países latinoamericanos, sin (pre)juicios morales de la actualidad y sin caer en la trampa de ponerles etiqueta de más o menos "corruptas", puede resultar muy fructífero.

Bibliografía

Aguirre Ramírez, Gonzalo (1989): *La Revolución del Quebracho y la Conciliación.* Montevideo: Barreiro y Ramos.

Alemann, Ulrich von (2005): "Politische Korruption: Ein Wegweiser zum Stand der Forschung". En: Alemann, Ulrich von (ed.): *Dimensionen politischer Korruption.* Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 13-49.

Alonso, Paula (2010): *Jardines secretos, legitimaciones públicas.* Buenos Aires: Edhasa.

Álvarez Ferretjans, Daniel (2008): *Historia de la prensa en el Uruguay.* Montevideo: Editorial Fin de Siglo.

Arteaga, Juan José (2008): *Breve historia contemporánea del Uruguay.* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Asch, Ronald G./Emich, Birgit/Engels, Jens Ivo (2011): "Einleitung". En: Asch, Ronald G./Emich, Birgit/Engels, Jens Ivo (eds.): *Integration – Legitimation – Korruption.* Frankfurt a.M.: Lang, pp. 7-30.

Barrán, José Pedro/Nahum, Benjamín (1981): *Batlle, los estancieros y el imperio británico.* Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.

Botana, Natalio (1994): *El Orden Conservador. La política argentina entre 1880 y 1916.* Buenos Aires: Sudamericana.

Caetano, Gerardo (2004): *Antología del discurso político en el Uruguay. Tomo I: De la constitución de 1830 a la revolución de 1904.* Montevideo: Taurus.

— (2011): *La república batllista.* Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.

Caetano, Gerardo/Rilla, José P. (1994): *Historia contemporánea del Uruguay.* Montevideo: Fin de Siglo.

Castro, Martín O. (2012): *El ocaso de la república oligárquica.* Buenos Aires: Edhasa.

D'Amico, Carlos (1952 [1890]): *Buenos Aires, sus hombres, su política (1860-1890).* Buenos Aires: Editorial Americana.

Dard, Olivier/Engels, Jens Ivo/Fahrmeir, Andreas/Monier, Frédéric (eds.) (2014): *Scandales et corruption à l'époque contemporaine: les coulisses du politique dans l'Europe contemporaine*. Paris: A. Colin.

Duncan, Tim (1981): *Government by Audacity. Politics and the Argentine Economy, 1885-1892*. University of Melbourne, [manuscrito inédito].

Engels, Jens Ivo (2014): *Die Geschichte der Korruption. Von der Frühen Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert.* Frankfurt a.M.: Fischer.

Engels, Jens Ivo/Fahrmeir, Andreas/Nützenadel, Alexander (eds.) (2009): *Geld, Geschenke, Politik. Korruption im neuzeitlichen Europa.* (Historische Zeitschrift. Beihefte 48). München: Oldenbourg.

Engels, Jens Ivo/Monier, Frédéric/Petiteau, Natalie (eds.) (2011): *La politique vue d'en bas.* Paris: Armand Colin.

Enzmann, Birgit (2013): "Politische Gewalt: Formen, Hintergründe, Überwindbarkeit". En: Enzmann, Birgit (ed.): *Handbuch Politische Gewalt. Formen – Ursachen –Legitimation – Begrenzung.* Wiesbaden: Springer.

Faraone, Roque/París, Blanca/Oddone, Juan (1997): *Cronología comparada de la historia del Uruguay (1830-1985).* Montevideo: Universidad de la República.

Fernández Labeque, Alicia/Villa, Oscar Jorge (2010): *La transición al civilismo, 1886.* (Cuadernos de historia 6). Montevideo: Biblioteca Nacional.

Gerchunoff, Pablo/Rocchi, Fernando/Rossi, Gastón (2008): *Desorden y progreso. Las crisis económicas argentinas, 1870-1905.* Buenos Aires: Edhasa.

Grüne, Niels (2010): "'Und sie wissen nicht, was es ist'. Ansätze und Blickpunkte historischer Korruptionsforschung". En: Grüne, Niels/Slanička, Simona (eds.): *Korruption. Historische Annäherung an eine Grundfigur politischer Kommunikation.* Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 11-34.

Halperín Donghi, Tulio (1972): *Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla.* Buenos Aires: Siglo XXI.

— (1985): *José Hernández y sus mundos*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

— (2000): "Party and Nation-State in the Construction of Collective Identities. Uruguay in the Nineteenth Century". En: Roniger, Luis/Herzog, Tamar (eds.): *The Collective and the Public in Latin America. Electoral Identities and Political Order.* Brighton/Portland: Sussex Academic Press, pp. 158-173.

Harrison, Elizabeth (2007): "Corruption". En: *Development in Practice*, 17, 4/5, pp. 672-678.

Johnston, Michael (1996): "The Search for Definitions. The Vitality of Politics and the Issue of Corruption". En: *International Social Science Journal*, 48, pp. 321-335.

López-Alves, Fernando (1993): *Between the Economy and the Polity in the River Plate. Uruguay 1811-1890.* London: Institute of Latin American Studies.

Lotersztain, Israel (2010): *Los bancos se roban con firmas. Corrupción y crisis en 1890.* Buenos Aires: Editorial Turmalina.

Macías, Flavia/Sabato, Hilda (2013): "La Guardia Nacional: Estado, política y uso de la fuerza en la Argentina de la segunda mitad del siglo xix". En: *PolHis* 6, 11, pp. 70-81.

Méndez Vives, Enrique (1977): *Historia Uruguaya. Tomo 5: El Uruguay de la modernización 1876-1904.* Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.

Metz, Karl-Heinz (2010): *Geschichte der Gewalt. Krieg, Revolution, Terror*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Míguez, Eduardo José (2011): *Mitre montonero: la revolución de 1874 y las formas de la política en la organización nacional.* Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Moreno, Galván (1944): *El periodismo argentino. Amplia y documentada historia desde sus orígenes hasta el presente.* Buenos Aires: Editorial Claridad.

Negretto, Gabriel L./Aguilar-Rivera, José Antonio (2000): "Rethinking the Legacy of the Liberal State in Latin America: The Cases of Argentina (1853-1916) and Mexico (1857-1910)". En: *Journal of Latin American Studies* 32, 2, pp. 361-397.

Oddone, Juan Antonio (1956): *El principismo del setenta. Una experiencia liberal en el Uruguay.* Montevideo: Universidad de la República Oriental del Uruguay, Facultad de Humanidades y Ciencias.

— (1989): "The Formation of Modern Uruguay, c. 1870-1930". En: Bethell, Leslie (ed.): *The Cambridge History of Latin America.* Cambridge: Cambridge University Press, pp. 453-474.

Oszlak, Oscar (1982): *La formación del Estado argentino.* Buenos Aires: Ed. De Belgrano.

Pereyra, Sebastián (2013): *Política y transparencia. La corrupción como problema público*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Pivel Devoto, Juan (1994): *Historia de los partidos políticos en el Uruguay.* Montevideo: Cámara de Representantes.

Plumpe, Werner (2009): "Korruption. Annäherungen an ein historisches und gesellschaftliches Phänomen". En: Engels, Jens Ivo/Fahrmeir, Andreas/Nützenadel, Alexander (eds.) (2009): *Geld, Geschenke, Politik. Korruption im neuzeitlichen Europa*. (Historische Zeitschrift. Beihefte 48). München: Oldenbourg, pp. 19-47.

Reyes Abadie, Washington/Vázquez Romero, Andrés (2000): *Crónica general del Uruguay. Tomo V: La modernización.* Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.

Riekenberg, Michael (2014): *Staatsferne Gewalt. Eine Geschichte Lateinamerikas (1500-1930).* Frankfurt a.M.: Campus.

Rock, David (2002): *State Building and Political Movements in Argentina 1860-1916.* Stanford: Stanford University Press.

Ruderer, Stephan (2014): "Crisis and Corruption. The Anglo-Argentine Scandal Surrounding the Privatization of the Buenos Aires Sanitary Works Between 1888-1891". En: Dard, Olivier/Engels, Jens Ivo/Fahrmeir, Andreas/Monier, Frédéric (eds.): *Scandales et corruption à l'époque contemporaine: les coulisses du politique dans l'Europe contemporaine*. Paris: A. Colin, pp. 66-79.

— (2015a): "'Eine Missachtung der wichtigsten Interessen des Landes' – Der Korruptionsskandal um den Hafenbau in Montevideo 1885". En: Dard, Olivier/Engels, Jens Ivo/Fahrmeir, Andreas/Monier, Frédéric (eds.): *Krumme Touren in der Wirtschaft. Zur Geschichte ethischen Fehlverhaltens und seiner Bekämpfung*. Köln: Böhlau.

— (2015b): "Korruption und Staatsbildungsprozess. Der Korruptionsdiskurs bei der Legitimation von bewaffneten Aufständen in Argentinien und Uruguay zwischen 1870 und 1890". En: *Historische Zeitschrift* 300, pp. 66-102.

Sabato, Hilda (1998): *La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880.* Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

— (2008): *Buenos Aires en armas. La revolución de 1880.* Buenos Aires: Siglo XXI.

— (2009): "El pueblo 'uno e indivisible'. Prácticas políticas del liberalismo porteño". En: Bertoni, Lilia Ana/Privitellio, Luciano de (eds.): *Conflictos en democracia. La vida política argentina entre dos siglos.* Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 25-44.

— (2012): *Historia de la Argentina, 1852-1890.* Buenos Aires: Siglo XXI.

Scott, James C. (1972): *Comparative Political Corruption.* Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Transparency International (2014): *Corruption Perception Index 2014*. <www.transparency.org/cpi2014> (04.03.15).

Vanger, Milton (1980): *The model country. José Batlle y Ordóñez of Uruguay, 1907-1915.* Hannover: University Press of New England.

— (2009): *José Batlle y Ordóñez, 1915-1917. "Humanizando el capitalismo". Uruguay y el colegiado.* Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.

"El triunfo moral del pueblo". Denuncias de corrupción y movilización política en Buenos Aires, a fines del siglo XIX

Inés Rojkind

Presentación

El miércoles 6 de agosto de 1890 el presidente de la República Argentina, Miguel Juárez Celman, renunció a su cargo en el marco de una crisis de características inéditas que afectaba directamente la legitimidad del régimen político imperante. La supremacía que el Partido Autonomista Nacional (PAN) detentaba desde hacía una década se había visto sacudida por los conflictos internos que lo dividían y por el surgimiento de una oposición dispuesta a combatirlo incluso por la vía de las armas. Los críticos del gobierno de Juárez Celman le recriminaban la concentración de poder en manos del presidente, la preponderancia del orden y del progreso económico como objetivos de su administración, la ausencia de competencia electoral entre partidos, la manipulación del sufragio y el predominio de una retórica que incitaba a la desmovilización política. La corrupción era el eje central de esas acusaciones. La corrupción administrativa, por un lado, en referencia a las reiteradas denuncias por los gastos desmedidos del gobierno, por el enriquecimiento de los funcionarios, por los negociados alrededor de la adjudicación de obras públicas, etcétera. En el contexto de una feroz crisis económica y financiera que desde el año anterior atravesaba el país, esas acusaciones tenían, evidentemente, un alto impacto. Pero, asimismo, y en realidad con un tono aún más dramático, se le reprochaba al gobierno el haber corrompido, degradado, las instituciones republicanas y los principios establecidos por la Constitucional Nacional de 1853 (Alonso 2000a: 78-85, 152-159; Alonso 2000b: 227-231; Botana/Gallo 1997: 35-41; Sabato 2012: 316 y 317). Ante ese panorama la alternativa revolucionaria se impuso y el 26 de julio de 1890 una agrupación denominada Unión Cívica lanzó una rebelión armada en Buenos Aires, capital del país. El levantamiento fue sofocado por las fuerzas gubernamentales, pero a pesar de su fracaso la revolución trajo consecuencias de gran importancia.

Se abrió a partir de entonces una grave crisis política e institucional cuyo signo inmediato fue la renuncia del presidente. Inmerso en un profundo descrédito y jaqueado además por las divisiones dentro del PAN, Miguel Juárez Celman se vio obligado a presentar su dimisión ante la Asamblea Legislativa. Asumió en su lugar el vicepresidente, Carlos Pellegrini, para completar el mandato que finalizaba en 1892, preservando de ese modo la continuidad constitucional (Alonso 2000a: 85-92; Botana 1994: 167).

La noticia de la caída de Juárez Celman fue recibida en la ciudad de Buenos Aires con ruidosas demostraciones populares. La gente se volcó a las calles para festejar. Las crónicas de la época (notas periodísticas y testimonios de los contemporáneos) son coincidentes en ese punto: se celebraba el "triunfo moral" del pueblo sobre un gobierno "corrompido" que había permanecido aislado de la "opinión sana" para satisfacer, en cambio, las ambiciones de un círculo estrecho formado por el presidente y sus "favoritos". Se proclamaba también el comienzo de una época de "reparación institucional" en la que las nuevas autoridades se encargarían de corregir los "abusos" y "extravíos" cometidos por los juaristas en el poder. No es mi intención en estas páginas acreditar la autenticidad de tales acusaciones. La bibliografía se ha encargado de analizar el estilo de ejercicio del poder que impuso Miguel Juárez Celman desde su llegada a la presidencia, en 1886. Procuró hacerse con el control absoluto del PAN desplazando para ello a potenciales competidores, entre ellos a su antecesor en el cargo, el general Julio A. Roca. Aprovechó asimismo la excepcional bonanza económica que se vivía durante la segunda mitad de la década de 1880 para hacer un uso discrecional y político de los recursos estatales. Con respecto a la oposición, la estrategia del juarismo consistió en menospreciarla y marginarla del centro de la escena política. Todo ello, por otra parte, en el contexto de un régimen que se valía de la manipulación de los comicios para asegurar la hegemonía del grupo gobernante. Ese estado de cosas comenzó a revertirse hacia 1889. Aparecieron los primeros signos de una crisis económica y financiera que a partir de entonces no hizo sino agravarse, se intensificó la resistencia de sectores anti-juaristas dentro del PAN, y la oposición pudo organizarse iniciando una intensa actividad pública que culminó con el lanzamiento de la revolución del 26 de julio de 1890. Sobre todas estas cuestiones, como decía, ha indagado ya la literatura especializada (Alonso 2000a; Alonso 2010; Gerchunof/Rocchi/Rossi 2008). Me interesa realizar aquí una exploración más puntual y, evidentemente, más acotada. El propósito de este capítulo es examinar la manera en que se instaló entre

los contemporáneos (testigos y actores de los acontecimientos de aquellos días) la representación de un triunfo del pueblo sobre el gobierno supuestamente extraviado y corrupto de Juárez Celman. Buscaré mostrar cómo se combinaron discursos, consignas y acciones para moldear la imagen de una victoria moral, es decir, más trascendente y valiosa que el triunfo armado que la revolución no había podido alcanzar. En palabras del diario *La Prensa*: "La acción popular se ha producido al fin, y aunque no haya prevalecido en el terreno de las armas, […], se ha impuesto al gobierno, lo ha dominado y anonadado, cambiando así la situación del país"(*La Prensa*, 7.8.1890).

El texto está organizado en tres secciones. La primera pone el foco en el análisis del discurso que pronunció el senador Manuel Pizarro en el Congreso Nacional, inmediatamente después de la capitulación de los rebeldes de la Unión Cívica. Esa intervención planteó por primera vez y de manera explícita la necesidad de la renuncia del presidente. El segundo apartado describe el estado de una ciudad, Buenos Aires, sumida en el desconcierto y la inquietud ante el fracaso de la revolución y la impensada crisis política que con ello se había desatado. Las restricciones impuestas a la prensa por el estado de sitio no hacían sino acrecentar la confusión del público, alimentando rumores y especulaciones de todo tipo. Por último, la tercera parte del capítulo muestra el clima de júbilo que se adueñó de la capital del país al conocerse, finalmente, la noticia de la renuncia del presidente. En el transcurso de tan sólo una semana, la derrota de los revolucionarios se transformó en un aclamado triunfo popular. La intención es señalar que en ese contexto por demás excepcional y totalmente impensado hasta poco tiempo atrás, las denuncias formuladas contra el gobierno (y, muy en particular, la denuncia de corrupción que englobaba a todas las demás) sirvieron para ampliar los términos, los límites y los protagonistas de la discusión política. En el marco de un vacío de poder que se acrecentaba hora tras hora, esas acusaciones –que no eran nuevas– cobraron otra dimensión y ayudaron a articular diversos lenguajes políticos: el lenguaje de las sesiones parlamentarias, el de la prensa y el de las manifestaciones callejeras.[1] Se convirtieron en el centro de una "trama argumentativa" (Gayol 2008: 78) que activó la movilización de un público amplio y variado.

1 Acerca de la articulación entre debates parlamentarios, denuncias periodísticas y participación política popular resulta inspirador un trabajo de Pablo Piccato referido a los motines de la deuda inglesa en ciudad de México, en 1884 (Piccato 2003).

"El gobierno está muerto": la revolución en el Congreso

El 29 de julio la Junta Revolucionaria de la Unión Cívica presentó su rendición. Luego del desarme de las fuerzas rebeldes, el gobierno prometió una amnistía para los insurgentes, entre los que había civiles y militares (Alonso 2000a: 90). Las descripciones de la época resaltan la intranquilidad que se apoderó de los porteños en los momentos que siguieron al fracaso del levantamiento. Se oían todavía en las calles disparos aislados y un inusual silencio comenzaba a apoderarse de la ciudad (Balestra 1986: 148; Ibarguren 1969: 97). En esas circunstancias, la atención se concentró inicialmente en el Congreso Nacional. El miércoles 30 de julio se reunieron (por primera vez desde el estallido de la rebelión) las dos Cámaras del Poder Legislativo. Entre otras cuestiones, los legisladores debían aprobar el decreto de estado de sitio dictado por el Ejecutivo días antes. En Diputados el trámite resultó sencillo y expeditivo. Pero en el Senado las circunstancias fueron diferentes. "A la sesión había concurrido escasa barra, más curiosa que definida; y un pequeño grupo de pueblo se agrupaba silencioso frente al local" (Balestra 1986: 136). No era inusual que las galerías del recinto fueran ocupadas por un público más o menos numeroso, más o menos escandaloso, que presenciaba los debates y que ocasionalmente intervenía para aplaudir o censurar a los oradores. El Congreso funcionaba como un espacio donde los hombres públicos ponían en juego diversas herramientas retóricas con el objetivo de edificar una determinada imagen de sí mismos (Gayol 2008: 99). Los discursos parlamentarios alcanzaban por lo general una considerable repercusión a través de las crónicas que la prensa hacía de las sesiones, pero el propósito de los oradores era asimismo persuadir o conmover a los asistentes ubicados en las galerías. En esta oportunidad, la excitación de la barra se veía potenciada por el carácter marcadamente incierto del escenario político que había dejado la derrota de la revolución. El presidente Juárez Celman era, en teoría, el gran vencedor. Sin embargo, como ya se indicó, emergía de aquella situación profundamente debilitado. Juárez Celman había cometido serios errores en el manejo de la crisis creada por el estallido del alzamiento armado. Había optado por ausentarse de la capital, cediendo el liderazgo al vicepresidente y dejando la represión del movimiento insurgente en manos su ministro de Guerra y de su principal rival dentro del PAN: el general (y en ese momento senador nacional) Julio A. Roca (Alonso 2000a: 91 y 92).

Llegado ese punto, la sesión oficiada en el Senado el miércoles 30 se convirtió en "el golpe de gracia asestado a la bamboleante situación", porque fue en ese marco que el representante por la provincia de Santa Fe, Manuel Pizarro, pronunció un discurso que tuvo muy alto impacto.[2] Orador experimentado, Pizarro inició su intervención aclarando que se expresaba "con toda la sinceridad y con toda la efusión del patriotismo" que imponía el delicado momento por el que atravesaba la república. Advirtió, además, que le resultaba muy difícil mantener la calma sabiendo la conmoción que iban a generar sus palabras. Recordó, por otra parte, que luego de pertenecer durante años a las filas del oficialismo, recientemente había optado por tomar distancia del gobierno de Juárez Celman ante la evidencia de que sus políticas estaban llevando al país "por un camino sin salida". Pero, ¿qué fue lo que en concreto dijo Pizarro? Manifestó, en primer lugar, que aunque reprobaba el recurso a las armas como medio de acción política, no podía, sin embargo, celebrar el triunfo del gobierno sobre el alzamiento de la Unión Cívica. Aquella victoria era "deplorable", explicó, porque el país se encontraba en un estado de profunda decadencia económica, política y moral. Pizarro trazó un cuadro desolador: "[…] Las finanzas están arruinadas; el crédito público y el privado perdidos; el comercio agonizante; la libertad política suprimida. En una palabra, las instituciones son un montón de escombros como el que acaba de hacer el cañón en nuestras calles".[3] Remarcó, a continuación, la responsabilidad del gobierno frente a ese estado de cosas: "Si el gobierno no es la causa y origen único de todo cuanto al respecto sucede, no puede negarse que hay a lo menos falta de tino, abandono de la cosa pública, cierta especie de impericia ¿qué sé yo?" Pizarro se atrevió a sugerir, incluso, que era la "dominación" ejercida desde el poder el factor que instigaba a los partidos de la oposición a probar el camino de la violencia, el único posible cuando las vías legales se hallaban obstruidas. Sus afirmaciones fueron recibidas con aplausos y vivas por parte de la barra.

Manuel Pizarro había logrado impresionar al auditorio. Un senador oficialista, antiguo correligionario suyo, lo interrumpió para reprocharle –no sin ironía– que estuviera haciendo una "proclama revolucionaria". Pero Pizarro tenía más para decir. Porque la conclusión que extraía luego

2 *La Nación*, 7 de agosto de 1890. En el mismo sentido se expresaron con posterioridad algunos autores (Guido 1977: 138).

3 *La Nación*, 7 de agosto de 1890. Lo que sigue está tomado de la misma fuente.

de formular aquel diagnóstico lapidario era la necesidad de una solución que pudiera garantizar verdaderamente la pacificación del país. No alcanzaba con medidas de fuerza, se requería –según él– un "gesto patriótico" por parte de las autoridades. "[…] yo vengo en este momento a pedir como medio de pacificar el país, no leyes de estado de sitio, sino la renuncia en masa de los miembros del poder ejecutivo: presidente, vice, ministros y presidente mismo del senado". El gobierno, argumentaba Pizarro, "es autoridad moral, respeto a las leyes, prestigio en los que mandan y obediencia en los demás". Y todo ello, afirmaba, había desaparecido; reinaban en su lugar el desprestigio y la impopularidad del elenco gobernante. "La revolución está vencida, pero el gobierno está muerto", sentenció. La barra estalló nuevamente en ruidosos aplausos. Pizarro se puso de pie, entregó al secretario de la Cámara la renuncia a su banca y abandonó precipitadamente la sala. Aquellos gestos no hicieron, por supuesto, sino subrayar el efecto producido por sus palabras. El ambiente era de mucha efervescencia. "Todos necesitaban comunicarse su pensamiento. Unos exaltaban el coraje, otros la destreza y la oportunidad, y todos el patriotismo y la elocuencia del orador" (Balestra 1986: 142). Por primera vez había sido planteada explícitamente la posibilidad (y, más aún, la conveniencia) de la renuncia del presidente Juárez Celman. Pizarro se había referido a todo el gabinete pero evidentemente el eje de su exhortación pasaba por el pedido de dimisión del primer mandatario. Era un pedido de gran peso político y simbólico, sobre todo teniendo en cuenta el esfuerzo que durante los años previos habían hecho los voceros del juarismo por presentar al presidente y jefe del partido gobernante como aquél que concentraba "todo el poder político en sus manos" (Sabato 2012: 316).

La literatura ha señalado que aquél fue el origen de una auténtica "revolución parlamentaria" que terminó por forzar el alejamiento de Juárez Celman (Guido 1977: 138). El Congreso devino, de hecho, el centro neurálgico de una serie de maniobras y negociaciones que se pusieron en marcha con el objetivo de acelerar la salida del presidente. Mientras la autoridad de Juárez Celman se diluía, sus contendientes en el interior del grupo gobernante pugnaban por hacerse con el control de la situación. Al frente de aquel grupo se encontraban dos figuras de enorme relevancia política: el vicepresidente Pellegrini y el senador Julio A. Roca. Ambos eran dirigentes de primera línea tanto dentro del PAN como en la política nacional. Particularmente Roca había sido el fundador del partido y durante su mandato (1880-1886) se habían sentado las bases de las transformaciones

que atravesaba la Argentina hacia fines del siglo XIX. Al sucederlo en la presidencia, Juárez Celman había procurado minar su influencia y ahora Roca se disponía a recuperarla (Gallo 1997: 52). "Todas las miradas se dirigían hacia el Congreso, […] en medio de la tribulación general". Los legisladores se hallaban prácticamente "en asamblea permanente", se sucedían las reuniones (algunas de ellas secretas) y el edificio era "un hervidero de gente de todas las opiniones" (Balestra 1986: 151 y 154). Por otra parte, los documentos muestran que aquella revolución sin armas que se desarrollaba en el parlamento, tenía también su correlato fuera del recinto, en la prensa y en las calles de la ciudad. En cuanto pudo eludir los controles impuestos por el estado de sitio, la prensa opositora hizo suyos los tópicos centrales del discurso pronunciado por Manuel Pizarro en el Senado. El retrato de un país al borde del descalabro económico y de la descomposición institucional, las recriminaciones contra un gobierno calificado de corrupto, y el reclamo de un renunciamiento patriótico por parte del presidente, no tardaron en transformarse en el motor de una movilización política que llegó por último a las calles de la ciudad.

La ciudad expectante. Prensa, censura y curiosidad pública

Desde el estallido de la revolución continuaba vigente el estado de sitio, pero las restricciones a la circulación de la prensa parecieron comenzar a ceder cuando el 31 de julio *La Nación* y *El Diario*, dos órganos identificados con la oposición al gobierno de Juárez Celman, volvieron a publicarse tras varios días de silencio obligado. *La Nación*, sin embargo, sufrió nuevas medidas de censura luego de incluir en su edición del 1 de agosto la transcripción completa del discurso de Pizarro. La edición fue secuestrada, se quitaron de circulación los ejemplares y la imprenta del diario fue allanada por la policía ordenándose su inmediato desalojo y posterior clausura.[4] La relación entre prensa y política estaba fuertemente arraigada en Buenos Aires y continuaba siendo en la década de 1890 un rasgo característico del mundo periodístico porteño. Circulaban, por una parte, los diarios políticos en sentido estricto. Es decir, aquellas publicaciones que eran el instrumento del partido o sector político que las financiaba. Dentro de esa categoría entraban *Sud-América* y *La Argentina*, ambos voceros de la

4 Puede verse el relato que el diario hizo de aquel evento en su edición del día 7.8.1890.

fracción juarista del PAN. Pero esa forma tradicional de periodismo político coexistía con otras modalidades propias de la acelerada transformación que por esos mismos años experimentaba el campo. *La Nación*, también *La Prensa* y, en un segundo plano, *El Diario*, eran órganos de extensa circulación y de notoria influencia que, siguiendo el ejemplo de la prensa de las grandes capitales y ciudades del mundo, se hallaban embarcados en el proceso de incorporar nuevos formatos estilísticos y nuevas tecnologías. No siempre los diarios más modernos estaban exentos de una determinada filiación partidaria. *La Nación*, por ejemplo, era el portavoz del mitrismo, una agrupación con larga actuación en la vida política porteña y nacional. Pero incluso en ese caso, la aspiración del periódico era seguir el ritmo de las transformaciones y convertirse en algo más que un mero diario político.[5] Lo que importa subrayar aquí es que los diarios modernos no se privaban de expresar sus opiniones y juicios (generalmente muy críticos del gobierno) ni tampoco de intervenir para moldear a la misma "opinión pública" cuyos intereses afirmaban representar. Es decir que eran actores de relevancia en el escenario político. Más aún, su capacidad de injerencia política se veía potenciada por las nuevas facultades que estaban adquiriendo: la perspectiva de llegar a un público cada vez más amplio y heterogéneo, la disposición para convertir un acontecimiento político en una noticia de alto impacto, la posibilidad de elaborar crónicas detalladas y atractivas de los eventos de actualidad (Alonso 2010: 45-55; Saítta 1998: 30-38; Zimmermann 1998; Rojkind 2012).

La publicación que *La Nación* hizo del discurso del senador Manuel Pizarro debe ser considerada en ese contexto: el de la actuación política de la prensa. Las campañas de denuncias y acusaciones contra la administración de Juárez Celman habían contribuido en su momento a generar el clima previo al estallido de la revolución de la Unión Cívica, un clima de intensa agitación política. Y ahora, una vez fracasado aquel intento pero ante un gobierno tambaleante, la prensa opositora redoblaba sus embestidas. Siguiendo la línea proyecta por el alegato de Pizarro en el Congreso y a medida que recuperaban la posibilidad de expresarse, los diarios contribuyeron con su prédica a reafirmar la imagen de un gobierno divorciado de la "opinión sana", que "concentraba sus ambiciones en un círculo precario

5 *La Prensa* era el órgano que lideraba los cambios y que se encontraba a la vanguardia de la modernización periodística. Carecía de una filiación política concreta, pero no ocultaba sus críticas contra el gobierno de Juárez Celman y contra el régimen del PAN, más en general.

que debía llevarle a su ruina, arrastrando los intereses cuantiosos de la Nación" (*La Prensa*, 7.8.1890). Un gobierno, en definitiva, corrupto, arbitrario e irresponsable, que había pretendido independizarse de la vigilancia ejercida por la ciudadanía activa. Decía *La Prensa*, por ejemplo:

> La protesta de la opinión fue agrandándose, en la medida de los errores y extravíos del gobierno, hasta representar una fuerza poderosa a incontrastable. […]
>
> Vencida la revolución en el terreno de los hechos, quedaron subsistiendo las causas que la habían precipitado […] y el país comprendía que no habíamos llegado al desenlace del drama político, con el fracaso de la revolución. (*La Prensa*, 7.8.1890)

Y por su parte *La Nación* sostuvo que "toda una inmensa trama, toda una aglomeración de elementos oficiales, todo un sometimiento incondicional de los cobijados a la sombra del poder, ha caído con estrépito en la hora inesperada en que su éxito se creía más seguro y más completo" (*La Nación*, 8.8.1890).

Ante el recrudecimiento de los ataques periodísticos, la primera reacción oficial fue –como vimos– echar mano al recurso de la censura que la vigencia del estado de sitio habilitaba. Generalmente, sin embargo, las proscripciones generaban el efecto contrario al buscado, y no fue ésta una excepción. El secuestro de los ejemplares de *La Nación* sólo sirvió para darle mayor trascendencia al discurso de Manuel Pizarro. Su sentencia ("la revolución está vencida, pero el gobierno está muerto") se difundía velozmente, corriendo "de boca en boca". Y en simultáneo se propagaban "habladurías y alarmas de todo tipo": sobre una abrupta subida del precio del oro, sobre supuestos desmanes que cometían bandas de ladrones armados en los suburbios y, cada vez en voz más alta, sobre la inminencia de la renuncia presidencial (Balestra 1986: 149). La ansiedad y la expectativa de la población se incrementaban con el paso de los días.

El diario oficialista *La Argentina* publicó un manifiesto que llevaba la firma del presidente Juárez Celman. El texto objetaba la elección del camino revolucionario que había hecho la Unión Cívica y hacía un llamamiento a la reconciliación entre los argentinos de uno y otro bando. La iniciativa no sirvió para calmar los ánimos, la voz del mandatario no pudo llegar "a sus adversarios ni al país, porque fuera de algunos partidarios del gobierno era común no leer los periódicos oficialistas" (Balestra 1986: 150). A partir de entonces, "la vida normal de la ciudad quedó suspendida

y pendiente de las resoluciones del congreso, de las negociaciones políticas que se hacían y de la confirmación o desmentido de la tan anhelada renuncia".[6] Paulatinamente, la gente comenzó a salir a las calles buscando enterarse de las últimas novedades. La avidez de noticias no hacía sino incrementarse. En la Plaza de Mayo y en los alrededores del edificio del Congreso comenzaron a formarse grupos de decenas y luego centenares de personas.[7] Los manifestantes se abalanzaban sobre los legisladores, asediándolos con preguntas, e interceptaban a los reporteros que cubrían en el lugar las alternativas de la actualidad política. Según las crónicas, "la lluvia y el frío no eran parte a impedir que aumentase […] esa concurrencia". Los relatos subrayaban, por un lado, la heterogeneidad de ese público, "personas de todas las clases y todas las condiciones sociales"; hombres y mujeres; publicistas, estudiantes y extranjeros. Pero es posible leer también en esas descripciones, como trasfondo de esa incipiente movilización, la marca que en la sociedad porteña estaba dejando la crisis económica. Se mencionaba la presencia de comerciantes, de gente vinculada con la banca y la Bolsa, de empleados y trabajadores.[8] La crisis no sólo había producido gran cantidad de quiebras de instituciones bancarias, con el consiguiente desfile de ahorristas súbitamente empobrecidos, sino que asimismo muchos comercios, fábricas y talleres habían tenido que cerrar sus puertas, estando paralizada además la construcción (Suriano 2003).

En el Congreso continuaban realizándose las gestiones para destrabar la crisis política. Juárez Celman había intentado en vano organizar un nuevo gabinete incorporando a representantes de los sectores más moderados de la oposición. El presidente se hallaba acorralado por quienes buscaban su dimisión. Roca y Pellegrini concertaron una serie de entrevistas secretas con legisladores con el objetivo de aislarlo aún más. Mientras esto sucedía en el parlamento, en las calles la concentración de gente fue aumentando hasta formarse una multitud de miles de personas. No se produjeron incidentes de gravedad, pero la tensión estaba latente. Por otra parte, los relatos indicaban que con el transcurso de los días se sumaron otros ac-

6 *La Nación*, 7.8.1890. Son reiteradas las referencias a la impopularidad de la prensa oficialista (Rivero Astengo 1944: 529; Sáenz Hayes 1960: 142).

7 La Plaza de Mayo era (y sigue siendo) el centro cívico y político de Buenos Aires y del país. La Casa de Gobierno y el Congreso se ubicaban en torno a la plaza.

8 *La Nación* y *La Prensa*, 7 y 8.8.1890; *El Diario*, 8.8.1890. Crónicas de las reuniones públicas de esos días se encuentran asimismo en diversos testimonios de la época (Balestra 1986: 159; Landerberger/Conte 1890: 263).

tores: "gente hosca, de lenguaje rudo y aspecto astroso", a la que no era usual –decían– ver en la Plaza de Mayo manifestándose (Balestra 1986: 165). De nuevo, pueden intuirse detrás de esas presencias inesperadas los estragos causados por la tormenta económica. La desocupación y la pobreza se habían elevado en los últimos meses, y el impacto de ambos flagelos podía percibirse en el paisaje urbano. Pero es asimismo interesante reparar en el análisis que las crónicas hicieron de la aparición de estos actores hasta entonces raramente visibles en la arena política. Esas personas, se afirmaba, ignoraban tanto los pormenores de la crisis política en curso como los vericuetos de las negociaciones que se estaban llevando adelante en las altas esferas del poder para destrabarla. Sin embargo, estaban allí, en la Plaza, porque "tenían hambre y se creían robados" (Balestra 1986: 165). Y por eso también gritaban contra el gobierno, confiando en que sus padecimientos habrían de terminarse con la caída de Juárez Celman. Parece posible afirmar, por lo tanto, que los motivos económicos y políticos tendían a superponerse. Salvar a la república en peligro era salvarse también ellos e implicaba la posibilidad de hacerse escuchar, articulando reclamos y reivindicaciones en el espacio político de la calle.

A esa altura de los acontecimientos, por lo tanto, el tema de la renuncia presidencial parecía haberse instalado en la opinión pública y en la sociedad porteña en general. Pero a pesar de que los rumores se intensificaban hora tras hora, la noticia no terminaba de confirmarse. La agitación en las calles también crecía. Tal como se señaló anteriormente, las descripciones que –por ejemplo– la prensa hacía de la multitud apostada frente al Congreso tendían a remarcar su carácter heterogéneo. Pero no deberíamos perder de vista que, al mismo tiempo, los relatos se esforzaban por subsumir la diversidad de los manifestantes bajo la figura unificadora del pueblo. Y justamente a partir de aquella referencia al pueblo fue cristalizando asimismo la representación de un movimiento del cual la fallida revolución de la Unión Cívica había sido tan sólo "la chispa inicial" (Balestra 1986: 156). Cuando, finalmente, Juárez Celman concretó el miércoles 6 de agosto la elevación de su renuncia al Congreso Nacional, la noticia corrió por toda la ciudad y estallaron entonces sí las celebraciones.

"Una explosión de júbilo estremeció a Buenos Aires": renuncia presidencial y celebraciones callejeras

Había transcurrido una larga semana de tentativas estériles por sumar los apoyos necesarios para permanecer en el gobierno. Pero la situación era insostenible y el presidente no tenía otra alternativa que dar un paso al costado. Esa misma tarde senadores y diputados se reunieron en Asamblea Legislativa para darle tratamiento formal a la presentación de la renuncia presidencial. El ambiente en el recinto parlamentario era solemne. Se estaba frente a una instancia inédita en la historia institucional del país. La sesión fue dirigida por Julio A. Roca, en su condición de vicepresidente de la Cámara Alta. "Las galerías eran un racimo". Una de las intervenciones que más agitación causó en el público fue la de Dardo Rocha, senador por la provincia de Buenos Aires. Rocha sostuvo que Miguel Juárez Celman había demostrado su incapacidad para "afrontar los graves y pavorosos problemas que se presentan en la actualidad y cuya solución pone en peligro […] la integridad de la Patria". El alejamiento del presidente era, en consecuencia, "una suprema necesidad reclamada por el bien público" (*La Prensa*, 7.8.1890).

La votación no fue unánime pero sí ampliamente favorable a la aceptación de la renuncia. En la Plaza de Mayo se había congregado desde temprano "una numerosa concurrencia, que acudía en busca de las noticias esperadas sobre la renuncia presidencial" (*La Prensa* y *La Nación* 7.8.1890; *El Diario*, 8.8.1890). Según las crónicas, llegaron a juntarse más de seis mil manifestantes. "Las proporciones que iba tomando el concurso del público debió alarmar a las autoridades y hacerles temer algún conflicto". Vigilantes y bomberos, armados con fusiles Remington, hicieron desalojar el frente del edificio del Congreso, pero no pudieron impedir que los grupos siguieran apostados en las calles adyacentes. Finalmente, pasadas las cinco de la tarde, se confirmó la noticia de que la Asamblea Legislativa había aprobado la dimisión de Juárez Celman. "Poco después la ciudad trepidaba: los rugidos de la plaza se dilataron en un instante por todos los rumbos". Las calles se convirtieron en el escenario de la celebración por la caída del presidente. Los manifestantes acudieron presurosos a las imprentas de los diarios opositores, para saludarlos. La inquietud y la zozobra de los días previos dieron paso a demostraciones de alegría que prosiguieron ya entrada la noche. El clima era de fiesta:

> […] bombas y cohetes explotaban por todas partes; en los cafés y restaurantes, desiertos durante tantos días, no había sitio para acomodar tanta gente; las casas abrían sus puertas, banderas e iluminaciones asomaban por distintos lados; por do quiera se formaban animados corrillos; y en general la ciudad despertaba alegre y bulliciosa de su letargo anterior.[9]

¿Cómo interpretar esa explosión de júbilo popular y su expresión en las calles de la ciudad? Los análisis que de ello hicieron los propios contemporáneos sugieren algunas pistas. La prensa, por ejemplo, destacó el hecho de que aquel "desborde de vida, alegre y ruidosa", era una reacción frente a la inercia en que había estado sumergida la vida política de Buenos Aires durante varios años. La ciudad poseía una arraigada cultura de movilización callejera y uso político del espacio público (Sabato 1998), pero los gobiernos del PAN y, en particular, el de Juárez Celman, habían procurado desactivar aquella tradición con la finalidad de garantizar el mantenimiento del orden y evitar cualquier signo de agitación o inestabilidad política. Ahora, se decía, aquella inacción cívica había sido bruscamente reemplazada por "un ansia nunca satisfecha de andar y andar". En cuanto la renuncia del presidente se confirmó, "todo el mundo se echó a la calle, sin distinción de nacionalidad, de clase, de sexo ni de edades". (*La Prensa* y *La Nación*, 7.8.1890). Se procuraba enfatizar también el sentimiento de unidad, de confraternidad, que parecía haber inundado a los porteños. Los extraños se saludaban y se abrazaban, se hacían brindis colectivos, los dueños de los bares invitaban copas y refrescos a los comensales, las señoras arrojaban flores desde los balcones. Las descripciones sugerían, a propósito de ello, que los festejos respondían también a la convicción por parte de los porteños de que habían recuperado la ciudad para sí, luego de desalojar al presidente y a su séquito de colaboradores, originarios todos de la provincia de Córdoba. Gravitaba, por lo tanto, el viejo enfrentamiento entre Buenos Aires y el interior del país.[10] Pero quizás el sentido más relevante que cristalizó en torno a las manifestaciones del 6 de agosto fue la idea, ya varias veces

9 *La Prensa* y *La Nación* 7.8.1890; *El Diario*, 8.8.1890. Pueden consultarse testimonios de la época sobre las celebraciones del 6 de agosto en las calles de Buenos Aires (Balestra 1986: 174; Ibarguren 1969: 97; Landerberger/Conte 1890: 263; Carrasco 1947: 29; Cárcano 1965: 170).

10 Ese conflicto había atravesado todo la historia política argentina del siglo XIX. En 1880 la ciudad de Buenos Aires había sido federalizada y convertida en capital del país. Pero el antagonismo continuaba vigente y los voceros del juarismo se habían encargado de alimentarlo con su prédica anti-porteña (sobre esto último véase Alonso 2003: 45). Por otra parte, Carlos Pellegrini era un político de Buenos Aires.

mencionada, del triunfo moral conquistado por el pueblo a expensas de un gobierno corrupto. Los editoriales periodísticos insistieron sobre aquel razonamiento en varias oportunidades: "la presencia en el poder del Dr. Juárez Celman, […], se había hecho imposible. […] Después de esfuerzos inútiles por resistir ese gran poder moral de la opinión, que había desconocido; […] tuvo que inclinarse ante ellos, devolviendo al Congreso la autoridad de que en mala hora fue investido".[11] También lo hicieron los oradores a quienes la multitud de manifestantes acudió para requerir su palabra. El senador Aristóbulo del Valle, por ejemplo, habló desde el balcón del local de la Unión Cívica, situado a pocas cuadras de la Plaza de Mayo. "La revolución ha triunfado", afirmó Del Valle, "la sangre derramada no ha sido estéril" porque "ya no tenemos un Presidente aborrecido por el pueblo". El público se acercó igualmente hasta la casa de Manuel Pizarro, para felicitarlo y agradecerle por el discurso formulado en el Congreso días atrás. Pizarro "declaró que las ideas que sostuviera en el Senado las había recogido del pueblo, a quien pertenecían", y convocó a la muchedumbre a seguir celebrando "la reconquista de la libertad de manos del desorden y la corrupción".[12]

Si, más allá de las palabras escritas o habladas, atendemos al lenguaje político que los manifestantes desplegaron durante las demostraciones, se advierte que la percepción del triunfo estaba también muy presente en consignas y acciones. Resaltan, por un lado, los saludos a la prensa opositora y a figuras de la vida política que podían ser asociadas de manera indudable con la impugnación al gobierno del, para entonces ya, ex presidente Juárez Celman. Como contracara de ello, era justamente la figura del mandatario caído en desgracia la que concentraba el rechazo popular. "Ya se fue, ya se fue, el burrito cordobés. Ya se fue, ya se fue para nunca más volver". Esta frase, coreada una y otra vez por la multitud, se transformó en la consigna distintiva de las manifestaciones. La revista satírica *El Quijote* había plasmado la caricaturización de Juárez Celman como un burro y aquella imagen traspasaba ahora las páginas del semanario convertida en el lema de la movilización callejera (Román 2011). En su esfuerzo por ridi-

11 *La Prensa*, 7.8.1890. Nociones como "moral", "regeneración" y otras formaban parte de un complejo y ecléctico clima de ideas que se desarrollaba en Buenos Aires hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX (Terán 2000).

12 *La Prensa*, 7.8.1890. Aristóbulo del Valle era un reconocido dirigente político porteño y había formado parte del grupo fundador de la Unión Cívica, en abril de 1890. En la sesión del 30 de julio renunció, como Pizarro, a su banca en el Senado.

culizarlo, lo que se estaba poniendo en cuestión era tanto su condición de hombre público (la revista lo representaba también como un gobernante déspota que arremetía contra las instituciones y principios de la República) como ciertos aspectos de su vida privada (con alusiones al derroche de gastos, al lujo desmedido, al enriquecimiento). De nuevo, era la acusación de corrupción la que envolvía esas diferentes facetas. Y era la caída del gobernante corrupto (o "corrompido") lo que se festejaba en las calles. Dijimos ya que operaron seguramente motivaciones de otro tipo, como aquellas directamente vinculadas con los efectos de la crisis económica, pero el cariz político parece haber predominado.

Es necesario tener presente, por otra parte, que el clima de fiesta y las expresiones de alegría continuaron al día siguiente, el jueves 7 de agosto, acompañando el acto de asunción del vicepresidente Carlos Pellegrini, quien se hacía cargo del poder en reemplazo de Juárez Celman. Las calles volvieron a llenarse de gente, y los discursos, los gestos y las acciones que se desplegaron entonces confluyeron para precisar el contenido de las celebraciones. Además del triunfo moral del pueblo, lo que se festejaba ese día era la promesa del comienzo de una nueva era:

> […] el pueblo ha sufrido, ha luchado y triunfado al fin, y ahora vuelve otra vez a abrirse para él una época de reparación y de vida institucional.
>
> […] Los gobernantes argentinos no se atreverán ya en adelante a marchar contra la opinión pública, a falsear la ley y a pervertir la moral; porque caerán irremisiblemente con la marca indeleble de la ignominia en la frente y de la condenación histórica sobre su nombre. (*La Nación*, 7.8.1890)

La toma de posesión del mando por parte de Pellegrini fue, según todos los relatos, un "acto desbordante". Una columna de manifestantes lo escoltó desde su domicilio hasta la Plaza de Mayo, donde lo esperaba una multitud:

> […] no sólo en la plaza, sino en las azoteas, en los balcones, encaramados en las ventanas, sobre los coches de los tranvías detenidos para utilizarlos como palcos, en los carros del tráfico, […] una inmensa muchedumbre, excitada, alegre, bulliciosa, esperaba la llegada del doctor Pellegrini, prorrumpiendo de vez en cuando en expresiones de júbilo. (*La Prensa*, 8.8.1890)

Ante la concurrencia que lo aclamaba, el nuevo presidente ensayó un gesto cargado de simbolismo: ordenó abrir las puertas de la Casa de Gobierno para que el público pudiera ingresar. Durante varias horas, consignan los

relatos, un "inmenso gentío" recorrió los salones del edificio. Los visitantes "iban de un lado al otro, sin cansarse de ver e imaginar". La intención de Pellegrini parece haber sido inaugurar su gestión trazando un corte abrupto respecto de la de su antecesor. La prensa así lo entendió:

> Al lado de distinguidas damas veíase a la modesta mujer del pueblo; al lado de caballeros conocidos en la política y el comercio, el menesteral y el obrero; todos como aguijoneados por la curiosidad, mirándolo todo, deteniéndose para contemplar los adornos, los artesonados, los muebles, sentándose en los sillones de los ministros y de los altos empleados, […].
>
> [Se trataba] de orear el edificio, abriendo sus puertas a los aires puros de la libertad y ejercitar el pueblo actos de soberano. (*La Prensa*, 8.8.1890)

Pellegrini fue todavía más explícito y reforzó con palabras el sentido de aquel gesto. Se asomó al balcón de la Casa de Gobierno para dirigirse a la muchedumbre reunida en la Plaza de Mayo. Prometió gobernar con "honradez y patriotismo", buscando siempre el sostén de la opinión pública y respetando, por sobre todas las cosas, lo establecido por la Constitución y las leyes (Ramos Mexía 1936).

De esa manera, aunque su llegada a la presidencia representaba, en realidad, la continuidad del dominio del PAN y del régimen que lo sustentaba, Pellegrini pudo aparecer también como el iniciador de aquella "época de reparación" que los críticos de Juárez Celman reclamaban. El diario *La Nación* afirmaba complacido que "el nuevo presidente de la república ha sabido levantarse a la altura de las circunstancias por que atraviesa el país, interpretando debidamente sus necesidades y sus aspiraciones presentes y futuras" (*La Nación*, 8.8.1890). Pellegrini se hallaba ante la necesidad insoslayable de legitimar su nuevo rol frente a la pesada herencia que significaba el hecho de haber formado parte de un gobierno estigmatizado por las constantes denuncias de corrupción política, económica y administrativa. El discurso de la corrupción había sido, primero, el eje central de las acusaciones contra la gestión de Juárez Celman, luego el motor del movimiento que concluyó con su renuncia y, finalmente, el sustento a partir del cual se construyó la imagen de un triunfo moral del pueblo de Buenos Aires. Caído el juarismo, ese discurso dejaba su lugar a una retórica de la transparencia que, esgrimida desde las más altas esferas del poder, parecía sintonizar con las aspiraciones que el público porteño había expresado en las manifestaciones callejeras de aquellos días.

Conclusión

La apuesta de Pellegrini, sin embargo, no dejaba de ser riesgosa: las promesas generaban expectativas y las expectativas, si no eran satisfechas, podían convertirse en el motor de nuevas protestas. De hecho, el entusiasmo que acompañó su asunción el 7.8.1890 no iba a tardar mucho en disiparse. Las complejidades de la situación política y los problemas económicos condicionaron el desenvolvimiento de su breve gobierno y fueron el patrón dominante por lo menos hasta mediados de la década. La crisis política, en particular, estuvo signada por nuevos desafíos (algunos de ellos armados) que debió enfrentar el PAN y que se vieron potenciados por las divisiones internas que lo recorrían. La brecha abierta por la revolución de julio de 1890 iba a tardar en cerrarse (Botana 1994).

En este capítulo la intención ha sido reconstruir y analizar la dinámica de un momento específico de esa crisis originada por la impugnación revolucionaria del noventa. La rebelión armada había sido sofocada, pero la autoridad del presidente Miguel Juárez Celman se desmoronaba originando en torno suyo un creciente vacío de poder. El foco del análisis estuvo puesto en la semana transcurrida entre la derrota de los revolucionarios y la dimisión del presidente. En gran medida fueron los conflictos dentro del grupo gobernante los que impusieron a Juárez Celman el camino de la renuncia. Pero el desprestigio en el que había caído anclaba asimismo en las fuertes acusaciones que se le hacían a su gobierno y, en particular, a su persona. Se denunciaba la corrupción privada de los funcionarios pero igualmente la decadencia de las instituciones y las tradiciones políticas del país. Esas imputaciones no eran una novedad, la oposición las esgrimía desde hacía tiempo y, de hecho, habían servido para crear el ambiente de agitación previo al lanzamiento por parte de la Unión Cívica de un levantamiento armado. No obstante, me interesó mostrar aquí que en el marco del contexto político por demás incierto engendrado por el fracaso del alzamiento revolucionario, la prédica contra un gobierno supuestamente corrupto (en el sentido amplio del término) operó como el eje articulador de un movimiento de activación política que tuvo diversos escenarios, protagonistas y canales de transmisión.

El discurso que el senador Manuel Pizarro pronunció en el Congreso Nacional el día 30 de julio se convirtió en el puntapié inicial de aquel movimiento. Pizarro alzó su voz disidente dentro del oficialismo para describir la situación de descalabro económico, financiero y, principalmente,

político-institucional en la que, desde su perspectiva y la de muchos otros, se encontraba el país. Advirtió que la patria estaba en peligro y señaló a la gestión juarista como responsable de aquella catástrofe. Pizarro explicitó una caracterización del gobierno en la que el despotismo político se combinaba con el uso arbitrario de los fondos públicos y con la ineficacia de la administración en casi todos los niveles. Pero el verdadero impacto de su intervención surgió a partir del llamamiento que efectuó para que el presidente, en un gesto postrero de patriotismo, renunciara al cargo que ostentaba. El gobierno, según Pizarro, estaba muerto. El discurso de Pizarro tuvo fuertes repercusiones en el recinto pero también fuera de él. Llegó primero al periodismo, a través de la publicación que hizo el diario *La Nación* y que le valió la censura gubernamental. La prensa era un actor político de relevancia en Buenos Aires. En este caso, y a pesar de las restricciones que imponía el estado de sitio, los diarios intervinieron para reforzar la imagen de un gobierno corrupto, despótico e ineficiente que Pizarro había proyectado en el escenario del parlamento. La prensa opositora subrayó el divorcio entre la opinión y un presidente preocupado tan sólo por promover los intereses de una camarilla de funcionarios adictos. El aislamiento del poder era, desde esa perspectiva, un problema muy serio porque implicaba la ausencia de límites y de controles que la ciudadanía pudiera ejercer sobre la clase dirigente. La prensa contribuyó asimismo a fijar la imagen del triunfo moral que entrañaba la forzada renuncia de Miguel Juárez Celman (Hirsch 2013). Era una victoria moral porque trascendía el fracaso de la revolución en el terreno de las armas, pero lo era también porque –se decía– inauguraba una nueva época de reparación para la república. La noción del triunfo impregnó las demostraciones populares que se produjeron en la ciudad de Buenos Aires para celebrar la caída de Juárez Celman. En el espacio político de la calle, confluyeron los múltiples tópicos, consignas y sentidos que habían circulado a lo largo de aquellos días. El lenguaje de la acción que los manifestantes pusieron en juego indicó cuáles eran los blancos de la simpatía o, por el contrario, del repudio popular. Las motivaciones en uno y otro caso podían variar (los efectos de la crisis económica, la necesidad de expresarse y hacerse oír, incluso el sentimiento de identidad porteña), pero el significado político de las manifestaciones era innegable. La ciudad era una fiesta porque el presidente "corrompido y aborrecido" había tenido que renunciar. En ese marco, por otra parte, la jura como nuevo mandatario del vicepresidente Carlos Pellegrini pudo ser saludada y festejada como un corte respecto de la gestión juarista (de la cual, obviamente, él había

formado parte) y como el anuncio de una nueva etapa política e institucional. Pellegrini, en tanto, se encargó de reforzar esa representación con gestos, palabras y promesas.

La exhortación a la renuncia del presidente Juárez Celman, en primer lugar, y, luego, cuando esa renuncia efectivamente se produjo, el festejo por el triunfo moral que el pueblo había conquistado, funcionaron como los fundamentos de una amplia y espontánea movilización política que se activó en Buenos Aires durante aquellos días de fines de julio y comienzos de agosto de 1890. Hacia atrás, esa movilización implicaba ensanchar los términos habituales de la discusión política, recuperar espacios e incorporar nuevos actores, desafiando con ello la preeminencia del principio de orden que defendía el grupo gobernante. Hacia adelante, se adivinaba el resquebrajamiento de la legitimidad del régimen político imperante así como la fragmentación de un escenario político hasta entonces dominado por el PAN. Se avecinaban nuevos conflictos y protestas más intensas.

Bibliografía

Alonso, Paula (2000a): *Entre la revolución y las urnas. Los orígenes de la Unión Cívica Radical y la política argentina en los años noventa*. Buenos Aires: Sudamericana.

— (2000b): "La Unión Cívica Radical: fundación, oposición y triunfo (1890-1916)". En: Lobato, Mirta (dir.): *El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916)*. Buenos Aires: Sudamericana, pp. 209-269.

— (2003): "*La Tribuna Nacional*, *Sud-América* y la legitimación del poder (1880-1890)". En: *Entrepasados. Revista de Historia*, 24/25, pp. 29-66.

— (2010): *Jardines secretos, legitimaciones públicas. El Partido Autonomista Nacional y la política argentina de fines del siglo XIX*. Buenos Aires: Edhasa.

Balestra, Juan (1986): *El Noventa. Una evolución política argentina*. Buenos Aires: La Facultad.

Botana, Natalio (1994): *El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916*. Buenos Aires: Sudamericana.

Botana, Natalio/Gallo, Ezequiel (1997): *De la República posible a la República verdadera (1880-1910)*. Buenos Aires: Ariel.

Cárcano, Ramón (1965): *Mis primeros ochenta años.* Buenos Aires: Pampa y Cielo.

Carrasco, Ángel (1947): *Lo que yo vi del 80: Hombres y episodios de la transformación nacional*. Buenos Aires.

Gallo, Ezequiel (1997): *Carlos Pellegrini. Orden y reforma*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Gayol, Sandra (2008): *Honor y duelo en la Argentina moderna*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Gerchunoff, Pablo/Rocchi, Fernando/Rossi, Gastón (2008): *Desorden y progreso. Las crisis económicas argentinas, 1870-1905*. Buenos Aires: Edhasa.

Guido, Horacio (1977): *Secuelas del Unicato: 1890-1896.* Buenos Aires: La Bastilla.

Hirsch, Leonardo (2013): "'Prensa independiente' y crítica moral al juarismo (1889-1890)". En: *Estudios Sociales*, 44, pp. 73-100.

Ibarguren, Carlos (1969): *La historia que he vivido.* Buenos Aires: EUDEBA.

Landerberger, J. W./Conte, M. (1890): *Origen, organización y tendencias de la Unión Cívica*. Buenos Aires: Imprenta Coni.

Piccato, Pablo (2003): "*El populacho* y la opinión pública: debates y motines sobre la deuda inglesa de 1884". En: Connaughton, Brian (coord.): *Poder y legitimidad en México en el siglo XIX. Instituciones y cultura política*. México, D.F.: UAM-Porrúa, pp. 531-579.

Ramos Mexía, Ezequiel (1936): *Mis memorias. 1853-1935*. Buenos Aires: La Facultad.

Rivero Astengo, Agustín (1944): *Juárez Celman, 1844-1909: estudio histórico y documentado de una época argentina*. Buenos Aires: Kraft.

Rojkind, Inés (2012): "*El gobierno de la calle*. Diarios, movilizaciones y política en Buenos Aires del novecientos". En: *Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales*, 84, pp. 98-123.

Román, Claudia (2011): "*Don Quijote* (1884-1902): la prensa satírica, entre el público y el pueblo". Ponencia inédita.

Sabato, Hilda (1998): *La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880*. Buenos Aires: Sudamericana.

— (2012): *Historia de la Argentina, 1852-1890.* Buenos Aires: Siglo XXI.

Sáenz Hayes, Ricardo (1960): *Ramón J. Cárcano: en las letras, el gobierno y la diplomacia. 1860-1946*. Buenos Aires: Academia Argentina de Letras.

Saítta, Sylvia (1998): *Regueros de tinta. El diario* Crítica *en la década de 1920*. Buenos Aires: Sudamericana.

Suriano, Juan (2003): "La crisis de 1890 y su impacto en el mundo del trabajo". En: *Entrepasados. Revista de Historia*, 24/25, pp. 101-124.

Terán, Oscar (2000): *Vida intelectual en el Buenos Aires fin-de siglo (1880-1910). Derivas de la "cultura científica".* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Zimmermann, Eduardo (1998): "La prensa y la oposición política en la Argentina de comienzos de siglo. El caso de *La Nación* y el Partido Republicano". En: *Estudios Sociales* 15, pp. 45-70.

La corrupción en los gobiernos locales del México porfiriano. El caso de un gobernante honrado

Andrés Reyes Rodríguez

Introducción

En un texto publicado en 1988 el historiador de Aguascalientes, Jesús Gómez Serrano, afirmó categóricamente que Rafael Arellano Ruíz Esparza se había caracterizado durante el cuatrienio 1895-1899 como parte del "gobierno más querido y respetado de cuantos tuvo Aguascalientes durante el porfiriato" (Gómez Serrano 1988: 431).

La razón fundamental para emitir este juicio fue que el político había encabezado

> una administración honrada, no brillante pero sí eficaz, capaz de resolver problemas y de emprender mejoras que quedaran a la vista de todos, como testimonio de que un gobierno que era avalado por hechos concretos y no por vagas promesas de bienestar nunca materializadas. (Gómez Serrano 1988: 433).

Según el mismo historiador, Rafael Arellano había escogido entre sus colaboradores a "humildes pescadores que tenían por divisas únicas la honradez y la lealtad" (Gómez Serrano 1988: 433).

Esta reiterada interpretación sobre un gobernante honrado del Porfiriato radicado en provincia durante mucho tiempo, se convirtió en una verdad indiscutida debido, tal vez, a que el tema en cuestión no era el objetivo principal de la publicación en la que aparecen algunos pasajes de su vida pública, sino que se encontraba articulado a otros asuntos más generales en los que se describe y analiza la vida política local de Aguascalientes, y no la historia familiar o individual del citado político.

Para saber si el perfil del ex gobernante ofrecía posibilidades de más y nuevas indagaciones históricas era necesario presentar algunos cuestionamientos adicionales. El primero de ellos era muy elemental y se preguntaba si Gómez Serrano había asumido críticamente la presunta honradez del gobernante porfiriano. Una lectura del texto de origen muestra evidencias

que confirman, al menos en parte, una trayectoria honrada y eficaz de Arellano, pero revela también una clara simpatía por el personaje manifestada por la reiteración sistemática que el historiador local hace sobre la calidad moral de Arellano.[1] Aun confirmados la honradez y el aprecio citados, no habría materia suficiente para justificar la relevancia de más investigaciones sobre el tema.[2] Parte del cuestionamiento empezaría por dejar en claro que este mismo personaje fue cuestionado tanto en su probidad como en su efectividad como gobernante por algunos periodistas contemporáneos.

El tema de la honradez parece más estimulante si ésta tuviera una relación directa con la eficacia política, o con la legitimidad del Estado y de las clases dominantes. En el Porfiriato como ahora, al menos en el discurso, solía aparecer esta virtud como un elemento que vestía a la segunda y, muy especialmente, como una estrategia para tener más votos. Para revalorar esta tesis acéptese por un momento que Arellano fue efectivamente un gobernante honrado y, entonces, cabría preguntarse si esa honradez pudo ser una razón suficiente para explicar su llegada en dos ocasiones a la gubernatura del estado. En otras palabras, vale preguntarse si la honradez de Arellano, vinculada con otras habilidades, tuvo un papel determinante en el éxito político o si, por el contrario, tal actitud fue solamente un complemento de las decisiones e intereses de la clase política dominante. Lo segundo parece lógicamente más consistente que lo primero, sin embargo es necesario probar esa postura, y adicionalmente, ubicar el lugar y el peso específico de la honradez.

La honradez ha sido definida de muchas formas. En este documento se concibe el término en un sentido muy general, y se refiere a la idea de que esta conducta se refiere al uso de una función pública para obtener beneficios particulares, generalmente transgrediendo las leyes.[3] Por la naturaleza

1 (Rafael Arellano). Estas son algunas de las frases que integran el texto redactado por Gómez Serrano: "Hombre de pocas pero firmes ideas" (p. 401). "Un gobernante popular que tenía fama de hombre recto" (p. 416). Estaba "marcado por el dedo de la opinión sensata" (p. 415). "Tenía un prestigio espontáneo" (p. 431). Y "era percibido como un hombre eficaz que no se veía tentado por el revanchismo. Todos estos factores se multiplicaron con el poder económico, don de gente" (p. 433), "conducta intachable, eficacia y hombre que se distinguió por su autonomía" (p. 430), "y sin revanchismos" (p. 432). Todas las citas se encuentran en Gómez Serrano, 1988.

2 La corrupción como tema de investigación es muy reciente. En México destaca la publicación coordinada por Claudio Lomnitz, un texto en el que se aborda temporalidades diversas que incluyen desde el mundo colonial hasta el siglo xx (Lomnitz 2000).

3 Lomnitz 2000: 12. Fernando Escalante utiliza una expresión parecida (Escalante 2000). Él se concentra en una idea de la corrupción política entendida como el uso de

del tema que aquí se aborda, hay un énfasis en la corrupción en el sentido en el que Heidenheimer llama un "dominio político", es decir, la corrupción como la subversión del interés público por intereses particulares.[4] Junto a esta idea sobre la corrupción hay una aceptación categórica de que la percepción de este concepto es histórica y que tiene fuertes implicaciones culturales, que en ella se articulan ámbitos de lo individual y lo colectivo e inclusive un discurso específico.

La honradez como factor de éxito político sería una variable secundaria, casi anecdótica, si no existiera el apoyo de un grupo importante de la clase política. Darle prioridad a las virtudes personales terminaría en una anécdota curiosa; enfocarse en lo segundo caería en un lugar común que en el mejor de los casos podría ser útil para explicar la relevancia de un actor político en vísperas de elecciones. Esto ya es importante por sí mismo pero hacía falta algo más para continuar por una ruta de mayor interés, algo que fuera más que los detalles de una actitud virtuosa. En este punto fue cuando se encontró que, más allá de las coyunturas electorales, era necesario observar si durante el Porfiriato la imagen de honradez, verdadera o falsa, se pudo convertir en un activo de orden y equilibrio político y social que se sumó a la paz porfiriana, junto con otros factores de orden como los tradicionalmente difundidos desde el control y la represión.

Es muy frecuente encontrar historiografía, sobre todo vinculada con la historia oficial, explicaciones sobre la paz porfiriana como resultado del control político que había en esa época, una etapa pacífica impulsada por un sistema personalista y clientelar apoyado en patrones autoritarios, dictatoriales y de una frecuente alianza del Ejecutivo con élites locales subordinadas al presidente de la república en turno.[5] Este perfil dictatorial fue impulsado por la Historia Moderna de Daniel Cosío Villegas y por varios de los historiadores mexicanos de la segunda mitad del siglo xx, como En-

---

los recursos y atribuciones de los puestos públicos para proteger o favorecer intereses particulares, mediante decisiones políticas. Ver "Piedra de escándalo. Apuntes sobre el significado político de la corrupción", en: Lomnitz 2000: 275-291.

4 Citado por Lomnitz (2000: 11). Heidenheimer sostiene que las ideas de corrupción se refieren a tres dominios, a saber: el jurídico, el de mercado y el político. La cita completa de este autor es la siguiente: Heidenheimer, Arnold/Johnston, Michael/Levine, Victor (eds.) (1989): *Political corruption: a handbook*. New Brunswick: Transaction Publishers.

5 Esta postura que relaciona autoritarismo con corrupción no es del todo clara. Es posible encontrar casos de gobernantes autoritarios que son honrados y de actitudes clientelares que no necesariamente son impuestas, es decir que pueden construirse con base en acuerdos de mutua conveniencia.

rique Krauze,[6] Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer. Todos ellos mantienen, cada quién con su estilo, una mirada semejante aunque juiciosa.[7]

De esta breve introducción se desprende una pregunta central: ¿Fue la paz porfiriana resultado exclusivamente de una fórmula represiva y de control, o hubo otras medidas pacíficas que ayudaron a legitimar, o a equilibrar, así sea por coyunturas breves, el sistema político imperante? Más concretamente se impone cuestionar si ¿tener un líder político con imagen de honrado y trabajador eficaz ayudaba a que la estabilidad social y la legalidad política fuera menos forzada? Más aun, importa saber si esas virtudes existieron y funcionaron como bandera de campaña solamente en el transcurso de los procesos electorales, o si también fueron una plataforma de legitimidad durante el ejercicio gubernamental. Aquí quedaba un asunto que sugería ensayar respuestas dirigidas sobre el tema.

La honradez, y algunos temas afines como la honestidad, no han sido atendidos de forma particular y frecuente como activos políticos. Tal vez esto se deba a que la relación entre política y valores no son coincidentes, salvo en algunos discursos. Al contrario, baste con recordar que Maquiavelo rechazó cuanto fuera idealismo y teoría, y aplicó el sentido práctico para sostener que la política nada tenía que ver con la moral, la ética o la religión. De hecho creía que los que mentían o no cumplían sus promesas habían sido los más eficientes.

> Nadie deja de comprender cuán digno de alabanza es el príncipe que cumple la palabra dada, que obra con rectitud y no con doblez; pero la experiencia nos demuestra, por lo que sucede en nuestros tiempos, que son precisamente los príncipes que han hecho menos caso de la fe jurada, envuelto a los demás con su astucia y reído de los que han confiado en su lealtad, los únicos que han realizado grandes empresas. (Maquiavelo 1993: 129)

Los intérpretes contemporáneos sobre la credibilidad de la política también han abordado este mismo asunto. Mearsheimer, el propio Heidenhei-

6 En *Biografía del Poder* Enrique Krauze califica a Porfirio Díaz como místico de la autoridad (Krauze 1991).

7 El adjetivo dictatorial también fue registrado por investigadores como Alan Knight, Friederich Katz y el mismo François-Xavier Guerra. Will Fowler confirma esta óptica historiográfica sobre Porfirio Díaz en *Gobernantes mexicanos. Volumen I: 1821-1910* (2008) y *Gobernantes mexicanos. Volumen II: 1911-2000* (2008), Fondo de Cultura Económica. En esta obra hay un texto notable sobre el tema de Paul Garner denominado "Porfirio Díaz", el mismo biógrafo que en uno de sus libros lo califica directamente como dictador. (Ver Garner 2003).

mer. En México Guillermo de la Peña y Fernando Escalante han atendido este asunto con estudios empíricos y reflexiones organizadas.

La vida política del siglo XIX mexicano y muy especialmente la dinámica gubernamental siempre vivieron bajo la sombra de la corrupción, una conducta que más allá de los problemas éticos permitía cierta eficacia administrativa y la reproducción de privilegios de la élite en un contexto de fragilidad del Estado. Fernando Escalante describe y explica este contexto y las razones de la corrupción y "la trama cotidiana de la corrupción" con palabras muy directas.

> En este panorama la corrupción es una forma de influencia informal de los grupos con dominio económico: es necesaria por la inseguridad del mercado, pero contribuye a perpetuarla, al tiempo que destruye la legitimidad y la confianza pública en la gestión del Estado. (Escalante Gonzalbo 1995: 224)

El mismo Escalante considera que en el siglo XIX mexicano la corrupción se ejercía por sistema y en tal sentido "pocos fueron los políticos que mantuvieron sin tacha su reputación después de pasar por algún puesto público (Escalante Gonzalbo 1995: 252).[8] Por qué fue posible entonces la existencia de un político honrado? Una primera respuesta cuestionaría la honradez plena. De hecho el político en cuestión se benefició parcialmente de su condición al frente del Ejecutivo, pero lo hizo de forma discreta o indirecta. Pese a todo logró imponer su imagen virtuosa porque efectivamente se desprendió públicamente de su salario para donarlo a instituciones de beneficencia. Por eso sobrevive, porque la imagen de honradez fue públicamente alimentada. Esta postura fue creíble, claro está, porque pertenecía a una familia de la elite política y económica de Aguascalientes, un hacendado que, antes de incursionar en las lides del poder, había ganado fama de prosperidad gracias a su trabajo empresarial.

8 Escalante Gonzalbo solo es uno de los escritores que se plantean preguntas sobre las raíces de la credibilidad de los políticos. Un autor contemporáneo sobre el tema que puede ayudar a vislumbrar con mayor amplitud este debate es Mearsheimer, John J. (2011): *Why Leaders Lie: The Truth about Lying in International Politics*. New York: Oxford University Press.

El honrado y su contexto

Rafael Arellano Ruiz Esparza nació en 1844 y murió en la ciudad de México en 1919. Fue un agricultor exitoso con algunos estudios de Derecho. En 1873 fue diputado suplente y luego diputado propietario en cuatro ocasiones (1875, 1877, 1879 y 1913). Varias veces estuvo a cargo del Ejecutivo sin embargo los dos periodos más importantes de su trayectoria política ocurrieron cuando fue gobernador constitucional entre 1881 y 1883 y entre 1895 y 1899.[9]

Tenía 29 años cuando empezó a militar en la política. Fue gobernador por vez primera a los 37 años (1869) y nuevamente titular del Ejecutivo en 1895, a los 51 años. Arellano formo parte de un grupo que administró los gobiernos de la revolución liberal, una generación de políticos que no vivió la guerra de Reforma ni la guerra contra los franceses (Gómez Serrano 1988: 373).[10] En esa misma camada de políticos se encontraban los también gobernadores de la misma época Francisco Gómez Hornedo, Miguel Guinchard, Carlos Sagredo y Alejandro Vázquez del Mercado. En especial tuvo una estrecha relación con Ignacio T. Chávez. Estos gobernantes pertenecieron a una élite política que se relevaron en el Poder Ejecutivo de manera ininterrumpida entre 1877 y 1910. Ellos eran hacendados y profesionistas liberales de las familias más adineradas del estado.[11]

La honradez de Arellano sobresalió en un contexto precedido por una pugna social y política entre los bandos liberales y conservador que terminó resuelta a favor de los primeros. Los liberales triunfantes no eran un grupo homogéneo. Los separaba una división entre los moderados y radicales del bando que simpatizaban con esa ideología. Otra diferencia notable se reveló en el momento de apoyar a diferentes candidatos a la presidencia de la república. En tales circunstancias el triunfo o la derrota de un candidato presidencial favorecía o perjudicaba el peso y la relevancia de una fracción de la clase política local.

9 Ya en el final de su carrera, sin el Porfiriato de fondo, se convirtió nuevamente en candidato por el Partido Independiente en 1911 sin ganar la contienda y, probablemente todavía con la fama de eficacia y honradez, fue gobernador interino entre 1913 y 1914.

10 Jesús Gómez define a esta generación como una elite que tenía vínculos de sangre, de negocios y amistad, apenas divididos como radicales y puros.

11 Esta idea generacional de los gobernantes es documentada por Carlos Bravo Regidor en: "Elecciones de gobernadores durante el Porfiriato", en: Aguilar Rivera 2010: 270.

La presunta virtud cívica de Arellano se evidenció muy especialmente en el marco del periodo porfiriano y fue precedida por un ambiente social de poca participación ciudadana que se encontraba impactada por una guerra civil, por invasiones de ejércitos extranjeros, una gran cantidad de caudillos regionales, políticos corruptos e ineficaces que tenían como denominador común a defensa de sus privilegios.

La honradez y la eficacia de este hacendado que se convertía ocasionalmente en político se dieron en el contexto de una prensa crítica que en época de campañas electorales tomaban claramente partido por alguno de los candidatos. La imagen ganada por el gobernante en cuestión surgió también en un ambiente en el que predominaban varios liderazgos políticos que iban más allá de los periodos gubernamentales, líderes poderosos que ganaban elecciones para ellos o para sus aliados por una mayoría apabullante. Una lógica de la que Arellano escapó parcialmente.

Arellano fue visto como un hombre honrado porque solía renunciar al sueldo como gobernante y esa decisión fue creíble porque era un hombre de empresa que ya había logrado acumular fortuna antes de su actividad política. Este perfil cobró notoriedad porque contrastaba con la clase política que había ganado fama de fraudulenta por hacer de las elecciones un negocio, y de los empleos públicos una profesión vitalicia. Según Gómez Serrano, también se volvió un político notable porque tuvo una capacidad administrativa que le permitió sanear las finanzas, además de una sistemática preocupación por la instrucción pública.

Esta popularidad de hombre honrado y eficaz la ganó desde sus primeros años y se confirmó plenamente a partir del triunfo electoral de 1881, cuando ganó la gubernatura desde la oposición, es decir desde una postura independiente alejada de quienes habían sido sus aliados en la clase gobernante local, una clase que coyunturalmente no contaba con el apoyo incondicional del presidente de la república de esa época Manuel González, antes de que Porfirio Díaz se afianzara en el poder. Algunos detalles conocidos de la elección de 1881 y de la ocurrida en 1895 ponen en evidencia las fortalezas de Arrellano y también algunas de los grupos que se opusieron a su ascenso como dirigente político de primer orden.

Elección de 1881

En 1881 Arellano fue invitado para ser candidato a la gubernatura teniendo como antecedente su intervención como diputado local. Tal invitación fue hecha en un momento en el que los gobiernos precedentes comandados por el Partido Liberal no habían hecho un buen trabajo. Fue también un momento en el que la elite gobernante estaba dividida generando con ello que cada proceso electoral se convirtiera en un escenario en el que solían aflorar divisiones e intereses de los grupos políticos en pugna.

En el proceso electoral de ese año el candidato más fuerte del grupo en el poder, y a la postre el ganador, fue Miguel Guinchard, quien ganaría la contienda con el 82 % de los votos. Logrado el triunfo se enfrentó a un reto más difícil que consistía mejorar la recaudación y aumentar el gasto público. A unos días de tener el mandato en sus manos Guinchard no pudo gobernar por problemas de salud, un asunto que lo obligaría a renunciar al cargo y que abrió la posibilidad, por disposición de la ley electoral, para realizar un nuevo proceso electoral.

El cambio de gobernador modificó los cuadros del primer nivel del gobierno. Guinchard renunció y en su lugar quedó como suplente el Jefe Político del Partido de la capital: Librado Gallegos, un hombre que sería importante en el relevo del proceso electoral que se llevaría a cabo en mayo 1881. Gallegos correspondió a las presiones de sus aliados para favorecer la candidatura de Ignacio N. Marín, candidato apoyado por el partido en el poder, un hombre que tenía fama de ser "honrado y medianamente popular". Promover la imagen de los políticos como hombres honrados era un lugar común, aunque pocos de ellos lograban convencer con esta postura.

La nueva convocatoria electoral no estaba considerada en los planes de Arellano. Tenía varios años dedicado a los negocios más que a la política. Esto quiere decir que, al menos para el corto plazo, no tenía contemplado competir por la titularidad del Ejecutivo y menos desde fuera del grupo hegemónico de ese momento. Si no tenía esos planes es de suponer que tampoco había integrado un grupo político de apoyo a su candidatura. Arellano tenía aliados por su condición de empresario agrícola, pero no formaba parte del primer círculo de la élite política por lo que se veía difícil que accediera a la gubernatura. Marín en cambio, era apoyado por el sena-

dor Ignacio T. Chávez y por el ex tuxtepecano Francisco Gómez Hornedo, dos de los hombres fuertes de esa coyuntura política.[12]

No había condiciones para competir pero las razones para cambiar de opinión se presentaron con mucha rapidez. Lo primero fue la invitación para que figurara como candidato del *Círculo electoral Independiente*, una organización opositora al gobierno en funciones, dirigida por J. Refugio Camarena, que tenía como bandera la lucha contra la clase política en poder al que consideraba encabezado "por sujetos impopulares y faltos de escrúpulos". El *Círculo* buscaba un candidato fuerte para oponerse a la candidatura de Marín y compañía, aprovechando que había una corriente popular de rechazo al grupo en el poder, un grupo de personas inconformes que deseaba salir de la indiferencia electoral de los años recientes.

En ese momento se activaron las diferencias de la clase política local principalmente por los enfrentamientos que hubo meses atrás entre quienes gobernaban el municipio de Aguascalientes y la Jefatura política aliada con el gobernador en turno. Una de las razones de esa división fue que en las elecciones federales previas el Jefe Político de Aguascalientes se había postulado como candidato a diputado federal, sin haber renunciado debidamente a la Jefatura. A esta realidad se debe agregar que los regidores del ayuntamiento se habían enemistado con el gobernador en funciones por un problema de impuestos (Delgado Aguilar 2000: 128).

En ese contexto el *Círculo Independiente* ofreció la candidatura a Rafael Arellano y éste de inicio no aceptó la propuesta. El historiador Gómez Serrano, como ya se ha dicho, estudió ese momento político y consideró que tal negativa era un indicador de que a Arellano "no lo dominaba la ambición por el poder".[13] Concediendo que Arellano carecía de ambiciones, también es cierto que muy probablemente hizo un cálculo sobre las probabilidades que tenía para ganar. El análisis era necesario, después de todo se enfrentaba nada menos que al candidato del Partido Liberal, el mismo que tenía el control del gobierno. Pese a todo la dirigencia del *Círculo* insistió y Arellano terminó por aceptar la candidatura. Arellano ya tenía el apoyo

12 En ese momento había dos grupos en pugna; del lado de quienes ocupaban el poder estaban Hornedo y el gobernador interino Librado Gallegos, del otro lado estaban antiguos partidarios de Ignacio T. Chávez y Rodrigo Rincón como Pablo de la Rosa, Patricio de la Vega, Diego Ortigosa y José Refugio Camarena. Ver Delgado Aguilar, 2000: 132.

13 Cita a la prensa de la época que lo veía como un hombre "marcado desde hace tiempo por el dedo de la opinión sensata de Aguascalientes".

de una organización política y, a su vez, el *Círculo Independiente* contaba ahora con un candidato competitivo que sumaba entre otras virtudes la fama de hombre recto.

Arellano ganó la elección. Lo hizo apoyado en su imagen de honradez pero también, como ya se dijo, contaron las divisiones internas del grupo en el poder, principalmente entre el presidente municipal de Aguascalientes y una mayoría de regidores y el gobernador interino Librado Gallegos. Hubo otras dos razones: una, que el ejército se comportó de forma neutral y, otra, que finalmente el gobernador interino, que en un principio había apoyado al candidato oficial, decidió finalmente no tomar partido. Arellano ganó entonces por sus virtudes personales, por la fama de rectitud, pero también porque el grupo en el poder vivía un momento de fragilidad en sus fortalezas tradicionales.[14]

Varios de los estudiosos de este periodo reconocen que en Aguascalientes había una crisis económica notable, un descontento entre los grupos opositores al gobierno en turno, y las frecuentes arbitrariedades de los gobernantes recientes. Sin embargo fueron más importantes asuntos de otra índole. Todo esto abrió la posibilidad de un cambio político importante. De hecho algunos analistas del periodo vieron este momento como una revolución sin sangre.[15] Francisco Javier Delgado Aguilar sostiene especialmente que:

> […] durante la elección por la gubernatura de 1881 las diferencias entre quienes detentaban el poder y la oposición y sobre todo el triunfo de Arellano, hubo al menos tres causas visibles, a saber: la existencia de un descontento popular ocasionado por una fuerte crisis económica, la insatisfacción de una fracción de la clase política relegada del gobierno por Hornedo y Guinchard, así como la actitud del gobierno federal, que al no intervenir en la disputa electoral, consintió el ascenso de Arellano con el objetivo, tal vez, de debilitar la posición de un grupo político (el de Hornedo) cuya fidelidad no era muy sólida, equilibrando así la lucha de facciones al interior del estado. (Delgado Aguilar 2000:13)

El triunfo de Arellano también debe leerse considerando que el presidente de México en funciones, Manuel González (1880 y 1884) no tenía la fuer-

14 Confrontar el periódico *La Comadre Bárbara*.

15 Sobre el tema se puede ver: *Apuntamientos de los sucesos ocurridos en esta capital en la elección de Gobernador Constitucional del estado*, Aguascalientes, Imprenta de Trinidad Pedroza, 188, citado por Rodríguez Varela 1988: 322-337.

za que después acumuló Porfirio Díaz en los estados y, cuando tuvo oportunidad, apoyó candidatos diferentes a los que algunas oligarquías locales se empeñaban en colocar por su cuenta. Al regresar Díaz a la presidencia de la república el crecimiento de la autoridad central crecería en detrimento de las locales, un escenario en el que surgirían los personajes que Daniel Cosío Villegas denominaría los porfiritos, una posición que en Aguascalientes años más tarde sería ocupada por Alejandro Vázquez del Mercado (Cosío Villegas 1985: 52).

La segunda candidatura

Arellano fue gobernador en 1881, al término de ese periodo se alejó de la política para dedicarse a la agricultura, actividad que desarrollaba en la zona rural al norte del estado. Reapareció con nueva candidatura en 1895. En esa ocasión su oponente fue otro hacendado y político, Antonio Morfín Vargas y los aliados de ese momento fueron el doctor Carlos M. López, los hacendados Felipe Nieto y José Rincón Gallardo, el comisionista Felipe Ruiz de Chávez y Carlos Sagredo.

Arellano había gobernado de 1881 a 1883 y después de ese periodo ocuparían su lugar Francisco G. Hornedo quien estuvo al frente del Ejecutivo para el periodo 1883-1887. En el siguiente lapso el titular fue Alejandro Vázquez del Mercado para los años 1887-1890. En ese año Hornedo estaba listo para el relevo pero no fue posible porque murió en 1891, dejando el paso libre para que Alejandro Vázquez del Mercado fuera reelecto por cuatro años más al frente del Ejecutivo. Luego de que este se mantuvo dos periodos seguidos en la gubernatura, en 1895 no había condiciones para una tercera reelección por el lógico desgaste de la reelección sucesiva y, algo más importante, por la deficiente política fiscal del gobernador que terminaba su segundo mandato.

Abierta la convocatoria electoral de 1895 Antonio Morfín Vargas se postuló como precandidato para recibir el apoyo del Partido Liberal. Antes de tener un adversario al frente inició su campaña aprovechando la fuerza económica que se tenía por ser dueño de una fábrica de tabaco y propietario de una hacienda agrícola.[16] Al igual que Arellano tenía la

16 Morfín Vargas era propietario de la hacienda de la Cantera, una empresa agrícola muy cercana a la ciudad capital del estado. Fue un hombre identificado como católico y

imagen de hombre honrado. *El Eco de Aguascalientes*, un medio impreso que se oponía a la continuidad de la élite gobernante en turno intensificó sus críticas al gobierno saliente para desgastar la probable candidatura de Morfín. *El Eco* también magnificó los malos antecedentes de Vázquez del Mercado,[17]en especial lo acusaba de haber apoyado la creación del Instituto de Ciencias, un organismo para el que el gobierno presuntamente no estaba financieramente preparado.[18] En contraste con la postura de *El Eco*, *El Radical* acusó a Morfín de "impopular y conservador" (Gómez Serrano 1988: 429).

Luego de estas manifestaciones públicas el Partido Liberal finalmente optó por la candidatura de Rafael Arellano. Así la cosa se convirtió en aliado coyuntural de Vázquez del Mercado aunque con la relativa independencia que le permitían la trayectoria política previa y la fuerza económica que lo distinguía años atrás. Con esta decisión Vázquez del Mercado desechó lo que sería su tercera candidatura consecutiva pero, a cambio de la declinación, recuperó algo de su popularidad al no objetar la candidatura de Arellano.

Cuando Arellano postuló su candidatura las dudas terminaron. Morfín Vargas retiró su candidatura porque sabía que no tendría posibilidades de competir y que el primero repitiera en el Poder Ejecutivo prácticamente sin hacer campaña. El 11 de agosto de 1895, una semana después de las votaciones las cifras se dieron a conocer y fueron categóricas: Arellano recibió 14.551 votos equivalentes al 99,6 % del total de los sufragios. Ese dominio tan definitivo llevó a *El Republicano* a publicar un titular que decía "No hubo combate", y remataba confirmando la contundencia del triunfo, que "el candidato arrastra con su prestigio esa voluntad que no es falsa porque es espontánea".[19]

---

promotor en la construcción de templos. Además de hacendado, fue propietario de una fábrica de tabacos en Aguascalientes y otras ciudades del país. Con esta faceta empresarial logró que sus productos obtuvieran premios en la exposición internacional de Paris en 1899. Esta trayectoria se combinó con una carrera política en la que ocupó un lugar en el Congreso local y, más adelante, tendría un lugar de representación en el Congreso de la Unión. Estos datos fueron consultados en la Tesis doctoral inédita de José Antonio Saldívar Cervantes (2015): *Historia de la Orden religiosa de San Agustín en Aguascalientes. Alcances históricos, institucionales y educativos*. Universidad Autónoma de Aguascalientes.

17 *El Eco*, 12.5.1895, citado por Gómez Serrano 1988: 428.

18 Gómez Serrano 1988: 429.

19 Las notas de prensa son de *El Fandango*, 18.8.1895 y *El Republicano*, 25.8.1895, citados por Gómez Serrano 1988: 431.

La reactivación de Arellano como gobernante ocurrió después de una mala administración de quien le había precedido en el cargo. En esta nueva oportunidad repitió su estilo de administrar, es decir, impulsó algunas mejoras materiales, generó una buena política hacendaria y apoyó la instrucción pública pero, además, un dato nuevo, coordinó la instalación de los talleres de reparación de la empresa ferrocarrilera instalada en la ciudad capital.

De Arellano se esperaba, en suma, el saneamiento de finanzas públicas, recorte de presupuesto de gasto gubernamental y un mayor apoyo a inversionistas. De hecho ya en la gubernatura envió una propuesta al Congreso para reducir 25 % de gastos gubernamentales. Además de eso renegoció deuda pública y acumuló simpatías al colocar a sus amigos en el Congreso y, prueba de su cordialidad política, evito revanchismos. La prueba es que al final del periodo gubernamental permitió que Morfín Vargas, su adversario por la gubernatura, fuera candidato a diputado local por el Partido Liberal.[20]

Arellano cerró con las dos gubernaturas un ciclo político en el que se repitió la imagen de honradez, una imagen que convenía a los políticos que aspiraban a gobernar. Con esa misma bandera luego ocuparían la titularidad del Ejecutivo Ignacio N. Marín y Rodrigo Rincón, de hecho el segundo ya como gobernador renunció a su sueldo para destinarlo a mejoras materiales (Gómez Serrano 1988: 395). La misma tónica fue repetida por Antonio Morfín Vargas quien fue visto como "hombre honrado y aplicado empresario" (Gómez Serrano 1988: 428).

Honradez y ejercicio gubernamental

¿Qué pasó una vez que Arellano obtuvo la gubernatura? En especial ¿qué hizo en el gobierno con la fama de honrado que lo había llevado primero a la candidatura y después a la titularidad del Ejecutivo? ¿Cómo gobernó y qué nexos había entre sus decisiones y la recta actitud que lo distinguía? Los datos encontrados ofrecen un panorama en el que hay avances en la eficacia administrativa y pequeños detalles de la moralidad que lo distinguía como persona. Las fuentes para hurgar sobre el tema serán las memo-

20 *El Correo del Centro*, 12.4.1896, citado por Gómez Serrano 1988: 432.

rias publicadas al final de cada periodo gubernamental, la prensa local y algunos documentos encontrados en archivos notariales.

En la *Memoria* del periodo 1881-1883 Arellano informó al Congreso de sus actividades al frente del Ejecutivo conforme lo ordenado por el artículo 88 de la Constitución Política Local. Advirtió en ese documento que gobernar no era fácil, y menos si el tiempo para hacerlo era reducido. Expuso resultados de la administración teniendo en mente no caer en auto elogios. "Más que un cuadro lisonjero fácil siempre de trazar, la sencilla exposición de hechos" (Ruiz Esparza 1883: 3).

En el documento se observa que el gasto público tuvo una jerarquía de primer orden porque, a su juicio, era necesaria para la conservación del orden social. Lo mismo opinaba de la Instrucción y las mejoras materiales porque sabía que eran vitales para que Aguascalientes saboreara los frutos de la paz social. En el primer apartado del documento dejó en claro que había recibido el gobierno con escasos recursos y con un tiempo limitado en el ejercicio gubernamental. No olvidar que en su primera experiencia como gobernador solo estuvo dos años y medio de los cuatro que duraba el periodo para completar el cuatrienio iniciado por Miguel Guinchard. En el mismo punto de generalidades Arellano habló sobre la importancia de proteger el comercio, la industria y agricultura a los que veía como elementos principales de riqueza en el estado (Ruiz Esparza 1883: 3).

Dividió el documento entregado a la Legislatura de ese momento en cuatro secciones: gobernación, justicia, hacienda y fomento. En el apartado de Gobernación reiteró el lugar que ocupaban los Jefes Políticos a quienes se había elegido conforme a la ley, previa integración de ternas. Sabía que era un tema delicado porque había sido uno de los soportes de su triunfo electoral en 1881. Una vez atendido este dilema, tomó nota de las acciones positivas en materia de financiamiento.

Para Arellano la tesorería general había distribuido los fondos en el ámbito estatal y sostuvo que para ordenar ese rubro había sido necesario quitar algunos empleados por motivos relacionados con "el decoro y buen nombre del gobierno". Declaró que los negocios marchaban al día y asoció esa prosperidad con los datos poblacionales que tenía a la mano según los cuales había poco más de 85.837 personas con datos de 1856, y con 140.430 con los de 1881. Atribuyó el incremento a la llegada de inmigrantes para efectuar los trabajos del Ferrocarril Central Mexicano (Ruiz Esparza 1883: 4-5).

Al hablar de seguridad pública enfatizó la importancia de reorganizar una buena policía advirtiendo que en el periodo que terminaba no hubo casos relevantes contra la seguridad de las personas, ni de sus bienes materiales. Según la *Memoria* en ese año no hubo robos de importancia, y cuando habló del abigeato recordó la importancia de la educación como barrera de ese tipo de conductas. Para Arellano la falta de instrucción era un factor de inmoralidad (Ruiz Esparza 1883: 6).

En el rubro de Beneficencia sostuvo que dejaba en marcha dos establecimientos para esta tarea: uno público y otro privado, este segundo dirigido por la señora Casimira Arteaga. Remató el apartado demandando la necesidad de construir un orfanato para niños. En un tema cercano, el de Higiene y salubridad, simplemente manifestó que en el estado no habían existido consecuencias graves procedentes de las epidemias que azotaban la región (Ruiz Esparza 1883: 9).

Al atender el punto sobre el Registro Civil dijo que había en el estado once oficinas para atender dicho registro debidamente pagadas. Habló de la necesidad de construir dos panteones, y reconoció que los ayuntamientos necesitaban más recursos y atribuciones ya que sus funciones como orden de gobierno sólo podrían cumplirse "hasta que (tales poderes) disfruten de mayores franquicias en lo relativo a su régimen interior, y tengan un modo de ser tan independiente como sea compatible con el sistema de gobierno que nos rige" (Ruiz Esparza 1883: 11).

Arellano tenía conocimiento de lo que ocurría en cada municipio del estado. La prueba de ello es que notificó al Congreso que sólo Rincón de Romos y Calvillo reportaban cuentas irregulares, y que el municipio de la capital y Jesús María habían tenido sobrantes presupuestales.

El tema de la Instrucción pública fue muy importante en el reporte con formato de Memoria. Para Arellano esta actividad:

> […] era fuente de donde dimana la prosperidad y engrandecimiento de los pueblos […] para que los niños reciban el germen precioso de la buena instrucción que tanto enaltece al hombre y tan poderosamente contribuye al perfeccionamiento social. (Ruiz Esparza 1883: 12)

El gobernador terminó su administración manifestando que había procurado impulsar la enseñanza con cuantos medios estuvieron a su alcance. Reconocía que estaba lejos del promedio deseable para contar con una escuela por cada mil habitantes y, pese a todo, incrementó en un 50 % el presupuesto asignado a los servicios, por encima de lo que habían otorgado

las dos administraciones anteriores. Esa era una tarea que necesitaba alguien de su confianza, por ello es que Carlos M. López, un aliado desde la campaña electoral, presidió la junta de instrucción, organismo por el que gobernador había pedido un incremento presupuestal.

Otra actividad de la instrucción pública fue la creación de una escuela en la cárcel de varones. También instaló una biblioteca pública con 1,025 volúmenes empastados, gracias al apoyo de don Miguel Rul, un hacendado importante del estado que realizó compras de ese material procedentes de Europa. Según Carlos M. López "para Arellano cada nueva escuela, cada cátedra, cada alumno constituye una lisonjera esperanza para el porvenir". Finalmente Arellano reportó que el liceo de señoritas tenía 47 estudiantes, dirigidas por Doña Antonia López de Chávez, un plantel apoyado por Francisco G. Hornedo por la cooperación de los vecinos y de los profesores impartían sus clases sin cobraban sueldo alguno por su trabajo (Ruiz Esparza 1883: 17).

En el ámbito de la Justicia presentó a los encargados de aplicar las leyes como "personas ilustradas y de reconocida justificación y honradez". Reportó que había desorganización en esa oficina, así como mala formación de muchos expedientes en los juagados menores. No había duda que creía que la oficina de Justicia necesitaba trabajar adecuadamente para alentar la paz y armonía de los hogares (Ruiz Esparza 1883: 17).

En el ramo de Hacienda señaló que en esa actividad existía un "rezago en las contribuciones de difícil cobro", créditos no reconocidos y una importante deuda pública. Por lo anterior consideró muy necesario iniciar una reforma administrativa para cubrir el gasto corriente con puntualidad y "abonar a la deuda antigua". En el fondo buscó nivelar el ingreso con el egreso. Creía que el espíritu de orden era, por tanto, la primera necesidad de su administración (Ruiz Esparza 1883: 21-23). Relacionado con esto consideró que la guerra civil había dejado una estela de pobreza y que "los pueblos [estaban] cansados de ser juguete de las revoluciones" y que ahora necesitaban los beneficios de la paz. En el mismo ramo del fomento informó sobre la construcción de un teatro, varias carreteras, un panteón en Calvillo y otro en Jesús María y la construcción de una vía férrea urbana (Ruiz Esparza 1883: 26-27).

En esa primera Memoria administrativa mostraba que el ejercicio del poder era complicado sobre todo cuando se heredaban importantes dificultades. Sentía que había conducido al estado por la senda del progreso y mejoramiento moral a que están llamadas las sociedades modernas. Arellano

cuidó la relación con quienes le antecedieron en el gobierno y siempre que se refería a ellos, especialmente a Guinchard e Ignacio T. Chávez, lo hacía con respeto.[21] Cualidades como esta daban pie a que Carlos M. López reconociera su calidad moral así como su abnegación y desprendimiento, esto último a propósito de las donaciones de dinero en efectivo que sistemáticamente hacía a la Junta de instrucción (Ruiz Esparza 1883: 32).

En la Memoria correspondiente al periodo 1895-1899 la presentación de resultados no cambió mucho. Arellano dio cuenta a la legislatura sobre los pormenores de la administración advirtiendo, lo mismo que en la Memoria anterior, que la vida de cada pueblo se transforma lentamente y que cuatro años era poco tiempo para terminar proyectos gubernamentales. A su juicio "Un periodo de cuatro años, casi nunca alcanza a recoger los frutos de la cimiente depositada para su germinación en el campo administrativo" (Ruiz Esparza 1889: II).

En la primera parte de la Memoria pidió encaminar los esfuerzos hacia el fin de la verdadera democracia a la que equiparaba con el bien común. Al igual que en la primera Memoria habló del crecimiento poblacional y reportó la existencia en el estado de 104.693 habitantes con 21.780 hogares, según el censo levantado en 1895. En esta ocasión mencionó como una actividad de primer orden la llegada de la empresa fundidora de *American Smelting and Refining Company* propiedad de la familia Guggenheim, y la instalación de los talleres generales de reparación del Ferrocarril Central Mexicano.

Al hablar del Registro Civil reconoció que todavía no era posible cumplir plenamente con esa tarea ya que el incremento en ese rubro había sido mínimo y esto se debía según el documento oficial a "la repugnancia y la ignorancia" que esa nueva actividad despertaba entre la población. Al referirse a la higiene y salud pública informó sobre la creación de la figura del inspector de bebidas y comestibles y los bajos reportes de viruela negra (Ruiz Esparza 1883: VII-VII).

En materia de seguridad pública se repitió el diagnóstico del Informe realizado en 1883 y acaso sobresalieron las primeras cifras significativas de robo en casas particulares, por encima del abigeato. Pese a todo Arellano reflexionó sobre la necesidad de atender con rigor y autoridad este problema porque de ello dependía alcanzar las metas de progreso.

21 No olvidar que T. Chávez fue uno de los principales prestamistas del gobierno.

> Sin respeto a las instituciones no hay progreso […] las industrias no se desarrollan, la agricultura no prospera, el comercio se paraliza, los capitales se retiran de los centros productivos y la sociedad en general se manifiesta retraída, ajena a todo movimiento de adelanto, esperando tan solo la vuelta de mejores tiempos. (Ruiz Esparza 1889: x)

En los datos de beneficencia tampoco hubo datos apreciables con excepción, tal vez, de que la Junta especial de Beneficencia estuvo integrada por sus amigos y aliados el Dr. Carlos M. López, Luis Aguilar, Carlos Sagredo, Reyes M. Durón, Antonio Morfín Vargas y el Lic. Eraclio Zepeda Garibay.

Al tocar el tema de Instrucción pública señaló sobre la promoción de una ley provisional de instrucción primaria. Solicitó al Congreso en esa oportunidad una mayor asignación presupuestal a la educación institucional y, a propósito de la educación para señoritas, esperaba que la sociedad les abriera las puertas "por sus buenas costumbres y fino trato, por su honradez y laboriosidad (Ruiz Esparza 1889: xx-xvii).

Cuando habló de los municipios dejó en claro que en ese momento todos ellos trabajaban con fondos sobrantes al menos hasta 1899, sin olvidar que en 1895 solo dos municipios tenían esa cualidad. Hizo un brevísimo recuento sobre los procesos electorales federales que se habían llevado en ese tramo de su gestión, sin advertir novedad alguna. Al parecer en ese momento la división de la élite ya tenía un nuevo arreglo vinculado con el Partido Liberal (Ruiz Esparza 1889: xx-xviii).

En las mejoras materiales simplemente destacó la erección de una estatua de bronce dedicada a Benito Juárez; en los temas de Hacienda habló sobre la disminución y el arreglo de la deuda pública y la necesidad que lo orilló a proponer un aumento al impuesto predial (Ruiz Esparza 1889: xxviii). En los datos de Fomento reportó la apertura de una fábrica de harinas de almidón propiedad de Juan Douglas y compañía, y dio un énfasis de capital importancia al contrato que el Gobierno celebró con la compañía del Ferrocarril Central Mexicano para instalar los talleres generales de construcción y reparación de máquinas (Ruiz Esparza 1889: xxviii-xxx).

Consideraciones finales

Hasta aquí se pueden hacer algunas consideraciones generales sobre el tema de origen. Lo primero que debe anotarse es que el tema de la honradez como un activo político no ha sido atendido de forma particular y

frecuente. Tal vez esto se deba a que la relación entre política y valores no suelen tener un vínculo estrecho, salvo en algunos discursos. Se sabe que era un valor aceptado y buscado por quienes aspiraban a puestos de representación popular en la segunda mitad de ese siglo. Según Richard Warren esto ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX en reacción a la fama que los procesos electorales de la primera mitad de ese mismo siglo habían adquirido por ser confusas, desordenadas y deshonestas.[22] Muy probablemente la percepción de esos años era cercana al texto constitucional que, según Israel Arroyo, solía pedir como requisitos de entrada para los candidatos registrados, es decir, "un modo honesto de vivir, renta anual y el fiscal".[23] Arellano mantuvo hasta el día de su muerte la imagen de honrado.

La trayectoria de Rafael Arellano Ruiz Esparza muestra varios matices que deben tomarse en cuenta para evaluar su desempeño moral. En primer término debe quedar en claro que su actividad política fue irregular, no fue permanente pero sí constante. Antes de ser gobernador del estado había sido diputado local en más de una ocasión. Entre una y otra gubernatura se alejó 12 años de la política y se dedicó a su trabajo como agricultor. Por otra parte hay evidencias documentales que muestran la entrega efectiva de su salario como gobernador a obras e instituciones de beneficencia, y también pruebas de que fue administrativamente eficaz.

No existe claridad sobre el alcance de su actitud honrada. La mayoría de las fuentes consultadas lo percibían como confiable y honesto y con una actitud paternal que habla de él mismo, pero también de una sociedad que se sentía cómoda con un orden patriarcal. Arellano formaba parte de una clase política que podía gobernar simplemente por el poder económico que tenía, y también por una imagen aristocrática de los hacendados, una imagen conectada con un estado moderno en construcción que, al menos en el discurso, demandaba racionalización de la autoridad, aceptación de un marco legal y lealtades ciudadanas, reglas que no siempre eran compatibles con el perfil señorial mencionado.[24] El poder político era una extensión del poder doméstico. En este sentido la virtud de Arellano era

22 Warren 2010: 27-54.

23 Ver Arroyo, Israel: "Los tránsitos de la representación política en México, 1821-1857". En: Aguilar Rivera 2010: 55-94.

24 Según Escalante Gonzalbo los hacendados se distinguían por tener un idea del orden político necesario, un orden hispanista, católico, autoritario y paternalista. (Escalante Gonzalbo 1995: 90). Según David Brading era en el fondo una contradicción interna del proyecto liberal en el que los hacendados querían un Estado limitado, pero necesitaban un Estado fuerte (citado por Escalante Gonzalbo 1995: 104).

individual pero su utilidad como hombre honrado era pública y ayudaba a gobernar en forma organizada. No era un instrumento moderno, era finalmente un hombre con valores no liberales que se pudo acomodar a la lógica liberal sin obedecerla del todo.

Por otra parte, la cuestión vital de este ensayo se encuentra en la funcionalidad que ha tenido la imagen de honradez en el marco de regímenes personalistas y autoritarios donde el control político necesitaba acompañarse de otras formas de legitimidad no violentas que ayudaran a equilibrar la aceptación de los gobiernos en turno. La forma de ejercer el poder requería de fuerza coercitiva, pero también de legitimidad procedente de actores sociales y políticos, individuales o colectivos, que suelen aparecer en todo gobierno y también de canales eficaces para desahogar inconformidades. La honradez creíble de un gobernante, cierta o falsa, pudo canalizar diferencias, motivar acuerdos, o al menos la tolerancia de los gobernados con los gobernantes.

Esta fórmula de equilibrio no fue eficaz en todos los momentos. Rafael Arellano vivió en una etapa histórica caracterizada por la estabilidad social, un periodo de paz con una clase política que alternaba momentos de conciliación junto a otros de conflicto y enfrentamiento. En el Porfiriato hubo paz, sí, y la hubo porque había un partido político hegemónico siempre vinculado con la figura presidencial. Así las cosas parecería que en estos ambientes no eran necesarias las virtudes personales. Lo cierto es que la tesis pacifista de ese periodo, aunada a la ideología liberal dominante no significó nunca homogeneidad de la clase política y menos aún ausencia de conflictos y enfrentamientos intraelitistas.[25]

En la combinación de periodos de paz con pequeñas diferencias internas entre miembros del ala liberal solían manifestarse por acusaciones de alejamiento de la ideología dominante o por faltar a reglas morales de aceptación general. Lo cierto es que el tema de la honradez adquirió en el periodo aquí tratado, un peso específico relevante por el contraste con los gobernantes ineficaces o corruptos que le precedieron a Arellano.

En ningún momento se le ha dado sobrepeso a la variable honradez. Queda muy en claro que Arellano ganó las dos elecciones a la gobernación por apoyos de personajes e instituciones fuertes, además de un contexto

25 Para Gómez Serrano el espíritu de paz fue una tesis difundida por los porfirianos que gobernaban al igual que las desavenencias y los enfrentamientos (Gómez Serrano 1988: 406).

nacional favorable. En ambos casos el perfil de honradez fue solo un elemento que estuvo en juego, pero de ningún modo la variable determinante para lograr los triunfos electorales.

A lo anterior habría que agregar que Arellano no fue el único político con perfil de honradez y eficacia. Además de él hubo otros personajes del mismo perfil aunque menos relevantes, como el mismo González Morfín quien fue presentado como un hombre honrado y como un aplicado empresario; en esa misma lista de honrados se encontraban Francisco G., Hornedo y Rincón Gallardo, solo por mencionar algunos de ellos. Arellano no era el único pero si el que más reconocimientos tuvo por ese atributo.

También parece quedar en claro que el estigma de la honradez jugó un papel importante y muy claro en las campañas electorales. Como ya se dijo, la honradez como estrategia de campaña fue engrandecida por el contraste con los gobernantes previos que habían sido impopulares. Se puede aceptar que tuvo la mejor fama de honradez que otros, pero debe tomarse que esta virtud hubiese sido menos relevante de haber existido previamente gobernantes menos polémico e impopulares.

La honradez como estrategia política siempre ha funcionado en mayor o menor medida. Lo que perdió visibilidad fue la honradez vinculada con el ejercicio gubernamental y como una estrategia para generar legitimidad. Ahora bien, el discurso y algunas actitudes de este tipo de conducta no significan ni efectividad ni una forma de proceder con originalidad. Con Arellano la honestidad se redujo a juicios y apreciaciones aisladas. De hecho el político porfiriano gobernó con una rutina administrativa muy semejante a la de otros, incluyendo a los menos honrados, aunque con menos polémica y un claro estigma de efectividad.

Tampoco debe olvidarse que el contexto de Arellano fue producto de una época en la que predominaba una política más personalista que institucional. En ese sentido los resultados electorales no eran importantes ya que los ganadores solían hacerlo con una mayoría abrumadora. Inclusive aquellos que no gozaban de buena fama.

La prensa de la época colaboró intensamente en la imagen de honradez de Arellano reiterando su perfil como un hombre recto. Faltaría en todo caso hacer un juicio más amplio sobre la prensa y los escritores de la época que concordaban con la fama tantas veces citada. Es probable que algunos de los propietarios hayan tenido un nexo de amistad o de interés que lógicamente representaban un apoyo permanente al gobernante en funciones. También debe quedar en claro que la percepción de honradez sobre

Arellano no fue absoluta. En algunos momentos la imagen positiva de este político fue cuestionada por el periódico *El Fandango* al evidenciarlo como socio en los negocios de un prestamista del gobierno. En el mismo sentido Irineo Paz mencionó el desempeño del gobernante cuando éste se encargaba del segundo periodo como titular del Poder Ejecutivo, al considerar que en su administración "reinaba el retroceso y la miseria".[26]

En suma, régimen porfiriano en el centro de México no fue el resultado de un orden político y social sin alteraciones. Fue, además de otras cosas, un periodo y un sistema político caracterizado por la paz social. Una paz construida sobre la base del control político. También es cierto que, al parecer, este ambiente pacífico tuvo otros resortes, uno de ellos la existencia de gobernantes populares que hacían olvidar, así sea momentáneamente, los deseos de movilizarse contra el sistema político imperante. Un gobernante popular fincado en la honradez y la eficacia se convirtieron en un factor de equilibrio político y paz social que ayudo a nivelar las diferencias entre sociedad y gobierno, e inclusive las que existían entre los triunfadores del bando liberal.

Para terminar, es muy importante referirse a las fuentes consultadas. En los documentos de segunda mano los textos de Jesús Gómez y de Francisco Javier Delgado la consulta sistemática resultaron imprescindibles. En las fuentes de primera mano se tuvo acceso a la prensa de la época y las memorias administrativas de Arellano. La búsqueda de información en el archivo de Porfirio Díaz fue inútil, especialmente en el rubro de correspondencia. Queda pendiente estudiar la información generada en el Poder Legislativo local y el fondo de la Secretaría de Gobierno. Igualmente queda pendiente también ampliar la bibliografía existente sobre temas parecidos o iguales. Lo cierto es que la honradez como tema político parece tener posibilidades de nuevas lecturas.

Bibliografía

Aguilar Rivera, José Antonio (ed.) (2010): *Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910*). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica/Instituto Federal Electoral.

26 Ver *El Republicano,* 8.11.1896 (consultado en el Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes) donde cita texto de Paz publicado en *Otra vez La Patria*, pp. 433.

Arellano Ruiz Esparza, Rafael (1899): *Memoria administrativa 1895-1899.* (Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes). Aguascalientes: Imprenta Ricardo Rodríguez Romo.

Arroyo, Israel (2010): "Los tránsitos de la representación política en México, 1821-1857". En: Aguilar Rivera, José Antonio (ed.) (2010): *Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910*). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica/Instituto Federal Electoral, pp. 55-94.

Bravo Regidor, Carlos (2010): "Elecciones de gobernadores durante el Porfiriato". En: Aguilar Rivera, José Antonio (ed.): *Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910*). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica/Instituto Federal Electoral, pp. 257-281.

Cosío Villegas, Daniel (1985): *Historia Moderna de México*: *El Porfiriato. Vida Política Interior. Segunda parte*. México, D.F.: Hermes.

Delgado Aguilar, Francisco Javier (2000): *Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en Aguascalientes 1867-1911*. Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Escalante Gonzalbo, Fernando (1995): *Ciudadanos Imaginarios*. México, D.F.: El Colegio de México.

— (2000): "Piedra de escándalo. Apuntes sobre el significado político de la corrupción". En: Lomnitz, Claudio (ed.): *Vicios públicos, virtudes privadas: la corrupción en México*. México, D.F.: CIESAS/Miguel Ángel Porrúa, pp. 11-32.

Fowler, Will (2008): *Gobernantes mexicanos*. *Volumen I*: 1821-1910 y *Gobernantes mexicanos. Volumen II*: 1911-2000. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Gantús, Fausta/Salmerón, Alicia (eds.) (2014): *Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo* XIX. México, D.F.: Instituto Mora/Conacyt/IFE.

Garner, Paul (2003): *Porfirio Díaz. De héroe a dictador. Una biografía política*. México, D.F.: Planeta Mexicana.

Gómez Serrano, Jesús (1988): *Aguascalientes en la Historia 1786-1920. Tomo 1. Vol. II. Un pueblo en busca de su identidad*. Aguascalientes: Instituto de Investigaciones José Ma. Luis Mora/Gobierno del Estado.

Heidenheimer, Arnold/Johnston, Michael/Levine, Victor (eds.) (1989): *Political Corruption: A Handbook*. New Brunswick: Transaction Publishers.

Krauze, Enrique (1991): *Biografía del Poder*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Lomnitz, Claudio (ed.) (2000): *Vicios públicos, virtudes privadas: La corrupción en México*. México, D.F.: CIESAS/Miguel Ángel Porrúa.

Maquiavelo, Nicolás (1993): *El Príncipe*. Barcelona: Atalaya.

Mearsheimer, John. J. (2011): *Why Leaders Lie: The Truth about Lying in International Politics*. New York: Oxford University Press.

Rodríguez Varela, Enrique (1988): "Documentos, Crónicas y Testimonios". En: Gómez Serrano, Jesús (ed.): *Aguascalientes en la historia. 1786-1920.* Tomo IV. Vol. II. México, D.F.: Instituto José María Luis Mora, pp. 322-337.

Ruiz Esparza, Rafael (1889): *Memoria administrativa 1881-1883.* (Archivo Historico del Estado de Aguascalientes). Aguascalientes: Imprenta Ricardo Rodríguez Romo.

Saldívar Cervantes, José Antonio (2015): *Historia de la Orden religiosa de San Agustín en Aguascalientes. Alcances históricos, institucionales y educativos*. Tesis inédita. Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Warren, Richard (2010): "Las elecciones decimonónicas en México, una revisión historiográfica". En: Aguilar Rivera, José Antonio (ed.): *Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910)*. México, D.F.: Instituto Federal Electoral/Fondo de Cultura Económica/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 27-54.

Fuentes consultadas

Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes:

- Fondo Documental. Secretaria General. Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes.
- Archivo del Poder Legislativo.

Poder político y corrupción en la Revolución Mexicana: el caso del general Álvaro Obregón[1]

Jürgen Buchenau

No hay general que pueda
resistir un cañonazo
de 50.000 pesos.

Álvaro Obregón

Es ya lugar común de la historia mexicana decir que la facción sonorense liderada por el general Álvaro Obregón Salido no sólo triunfó sobre sus adversarios en la Revolución Mexicana sino que también instaló una nueva burguesía nacional. En su ensayo de 1984 publicado en *Historia Mexicana,* "La burguesía revolucionaria en México: su origen y su papel, 1915-1935" el historiador Hans-Werner Tobler proclamó que "uno de los resultados más evidentes de las guerras civiles revolucionarias en México […] fue la formación […] de una nueva clase dirigente político-militar que, entre 1920 y 1935, […] también ascendían [sic] pronto a la clase de hacendados, de los banqueros, de los concesionarios y de los comerciantes e industriales" (Tobler 1984: 213). Con relación a Obregón, el personaje dominante de la vida militar y política mexicana desde 1915 hasta su asesinato en 1928, prosigue: "[su] carrera […] como hombre de empresa, posterior o paralela a su carrera político-militar, ilustra muy bien la actitud de la nueva élite revolucionaria en general, en especial, en cuanto al modo de cómo se cristalizó una nueva clase de hacendados y burguesía proveniente del círculo de ex dirigentes revolucionarios, lo que fue posible mediante el control del aparato estatal o, sencillamente, aprovechando su posición real de poder militar" (Tobler 1984: 222).

Es verdad que tal como la facción de Oaxaca (cuna de Porfirio Díaz y del famoso Benito Juárez) dominó la segunda mitad del siglo XIX, se pude decir que la década de los veinte y los treinta perteneció a los sonorenses. Mientras que en el Porfiriato sólo un sonorense formó parte de la élite gobernante (el vicepresidente Ramón Corral); para 1930, este estado, cuya

1 Texto traducido del inglés por Gabriela Villanueva Noriega.

población correspondía al 2 % del país, representaba aproximadamente 11.4 % de la élite política nacional (Smith 1979: 107). En el periodo que va entre 1920 y 1934 figuraron cuatro presidentes originarios de Sonora, entre ellos Adolfo de la Huerta; Álvaro Obregón; el general Plutarco Elías Calles, *jefe* máximo de la Revolución Mexicana; y el general Abelardo L. Rodríguez. Otros dos generales sonorenses, Francisco R. Serrano y Arnulfo Gómez, coquetearon con el poder, antes de ser vencidos (y ejecutados) por orden de Calles y Obregón, los poderosos patriarcas del grupo sonorense. Desde entonces, sólo otros dos sonorenses han estado cerca de ocupar este alto cargo nacional: Ernesto P. Uruchurtu, ex regente de la Ciudad de México, quien se contó entre los candidatos finalistas para la elección de 1958, y Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado antes de las elecciones de 1994.

Siendo la facción más importante de la política nacional posterior a la violenta década de 1910, los sonorenses contribuyeron decisivamente a la reconstrucción del país. Originarios de una región árida sometida a una modernización súbita, repudiaron el pasado nacional católico en pos de las sociedades modernas, seculares y letradas de Estados Unidos y Europa. El grupo sonorense también se configuró como el eje rector de una nueva alianza política y económica que acumuló gran riqueza al promover públicamente reformas sociales en beneficio de las mayorías empobrecidas. Contribuyeron a crear el mapa político del México moderno: un poderoso ejecutivo, una legislatura débil, y un partido revolucionario oficial que se aferró, mediante tres nombres distintos, a la presidencia desde 1929 hasta el año 2000. Pese a su visible importancia y dentro de un campo que ha favorecido el estudio de los movimientos populares por encima del de las élites triunfantes, los sonorenses no han sido objeto de estudios sistemáticos. Aunque los historiadores han confeccionado biografías de varios miembros de la alianza sonorense, el estudio a profundidad del grupo aún está por escribirse.[2]

Los historiadores interesados en los sonorenses deben enfrentarse a lo que uno podría llamar la "leyenda negra" del grupo, particularmente

2 Este trabajo es una parte de un estudio más amplio a ese fin. Sobre Obregón, ver Hall 1981, Castro 2009 y Buchenau 2011. Sobre Calles, ver Buchenau 2007. Sobre Adolfo de la Huerta, ver Castro 1992 y 1998. Sobre los otros líderes sonorense de menor importancia, ver Alarcón Menchaca 2008, Aldana Rendón 2006 y Castro 2005. Los únicos estudios sobre la corrupción dentro de la élite sonorense fueron escritos por el doctor José Alfredo Gómez Estrada y se enfocan en el papel de general Abelardo L. Rodríguez 2007 y 2012.

aquella de Calles y Obregón. Esta "leyenda negra" se origina entre los intelectuales radicados en la Ciudad de México que mostraban desafección frente al grupo, tales como José Vasconcelos, quien fuera Secretario de Educación Pública. Según Vasconcelos, los sonorenses creían que el éxito de la Revolución Mexicana "dependía de los hombres de la frontera norte, portadores de la civilización" (Vasconcelos 2000: 57). Uno de sus aliados políticos, el intellectual Martín Luis Guzmán, se refería a este proyecto civilizatorio como sonorismo. En la mente de Guzmán, el proyecto del sonorismo no sólo buscaba excluir al centro y sur del país, sino también a los norteños de Chihuahua y Coahuila (Guzmán 1974: 359; Aguilar Camín 1977; Almada 2010: 729).

Según el académico austriaco-americano, Frank Tannenbaum, un visitante asiduo de México durante la década de los años 30, la era sonorense estaba corrupta hasta la médula (Hale 1995: 214-245). Representó a la era como "años inmorales y nebulosos" y culpó a la dirigencia política por su sed de "lana y poder"[3] (Tannenbaum 1960: 69-70). Prestando atención a estas denuncias de corrupción, un destacado libro de texto de historia, editado en México recientemente, coincide en que: "Algo drástico le había ocurrido a la Revolución y a sus líderes. Los hombres honestos e idealistas […] no solo se habían desviado de las tareas de alta prioridad, sino que se habían corrompido también"[4] (Meyer/Sherman/Deeds 1999: 571-572).

Aunque Tannenbaum, Tobler, y otros, dan por sentado el enriquecimiento de los sonorenses, éste es, por mucho, el aspecto menos estudiado del grupo; sin embargo, también es el que ha promovido más especulación popular. La historiografía académica abunda en historias de la fabulosa riqueza de los sonorenses: sobre todo, la supuestamente exitosa industria agraria de Obregón y las riquezas del general Abelardo L. Rodríguez, presuntamente el primer "presidente millonario" de México. Para ejemplificar las ganancias ilícitas de la élite estaban "La calle Ali Baba" o bien "La calle de los Millonarios Socialistas", así llamada por los críticos, en Cuernavaca, 80 km al sur de la Ciudad de México. Según el embajador norteamericano, Josephus Daniels, era una calle de casas palaciegas donde tanto Calles como Rodríguez compraron propiedades al inicio de los años 30 (Daniels 1947: 60).

3 "pelf and power"

4 "Something drastic had happened to the Revolution and its leaders. Honest, idealistic men […] had been not only diverted from tasks of high priority, but corrupted as well."

Sin embargo, un estudio empírico presenta una imagen más compleja. Centrado en Obregón –el principal líder sonorense hasta su asesinato en 1928– el análisis presentado a continuación pone en cuestión el resultado real de la acumulación corrupta de capital. Debido a la necesidad de atender la cuestión agraria, la adquisición ilegal de tierra mostró ser mucho más difícil que a principios del siglo, cuando el círculo cercano al dictador Porfirio Díaz, los *científicos*, se apropió de grandes fincas gracias a sus relaciones con el gobierno nacional. De hecho, Obregón y los otros líderes sonorenses no se convirtieron en una nueva "clase de hacendados", como Tobler ha conjeturado (Tobler 1984: 213-237). Para empezar, la vieja clase hacendada seguía presente en la era sonorense: al igual que el clan Terrazas en Chihuahua, muchos otros de los terratenientes porfiristas lograron recuperar muchas de sus propiedades. Mientras tanto, los sonorenses construyeron la mayor parte de sus fortunas en sectores económicos nuevos: viñedos, huertos, pesquerías, spas, casinos, y, después de mediados de los años 30, cines. Sus propiedades eran relativamente pequeñas comparadas con aquellas de Terrazas y los científicos. Más aún, el poder político venía con un alto costo financiero: no hay más que observar la referencia dinámica de la muy citada afirmación de Obregón de que "no hay general que pueda resistir un cañonazo de cincuenta mil pesos". Ciertamente Obregón experimentó de primera mano los efectos del desembolso de efectivo con el propósito de mantener una pirámide clientelista de poder. La fortuna de Obregón mostró los límites de la adquisición de riqueza de un grupo cuyo poder descansaba en fundamentos políticos y militares más que en económicos.

Al igual que algunos de sus compañeros sonorenses de armas, y especialmente al igual que el otro gran patriarca del grupo, el general Plutarco Elías Calles, Obregón provenía de una prominente familia venida a menos. Nació el 17 de febrero de 1880 en un rancho cerca del pueblo de Navajoa en el fértil valle mayo en el municipio de Álamos. Su madre provenía de los Salido, una de las familias más ricas del municipio. Su padre había sido un importante terrateniente hasta que su apoyo al desafortunado imperio de Maximiliano (1864-1867) lo hiciera enemigo de la república liberal de Benito Juárez. Una inundación severa del río Mayo y un ataque yaqui destruyeron Siquisiva, el único rancho que le quedaba a su padre, donde Obregón creció pobremente siendo el menor entre 18 hijos. Obregón fue autodidacta y bilingüe en mayo y español. Hablando del tamaño y pobreza de su familia, Obregón bromeaba más tarde: "en mi casa éramos tantos

hermanos que, cuando había queso *Gruyère*, a mí sólo me tocaban los agujeros" (Krauze 1987: 1).

En 1906, cuatro años antes de la revolución, Obregón compró un rancho cerca de Navajoa. Llamó a su nueva adquisición "La Quinta Chilla" (el rancho sin centavo). El rancho tenía 180 hectáreas (450 acres): un rancho chico para los estándares sonorenses. Pero la tierra no estaba demasiado desgastada. Navajoa se ubica en el fértil valle del río Mayo, y la disponibilidad de agua hacia de la tierra la más productiva del estado. Navajoa había sido un centro minero, y estaba a punto de experimentar un crecimiento sustancial a partir de la llegada del Ferrocarril del Pacífico Sur en 1907. Casi cualquier cosa crecía en "La Quinta Chilla", pero Obregón se especializó en garbanzos, un producto básico de alta demanda incluso en España. Definitivamente no se mantuvo sin ganancias, y para 1910, ya se posicionaba como uno de los jóvenes empresarios agroindustriales más prometedores de la región de Navajoa.

Como productor de garbanzos, una mercancía de exportación, Obregón se convirtió en uno de los beneficiarios de la modernización porfirista. Mientras sus antecesores habrían tenido que transportar los garbanzos en mula hasta Guaymas y de ahí hasta Estados Unidos pasando por debajo de la punta de Baja California, el ferrocarril del Pacífico Sur transportaba rápidamente sus legumbres hasta Arizona. Desde ahí podían llegar fácilmente al resto del mundo. Aprovechándose de este éxito comercial, Obregón ocupó varios puestos políticos un tanto menores. En el periodo de 1905-1907, sirvió como primer *regidor*, el miembro principal del consejo del pueblo, de Huatabampo, y ganó la reelección para el siguiente periodo. En 1908, administró los proyectos de trabajo público, y puso atención especial al riego y distribución de agua para los residentes urbanos (Almada 2009: 13; Donjuan 2006: 251).

En 1909, Obregón inventó la máquina cosechadora de garbanzos, tal vez la única invención tecnológica jamás acreditada a un líder político mexicano. A los pocos meses, Obregón manufacturaba su cosechadora para la venta, y el cultivo de garbanzo se disparó por toda la región. Su inventó le dio estatus como tejedor de redes sociales y económicas en la región de Navajoa. La región logró sortear buena parte de la recesión que afectó a gran parte de la nación durante la crisis económica global. Mientras el precio de la plata y otras mercancías de exportación se desplomaron, los garbanzos, junto con otros productos comestibles, se mantuvieron en alta demanda. La aventura de los garbanzos convirtió a Obregón en uno

de los capitalistas contendientes de la región. Se había hecho de un lugar entre la burguesía terrateniente y la clase política en ascenso (Hall 1979: 24; Aguilar Camín 1980: 99).

Su estatus social, inherente a la industria agrícola, permitió que Obregón se convirtiera en regidor de Huatabampo con apenas 25 años de edad, dándole oportunidad de experimentar la política porfirista desde una perspectiva local. Al igual que en muchos otros pueblos, un cacique o jefe local, dominaba en nombre de don Porfirio; y confrontar al cacique resultaba impensable. A pesar de todo, en 1910, Obregón se mantuvo al margen de la revolución de Francisco I. Madero, acorde con su estatus económico y social. Una vez que la revolución triunfó, sin embargo, la indiferencia mostrada por Obregón no le costó cara. En contra de los deseos del viejo cacique porfirista, ganó la elección como alcalde de Huatabampo en una contienda enturbiada con alegatos de fraude (Buchenau 2011: 33-45).

Si el gobierno de Madero hubiera permanecido estable, Obregón probablemente hubiera seguido siendo un político local por mucho tiempo. Sin embargo, en 1912, el antiguo líder militar revolucionario, el chihuahuense Pascual Orozco Vázquez, se rebeló en contra del gobierno, y para marzo, la rebelión se había esparcido hasta Sonora. El gobernador José María Maytorena decidió defender su estado en contra de la amenaza orozquista movilizando los llamados *batallones irregulares*, que eran guerrillas espontáneas organizadas por forzudos locales. Sin entrenamiento militar formal, Obregón aceptó la tarea con entusiasmo y reclutó a muchos de sus colegas terratenientes del área de Navajoa para formar uno de estos batallones. Este batallón era tan bueno espejo de la ascendencia clasemediera de Obregón que se le apodó "el batallón rico". En junio de 1912, el "Cuarto Batallón Irregular" de Obregón, de trescientos hombres, marchó hacia la Sierra Madre en el oriente para enfrentarse a las tropas de Orozco. En el pueblo fronterizo de Agua Prieta, Obregón conoció al hombre con quien colaboraría en una alianza por conveniencia durante los últimos 16 años de su vida: Plutarco Elías Calles (Obregón 1959: 8-10; Dillon 1923: 65).

Lo que siguió fueron más de tres años de guerra: primero en contra de los orozquistas, luego en contra de la dictadura del general Victoriano Huerta, y finalmente, del lado de la coalición "Constitucionalista" de Venustiano Carranza en contra de los "Convencionalistas" liderados por Pancho Villa y Emiliano Zapata. En el tiempo en que Obregón se convirtió en el general preeminente de la revolución, al derrotar a las fuerzas de Villa en las batallas del Bajío en la primavera y el verano de 1915, tuvo

poco tiempo de hacer crecer su fortuna en Sonora. Sin embargo, construyó una base política significativa y fungió como Secretario de Guerra en el primer gabinete de Carranza. El 1.5.1917, Obregón renunció a su puesto como secretario de Guerra y regresó a Sonora después de haber pasado cuatro años en campo de batalla y en la Ciudad de México. Alegó que padecía de mala salud y que deseaba regresar a las labores agrícolas, pero engañó a pocos de sus verdaderas intenciones. Como reportó un agente de inteligencia norteamericano: "El general Obregón […] está a punto de efectuar el acto que hizo Cincinnato en la Roma antigua. No se considera a sí mismo soldado, sino alguien que ha sido llamado de su arado para ayudar a liberar su país, y habiendo conseguido esto, regresa a su[…] rancho, que, al parecer, se ha visto beneficiado en cuanto a tamaño gracias a su puesto oficial"[5] (citado en Buchenau 2011: 85).

Ciertamente, Obregón aprovechó su prestigio para promover su fortuna. Durante 1917 y 1918, se benefició más que cualquier otro de la explosión del garbanzo en Sonora, la cual fue posible sólo por una combinación de producción abundante y altos precios. "La Quinta Chilla" incrementó su tamaño de 180 a 3.500 hectáreas. Para 1919, este rancho empleaba a 1.500 trabajadores. Obregón disfrutaba de un crédito excelente con las instituciones financieras de Estados Unidos y obtuvo generosos préstamos para diversificar sus negocios hacia la ganadería, la exportación de carne y la minería. También comenzó un negocio de exportación e importación en el lejano Nogales. En 1918, Obregón, junto con varios socios, fundó la Sociedad Agrícola Cooperativa de Sonora Sinaloa, una asociación de agricultores de garbanzo también conocida como la Liga del Garbanzo. A través de su agencia en Nogales, la Liga del Garbanzo obtuvo préstamos para sus miembros y coordinó la exportación de garbanzos. En 1918, la Liga –y la agencia de Obregón– controlaba el 90 % de la producción de garbanzo con un volumen de venta estimado entre 8 y 10 millones de pesos. El monopolio virtual de la agencia sobre la exportación del garbanzo le permitió fijar el precio y las condiciones de venta. La agencia cobraba una comisión de 0,50 USD por bolsa, lo que daba a Obregón una renta de 50.000 USD al año. La cooperativa ayudaba a todos los miembros a asegurar un precio alto para el kilo de garbanzo. En Sinaloa, por ejemplo,

5 "General Obregón […] is about to play the Cincinnatus act. That he does not consider himself a soldier, but one who has been called from his plow to help free his country, and, having established it, to return to his […] farm, which seems to be very much enlarged due to his official position."

el valor de la cosecha de garbanzo se duplicó de 5 a 10 millones de dólares entre 1917 y 1918.[6] La Liga del Garbanzo era un ejemplo excelente de la visión sonorense para la agricultura mexicana. Esta visión consistía en ranchos chicos y medianos comprometidos con una producción capitalista orientada a la exportación, en lugar de las grandes haciendas de tipo porfirista o la tierra de propiedad comunal defendida por los zapatistas.

Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con los objetivos y métodos de la Liga del Garbanzo. En el norte de Sinaloa, la Liga entró en conflicto con los mayos quienes, a diferencia de sus contrapartes sonorenses, habían seguido peleando por la tierra a lo largo de la revolución. Los mayos de Sinaloa observaron cómo los agricultores de garbanzo revigorizados volvían a lanzarse violentamente contra sus tierras. El crecimiento de la producción de garbanzo también resultó en detrimento de la producción de alimento en favor de mercancía de exportación. Así lo señaló un ciudadano local: "Tú, Obregón, eres un traidor a nuestra gente[…] Vas a traer 3 millones de dólares yanquis contigo, ¿por qué no traes un poco de comida para tu gente? Esta traición te costará el brazo, víbora".[7] A la larga, la explosión del garbanzo resultó ser efímera con la caída del precio del garbanzo, junto con el de muchas otras mercancías, después del final de la 1ª Guerra Mundial en noviembre de 1918.

El estatus de Obregón como un empresario en acenso informó su ideología como candidato presidencial en 1919. Ciertamente, en asuntos económicos, los discursos de Obregón reflejaban el sistema de creencias capitalista típico de un dueño de industria agraria antes que la postura populista de un caudillo revolucionario. El manifiesto con el que lanzó su candidatura abogaba por el "completo reconocimiento de todos los derechos adquiridos legítimamente en nuestro país con absoluto apego a las leyes por todos los extranjeros" (Obregón 1919: 15). Esta formulación tenía por objetivo tranquilizar a los inversionistas estadounidenses en cuanto al impacto del artículo 27, mientras que mantenía abierta la posibilidad de una legislación que restringiera las inversiones adquiridas ilegalmente. Sin embargo, los observadores estadounidenses permanecieron escépticos. En una carta privada, el editor del *Arizona Mining Journal* elogió a Obregón

6 Hall 1979: 200-201; National Archives, College Park, MD, RG 165: Records of the War Department General Staff, Military Intelligence Division (NA, MID), caja 1936, 8532-736/1, memo, Col. Harry O. Williard, 29.4.1918; Hernández Chávez 1984: 192.

7 NA, MID, caja 1936, 8532-736/1, memo, Col. Harry O. Williard, 29.4.1918.

por su defensa pública de los derechos de los extranjeros a la propiedad y lo presionó a brindar garantías más sólidas, no fuera que "sólo una intervención de los Estados Unidos pudiera estabilizar las condiciones en México".[8]

Varios meses después, Obregón exhortó a sus seguidores a que a se adaptaran a los requisitos del capital privado en un discurso de campaña en Mazatlán, Sinaloa:

> [E]l mejor gobernante será aquel que encuentre el fiel que establezca el equilibrio entre estos dos factores, para que sobre un plano de equidad, encuentren las ventajas recíprocas que ambos deben obtener.
>
> Si nosotros no damos garantías al capital, si lo hostilizamos, si no le damos las facilidades que necesita para el desarrollo de nuestros recursos naturales, dentro de las limitaciones que nuestras leyes le marcan, el capital permanecerá dentro de las cajas o fuera de nuestras fronteras, y entonces nuestros trabajadores tendrán que seguir saliendo del país, en peregrinaciones hambrientas, para ir a buscar el pan a otros países donde el capital tenga las garantías que aquí no puede encontrar.
>
> Soy testigo presencial, y mi corazón se ha sentido conmovido muchas veces cuando he visto descargar en Nogales furgones enteros de gente, como jaulas de ganado, que los enganchadores vienen a sacar de nuestro país, aprovechados de ese apremio económico en que los tiene la falta de trabajo, y he visto volver a muchos de esos hombres, pocos días después, llegar a la línea internacional, pidiendo un plato de comida y un pasaje para volver a su hogar. Hombres que para salir al extranjero han tenido que vender su metate, algún burro, y hasta las vigas de sus chozas, hechas leña, atraídos por las halagadoras promesas de los enganchadores, y cuando han vuelto, ya no hay metate, y ya no hay burro, ni hay choza; pero en cambio, nosotros seguimos llamándonos muy nacionalistas, diciendo que no necesitamos del resto del mundo, que podemos vivir solos y reñidos con la lógica.
>
> Nada hablarían los que usan huarache y sombrero de petate, si quitáramos el sombrero y los zapatos a los que ya los tienen, en nombre de una igualdad que nos haría desandar un siglo en la lenta evolución que hemos tenido; es, pues, necesario que nos esforcemos por dar zapatos a los que tienen huaraches y no quitárselos a los que han logrado adquirirlos. (Obregón 1932: vol. 1, 70-71)[9]

8 "nothing short of intervention by the United States will ever settle conditions in Mexico". Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, México, D.F. (FAPEC), Archivo Fernando Torreblanca, Fondo Álvaro Obregón (citado como FAO), serie 030100, exp. 832, inv. 1902, "Watkins, Robert A.", Watkins a Obregón, Phoenix, AZ, 8.7.1919.

9 Discurso pronunciado en la ciudad de Mazatlán, 7.11.1919.

A la luz de esta ideología capitalista, profesada abiertamente durante su campaña, no debiera sorprender a nadie que los sonorenses solidificaran sus posiciones económicas y políticas durante la presidencia de Obregón (1920-1924). En particular, los generales sonorenses reforzaron sus lazos a través de alianzas familiares y de negocios. Las familias de Obregón y Serrano se juntaron a través de la boda de dos de los hermanos de los generales. Los clanes Obregón y Calles se conectaron de una forma más indirecta. En 1923, la hija mayor de Calles, Hortensia, se casó con Fernando Torreblanca, el secretario personal de Obregón, quien, de ahí en adelante, se convirtió en un intermediario crucial entre los dos patriarcas sonorenses. El segundo hijo de Calles, Plutarco "Aco" Elías Calles Chacón, se casó con la hermana de Aarón Sáenz Garza, un fiel partidario de Obregón y pariente lejano de la poderosa familia regiomontana de los Garza Sada. "Aco" y la familia Sáenz adquirieron posteriormente 38.000 hectáreas en la región de la Huasteca en el nororiental estado de Tamaulipas con el propósito de producir azúcar. La "Compañía Azucarera El Mante" se convirtió en una de las más grandes fincas azucareras del país. Como último ejemplo, el gobernador de Baja California, Rodríguez, se unió a Calles y a Obregón en una serie de nuevas aventuras comerciales (Buchenau 2007: 93-94).

Alentados por su éxito, Obregón y otros generales sonorenses alardeaban de representar el arquetipo del macho, mujeriego, apostador y líder violento, ejemplificando lo que el historiador José Alfredo Gómez Estrada ha llamado las "prácticas masculinas de la nueva élite revolucionaria", que consistían mayoritariamente en las prácticas de hombres groseros y sin cultura "acostumbrados a la violencia física" (Gómez Estrada 2012: 186). Una breve incursión en los hábitos personales de los sonorenses revela las razones por las que se forjó su imagen de líderes corruptos. Resulta notable, entonces, que esta imagen descanse más en los excesos de los generales Serrano y Rodríguez que en la conducta de los dos patriarcas, Calles y Obregón.

El tema del consumo de alcohol, por ejemplo, muestra a Obregón como un modelo de la moderación. Aunque a Obregón le gustaba contar chistes que involucraban el consumo excesivo del alcohol; como presidente, no bebía mucho. Calles bebió bastante durante su juventud y en sus primeros años de adulto y, después de la cruzada emprendida como gobernador de Sonora en contra de los vicios y perjuicios del alcoholismo, reanudó sus hábitos alcóhlicos al mudarse a la ciudad de México. Menos sujeto al escrutinio público en Mexicali, Rodríguez no siguió el mismo modelo de sobriedad pública y exceso en privado: se dice que, como gobernador

de Baja California, organizaba borracheras en los cabarets de la capital estatal y que, en cierta ocasión, el Palacio de Gobierno, sede del gobierno estatal, alojó una de estas fiestas. Serrano guardaba todavía menos reparo que Rodríguez para emborracharse en plena vista, e incluso a medio día (Buchenau 2011: 157; Buchenau 2007: 162; Gómez Estrada 2012: 187).

Todos los generales de Sonora se descarriaron fuera de sus matrimonios. Una vez más, Obregón mostró más control que sus camaradas, aunque un documento preservado entre sus papeles personales apunta al menos a una aventura extramarital. Según consta, Calles tuvo al menos dos amantes durante sus años en Sonora, incluyendo a una niña de 17 años, quien dio a luz a un niño en 1919. Pero las aventuras de Calles no se comparan con la afición de Rodríguez o de Serrano por el sexo ocasional. Habiendo contraído nupcias en tres ocasiones, Rodríguez era un visitante asiduo de los infames burdeles de Mexicali, y en una ocasión, el gobernador persiguió a una prostituta extranjera por los pasillos de un hotel con una pistola en la mano. Al igual que con la bebida, Serrano era el peor de todos. Según su biógrafo, Serrano sedujo a seis niñas menores de edad y fue padre de no menos de siete hijos fuera del matrimonio.[10]

Por último, las apuestas fueron un pasatiempo importante para este grupo de hombres que había experimentado en carne propia los caprichos de la suerte desde que iniciara la revolución. No es coincidencia que una de las anécdotas más populares sobre la legendaria memoria de Obregón tenga que ver con su capacidad de recordar la baraja entera. El general era tan habilidoso en los juegos de cartas que, según consta, el propietario de un casino le prohibió entrar a jugar. Si Obregón dependía de su memoria y de sus talentos interpersonales, Calles era un aficionado al pokar para quien los juegos de azar eran una representación de la política. A pesar del decreto hecho desde el inicio de su mandato como gobernador de Sonora en 1915 en contra de este tipo de juegos; a su llegada a la ciudad de México, Calles sostuvo reuniones con sus amigos en su residencia privada donde se jugaba pokar y se bebía mucho. En este aspecto, Rodríguez y Serrano parecen ser apenas promedio, la documentación sobre su participación en los juegos de azar sugiere patrones similares, una devoción privada y no pública a estos juegos. Según declara el general González N. Santos en sus

10 FAPEC, FAO, serie 050100, exp. 32, inv. 4828, "León, Luis L.", León a Obregón, s.f.; FAPEC, Archivo Fernando Torreblanca, Fondo Plutarco Elías Calles (FPEC), serie 011100, gav. 72, exp. 153 "Elías Calles Ruiz, Manuel"; Gómez Estrada 2007: 137; Castro 2005: 90-91.

memorias, los sonorenses, y otros miembros de la élite gobernante, a menudo malversaban fondos gubernamentales para apostar (Gómez Estrada 2012: 189-190; Santos 1986: 428-429).

No resulta sorprendente que los alegatos de corrupción que habían acosado a Obregón como candidato regional resurgieran durante su mandato como presidente –particularmente después de que Obregón decidiera (sin beneficio de consulta) que Calles lo sucediera en 1924. Los críticos acometieron en contra de lo que vieron como la corrupción rampante del gobierno federal. Por ejemplo, de acuerdo con un reporte de inteligencia de EE.UU., un general con ambiciones presidenciales propias le dijo a Obregón:

> ¿Acaso crees que la gente va a soportar lo que tú, Calles, y Serrano están haciendo: saliendo a jugar pokar toda la noche y perdiendo 160.000 pesos y luego pagando la deuda con un cheque sacado del erario nacional? […] La gente se está cansando mucho de la forma en la que estás manejando los fondos de la nación, y lo que le pasó a otros presidentes que quisieron imponer a un candidato a la gente te va a pasar a ti.[11]

Por otra parte, sin embargo, la coalición entre los generales sonorenses ayudó al gobierno de Obregón. Cuando una coalición liderada por Adolfo de la Huerta (el único civil entre los miembros de la coalición sonorense) se levantó en armas en diciembre de 1923, Rodríguez brindó asistencia financiera. Rodríguez apreciaba la libertad que el gobierno de Obregón le había dado para construir su emporio de negocios en aquel remoto territorio. Su administración de Mexicali brindó al gobierno federal 500.000 pesos con el propósito expreso de pelear en contra de la sublevación de De la Huerta. Rodríguez también ayudó a la administración de Obregón a comprar dos aeroplanos. Obregón y Calles nunca se olvidaron de estos actos de lealtad. En violación de uno de sus propios decretos, Obregón permitió la operación de un casino en Baja California, y él y Calles también permitieron a Rodríguez permanecer en la doble capacidad de gobernador y *jefe de*

11 "Do you think the people will stand for what you, Calles, and Serrano are doing: going out and playing poker all night and losing 160.000 pesos and then paying the debt with a check drawn from the National Treasury? […] The people are getting very tired of the way you are handling the funds of the nation, and what happened to other presidents of Mexico wishing to impose a candidate on the people will happen to you". Un agente de espionaje estadunidense relata una conversación con Madero en NA, MID, caja 1660, 2657-G-432/29, Manuel Sorola, "General Raoul [sic] Madero", San Antonio, TX, 18.12.1923.

operaciones militares hasta 1929. Para ese momento, Rodríguez era el gobernador que más tiempo había permanecido en el cargo.[12]

Después de entregar el poder a Calles ante el triunfo de éste en la elección presidencial de 1924, Obregón regresó a Sonora a atender su industria agraria. Los historiadores no están seguros de si Obregón tenía la intención de retirarse permanentemente de la política. La visión predominante, la que se repitió tanto en los libros de texto mexicanos como norteamericanos durante décadas, sostiene que Obregón siempre tuvo la intensión de regresar al poder, y que incluso había firmado un secreto acuerdo con Calles al respecto. Según esta perspectiva, Obregón se creía indispensable para la escena política nacional, tanto como don Porfirio se concebía a sí mismo como *el necesario*, dando pie al apodo alterno del Porfiriato: *el necesariato* (Cosío Villegas 1960: 313).

Sin embargo, la evidencia documental lanza dudas sobre esta interpretación, en cambio señala un deseo como su motivación principal para buscar la presidencia nuevamente de apuntalar su negocio en declive. Las acciones de Obregón durante el comienzo de la presidencia de Calles sugieren una inclinación de abstenerse de una segunda candidatura. Después de su regreso a Sonora, Obregón tenía mala salud y se enfocó en su gran extensión de tierra así como en su negocio de exportación e importación. Aun cuando había usado su poder político para beneficio personal, el caudillo no había sido capaz de repetir el éxito económico de la segunda década del siglo. Un reporte de inteligencia norteamericano dice: "El general Obregón, contrario a la tradición, fracasó[…] en enriquecerse durante sus cuatro años como presidente".[13] Para 1926, sin embargo, el caudillo se dio cuenta de que necesitaba del erario nacional para mantener su negocio a flote. Desde ese punto en adelante –alentado también por las crecientes dificultades del gobierno nacional con la trastabillante economía, la oposición católica, y el gobierno de EE.UU.– Obregón promocionó activamente su regreso al poder.

12 FAPEC, gav. 66, exp. 189, inv. 5407, "Rodríguez, Abelardo L., General", L. 4, Rodríguez a Calles, Mexicali, 29.12.1923; Archivo Particular General Abelardo L. Rodríguez, Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana (APALR), caja 3, exp. "Presidencia de la República", Pani a Rodríguez, Cd. de México, 4.1.1924, Rodríguez a Lubbert, Mexicali, 14.1.1924, Rodríguez a Obregón, Mexicali, 3.2.1924, Obregón a Rodríguez, Irapuato, Gto., 5.2.1924; Gómez Estrada 2007: 146.

13 "General Obregón, contrary to custom, failed […] to enrich himself during his four years as president". NA, MID, caja 800, 2064-2489, s.n. (agregado militar de la embajada estadounidense en México), "Comment on Current Events", 17.7.1925.

En lugar de hacerlo en el sur del estado, Obregón ahora estableció su centro de operaciones en su rancho en Náinari en el valle yaqui. Igual que en el caso de "La Quinta Chilla", Náinari evocaba una visión errada de pequeñez: "náinari" es la palabra yaqui para "rata". Sin embargo, resultaba más apropiada para describir el papel de los sonorenses en la economía mexicana. Una vez instalado en Náinari, Obregón le propuso emprender negocios conjuntos a Calles y a Rodríguez. Estas empresas involucraban la compra de miles de acres de tierra en Sinaloa y en el valle yaqui. Obregón soñaba con tener en su propiedad una vasta red de canales de riego –un sueño que alguna vez había sido de la empresa estadounidense "Compañía Constructora Richardson". El nexo entre estos líderes políticos era Ignacio P. Gaxiola, socio de Obregón en la Oficina Comercial de Álvaro Obregón en Nogales, y secretario particular de Rodríguez. En 1925, Obregón y Gaxiola fundaron una compañía de bienes raíces llamada "Álvaro Obregón y Compañía. Sociedad Civil". Basada en Nogales, donde disfrutaba de un fácil acceso a los Estados Unidos, la nueva compañía tenía sucursales en Cajeme, la Ciudad de México, y Puebla. Durante los dos años siguientes, Obregón y Gaxiola, empezaron una serie de negocios nuevos a través de Obregón y Cía., incluyendo un molino de harina y una nueva compañía agrícola (Gómez Estrada 2012).

Este frenesí de actividad marcó una desviación de la cautelosa forma en la que Obregón solía hacer negocios, empezó a consumir cientos de miles de pesos. De acuerdo a uno de sus descendientes, José Ramón García, actualmente residente de Nogales:

> Ya no siendo el conservador y frugal hombre de negocios que había sido en su juventud, Obregón, el consumado temerario con buen crédito, continuó pidiendo grandes préstamos de bancos mexicanos y californianos, que le permitieron jugar en un vasto número de caros experimentos agrícolas en su gran jardín en Náinari: plantar henequén, árboles de higos e incluso árboles de naranja y manzana californiana. A un lado de la ya acostumbrada cosecha de garbanzo, también plantaba parcelas de jitomate, maíz, arroz, trigo, chícharo y frijol. Era un horticultor *par excellence*, pero ahora podía bailar al son de otra tonada.[14]

14 "Not being the conservative or frugal businessman he once was in his youth, Obregón, the consummate risk-taker with good credit, continued to borrow extensively from Mexican and Californian banks, allowing him to tinker in a myriad of expensive agricultural experiments in his big garden in Náinari: planting henequen, fig trees, Spanish melons, and orange trees, and even Californian orange and apple trees. Aside from the customary garbanzo crop, he was also planting parcels of tomatoes, corn, rice, wheat, peas, and beans. He was no doubt a horticulturalist par excellence, but he was now

Sin duda ese "son de otra tonada" referido por García era la enorme influencia política de Obregón que el caudillo utilizaba para respaldar sus caras inversiones. Ciertamente, Obregón requirió préstamos significativos para sus nuevas empresas. En julio de 1925, Calles y Torreblanca obtuvieron 150.000 de la Comisión Nacional Monetaria en nombre de Obregón, y Rodríguez de dio a Obregón la módica cantidad de seis mil pesos de sus fondos personales. En octubre de 1925, la administración de Calles prestó a Obregón otros 150.000. Obregón también obtuvo un gran préstamo del Banco Nacional de Crédito Agrícola (BNCA), con la que compró miles de acres de la corporación Richardson.[15]

Sin embargo, los oficiales de gobierno se sentían incómodos con el prospecto de ayudar a Obregón por medio de los fondos públicos. Una anécdota relatada por Torreblanca a uno de los nietos de Calles revela el espíritu que rodeaba a estas transacciones. Según consta, Calles pidió al Secretario de Hacienda que mandara el pago a Obregón, y el secretario preguntó nerviosamente: "¿A quién le hacemos la partida?" Calles respondió: "¡A los huevos del general Obregón!"[16]

Obregón estaba muy consciente de lo que implicaba mezclar política y negocios de esta forma. En una carta de 1925 a su socio Francisco V. Bay, pintó un panorama terrible de sus negocios, culpando a la tardía financiación de un sistema de bombeo por el fracaso de una cosecha perdida a causa de la sequía. Cavilando las dificultades involucradas para obtener más crédito, escribió:

> Con generosidad y de manera oportuna, el General Calles ha decidido que el tesoro nacional nos respalde con grandes sumas de dinero: no solo por las distintas necesidades del negocio, sino para cubrir las grandísimas deudas, que estaban atrasadas y que tuvimos que pagar con una parte importante de esas sumas. Ahora, ya no tenemos derecho de buscar más ayuda, y yo tampoco la pediría, porque hacerlo supondría aceptar cantidades cuyo pago no estaría suficientemente garantizado. No quiero dar a los otros ninguna razón para

listening to the beat of a different drummer". José Ramón García, Jr.: "Álvaro Obregón, you can love him or hate him, but he initiated his successful run for the Mexican presidency in Nogales, Sonora, Mexico", manuscrito sin publicación, FAPEC, 3.

15 FAPEC, Archivo Fernando Torreblanca, Fondo Fernando Torreblanca (FFT), serie 010206, exp. 16, inv. 437, "Obregón, Álvaro (Gral.) y Fernando Torreblanca," L. 4, Calles a Obregón, Mexico City, 1.10.1925, and serie 010213, exp. 32, inv. 1099, L. 2, Calles a Torreblanca, Durango, 1.10.1925, and Calles a Obregón, 22.7.1925; APALR, caja 1, exp. 5, "Oficina Comercial de Álvaro Obregón," Rodríguez a Gaxiola, Mexicali, 30.5.1925.

16 Entrevista con Alejandro Elías Calles Lacy, Cd. de México, 17.7.2015.

> que consideren al General demasiado generoso, e incluso descuidado al dar préstamos por medio de una institución oficial […].[17]

Con estos sentimientos, Obregón expresaba su frustración no solo por el estado de las cosas con su industria agrícola, sino también por la necesidad de tener que pasar por medio de intermediarios para ordeñar fondos al gobierno nacional.

Las caras maquinaciones de Obregón también lo condujeron a una creciente dependencia en sus socios de los Estados Unidos, a quienes visitaba con frecuencia en sus años de expresidente. Durante estas visitas, se representaba como amigo del libre cambio. Alguna vez le dijo a su audiencia norteamericana que California y el noroeste de México constituían "uno de los más grandes centros productivos del mundo entero". En su opinión, si el gobierno mexicano buscaba "imponer nuevos impuestos para desatar una pelea de boxeo comercial, no solo cometeríamos un crimen, sino también un error que podría lastimar nuestros intereses [impose new taxes in order to wage a commercial boxing match, we would commit not only a crime, but also an error that would hurt our own interests]".[18] Pero en otra ocasión, le dijo a su público que se oponía al "capital filibustero" que llegaba con ataduras políticas.[19]

A pesar del gran capital político de Obregón, tanto en México como en Estados Unidos, la factura por sus caras empresas llegó a su fecha de vencimiento. Después de la cosecha de 1926, su situación se deterioró. La sequía le costó el 60 % de la cosecha de trigo, y su negocio de exportación de garbanzo (que cobraba 50 centavos por bolsa a un volumen de 250.000 bolsas al año) tuvo mucho más gastos de los que se esperaban. El golpe más fuerte llegó en octubre, cuando Obregón y Cía. compró la mayoría de las acciones de la Richardson, una corporación fuertemente endeudada. Según los términos del acuerdo, Obregón y Gaxiola asumieron gran parte de sus obligaciones fiscales. Esperaban que las tierras de la Richardson, localizadas a las orillas del río Yaqui, crecieran de precio considerablemente una vez que los métodos modernos de riego maximizaran su potencial.

17 FAPEC, Colección Documental Francisco V. Bay (CDFVB), L. 3, Obregón a Bay, Cajeme, 19.8.1925.

18 FAPEC, FFT, serie 010202, exp. 5D/14, inv. 111, L. 31/40 "Obregón, Álvaro (Gral.) Discursos, Artículos", discurso, 3.11.1925.

19 FAPEC, FFT, serie 010202, exp. 5D/14, inv. 111, L. 32/40 "Obregón, Álvaro (Gral.) Discursos, Artículos", discurso publicado en *Acción* (Navojoa, Son.), 14.3.1926.

Pero Obregón y Cía. no podían manejar el riesgo. El BNCA compró las acciones de Obregón y Gaxiola y tomó posesión de la Richardson. Lo más probable es que el presidente Calles haya orquestado el trato con tal de rescatar a Obregón de un error financiero desastroso.[20]

A la par del fracaso del trato Richardson, las fluctuaciones de los precios de las mercancías y un desastre natural dejaron a Obregón en la urgencia de solicitar préstamos de Calles y Rodríguez. En particular, el precio de los garbanzos siguió en declive, y Obregón se esforzó para sacar algo de ganancia del cultivo que siempre había sido el pilar de sus operaciones. En septiembre de 1927, un ciclón tropical llevó a un desbordamiento extendido por todo el valle yaqui. Los sonorenses devotos llamaron a éste ciclón "el cordonazo de San Francisco", en referencia a su creencia de que la severa tormenta estacional que golpeó la costa sonorense constituía un castigo por sus pecados. Ciertamente, Obregón no estaba en ningún sentido solo en su catastrófico encuentro con los elementos. La industria agrícola de Rodolfo Elías Calles, que se ubicaba cerca, también se derrumbó en estos años. Cuando el hijo mayor de Calles preguntó a Obregón si debiera pedir ayuda al presidente, se dice que el caudillo contestó: "¡Óyeme bien, Rodolfito! Eres el hijo del presidente". No ha sobrevivido información documental que indique si el presidente Calles ayudó a su hijo o no con dinero del erario público –de cualquier forma, el negocio de Rodolfo se declaró en bancarrota en 1927.[21]

De forma similar, la furia de San Francisco dio a la riqueza de Obregón el tiro de gracia. El último testamento del caudillo aporta suficiente evidencia sobre la magnitud de sus problemas financieros. Estipulaba: "todos los bienes de nuestra unión matrimonial pertenecen legalmente a mis acreedores, y serán liquidados para pagar los respectivos préstamos". Los activos sobrantes serían divididos equitativamente entre su mujer, sus ocho hijos y las tres hermanas que habían ayudado a criarlo cuando era niño.[22]

El súbito e inesperado declive financiero de Obregón demuestra uno de los principales temas de este estudio. Comparada con otras élites corruptas de sociedades autoritarias, los sonorenses encontraron relativamente pocas

20 FAPEC, CDFVB, leg. 4, Obregón a Bay, Náinari, 11.6., 2.7., y 13.7.1926; Atsumi Okada, "El impacto de la Revolución Mexicana: La Compañía Constructora Richardson en el Valle del Yaqui (1905-1928)", *Historia Mexicana* 50.1 (2000): 132-136.

21 Entrevista con Alejandro Elías Calles Lacy, Cd. de México, 17.7.2015.

22 FAPEC, Archivo Fernando Torreblanca, Fondo Álvaro Obregón, serie 060300, exp. 18, inv. 5118, "Testamento", 27.3.1927.

oportunidades para enriquecerse, dados sus relevantes compromisos políticos. Su poder político demostró ser, además de caro, adictivo. Obregón vió la cura para sus infortunios en el acceso renovado al erario nacional y en las influencias suministradas por la oficina presidencial. El caudillo se encontró a sí mismo en un dilema precario. Como presidente, había disfrutado el acceso al erario nacional pero había perdido el control directo de sus lejanas empresas. Como expresidente, se percató de que había perdido tiempo y recursos valiosos tratando de obtener una posición entre la élite comercial del estado, y batalló para recuperar su red comercial.

Este análisis matiza la caracterización que realizó Hans-Werner Tobler, sobre los sonorenses, y sobre Obregón, específicamente, como líderes que sacaron ventaja de la "amplia correlación entre poder político y éxito económico" (Tobler 1984: 216). También cuestiona la afirmación hecha por Tobler (que reproduce un reporte consular estadounidense mal informado) de que Obregón era propietario de "un gran molino de arroz, una gran fábrica de conservas y de jabón, una importante empresa comercial de automóviles, materiales de construcción, maquinaria y herramienta agrícolas, dos estaciones muy grandes de experimentación agrícola, un banco, un molino de cereales, un almacén y una cadena de gasolineras" (Tobler 1984: 221). Obregón no era dueño ni operador de estas empresas, sino más bien lo fueron sus familiares y amigos –como resultado de la ausencia del caudillo durante su presidencia–, incluso, algunos de ellos habían superado por mucho a su patrón en riqueza personal. Lo problemático para el análisis de Tobler es que los documentos del gobierno de EE.UU. citados más arriba en donde claramente se demuestra el declive financiero de Obregón después de 1925 ya estaban disponibles para los académicos durante su investigación. Sin embargo, los documentos mexicanos que han salido a la luz desde entonces son los que realmente ponen de manifiesto el aprieto económico en el que se encontraba el caudillo al momento en que se preparaba para tomar las riendas del poder por segunda vez en 1928.

Después de todo, el enriquecimiento de Obregón como resultado de su poder político fue relativamente modesto. Es insignificante en comparación con el de uno de sus camaradas revolucionarios, el general Abelardo Rodríguez, quien fue suficientemente afortunado como para sobrevivir a Obregón por casi cuarenta años y adquirir una fortuna que, para la década de los años 40, incluía acciones en más de ochenta negocios. Pero también fue mediocre en comparación con la riqueza acumulada por algunos de los revolucionarios de segunda categoría, incluyendo a los generales Maximinio

Ávila Camacho, Juan Andreu Almazán, y el antes mencionado Aarín Sáenz, quienes aprovecharon sus vínculos con los pujantes centros industriales de Puebla y Monterrey, respectivamente. Pero, sobre todo, las fortunas de las nuevas élites revolucionarias nunca se compararon con la riqueza de los *científicos* de la era porfiriana, o, incluso menos, con las ganancias ilícitas de las camarillas lidereadas por los presidentes Miguel Alemán Valdés (1946-1952), José López Portillo (1976-1982), y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), respectivamente. Mientras que la revolución trajo consigo una nueva élite burguesa, la nueva burguesía no cosechó sus más grandes beneficios sino hasta después de la 2ª Guerrra Mundial, cuando la revolución se había convertido en un slogan y había dejado de ser una realidad viva.

Bibliografía

Aguilar Camín, Héctor (1977): *La frontera nómada: Sonora y la Revolución Mexicana*. México, D.F.: Siglo XXI.

— (1980): "The Relevant Tradition: Sonoran Leaders in the Revolution". En: Brading, David A. (ed.): *Caudillo and Peasant in the Mexican Revolution*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 92-123.

Alarcón, Laura (2008): *José María Maytorena: una biografía política*. Hermosillo: Colegio de Sonora.

Aldana, Mario (2006): *Manuel M. Diéguez y la Revolución Mexicana.* Zapopan: El Colegio de Jalisco.

Almada, Ignacio (2009): "Álvaro Obregón Salido: nuevos datos y nuevas interpretaciones". En: <http://www.colson.edu.mx/absolutenm/articlefiles/944-inherm-obregon.pdf> (22.1.2009).

— (2010): "De regidores porfiristas a presidentes de la república en el periodo revolucionario: explorando el ascenso y la caída del 'sonorismo'". En: *Historia Mexicana* 60, 2, pp. 729-789.

Buchenau, Jürgen (2007): *Plutarco Elías Calles and the Mexican Revolution*. Lanham: Rowman and Littlefield.

— (2011): *The last caudillo: Álvaro Obregón and the Mexican Revolution*. Chichester: Wiley Blackwell.

Castro, Pedro (1992): *Adolfo de la Huerta y la Revolución Mexicana*. México, D.F.: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.

— (1998): *Adolfo de la Huerta: la integridad como arma de la revolución*. México, D.F.: Siglo XXI.

— (2005): *A la sombra de un caudillo: vida y muerte del general Francisco R. Serrano*. México, D.F.: Plaza Janés.

— (2009): *Álvaro Obregón: fuego y cenizas de la Revolución Mexicana*. México, D.F.: Ediciones Era.

Cosío Villegas, Daniel (1960): *Historia Moderna de México*. México, D.F.: Editorial Hermes.

Daniels, Josephus (1947): *Shirt-Sleeve Diplomat*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Dillon, E. J. (1923): *President Obregón: A World Reformer*. Cambridge: Small, Maynard, & Co.

Donjuan, Esperanza (2006): *Conflictos electorales durante el porfiriato en Sonora: una revisión de los recursos de impugnación de resultados electorales municipales, 1900-1910*. Hermosillo: El Colegio de Sonora.

Gómez Estrada, José Alfredo (2007): *Gobierno y casinos: los orígenes de la riqueza de Abelardo L. Rodríguez*, 2ª ed. rev.. México, D.F.: Instituto Mora.

— (2012): *Lealtades divididas: camarillas y poder en México, 1913-1932*. México, D.F.: Instituto Mora.

Guzmán, Martín Luis (1974): *Obras completas*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Hale, Charles A. (1995): "Frank Tannenbaum and the Mexican Revolution". En: *Hispanic American Historical Review* 75, pp. 215-246.

Hall, Linda (1979): *Álvaro Obregón: Power and Revolution in Mexico, 1911-1920*. College Station: Texas A&M University Press.

Hernández Chávez, Alicia (1984): "Militares y negocios en la Revolución Mexicana". En: *Historia Mexicana* 34, 2, pp. 181-212.

Krauze, Enrique (1987): *Alvaro Obregón: El vértigo de la victoria*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Meyer, Michael C./Sherman, William L./Deeds, Susan M. (1999): *The Course of Mexican History*, 6ª ed. New York: Oxford University Press.

Obregón, Álvaro (1919): *Manifiesto a la Nación lanzado por el C. Álvaro Obregón*. Hermosillo: Imprenta Moderna.

— (1932): *Discursos del General Alvaro Obregón*. México, D.F.: Talleres Gráficos de la Nación, 2 vols.

— (1959): *Ocho mil kilómetros en campaña*, 2ª ed. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Rodríguez, General Abelardo L.(2007): *Gobierno y casinos: los orígenes de la riqueza de Abelardo L. Rodríguez*, 2ª ed. rev.. México, D.F.: Instituto Mora.

— (2012): *Lealtades divididas: camarillas y poder en México, 1913-1932*. México, D.F.: Instituto Mora.

Santos, Gonzalo N. (1986): *Memorias*. 4ª ed. México, D.F.: Grijalbo.

Smith, Peter (1979): *Labyrinths of Power: Political Recruitment in Twentieth Century Mexico.* Princeton: Princeton University Press.

Tannenbaum, Frank (1960): *Mexico: The Struggle for Peace and Bread*. New York: Knopf.

Tobler, Hans-Werner (1984): "La burguesía revolucionaria en México: su origen y su papel, 1915-1935". En: *Historia Mexicana* 34, 2, pp. 213-237

Vasconcelos, José (2000): *La Tormenta.* México, D.F.: Ediciones Botas.

El Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa 1946: caso Román Cárdenas. Los excesos de una revolución

José Alberto Olivar

Introito

Cuando se trata de estudiar el desempeño administrativo de algún régimen de gobierno en particular, sobre todo en América Latina, pareciera una constante dar por hecho que entre sus pasivos está presente el fenómeno de la corrupción en todas sus manifestaciones.

Más allá del cálculo político de los gobernantes de turno, quienes inicialmente justifican sus acciones enarbolando la bandera de la moralización en el ejercicio de sus funciones, para luego dejar a un lado este incómodo discurso y reeditar, algunas veces hasta superar con creces, los procedimientos ilícitos de sus predecesores, resulta interesante resaltar la existencia de probadas excepciones a la regla.

En el caso específico de Venezuela, país con un largo historial de peculado e ineficiencia administrativa, el oficio de la política, ha sido visto como una actividad más propia de caudillos audaces y aprovechadores del erario público. La herencia colonial quedó fijada en los modos y costumbres del funcionariado republicano, en donde el poder discrecional en cuanto al manejo inescrupuloso de las rentas y el favoritismo en la asignación de cargos, hicieron fracasar una y otra vez cualquier intento de sana administración.

El destacado ensayista Picón Salas esbozó aquel complejo escenario:

> Sociológicamente, Venezuela, después de las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX, es como una gran montonera – sin ejército, sin administración pública digna de este nombre – donde el caudillo más guapo [valiente], inteligente o astuto se impone sobre los otros caudillos provinciales. (Picón Salas 2007: 119)

Sin embargo, cabe destacar la existencia de figuras que contribuyeron con su talento a dar un mínimo de coherencia a la gestión de gobierno presidida por los diferentes caudillos. Hombres como Santos Michelena, Diego

Bautista Urbaneja, Simón Planas, Martín J. Sanabria, Jesús Muñoz Tébar, entre otros, si bien ocuparon posiciones subalternas, su efectivo desempeño representaron un claro intento de instituir una sana administración.

En esta oportunidad, traemos a colación el caso de Román Cárdenas, quien sirvió en diferentes cargos, primero en calidad de inspector de la Junta de Fomento del estado Táchira (1887), luego como ministro de Obras Públicas (1910) y ministro de Hacienda (1913). Y aun cuando nunca renegó de haber servido fielmente a una dictadura, su particularísima actuación ha sido reconocida como una notable contribución al proceso de modernización de Venezuela en el siglo xx (Olivar 2009).

La dinámica política trae en ocasiones situaciones inverosímiles que forman parte de procesos de largo aliento. Es justamente, la expectativa de ver consolidado en Venezuela un sistema de gobierno democrático, acompañado de una transformación en la estructura económica y social, que determinó la búsqueda de opciones "eficaces" para acelerar la marcha de los acontecimientos. Uno de ellos, lo representó el golpe de estado del 18 de octubre de 1945, conocido en la historiografía venezolana como "la revolución de octubre".

Entre los asertos esgrimidos por sus protagonistas para justificar el movimiento, estaba la imperiosa necesidad de eliminar la práctica del enriquecimiento ilícito y el uso irregular del patrimonio público. Con ese propósito "profiláctico" fue creado un Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa, que a la postre sería tachado por los opositores al nuevo orden, de franco escenario para el aniquilamiento político de los desplazados del poder. Al respecto Uslar Pietri, una de las figuras más descollantes del régimen depuesto luego del golpe de estado del 18 de octubre de 1945, llegó a señalar:

> Esos juicios, que forman parte de los capítulos más tristes de la historia del odio político, constituyen un verdadero monumento de infamia y no pudieron mantenerse con ninguna apariencia de vigencia más allá del tiempo que duró el arbitrario mando de los hombres de octubre […]. Era, sin duda […] la grotesca guillotina de aquella falsa revolución. (Uslar Pietri 1992: 31)

Si bien hubo decisiones que de alguna manera resarcieron el daño patrimonial generado tras veintisiete años de dominación hegemónica por parte de una casta familiar ligada al fallecido dictador Juan Vicente Gómez (1908-1935), no es menos cierto, que hubo notables excesos que dejaron

en entredicho la genuina lucha contra la corrupción ofrecida por los nuevos gobernantes.

Y uno de esos excesos, es lo que explicaremos a continuación.

La polémica lista de la revolución

El 18 de octubre de 1945 ocurre en los principales cuarteles de Caracas un levantamiento militar que puso fin al gobierno del general Isaías Medina Angarita. Su derrocamiento, no sólo significó el desplazamiento del poder de un hombre, sino de una hegemonía regional instaurada desde 1899.

Durante casi medio siglo, cuatro gobernantes venezolanos tuvieron como denominador común dos características ineludibles: militares y andinos. Desde la llegada al poder de Cipriano Castro (1899-1908) al frente de una revolución denominada "liberal restauradora", la dinámica política venezolana quedó determinada por la sucesión de presidentes que de una u otra forma guardaban vinculación con aquel movimiento armado. Juan Vicente Gómez (1908-1935) ejerció una larga tiranía hasta su muerte sin que ninguna fuerza de oposición colocara en peligro su régimen. "El éxito de Gómez en el control y la centralización del poder del estado por veintisiete años resultó, en gran parte, de su capacidad de asignar el botín entre sus aliados acorde a las necesidades políticas del momento" (Yarrington 2003: 25).

Le siguen en la Jefatura del Estado, los generales Eleazar López Contreras (1935-1941) e Isaías Medina Angarita (1941-1945), quienes a su manera, representaron una transición política desde la dictadura hacia una forma de democracia liberal restringida. En definitiva fueron los albaceas políticos de una hegemonía regional que pretendía seguir usufructuando el poder político y militar por varios años más.

El último de los presidentes andinos, el general Medina Angarita, pese a la puesta en práctica de algunas iniciativas como el permitir el funcionamiento de partidos políticos y de sindicatos obreros, así como la libertad de prensa sin mayores cortapisas, fue tímido a la hora de profundizar los cambios, sobre todo en lo relativo al establecimiento del sufragio universal, directo y secreto para la elección del presidente de la República. Además de corregir las viejas prácticas de peculado y favoritismo en la administración pública, como por ejemplo "[…] el empleo de los gastos de la partida

secreta del Ministerio de Relaciones Interiores para la organización del partido de gobierno" (Caballero 2004: 405).

Transcurridos los cuatro años de su período constitucional, el ambiente político comenzó a crisparse debido a lucha de poder desatada entre los partidarios del expresidente López Contreras y el general Medina Angarita, hecho que significó grave fractura en el seno del régimen. Aquella disputa se hizo presente en los cuarteles, pero no en favor de uno u otro, sino en el sentir de una joven oficialidad que estimaba había quedado relegada a servir de simples sostenedores de un liderazgo caduco.

El desenlace no se hizo esperar y así ocurre una alianza militar y civil entre varios oficiales descontentos y los representantes de un pequeño partido político, Acción Democrática, liderado por participantes en la lucha contra la dictadura gomecista que habían pregonado en los últimos años la necesidad de una mayor apertura democratizadora.

De manera que el 18 de octubre de 1945, un golpe de estado dio al traste con el viejo orden y dio inicio a lo que sus protagonistas concertaron en denominar una Revolución. Entre los civiles que integraron la Junta Revolucionara de Gobierno, estaban Rómulo Betancourt, en calidad de presidente, Raúl Leoni y Valmore Rodríguez, como miembros. Ellos tres, habían suscrito años atrás, el 22 de marzo de 1931, un cuerpo de ideas denominado "Plan de Barranquilla". En este documento se establecieron las bases de una futura acción de gobierno, el cual quedó contenido en un "Programa mínimo" de inspiración marxista-leninista (Caballero 2004: 103).

Precisaban sus redactores que una de las primeras tareas de la futura revolución consistiría en confiscar los bienes de Gómez, sus familiares y servidores, acompañado de la creación de un Tribunal de Salud Pública para investigar y sancionar los delitos del despotismo (*El Plan de Barranquilla 1931*).

Se pretendía con ello establecer una "nueva ética administrativa" que en opinión de Carrera Damas significaba superar el estado de incompetencia, ineficacia y corrupción que caracterizaba a la administración pública. Rómulo Betancourt había sido unos de sus más severos críticos, sobre todo "durante las dos etapas finales de la dictadura liberal regionalista, representadas por los gobiernos de los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita" (Carrera Damas 2013: 341).

De allí que entre los primeros actos de la Junta Revolucionaria de Gobierno, destacó el establecimiento el 22 de octubre de 1945 de una Comi-

sión Calificadora de Funcionarios Públicos, conformada por Mario García Arocha, Luis Augusto Dubuc y el teniente Martín Márquez Añez.

De inmediato la referida comisión se encargó de determinar quiénes serían las personas presuntamente incursas en delitos contra el patrimonio nacional que no podrían disponer de sus depósitos de valores y bienes inmuebles, hasta tanto un tribunal especial se encargase de dictaminar su responsabilidad civil y administrativa en el manejo de los fondos públicos o enriquecimiento ilícito en beneficio propio o ajeno.

El 10 de noviembre de 1945 apareció publicada en la *Gaceta Oficial* una enorme lista de ciento sesenta y cinco nombres, precisados en estricto orden alfabético, quienes que a partir de ese momento quedaban cuestionados ante la opinión pública y en consecuencia debían a la brevedad posible hacer una declaración jurada de sus bienes, para justificar el origen de estos. De primero en el apartado correspondiente a la letra C, aparecía registrado el doctor Román Cárdenas.

¿Quién era Román Cárdenas?

Román Cárdenas fue un funcionario público que desempeñó a lo largo de más de diez años dos importantes carteras ministeriales bajo la dictadura del general Juan Vicente Gómez, a saber; el Ministerio de Obras Públicas (1909-1912) y el Ministerio de Hacienda (1913-1922). En ese tiempo contribuyó con sus conocimientos a materializar parte del programa político del régimen, consistente en la construcción de carreteras para integrar el territorio nacional y reformar la hacienda pública a los efectos de hacer más eficiente la recaudación de los tributos internos. Estas dos iniciativas, al lado de otras no menos importantes, quedaron como testimonio fehaciente de un ensayo modernizador que pretendía encauzar a Venezuela bajo el signo positivista del *Orden y Progreso*.

Este hombre había nacido en el estado Táchira, situado al occidente de Venezuela, en 1862, contemporáneo de los generales Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, a la sazón, los caudillos que llevaron al poder a la facción regional procedente de los Andes venezolanos.

Tras su retiro de la vida pública a partir de 1922, sus reformas administrativas se conservaron incólumes, proporcionándole al régimen gomecista una sólida base de sustentación política y económica que contribuyo a la perpetuación de la dictadura. Con el tiempo, a Román Cárdenas, le fue

atribuida la autoría intelectual del sistema de carreteras construidas en la época y de la transformación de la renta interna de la república. Hasta el punto que los más acérrimos detractores de la dictadura, reconocieron en Cárdenas, una limpia trayectoria pública que descollaba por encima de no pocas figuras cuyas actuaciones como personeros del gomecismo, eran sinónimo de dolo y arbitrariedad (Olivar 2009).

Por ejemplo, uno de los escritores que denunció públicamente los desmanes del gomecismo a través de un voluminoso memorial fue Pocaterra quien trata con un ligero sarcasmo a Cárdenas, refiriéndose a él como el "[…] que inventó la fórmula económica de equilibrar el presupuesto y ahorrar pagando sueldos de los empleados al 50 por 100 en la época más difícil para el mundo" (Pocaterra 1979: 158).

Sus allegados lo describieron como un modelo de compostura, ponderación y caballerosidad que vivió sus últimos años en medio de una ejemplar austeridad. Esta visión de incorruptible funcionario público ha ido acompañada de la marca de eficiente organizador endilgada por historiadores contemporáneos como Quintero (1985: 599), al subrayar que Román Cárdenas, dotó al "ministerio de hacienda de una organización administrativa capaz de planificar sus ejecutorias en función de objetivos claramente definidos". Señalando además que gracias a ese "esfuerzo organizativo" la estructura de poder del gomecismo se afianzó sin problemas, pues dejó como saldo favorable, la cancelación de la deuda, la construcción de carreteras y la consolidación del ejército.

Incluso, tal y como lo acierta el economista Ochoa, la proyección que adquirieron en el largo plazo "[…] las reformas tributarias, presupuestarias y administrativas de Cárdenas, le permitieron a Venezuela disfrutar cincuenta años de estabilidad económica, estabilidad fiscal, estabilidad en su moneda y una inflación que medida desde 1925 hasta 1975 era de 1,7 % anual" (Ochoa 2008: 179).

En vida, Cárdenas, estuvo al tanto de esta opinión generalmente favorable hacia su desempeño. Por ejemplo, Pepper (1939) lo califica de "creador de las finanzas en Venezuela" (377) por haber aplicado sanos principios administrativos. En medio de un estado de cosas donde el cohecho y los peligros de las intrigas palaciegas eran el denominador común, Pepper, destaca la "plena autonomía en el despacho de hacienda, caso verdaderamente singular en el gobierno del General Gómez" (Pepper 1939: 377).

Otro testimonio es el de Fernández (1956) quien destaca que Cárdenas "trabajó como un titán para crear nuevas entradas y compensar así

el déficit existente" (201). En su opinión, Gómez le había dado ese margen de autonomía porque comprendió que "al final de cuentas todas estas mejoras repercutirían favorablemente en sus propios negocios" (202). En esa misma tónica, Linares de Montemayor (1942) hace hincapié en la inverosímil gestión "revolucionaria" instrumentada en medio de las horcas caudinas de un régimen personalista, subrayando que Cárdenas fue capaz de desechar "[…] viejas prácticas rutinarias de limitar la actuación del despacho [hacienda] a una simple vigilancia y fiscalización de los ingresos y egresos del tesoro público" (16). Sin duda estas descripciones contribuyeron a resaltar la figura del ex ministro tachirense, en medio de las sombras que embargaron la larga hegemonía andina.

Y en efecto, Cárdenas fue parte de la pléyade de intelectuales venidos del mundo de las Ciencias, las Letras, el Derecho, la Historia y la naciente Sociología que decidieron hacer buena la invitación del general Gómez a integrarse a su gobierno, reconociendo en éste las cualidades necesarias para instaurar de manera definitiva la paz y el trabajo largamente añorado para Venezuela.

Cárdenas coincidía con el resto de la lumbrera que acobijó al régimen, en su rechazo a credos empíricos y al empleo de la violencia como forma de hacer política. Por el contrario, se inscribió en el ideal preconizado desde entonces, de que la correcta aplicación de la ciencia y sus métodos podía garantizar el progreso de la sociedad.

De allí que su gestión administrativa se caracterizó por el estricto cumplimiento de las reglas establecidas y el estudio sistemático de las anomalías existentes en los despachos a su cargo, para precisar las correcciones pertinentes a que hubiese lugar. En ese sentido Segnini afirma:

> El gobierno gomecista gracias a la habilidad financiera de Cárdenas, se dedica a solventar los compromisos adquiridos en el exterior procurando ganarse la confianza de los países con los cuales Venezuela había confrontado serios problemas. Ya en el Libro Amarillo del año 1912 se señala que la inmensa deuda del Tesoro venezolano reconocida en los Protocolos de Washington de 1903, la cual montaba a Bs. 38.385.823,94, se había reducido a Bs. 2.190.434,49. (Segnini 1982: 56)

Una reputación en entredicho

Pese a su hasta entonces inobjetable hoja de servicios, de la noche a la mañana, Cárdenas pasó a ser señalado como "sospechoso" de haber come-

tido "con intención o por negligencia o por imprudencia, actos o hechos, perjudiciales a la cosa pública".

La noticia fue recibida con asombro y temple en medio de la angustia familiar. Seguro como el que más de su absoluta inocencia nombró como sus apoderados legales a los doctores Vicente Grisanti y Arístides Calvani. Y con fecha 1° de diciembre de 1945 el encausado hizo ante la Comisión Sustanciadora del Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa la siguiente declaratoria de patrimonio:

1°- Tres acciones del Banco Caracas	Bs. 69.875,00
2°- Seis cupones del Banco Caracas	15.000,00
3°- Treinta y ocho acciones de la C.A. Nacional de Seguros "La Previsora"	8.400,00
4°- Seis mil noventa y seis acciones de la C.A. La Electricidad de Caracas	469.702,25
5°- Doce acciones del Banco Venezolano de Crédito	67.600,00
6°- Saldo de Bs. 254.944,32 de la Cuenta Corriente en el Banco Caracas	254.944,32
7°- Saldo de la Cuenta Corriente en el Banco Venezolano de Crédito	36.743,95
8°- Casa en el Boulevard "Vallenilla" Parroquia Maiquetía del Departamento Vargas del Distrito Federal	56.000,00
9°- Un automóvil no se le indica valor alguno	
Total	Bs. 978.265,52

Varios sectores políticos expresaron su alarma ante los procedimientos empleados para seguir juicio a los presuntos peculadores, mostraron su rechazo a lo que consideraban una "ominosa lista" de perseguidos políticos a quienes se les cobraría con creces facturas pasadas. Caldera, jefe político de COPEI, uno de los partidos opositores al gobierno criticó abiertamente la medida:

> Lo que fue una de las posiciones más intachables de la Revolución de Octubre, que era un castigo ejemplar para los que hubiera abusado de los dineros públicos, se ha convertido en una situación incierta y confusa, en la cual están mezclados los inocentes y los culpables, en forma tal, que ya hoy en Venezuela se ha perdido la fe en la justicia al respecto […]. (Caldera 1989: 220)

En efecto, el decreto de creación del Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa, emitido el 27 de noviembre de 1946, establecía que aquel tribunal actuaría de acuerdo con los dictados de su conciencia y estaría formado por "abogados, profesionales y dirigentes obreros, dos miembros de las Fuerzas Armadas y un ilustre sacerdote católico" (Betancourt 1986: 270). Sobre ellos recayó la tarea de juzgar la moralidad administrativa de los inculpados, pudiendo en casos condenatorios ordenar el pase a favor del fisco nacional del total o parcial de los bienes congelados preventivamente.

Entre tanto, los voceros oficiales de la Junta Revolucionaria de Gobierno, anunciaban que parte del dinero restituido a la Nación sería empleado en la construcción de numerosas obras públicas. "Más de 400 millones de bolívares fueron reintegrados al patrimonio de la Nación" (Betancourt 1986: 272). Sin embargo, los críticos de la medida objetaron aquellas aseveraciones señalando lo contrario:

> La segunda y más grave de las equivocaciones fue la de los juicios por responsabilidad civil y administrativa. En compensación de los escasos millones que se obtuvieron por malas vías y del precedente de moralización que se quiso dar, se rompieron todas las vinculaciones jurídicas, todos los resortes legales, incluso aquellos que en los juicios de Nuremberg, a criminales de guerra, fueron respetados por extranjeros vencedores contra extranjeros vencidos. No queremos negar que fue un afán noble de sentar precedentes de sanidad moral el que movió a estos procesos; pero, aun admitiéndolo, debemos decir, con toda diafanidad, con sinceridad, que el balance arroja más daños que beneficios para la nación. (*El Universal* 1947: 416)

Llama la atención lo dispuesto en el artículo dieciocho del referido decreto que establecía desde un principio la "presunción de enriquecimiento ilícito en detrimento de la Nación contra todas las personas sometidas a la Comisión Sustanciadora", hecho que de por sí era equivalente a culpabilizar en primera instancia a los encausados, lanzando sobre éstos todo signo de sospecha. No hay duda que con ello se buscaba dar una base de legitimidad a las acciones del nuevo gobierno, procurando capitalizar las simpatías de

un importante segmento de la población que asumía como corruptos a los desplazados del poder político.

Sin embargo, la disidencia no tardó en ponerse de manifiesto, y esta se hizo sentir de forma cada vez más creciente dada la forma indiscriminada como fue elaborado el listado en cuestión. Si bien entre los incluidos había nombres harto conocidos por sus deshonestas actuaciones, en el caso específico de Román Cárdenas, hubo quienes expresaron su desagrado ante aquel "abominable atropello". Para muestra, valga considerar el testimonio de Herrera Mendoza, entonces presidente del Banco Central de Venezuela:

> Ocurrió en un día del año 1946. El doctor Carlos D' Ascoli era Encargado del Ministerio de Hacienda. Me telefoneó para pedirme que me trasladara a su Despacho porque tenía algo importante que comunicarme [...] Minutos después me hice anunciar y fui introducido a su despacho [...] Yo me situé en uno de los sillones al lado izquierdo del salón y allí esperé, pacientemente [...] levanté los ojos hacia la testera del salón donde se hallaban colocados los retratos de Santos Michelena, Román Cárdenas y Alberto Adriani [...] Tranquilamente aguardé y cuando a D' Ascoli le dio la real gana de enterarse de mi presencia vino despacio a saludarme. "¿Cómo está señor Herrera?, me dijo. Le respondí: ¿Pues bien, Doctor D' Ascoli, aquí estoy desde hace largo rato contemplando el retrato del doctor Román Cárdenas que usted conserva sobre su cabeza, sin atreverse a retirarlo de allí. No acierto a comprender por qué razón sigue en ese sitio el retrato del doctor Cárdenas, después de incluido su nombre en la lista infamante de los acusados por peculado. Entiendo que ese retrato fue colocado allí con el fin de que todos los Ministros de Hacienda se inspirasen en la labor patriótica cumplida por tan eximio varón [...] No se compagina, pues, que su esfinge siga iluminando desde ese sitio a la generación actual y a las futuras, y que, simultáneamente, pretendan ustedes deshonrarle. Una cosa o la otra, doctor D' Ascoli. (Herrera Mendoza 1964: 476)

En otra demostración del rechazo que cundió la polémica lista, incluimos un extracto de la carta abierta dirigida al comandante Julio César Vargas, una de las figuras militares de la revolución de octubre, por el abogado Pinzón:

> Así vimos como casi un centenar y medio de venezolanos, y entre ellos aproximadamente cien andinos, de los cuales cerca de noventa eran tachirenses, fueron echados a esa hoguera de la infamia que se llamó la lista de peculado [...] incluyendo Román Cárdenas, cuya obra de acrisolada honradez y loable competencia está a la vista, fue vilipendiado como presunto ladrón nacional. (Pinzón 1989: 435)

En descargo a las acusaciones de ejecución de esta suerte de "justicia revolucionaria" que no admitía distingos ni reparos de ningún tipo, Betancourt expuso su criterio al respecto:

> Dos observaciones cabe hacer en torno a esta medida, que ha sido y sigue siendo objeto de viva controversia pública. La primera, que no ignorábamos cómo ese procedimiento de profilaxis administrativa nos concitaría odios inextinguibles y feroces resistencias [...] Pero teníamos adquirido un compromiso público con el pueblo, a través de muchos años de prédica sostenida contra el peculado [...] Y es la segunda, que sólo diferencias de matices, de grado y no de esencia, tienen los procedimientos adoptados por el Gobierno revolucionario de Venezuela con los aplicados, en diversas oportunidades, en otros países hispanoamericanos. (Betancourt 1986: 272)

En medio de las posturas a favor o en contra de las fórmulas empleadas para corregir el viejo mal de la corrupción, el Jurado continuó el trabajo sumarísimo de condenar o absolver a los procesados. No obstante, la intención moralizadora del nuevo gobierno se convirtió en su talón de Aquiles, dado que lejos de recibir el aplauso general desató la inquina de los adversarios, ante el atropello y los excesos. El testimonio de Parra Márquez evidencia el panorama reinante:

> Tales sentencias no podrán juzgarse nunca como expresión de la verdadera justicia, por cuanto ellas, además de emerger de un procedimiento cuya legalidad en el sentido prístino de la palabra no podrá nunca admitirse, no vinieron a ser el reflejo de un estado de agitación política propicio a la efervescencia de toda clase de pasiones y violencias. (Parra Márquez 1989: 471)

La absolución dispensadora

Durante buena parte del año 1946, la opinión pública estuvo al tanto de las sentencias del Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa publicadas en la *Gaceta Oficial*. Mensualmente, el promedio de casos resueltos estuvo entre ocho y diez sentencias, la mayoría de ellas condenatorias. Los más sonados fueron los juicios seguidos en ausencia a los ex presidentes Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, quienes resultaron obligados a reintegrar en conjunto la suma de 27.920.453,3 y cuyos bienes pasaron en su totalidad al fisco nacional. Otros más recibieron el mismo tratamiento, como lo fueron Pedro Manuel Arcaya, Arturo Uslar Pietri, Vicencio Pérez Soto y León Jurado, importantes personeros de los gobier-

nos cuestionados. Pocos recibieron el veredicto absolutorio. Román Cárdenas fue uno de ellos.

En efecto, el 10 de julio de 1946 y después de largos meses de espera, los miembros del Jurado acordaron librar al doctor Román Cárdenas de responsabilidad civil y administrativa y en consecuencia quedaban a salvo los bienes expuestos en su declaración patrimonial.

Para emitir ese veredicto el Jurado integrado por J.F. Méndez, el capitán Francisco A. Gutiérrez, el teniente de fragata Luis J. Ramírez, Antonio Sotillo Arreaza, Luis Hurtado, Eduardo Gallegos Mancera, Héctor Hurtado y A. Hernández, consideró suficientemente justificado el patrimonio declarado por Cárdenas, vistos los recaudos aportados por éste ante la comisión sustanciadora.

Como nota resaltante de esta sentencia, publicada en la *Gaceta Oficial* Extraordinaria N° 185 del 20 de agosto de 1946, el jurado incorporó en sus consideraciones el reconocimiento a "la larga actuación del indiciado en el ejercicio de cargos públicos y los servicios rendidos a la Nación al frente del Ministerio de Hacienda en el cual realizó la reorganización de los ramos fiscales y la modernización de nuestro sistema hacendario" (*Gaceta Oficial*, 20.8.1946: 12).

Superado este amargo momento, Cárdenas decidió junto a su familia marcharse del país para no verse involucrado en el agrio debate político que caracterizó a Venezuela durante el trienio 1945-1948.

Transcurridos los meses y conocida la noticia del derrocamiento del siguiente gobierno presidido por Rómulo Gallegos, el 24 de noviembre de 1948, Cárdenas considera en regresar a su patria y vivir en paz sus últimos años.

Conclusión

Sin duda que la iniciativa de hacer tabla rasa por parte de los nuevos detentadores del poder político a partir del golpe del 18 de octubre de 1945, concitó una serie de consecuencias que en poco tiempo se llevaría consigo a sus procreadores. El ambiente de crispación política reinante durante el trienio 1945-1948, azuzado por el sectarismo, la resistencia de sectores internos como la Iglesia católica, comerciantes e industriales al nuevo estado de cosas, hacían prever una ruptura inminente.

Fue tal el malestar causado por los juicios de responsabilidad civil y administrativa que la Asamblea Nacional Constituyente, electa en 1946, se vio en la obligación de revisar los procedimientos adoptados en procurar de apaciguar los ánimos caldeados.

Sin embargo, dada la mayoría absoluta de los diputados del partido Acción Democrática que a su vez detentaba el gobierno, pocos fueron los cambios efectuados. Las figuras más emblemáticas del *Ancien régime* finalmente perdieron sus bienes y luego fueron enviados al exilio. Los partidos minoritarios de oposición aprovecharon para endilgar al gobierno, la sed de venganza de sus integrantes que otrora habían sido objeto de persecución.

Las pocas absoluciones emanadas del Jurado, en nada contribuyeron a mitigar las críticas. La proximidad de los comicios para la elección del presidente de la República y demás cuerpos deliberantes, en diciembre de 1947, no hizo más que atizar los enfrentamientos entre los partidos políticos, sobre todo ante el temor de una posible instauración de un régimen de partido único por parte de Acción Democrática, tal como había ocurrido en México y en España. Tales reyertas, en ocasiones arrojaron saldos de víctimas fatales en varias partes del país.

El caso de Román Cárdenas fue quizá el más emblemático, por tratarse de alguien completamente retirado de la vida pública, además de gozar del respeto por una obra perdurable. La presunción de culpabilidad ventilada públicamente, abrió profundas heridas difíciles de sanar y sirvió de excusa para demonizar a los personeros del gobierno octubrista.

No sería casual que tras el derrocamiento del gobierno de Acción Democrática en 1948, los jefes militares triunfantes, ordenarían la restitución de los bienes de algunas de las personalidades afectadas con miras a transmitir la idea de estar subsanando los atropellos de una revolución mal vista por sectores conservadores de la sociedad.

Bibliografía

Betancourt, Rómulo (1986): *Venezuela, política y petróleo.* Caracas: Monte Ávila.

Caballero, Manuel (2004): *Rómulo Betancourt, político de nación.* Caracas: Fondo de Cultura Económica/Alfadil.

Caldera, Rafael (1989): "Debate en torno al informe de la comisión designada para estudiar el proyecto de decreto en relación con las actuaciones de las comisiones calificadora, sustanciadora y del jurado de responsabilidad civil y administrativa". En: *Pensamiento político venezolano del siglo xx. Documentos para su estudio. Gobierno y época de la Junta Revolucionaria. Asamblea Nacional Constituyente 1946-1947.* Caracas: Congreso de la República, volumen 62.

Carrera Damas, Germán (2013): *Rómulo histórico.* Caracas: ALFA.

El Plan de Barranquilla 1931 (2007): "Estudio preliminar de Manuel Caballero". Caracas: Fundación Rómulo Betancourt.

El Universal (1947): "Saber rectificar es saber gobernar". En: *Pensamiento político venezolano del siglo xx. Documentos para su estudio. Gobierno y época de la Junta Revolucionaria. Opinión política a través de la prensa 1945-1948.* Caracas: Congreso de la República, volumen 66.

Fernández, Pablo Emilio (1956): *Gómez el rehabilitador.* Madrid: Jaime Villegas.

Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, Caracas 20.8.1946, N° 185, Extraordinario, Año LxxIV, Mes XI.

Herrera Mendoza, Jesús María (1964): *Reminiscencias*, t. I. 2a ed. Caracas: s.e.

Linares de Montemayor, Carlos (1942): *Román Cárdenas y la reforma de la hacienda venezolana.* Caracas: Editorial Actualidad.

Ochoa, Orlando (2008): "La institución fiscal y el rentismo en el desempeño económico de Venezuela". En: *Revista Nueva Economía* 28, pp. 153-205.

Olivar, José Alberto (2009): *Román Cárdenas*. Caracas: El Nacional/Fundación Bancaribe.

Parra Márquez, Héctor (1989): "Temas del día. La concordia y los juicios por peculado". En: *Pensamiento político venezolano del siglo xx. Documentos para su estudio. Gobierno y época de la Junta Revolucionaria. Opinión política a través de la prensa 1945-1948.* Caracas: Congreso de la República, volumen 66.

Pepper, José Vicente (1939): *Hombres*. Caracas: Editorial Bolívar.

Picón Salas, Mariano (2007): *Suma de Venezuela.* Caracas: Fondo editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Pinzón, Rafael (1989): "Carta abierta al comandante Julio César Vargas, 5 de abril de 1947". En: *Pensamiento político venezolano del siglo xx. Gobierno y época de la Junta Revolucionaria. Opinión política a través de la prensa 1945-1948.* Caracas: Congreso de la República, volumen 66.

Pocaterra, José Rafael (1979): *Memorias de un venezolano de la decadencia,* 2 tomos. Caracas: Monte Avila.

Quintero, Inés (1985): "De la alucinación a la eficiencia (Román Cárdenas en el Ministerio de Hacienda)". En: *Revista Tierra Firme*, 12, pp. 599-611.

Uslar Pietri, Arturo (1992): *Golpe y estado en Venezuela.* Caracas: Grupo editorial Norma.

Segnini, Yolanda (1982): *La consolidación del régimen de Juan Vicente Gómez.* Caracas: Academia Nacional de la Historia.

Yarrington, Doug (2003): "Cattle, Corruption, and Venezuelan State Formation during the Regime of Juan Vicente Gómez, 1908-35". En: *Latin American Research Review* 38, 2, pp. 9-33.

Autoras y autores

Jürgen Buchenau recibió su doctorado en Historia por la University of North Carolina at Chapel Hill en 1993. Actualmente es profesor-investigador y director del Departamento de Historia en la University of North Carolina Charlotte. Entre sus publicaciones se cuentan los siguientes libros: *Mexico, the Once and Future Revolution: Social Upheaval and the Negotiation of Rule Since the Late Nineteenth Century* (2013, con Gilbert M. Joseph) y *Plutarco Elías Calles and the Mexican Revolution* (2007). Correo electrónico: jbuchenau@uncc.edu.

L. Miguel Costa es doctor en Historia por la Florida International University (Miami, Florida, EE.UU.), en donde obtuvo el título con la tesis "Patronage and Bribery in Sixteenth-Century Peru: The Government of Viceroy Conde del Villar and the Visita of Licenciate Alonso Fernández de Bonilla". Sus trabajos abordan temas políticos e institucionales relativos a la historia colonial hispanoamericana, siglos xvi y xvii, asociados a conceptos de poder, autoridad, clientelismo y prebenda. Correo electrónico: mcosta@pucp.edu.pe.

José Alberto Olivar es doctor en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela). Profesor-investigador adscrito al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar (Venezuela). Autor de los libros *Automovilismo, vialidad y modernización* (2014) y *La Venezuela perenne. Ensayos sobre venezolanos en dos siglos* (2014). Correo electrónico: josealbertolivarp@usb.ve.

Horst Pietschmann es doctor en Historia por la Universität zu Köln, Alemania, en donde también recibió la *Habilitation*. Es catedrático emérito de Historia de de la Península Ibérica y América Latina en la Universität Hamburg, Alemania. En 2003–2004 ocupó la cátedra Wilhelm und Alexander von Humboldt en El Colegio de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2002 fue Andrew W. Mellon Senior Research Fellow en la John Carter Brown Library, Brown University, Providence (EE.UU.). Su correo electrónico es: horst.pietschmann@uni-hamburg.de y sus numerosas publicaciones se pueden consultar en: <https://www.geschichte.uni-hamburg.de/arbeitsbereiche/globalgeschichte/personen/pietschmann.html>.

Guadalupe Pinzón Ríos es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas y profesora en la misma universidad. Entre sus trabajos pueden mencionarse los libros *Acciones y reacciones en los puertos del Mar del Sur. Desarrollo portuario del Pacífico novohispano a partir de sus políticas defensivas (1713-1789)* (2011) y *Hombres de mar en las costas novohispanas. Trabajos, trabajadores y vida portuaria en el departamento marítimo de San Blas (s. XVIII.)* (2014). Correo electrónico: gpinzon@unam.mx.

Andrés Reyes Rodríguez es doctor y profesor-investigador del Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado *Nudos de Poder. Liderazgo político en Aguascalientes, principio y fin de un ciclo, 1920-1998* (2004) y *Primer informe sobre la democracia en Aguascalientes* (2011). Correo electrónico: areyes@correo.uaa.mx.

Inés Rojkind es doctora en Historia e investigadora del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani" (Universidad de Buenos Aires / CONICET). Su área de trabajo es la historia política argentina, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Ha publicado artículos en libros y revistas especializadas. Entre ellos: "El caso Sambreci. Niños, prensa y política en Buenos Aires a finales del siglo XIX", *Iberoamericana. América Latina-España-Portugal*, núm. 60, dic. 2015; y "Renuncias presidenciales, opinión pública y legitimidad en el *quinquenio difícil* (1890-1895)", *PolHis. Revista del Programa Interuniversitario de Historia Política*, núm. 11, segundo semestre de 2013 (en coautoría con Ana Leonor Romero).
Correo electrónico: inesrojkind@gmail.com.

Christoph Rosenmüller es doctor por la University of Tulane, New Orleans (EE.UU.). Es profesor de la Middle Tennessee State University. En 2014-2015 recibió la beca Fulbright García Robles como investigador visitante de El Colegio de México, y durante 2016-2017 será becario del Max-Planck-Institut de Historia Legal en Frankfurt (Alemania). Algunos de sus trabajos son *Patrons, Partisans, and Palace Intrigues: The Court Society of Colonial Mexico, 1702-1710* (2008), y el artículo "'Corrupted by Ambition': Justice and Patronage in Imperial New Spain and Spain, 1650-1755" (2016), que apareció en la *Hispanic American Historical Review*

(96:1). Actualmente prepara un libro sobre la historia de la corrupción en el marco atlántico. Correo electrónico: rosenmul@mtsu.edu.

Stephan Ruderer es doctor en Historia por la Universität Heidelberg, Alemania. Actualmente es investigador principal en el proyecto "Los marcos de la toma de decisiones políticas en Argentina y México posindependencia" en la Universität Münster, Alemania. Acerca del tema de la corrupción ha publicado: "Korruption und Staatsbildungsprozess. Der Korruptionsdiskurs bei der Legitimation von bewaffneten Aufständen in Argentinien und Uruguay zwischen 1870 und 1890", *Historische Zeitschrift* 300 (2015) y "Crisis and Corruption. The Anglo-Argentine Scandal Surrounding the Privatisation of the Buenos Aires Sanitary Works between 1888-1891"(2014). Correo electrónico: stephanruderer@uni-muenster.de.

Pablo Whipple es doctor en Historia de la University of California, Davis (EE.UU.). Es profesor asociado y director del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre sus publicaciones destacan *La gente decente de Lima y su resistencia al orden republicano. Jerarquías sociales, prensa y sistema judicial durante el siglo XIX* (2013) y "Carencias materiales, respetabilidad y prácticas judiciales en Perú durante los inicios de la República", *Historia Crítica* 49 (2013). Correo electrónico: pwhipple@uc.cl.

El Instituto Ibero-Americano (IAI) de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano en Berlín dispone de un amplio programa de publicaciones en alemán, español, portugués e inglés que surge de varias fuentes: la investigación realizada en el propio Instituto, los seminarios y simposios llevados a cabo en el IAI, los proyectos de cooperación con instituciones nacionales e internacionales, y trabajos científicos individuales de alta calidad. La „Bibliotheca Ibero-Americana" es una serie que existe desde el año 1959 y en la que aparecen publicadas monografías y ediciones sobre literatura, cultura e idiomas, economía y política de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

Volúmenes anteriores:

163. *Sur ↓ South: Poetics and Politics of Thinking Latin America / India.* Susanne Klengel / Alexandra Ortiz Wallner (eds.), 2016.

An awareness of the cultural entanglements in the Global South has become an evident as well as urgent factor in the global constitution of knowledge and the knowledges of globalization. This book contributes to the growing field of research on the relations between Latin America and Asia. From multiple perspectives and disciplinary backgrounds, it addresses the cultural and intellectual entanglements betwenn Latin America and India in the 20th century. The Sur / South cultural cartography that emerges reveals the need for a new reflection on Orientalism as well.

162. *Políticas y estrategias de la crítica: ideología, historia y actores de los estudios literarios*. Sergio Ugalde Quintana / Ottmar Ette (eds.), 2016.

Ricardo Piglia aseguraba algo que sintetiza perfectamente la intención que dio origen a este proyecto: "Toda crítica se escribe desde un lugar preciso y desde una posición concreta. El sujeto de la crítica suele estar enmascarado por el método (a veces el sujeto es el método) pero siempre está presente, y reconstruir su historia y su lugar es el mejor modo de leer crítica". En este sentido, los artículos que conforman este volumen analizan las dimensiones ideológicas de los estudios literarios (sus polémicas y sus proyectos); tratan figuras específicas (filólogos, historiadores de la literatura, ensayistas) y proponen conceptualizaciones contemporáneas sobre el fenómeno literario y cultural.

161. *MicroBerlín. De minificciones y microrrelatos*. Ottmar Ette / Dieter Ingenschay / Friedhelm Schmidt-Welle / Fernando Valls (eds.), 2015.

Este volumen se ha propuesto incluir no solamente los debates teóricos y metodológicos con respecto a la posible definición del microrrelato como "cuarto género" y los diversos análisis sobre el desarrollo y la historia del mismo. Más bien, relacionamos la minificción literaria con otras prácticas simbólicas, y consideramos las nuevas posibilidades de difusión de la minificción en los medios masivos de comunicación y, sobre todo, en las redes sociales (Facebook, Twitter) y en el Internet en general. En los cuatro apartados del volumen, sus autores se ocupan de la teoría del género y la historia del micorrelato literario; analizan la intertextualidad del nuevo género; interpretan una serie de minificciones literarias de autoras y autores hispanoamericanos y españoles; y consideran otras formas de lo micromediático, los litblogs, la producción de microrrelatos en las redes sociales, y las minificciones cinematográficas.

160. ***Diálogos existenciales. La filosofía alemana en la Argentina peronista (1946-1955)*****. Clara Ruvituso, 2015.**

Hasta ahora se ha indagado poco en el hecho de que los conflictos entre intelectuales durante el primer peronismo (1946-1955) se dieran en un contexto de explosión filosófica de la producción, teniendo como eje central la problemática figura de Martin Heidegger. El presente estudio aporta un análisis socio-político del campo filosófico argentino basado en sus transformaciones y luchas internas y en las funciones del debate "existencialista" entre la búsqueda de identidad y el diálogo con el mundo filosófico alemán de posguerra.

159. ***El ensayo en busca del sentido.*** **Liliana Weinberg, 2014.**

En su libro sobre la historia del ensayo desde Montaigne hasta algunos ensayistas latinoamericanos del siglo xx, Liliana Weinberg parte de la idea de la "buena fe" como enfoque central de la escritura de Montaigne y de los principios en los cuales se basa (juicio, razón y experiencia). El aspecto más importante del ensayo es el mismo proceso del pensar, es decir, se convierte en el género autorreflexivo por excelencia. Weinberg destaca la coincidencia entre la colonización del Nuevo Mundo y la fundación del nuevo género. Trata la ensayística de varios autores para aclarar las lecturas de Montaigne y su idea de la buena fe desde una perspectiva latinoamericana y en cierto sentido poscolonial. En ese contexto de lecturas sobre lecturas el texto mismo de Weinberg se convierte en un ensayo en el mejor de los sentidos por su postura autorreflexiva y su profundidad en la interpretación de la historia y la epistemología del ensayo latinoamericano.

158. ***Las ciencias en la formación de las naciones americanas.*** **Sandra Carreras / Katja Carrillo Zeiter (eds.), 2014.**

Las contribuciones aquí reunidas analizan las relaciones que existieron entre las ciencias y los Estados nacionales en América durante el 'largo' siglo xix. Muestran que el entrelazamiento entre ciencia y nación tuvo consecuencias para la ciencia como lugar de producción y enunciación de saberes y también implicaciones para la elaboración de determinadas interpretaciones de la nación en tanto comunidad imaginada a partir de cuatro elementos: historia, territorio, "pueblo" y lengua. Estos debates no sólo se desarrollaron en ámbitos nacionales sino que traspasaron sus límites, poniendo en evidencia las vinculaciones transnacionales y las redes que les dieron sustento.

157. ***El cuerpo dócil de la cultura. Poder, cultura y comunicación en la Venezuela de Chávez.*** **Manuel Silva-Ferrer, 2014.**

Este libro constituye un invalorable análisis de los elementos fundamentales que determinaron la reconfiguración del mapa de la cultura venezolana a comienzos del siglo xxi, tras el ascenso al poder de Hugo Chávez y su "revolución bolivariana". Un novedoso período que resume las contradicciones, continuidades y discontinuidades producidas por el moderno Estado petrolero venezolano a lo largo del siglo precedente. Se trata de una nueva fase para la sociedad y la cultura. Y, muy especialmente, para la comunicación, que una vez más reafirmó su preponderancia como fenómeno fundamental de la cultura latinoamericana.

156. *Sonidos y hombres libres. Música nueva de América Latina en los siglos XX y XXI.* Hans-Werner Heister / Ulrike Mühlschlegel (eds.), 2014.

L a recopilación de trabajos Sonidos y hombres libres se centra en los compositores, musicólogos y profesores de música latinoamericanos Graciela Paraskevaídis y Coriún Aharonián, y con ellos, en la música latinoamericana de los siglos XX y XXI, sus temas y su trayectoria. Rinde homenaje a la obra y a las personalidades de ambos a través de diversos encuentros personales y experiencias de los autores. Además, presenta textos sobre la representación de la música popular en el canon de los estudios musicológicos, sobre las componentes tiempo y espacio en la música popular, sobre la terminología para describir la música popular y sobre el concepto europeo-norteamericano de world music.

155. *Sondierungen. Lateinamerikanische Literaturen im 21. Jahrhundert.* Rike Bolte / Susanne Klengel (Hg.), 2013.

Die Literaturen Lateinamerikas bilden heute ein weites Terrain unterschiedlicher Stimmen und Schreibweisen, die schon lange magischem Realismus und Exotik abgeschworen haben. In der neuen erzählerischen Vielfalt finden sich postdiktatorische Memoria-Texte, Poetiken des Ver/rückten, Kartografien ungewöhnlicher Handlungsräume, Evokationen marginaler Raumerfahrung und weitere Perspektiven. Immer wieder geht es um Text- und Wort-Materialität und die Anfälligkeit von Körper- und Dingwelt. Dabei berühren sich experimentelle Formen mit der zum literarischen Gegenstand gewordenen (Literatur-)Theorie. Medial und neobarock, öko- und gesellschaftskritisch, "konservativ" und innovativ, emphatisch und unterkühlt ist die aktuelle Prosa des Kontinents: Sie schreibt sich auf diese Weise dezidiert in die global literature des 21. Jahrhunderts ein. Die dreizehn Einzelstudien des Bandes und ein Interview geben eine erste Orientierung für die Sondierung dieses neuen Terrains.

154. *Estudios sobre la historia económica de México desde la época de la Independencia hasta la primera globalización*. Sandra Kuntz Ficker / Reinhard Liehr (eds.), 2013.

En la primera globalización se multiplicaron en el mundo los flujos de información, de mercancías y servicios y de capital gracias a los nuevos medios de transporte y de comunicación y a la generalización del patrón oro en los sistemas monetarios. Al mismo tiempo, se intensificó el traslado masivo de mano de obra en el interior y entre los continentes a raíz de los movimientos migratorios. Este volumen presenta estudios que se ocupan en su mayoría de la integración de México a este nuevo mercado mundial durante este período, desde aproximadamente 1870 hasta la Gran Depresión. Se analizan así el comercio exterior e interior del país, el papel de los bancos en los mercados y flujos de capital y, además, dos ejemplos de empresas. Asimismo, un estudio vuelve hasta la época de la independencia para analizar el comercio y la producción textil en ese período.

Ibero-Amerikanisches
Institut
Preußischer Kulturbesitz